

Carlos María Vilas, el autor de *Perfil de la revolución sandinista*, ha escrito el más completo inventario político-social de Nicaragua bajo la dictadura y con el gobierno de la revolución popular. Las dos grandes cuestiones, la reconstrucción de la economía de Nicaragua y la autodeterminación soberana frente a las agresiones del imperialismo, están cuidadosamente analizadas en esta obra, que mereció el Premio de Ensayo de Casa de las Américas 1984. Vilas, abogado argentino especializado en los temas del desarrollo económico y el cambio social en América Latina, ha sido consultor de organismos internacionales, asesor de varios gobiernos de la región y profesor e investigador de universidades de Argentina, México, Estados Unidos y América Central. En 1974 mereció el Gram Premio de Ensayo Raúl Scalabrini Ortiz, de la Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA), por su libro *La dominación imperialista en Argentina*.

Algunas de las mayores incógnitas sobre la ideología de los revolucionarios de Nicaragua, o acerca de la evolución inmediata del régimen instaurado por ellos, reciben una sagaz respuesta de Vilas, sustentada por un aparato erudito de extraordinaria eficacia para derribar prejuicios y defectos informativos. El ensayo de Vilas es, sin duda, el más importante que se ha escrito hasta el presente sobre Nicaragua en idioma español.



Nueva Información se propone presentar investigaciones originales de la realidad política y social de nuestro tiempo, juntamente con revisiones de la historia latinoamericana y mundial. La colección se inició con una obra de Rogelio García Lupo, incluyendo luego títulos de Jorge Luis Bernetti, Álvaro Abós, Roberto Jordán Pando, Juan Gelman y Osvaldo Bayer.



NUEVA INFORMACIÓN

## Carlos M. Vilas **LA REVOLUCIÓN SANDINISTA**



LEGASA



**PERFILES DE LA  
REVOLUCIÓN SANDINISTA**

Nueva Información  
Colección dirigida por Rogelio García Lupo

Carlos M. Vilas

Perfiles de la  
Revolución Sandinista

Liberación nacional y transformaciones  
sociales en Centroamérica

*EDITORIAL LEGASA*

Diseño de tapa: María Cristina Brusca.

Foto: Campesinos armados de una cooperativa de producción y defensa, en la región nicaragüense fronteriza con Honduras. (Cortesía de *Barricada*.)

Primera edición: julio de 1984

Segunda edición: abril de 1986

Tercera edición: febrero de 1987

© Carlos M. Vilas

© Editorial Legasa S.R.L. - Madrid/Buenos Aires/México  
Rawson 17, A. 1182, Buenos Aires.

Fotocromos: Citocolor S.R.L., Iguaçu 725, Buenos Aires.

Fotocomposición: Fototipia Lindoseter S.A., El Maestro 168.

Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723.

Impreso en la Argentina - I.S.B.N. 950-600-036-0

## PRÓLOGO

Este libro estudia la Revolución Popular Sandinista centrándose en las cuestiones fundamentales para entender una revolución: su proyecto político, sus bases sociales, las transformaciones que impulsa, la estrategia que la orienta, los enemigos que enfrenta.

Escribir sobre una revolución que recién empieza implica algunos riesgos. Si el análisis no es cuidadoso, puede llegar a inmovilizar al objeto de estudio, a considerar definitivo lo que aún está en formación, a cristalizar lo que todavía está gestándose y tratando de alcanzar su propio perfil. O bien, puede confundir medidas y decisiones coyunturales o secundarias, con tendencias de fondo, y perder la perspectiva del proyecto histórico en la maraña de opciones, búsquedas y ensayos. Y, sin embargo, pocos temas resultan tan atractivos, e instructivos, como las etapas iniciales de una revolución, cuando todo es imaginación y creatividad, y cuando la identidad propia de la revolución pugna por abrirse paso en medio de limitaciones y obstáculos de todo tipo.

Nuestro estudio presta atención tanto a los avances de la revolución, como a las dificultades que encuentra. Creemos que el potencial de experiencias y de enseñanzas que una revolución posee se refiere tanto a lo primero como a lo segundo. No obstante hay veces en que la presentación de los procesos revolucionarios triunfantes ha tendido a efectuarse como si se tratara de sucesiones ininterrumpidas de actos gloriosos y victorias entrelazadas; nunca nadie tiene dudas, siempre se acier-



ta de primera intención, nadie se equivoca jamás. El resultado de esto ha sido, en opinión nuestra, alejar los procesos revolucionarios reales de la perspectiva de la gente, no menos que de su efectivo desenvolvimiento. La posición de este libro, al contrario, es que no hay ninguna garantía de infalibilidad en una revolución, y que las decisiones acertadas son siempre el producto de la discusión, de la confrontación de perspectivas y de la reflexión sobre una realidad que muchas veces resulta ser diferente de lo que se pensaba, o no comportarse como se esperaba.

Esto significa simplemente que nada es mecánico o automático en una revolución: que la transformación de la sociedad es un proceso difícil y complicado; que las revoluciones dan trabajo, implican sacrificios y renunciamentos —sobre todo para las fuerzas que las apoyan— y que el triunfo revolucionario no acaba con las dificultades: terminan las dificultades de la lucha por el poder y empiezan las dificultades de la transformación social.

Toda revolución social es, por supuesto, sólo igual a sí misma; esa especificidad deriva tanto de las características propias de la estructura socioeconómica del país y del modo en que ella se inserta en el sistema capitalista transnacional, como del perfil concreto de las fuerzas políticas que se enfrentan y de la correlación de fuerzas dominantes en el sistema internacional. Lo que en definitiva permite identificar, comprender y explicar una revolución, cada revolución, es su propia historia: los elementos únicos que se conjugan de manera especial en una cierta matriz de contradicciones al impulso de la acción de una vanguardia política. Y, al mismo tiempo, esas especificidades expresan la manera en que se hacen presentes, en cada proceso revolucionario, fuerzas y tendencias objetivas más generales. Son estas cuestiones generales las que hacen posible la caracterización de una revolución, la identificación de sus etapas, inteligir el sentido de su desarrollo. Quedarse en lo primero significaría reducirse a la crónica descriptiva; limitarse a lo segundo implicaría perder de vista el perfil propio y los problemas originales de cada revolución.

Por esta razón nuestro estudio comienza con una discusión sobre las revoluciones de liberación nacional, de manera bastante genérica, aunque incorporando elementos y experiencias de procesos de este tipo desarrollados en varias formaciones

del Tercer Mundo. Nuestro objetivo es demostrar que la Revolución Popular Sandinista no es una excepción o un caso desviante, sino que entronca legítimamente en la lucha de los pueblos pobres oprimidos, sojuzgados, por alcanzar la soberanía nacional, la emancipación social, y formas de vida más justas y fraternas. Lo propio de la Revolución Sandinista fue, más bien, el modo en que esas motivaciones universales y permanentes fueron impulsadas y organizadas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional durante dos décadas de lucha revolucionaria, en una sociedad cuyos patrones de desarrollo capitalista presentaban diferencias respecto de la región en que se ubica.

En este orden de ideas, el capítulo II presenta un estudio de los rasgos principales del tipo de capitalismo que se desarrolló en Nicaragua en los últimos treinta años a influjo de las nuevas modalidades de expansión del imperialismo: el esquema de funcionamiento general de la estructura económica, la configuración concreta de sus clases sociales, el tipo de inversión extranjera que se estableció, el papel desempeñado por el régimen somocista —a la vez producto y garante de este sistema—. El capítulo III, por su parte, investiga los elementos de la estructura socioeconómica urbana a partir de los cuales tomó cuerpo la incorporación masiva de la población —pero en primer lugar de sus clases populares— a la estrategia insurreccional con que culminó la lucha sandinista. Puesto que ninguna revolución ocurre en el vacío ni puede desentenderse del tipo de estructura socioeconómica existente, el análisis efectuado en estos dos capítulos permitirá comprender mejor la orientación adoptada por la revolución a partir del triunfo del 19 de julio, el modo en que ha encarado muchos problemas, las alianzas y enfrentamientos que protagoniza.

El capítulo IV estudia la estrategia de unidad nacional y economía mixta que caracteriza a la etapa actual de la revolución, y en particular el espacio reconocido en ella a los grupos no somocistas de la burguesía, y a la articulación de la pequeña y mediana producción con el nuevo sector social de la economía. El capítulo V presenta esta misma estrategia de unidad nacional y economía mixta, con relación a la clase obrera. Se practica aquí un análisis pormenorizado de las tareas del movimiento obrero en esta etapa y dentro de esa estrategia, los debates suscitados al respecto, y las experiencias de partici-

pación obrera que han venido desenvolviéndose en estos cuatro años. En el capítulo VI la presentación de las principales transformaciones que se han llevado a cabo en el ámbito de la educación nos permite aproximarnos a un aspecto poco estudiado de la democracia popular nicaragüense, y analizar el desplazamiento progresivo de las contradicciones sociales hacia el terreno de la ideología. Finalmente el capítulo VII retoma las cuestiones planteadas en términos generales al comienzo del libro, a partir de los resultados del estudio que le precede y de los elementos que configuran el momento actual. Estas cuestiones estuvieron presentes a lo largo de toda la exposición, y actuaron como hilo conductor de la misma, pero consideramos conveniente concluir con un explícito retorno a ellas para, desde esa perspectiva, plantear las dimensiones centrales de la problemática actual de la revolución.

Este volumen es el resultado de varias investigaciones llevadas a cabo en el propio terreno, durante los cuatro años posteriores al triunfo de la Revolución Sandinista. Muchas personas contribuyeron de diversas maneras a facilitar el trabajo del autor: creando condiciones propicias para la investigación, comentando partes del estudio, confrontando perspectivas, discutiendo hipótesis. En este sentido queremos mencionar especialmente a Virgilio Godoy, Miguel de Castilla, Orlando Núñez, Eduardo Baumeister, Eugenio Espinosa, Liz Maier, John Weeks, Martín Carnoy, Norma Cabrera, Andreas Scheuermeier, Bernard Albrecht. Naturalmente, ninguno de ellos es responsable del contenido del trabajo.

Managua, noviembre 1983

## CAPÍTULO I

### Liberación nacional y revolución social

#### 1. Introducción

Los procesos revolucionarios que se desarrollan en las sociedades capitalistas dependientes plantean cuatro cuestiones básicas: 1) la *cuestión de clase*, ligada a la eliminación de la explotación de las masas populares y a la conducción del proceso por una clase o fracción determinada; 2) la *cuestión nacional*, referida a la liquidación de la dominación imperialista y a la redefinición de las modalidades de articulación en la economía y en el sistema político internacional; 3) la *cuestión del desarrollo*, o sea la superación del atraso a través de la expansión de las fuerzas productivas y la homogeneización de la estructura productiva; y 4) la *cuestión democrática*, vale decir el desmantelamiento del Estado que sintetiza y garantiza la explotación de clase, el atraso económico y la dominación imperialista, y la constitución de un poder político de nuevo tipo. No se trata de cuestiones independientes unas de otras, sino estrechamente ligadas y recíprocamente condicionadas. El carácter de la revolución deriva del modo en que ellas son encaradas y resueltas.

Este capítulo trata algunos de los aspectos más relevantes de cada una de esas cuestiones, manteniendo siempre su íntima interdependencia orgánica. Aunque el referente principal de la exposición es América Latina —y en particular el área

centroamericana—, se incorporan en algunos casos experiencias de otras regiones del Tercer Mundo, en la medida en que pueden contribuir a una mejor comprensión de las situaciones y procesos latinoamericanos, y a precisar algunos procesos y dimensiones generales en los que Nicaragua y la Revolución Popular Sandinista se inscriben, para luego verificar el modo en que dichos elementos se hacen presentes en ellas.

En la elaboración de este marco conceptual se ha prestado cierta atención a la reflexión que, sobre la práctica política, han efectuado los movimientos, partidos y dirigentes que han impulsado dicha práctica; se ha intentado, de esta manera, contribuir a romper el tradicional y negativo dualismo entre la práctica política y la reflexión sobre la política.

## 2. La cuestión de clase y el sujeto popular

El modo en que el capitalismo se ha desarrollado en América Latina —como efecto del proceso de inserción del continente en la dominación imperialista y en la división internacional del trabajo producto de ella— tuvo expresiones claras en las luchas sociales y políticas y en la estructura de clases; en la identidad social de sus actores y en las modalidades asumidas por su constitución como sujetos de la práctica política. La manera en que el capitalismo subordinó a los otros modos y formas de producción en la periferia determinó la conjugación de las clases, fracciones y grupos expresión de aquél y éstos. Entre el campesino llamado "tradicional", integrado a una economía mercantil simple, y el proletariado agrícola o industrial "liberado" de toda apropiación directa de un fondo de consumo y de los medios de producción, se desenvuelve una amplia y polifacética matriz de situaciones y tipos de agentes de la producción y la circulación que son efecto de grados diversos de proletarianización en coexistencia y articulación con formas de vinculación directa a la tierra, a instrumentos de trabajo, a ciertos excedentes monetarios, a un fondo de reproducción. Más aún: muchos de esos agentes son portadores de modalidades de inserción en el proceso de producción/circulación que se alternan, suceden y recurring en el tiempo y en el espacio.

La subordinación de las formas "anteriores"<sup>1</sup> de producción al capitalismo no significa necesariamente predominio cuantitativo de éste (por ejemplo en términos de la proporción del producto generado en unas y otras formas de producción, de la fuerza de trabajo ocupada, y criterios similares). La primacía del capitalismo se manifiesta por su capacidad para determinar las condiciones generales de la producción en la formación social y para fijar la orientación y la dinámica global del sistema productivo y su articulación subordinada al proceso de valorización del capital en escala transnacional. El desarrollo histórico del capitalismo dependiente indica que este proceso es compatible, por lo menos durante cierto trayecto, con una presencia del capital más marcada en el plano de la circulación que en el ámbito de la producción. Ello no es solamente un efecto del carácter prolongado de la transición hacia la completa implantación del capitalismo como modo de producción, sino que expresa y satisface necesidades objetivas del propio capitalismo: la posibilidad de llevar a cabo un proceso de sobreexplotación de la fuerza de trabajo descansa de manera fundamental en la articulación dominante del capitalismo con formas mercantiles simples de producción (Oliveira, 1972; Corten, 1974).

Por consiguiente, la conceptualización estática del capitalismo como industrialización productiva y salarización de la fuerza de trabajo puede ser poco adecuada para una caracterización acertada de las formaciones periféricas en América Latina. Ni una reducida proletarianización/salarización de la fuerza de trabajo desvirtúa necesariamente el carácter capitalista de la formación económico-social, ni la dominación capitalista en la formación económico-social implica necesariamente una proletarianización total o muy amplia de la fuerza de trabajo.

Más aún: la presencia de la pequeña propiedad y en general de diversas formas de vinculación directa del trabajador a medios e instrumentos de producción y a un fondo familiar de reproducción, su inserción en formas no asalariadas de producción, etc., no siempre son resultado de la "sobrevivencia" de formas de producción "atrasadas" que el capitalismo tolera

<sup>1</sup> El entrecomillado se debe a que se trata de formas de producción anteriores en el tiempo al capitalismo, pero que éste no desplaza sino que integra a su propia dinámica y por lo tanto reproduce.



o necesita hoy pero habrá de superar mañana —por lo tanto, clases y fracciones, también ellas atrasadas, carentes de iniciativa y de conciencia de sus intereses. El modo en que el capital monopolista ha venido desarrollándose en la región en las últimas tres décadas demuestra que nuevas formas de campesinado, pequeña producción domiciliaria, etc., han sido creadas por su propia expansión, y que difícilmente podrían ser tildadas de precapitalistas por sus modalidades de producción, o de tradicionales por sus orientaciones ideológicas (cf. por ejemplo Vilas, 1981; von Werdt y Neuhoff, 1982; Miró y Rodríguez, 1982).<sup>2</sup>

Este peso relativamente fuerte de situaciones y relaciones en las que el capital no se adueña directamente del proceso de trabajo, y subordina a la fuerza de trabajo por medios económicos pero desde fuera del proceso de la producción —a través de la comercialización, el financiamiento, el abastecimiento de insumos, el procesamiento, etc.— indica la amplia vigencia en muchas sociedades de la región, de lo que Marx (1971, 54-58; 1973, 458) denominó subordinación (o subordinación) *formal* del trabajo en el capital. Pero lo que en el análisis de Marx aparecía como una forma de transición hacia un capitalismo plenamente desarrollado, en América Latina y otras regiones del Tercer Mundo esta forma de subordinación del productor directo al capital desde fuera del proceso productivo es, asimismo, un producto del modo concreto de ejercerse el dominio de las formas más modernas del capitalismo en estas sociedades —como también de la fuerte gravitación que adquiere en ellas el capital comercial y financiero.

<sup>2</sup> Sin embargo éste no es un fenómeno peculiar del capitalismo periférico, sino de las etapas iniciales del capitalismo industrial. En Europa "la producción artesanal persistió hasta bien entrado el siglo XIX, aun en aquellas ramas de la manufactura tales como la metálica y textil, en las que se establecieron fábricas desde el primer momento. De hecho la expansión de la producción fabril revitalizó e incluso creó ramas de producción artesanal, tales como la industria del vestido o las de la construcción y mantenimiento de maquinaria. La vitalidad de la producción artesanal no es sorprendente, puesto que con frecuencia complementaba a la producción fabril, al permitir que el dueño de la fábrica ahorrara capital y aumentara su flexibilidad a través del sistema de dar trabajo por fuera. Además, el nivel de complejidad tecnológica no era aún tal como para dar a las operaciones en gran escala y a sus economías de escala correspondientes, una ventaja avasalladora, en cuanto a costos, sobre las de pequeña escala" (Roberts, 1980, págs. 36-37).

El proletariado de muchas formaciones económico-sociales del capitalismo dependiente constituye así una fracción reducida, y a veces muy reducida, de las clases dominadas. La clase obrera se encuentra sumergida en una muchedumbre de campesinos, pobres de la ciudad y del campo, gentes de oficio, trabajadores domiciliarios, artesanos, trabajadores estacionales, gentes sin un lugar bajo el sol —y no siempre diferenciada plenamente de ella. Para muchos de estos agentes, además, el momento de la producción, el de la circulación y el de la realización tampoco están completamente diferenciados, evidenciando una división social del trabajo poco desarrollada que plantea elementos adicionales de complejidad y fluidez al tejido social.

En la medida en que el capitalismo se presenta como el modo de producción dominante en la formación periférica, pero articulado a otras formas y modos de producción, la contradicción fundamental del capitalismo —contradicción burguesía/proletariado— se expresa como contradicción clases dominantes/clases dominadas.<sup>3</sup> El eje antagónico burguesía/proletariado se conjuga como contradicción dominante con las contradicciones que relacionan y oponen a las clases, grupos y fracciones que son expresión de los modos y formas de producción subordinados al capital en la misma formación. De la misma manera que las relaciones capitalistas "iluminan" toda la formación económico-social, así también la contradicción fundamental de las relaciones de producción capitalistas sobre determina a la contradicción clases dominantes/clases dominadas. Pero no es éste un proceso mecánico o automático, ni necesariamente rápido. Se desenvuelve a través de luchas intensas en las que el peso cuantitativo de los actores no siempre es el factor determinante, y de la formulación y reformulación de alianzas y antagonismos en los que la contradicción fundamental está presente en el sentido estructural y en el horizon-

<sup>3</sup> En otros términos: dada la subordinación de los sistemas de producción de los que el artesanado, el campesinado "tradicional", etc., son producto, el eje antagónico tenderá a polarizarse alrededor de campos contradictorios de intereses de clase constituidos respectivamente por la burguesía y por el proletariado, pero que incorporan, articulados a los intereses de la clase fundamental de cada campo, los intereses y las reivindicaciones de los agentes que son expresión de los modos y formas subordinadas o secundarias de producción, o de los ámbitos de la actividad no productiva.

te de las luchas, pero no siempre en la fisonomía empírica de las batallas concretas.

Ni es tampoco un proceso que se confina en el ámbito material de la estructura productiva. La situación en la esfera de la producción/circulación constituye el punto de partida de la diferenciación clasista de la sociedad, pero no la agota. Las clases se constituyen como sujetos colectivos de acción social en el terreno político-ideológico, y lo hacen en un proceso que no es sólo de toma de conciencia y rechazo de su explotación económica, sino también de vivencia y repudio de su opresión política (Marx, 1847, 172:174, y 1852, 99:100). Esto no quiere decir empero que la opresión política se viva como un apéndice de la explotación material en un doble proceso —lo económico por un lado, lo político por el otro— que se conjuga como recíproca externalidad. El proceso capitalista de producción es al mismo tiempo proceso de producción y de reproducción de las clases y, por lo tanto, proceso de producción y de reproducción de las relaciones de dominación/subordinación política e ideológica que vinculan y oponen a dichas clases. Las relaciones de producción se expresan como poder de clase, poder que, como tal, está constitutivamente ligado a las relaciones políticas y a las prácticas y aparatos que lo consagran y legitiman. Estas relaciones por lo tanto no se sobreañaden desde afuera, sino que están presentes ya en las relaciones de producción mismas.

Las clases dominadas toman conciencia de la explotación de que son víctimas en el marco de la dominación política que la procesa y encubre, y no separan una y otra dimensión de la lucha. Como señala uno de los primeros dirigentes revolucionarios de El Salvador:

Lo importante de destacar aquí es que inmediatamente que se fundaban estas organizaciones, sus afiliados evidenciaban que a ellas los habían llevado al mismo tiempo un interés gremial y reivindicativo y un interés político. Muchas veces antes de que nosotros comenzáramos a plantear tímidamente la lucha futura de un sindicato dado en pos de mejores salarios o de mejor trato y alimentación, los campesinos decían que lo mejor era ir pensando en cómo defender al Sindicato dado de las persecuciones y tropelías de los jueces, alcaldes y cuerpos armados y, mejor aún, planificar los medios por los cuales la organización podría ayudar a obtener autoridades propias de los

obreros y los campesinos en los cargos públicos de la zona y, si era posible, del Departamento y, si se podía, de todo el país (Dalton 1972, 130:131).<sup>1</sup>

La contradicción clases dominantes/clases dominadas se expresa en la lucha política como contradicción Estado-nación/pueblo-nación. El aparato del Estado —diferenciado institucionalmente del polo dominante de la sociedad civil o sumergido de diversas maneras en él— constituye el ámbito de contacto material de las clases dominadas con el poder —económico, político-militar, cultural— dominante: ejército, policía, tribunales... Si el poder político encubre, legitima y defiende la explotación económica, es a través del enfrentamiento a él que se avanza hacia la eliminación de ésta.

Sin embargo la elevación de la lucha "económica" de clases al nivel de lucha política de clases —lo que Marx (1847, loc. cit.) llamó el paso de la clase *en sí* a la clase *para sí*, y Gramsci (1977a, 47:48) el pasaje de lo objetivo a lo subjetivo, de la necesidad a la libertad—, y por lo tanto el desarrollo y consolidación de la organización política de la clase obrera y demás fuerzas populares, la configuración del conflicto de clases como lucha por la conquista popular del poder político, y la efectiva hegemonización de estos procesos por la clase obrera, no son cuestiones que surjan automáticamente, ni tiene sentido tratar de elaborar al respecto un modelo general. Los rasgos que este complejo proceso asume en la realidad son producto

<sup>1</sup> Esta no es una peculiaridad de las luchas sociales del capitalismo periférico. En su estudio del desarrollo de la clase obrera inglesa Thompson (1963) señala que "La formación de la clase obrera es tanto un hecho de la historia política y cultural como de la historia económica. No fue la resultante espontánea del sistema fabril, ni debería pensarse en una fuerza externa —la 'revolución industrial'— operando sobre una materia prima humana no diferenciada y transformándola al final del proceso en una 'nueva raza de hombres' (...). La clase obrera se produjo a sí misma tanto como fue producida". "Al final, es el contexto político tanto como la máquina de vapor, lo que ha tenido mayor influencia en la configuración de la conciencia y las instituciones de la clase obrera" (pp. 194 y 197). Cf. también H. Diner (1980), W. Abendroth (1975). Como señaló Rosa Luxemburgo (1978, I, 364): "No existen dos luchas distintas de la clase obrera, una económica y otra política, existe sólo una única lucha que tiende simultáneamente a limitar la explotación capitalista dentro de la sociedad burguesa y a suprimir la explotación capitalista y al mismo tiempo la sociedad burguesa".

tanto de la conformación estructural de la sociedad cuanto de la configuración del terreno político-ideológico y de la coyuntura política.

Del mismo modo que no hay un mecanismo de conversión automática del campesino o del artesano en proletario, sino un largo, complejo y contradictorio proceso de *proletarización* que puede extenderse por generaciones, la toma de conciencia de la común condición de opresión y explotación por un poder dominante de clase —el proceso de constitución de los grupos y fracciones subordinadas en clase— es no menos compleja y contradictoria.

Es éste un proceso histórico: no en el sentido trivial de temporalidad (todo proceso es, desde este punto de vista, histórico) sino en el sentido que está sujeto a la propia actividad de las clases populares y al modo en que ellas lo perciben. Vale decir un proceso en el que tan importante como el movimiento de la estructura son las vivencias, las percepciones, las experiencias, las formas organizativas, el modo en que la estructura se vive en la conciencia de la gente —en síntesis: lo político-ideológico.

La pequeña magnitud de la clase obrera y su diferenciación no acabada respecto del artesanado, el campesinado, y otros, contribuyen a explicar que en las primeras etapas del desarrollo capitalista lo que frecuentemente se denomina *proletariado* tenga en muchos casos más puntos de contacto con los *pobres* de la ciudad y del campo que con una clase obrera industrial o incluso agrícola —lo que en otras épocas también se llamaba *pueblo bajo*. En estas formaciones la caracterización del proletariado suele apoyarse en rasgos objetivos que no son propiamente proletarios desde la perspectiva de la situación de los agentes en la esfera de la producción, aunque sí lo sean desde la óptica general de su condición de clases oprimidas y explotadas por las clases dominantes —y en el sentido tradicional y permanente de clases desposeídas.

La participación predominante de los artesanos en las etapas iniciales de las luchas laborales es de sobra conocida (cf. por ejemplo H. Spalding, 1977). Aquí se desea destacar, por las proyecciones que se señalarán más adelante, la caracterización de este heterogéneo conjunto social —unificado más por su subordinación política y por la pobreza que por la similar inserción en el proceso de producción— como proletariado.

Por ejemplo, en El Salvador, en la segunda década de este siglo,

... un grupo de carpinteros, sastres, tejedores manuales, zapateros y activistas de la Liga Inquilinaria (que se había desarrollado paralelamente al movimiento sindical) comenzamos a coincidir en las posiciones comunistas. (...) Con grandes dificultades a causa principalmente del atraso en el nivel ideológico de todo el movimiento, comenzó a plantearse la lucha por la dirección del proletariado salvadoreño organizado. Desde el punto de vista de su influencia real entre las masas, la Regional tuvo éxito desde sus comienzos y rápidamente aglutinó en su seno a los sindicatos de mecánicos, motoristas, textiles, zapateros, panaderos, vendedores ambulantes, carpinteros, sastres, albañiles, barberos, hojalateros, sudoneros, ferrocarrileros y, lo que era importantísimo, también a los sindicatos de linca, que estaban formados por los proletarios (...) y los campesinos más pobres, y a los llamados Sindicatos de Oficios Varios, urbanos y suburbanos (...) es decir sindicatos mixtos tanto por las diversas ramas de la producción de las cuales provenían los afiliados como porque en ellos entraban indistintamente obreros urbanos, artesanos y proletarios agrícolas (Dalton, cit., 134-135).

Luego, el mismo Mármol menciona a la primera dirección política del recién creado Partido Comunista de El Salvador, y de organismos colaterales. Figuran allí dos carpinteros, tres zapateros, dos albañiles, dos tipógrafos y dos profesores; situación que no obsta para que al mismo tiempo afirme que

nuestro Partido Comunista es hijo de la clase obrera salvadoreña (...), salió de las entrañas mismas de nuestra clase obrera (ibid., 155, 157).

Proletario es aquí *trabajador pobre* —independientemente de su efectiva "liberación" respecto de los medios e instrumentos de producción y de un fondo de consumo, y aunque en su actividad la circulación y la realización de las mercancías formen un todo con la etapa de la producción—, subordinado de manera más *formal* que *real* al capital.

Tampoco es ésta una *peculiaridad* del capitalismo latinoamericano, sino más bien un elemento constitutivo de estas etapas primeras del desarrollo del capitalismo en general, y de la clase obrera. En el clima revolucionario de la Alemania de la



década de 1840 por ejemplo, el uso del vocablo *proletariado* todavía era vago y suficientemente elástico para servir a una amplia variedad de situaciones. Según Barrington Moore (1978:134),

Proletarios podían ser tanto habitantes del campo como de poblados y ciudades. Era, además, gente desarraigada y carente de un lugar reconocido, o plenamente reconocido, en el sistema de *status* existente. De ahí que a veces se incluyera en el proletariado a gente dedicada a la educación o al arte. Otras veces se incluía a jornaleros, artesanos independientes, y pequeños comerciantes. La marginalidad era otro rasgo importante: eran marginales en el sentido de ser expulsados del orden de *status* tradicional, y también en el sentido de ser muy pobres. Pero *no eran* marginales en el sentido de no desempeñar un papel significativo en la economía. Las clases superiores dependían de ellos para el desenvolvimiento de una amplia variedad de tareas esenciales para el funcionamiento de la economía. Estas tareas estaban pagadas pobremente, y requerían poca o ninguna calificación. Tenían además poca o ninguna propiedad —en la mayoría de los casos de las ciudades, ninguna. Tenían que vivir de trabajos pobremente pagados. Muy probablemente su empleo era sumamente irregular y dependía de las alzas y bajas de un ciclo económico muy impredecible.

En el resto de Europa la situación no fue distinta. De acuerdo con Hobsbawm (1962) la expresión *clase trabajadora* aparece en Inglaterra hacia 1810 y en Francia después de 1830, haciendo referencia a un movimiento laboral que

no fue ni por su composición ni por su ideología y su programa un movimiento estrictamente "proletario", es decir de trabajadores industriales o jornaleros. Fue, más bien, un frente común de todas las fuerzas y tendencias que representaban a los trabajadores pobres, principalmente a los urbanos. (...) La jefatura del nuevo movimiento reflejaba un estado de cosas parecido. Los trabajadores pobres más activos, militantes y políticamente conscientes, no eran los nuevos proletarios de las factorías, sino los maestros artifices, los artesanos independientes, los trabajadores a domicilio en pequeña escala y algunos que trabajaban y vivían como antes de la revolución industrial. Las primeras uniones de trabajadores las formaron casi invariablemente impresores, sombrereros, sastres, etc. El núcleo de los *chifles* del cartismo, en una ciudad como Leeds, lo formaron un ebanista

convertido en tejedor a mano, un par de oficiales de imprenta, un librero y un cardador. Los hombres que adoptaron las doctrinas cooperativistas de Owen eran, en su mayor parte, artesanos, mecánicos y trabajadores manuales. Los primeros trabajadores comunistas alemanes fueron buhoneros, sastres, ebanistas, impresores. Los hombres que en el París de 1848 se alzaron contra la burguesía fueron los habitantes del viejo barrio artesano Saint-Antoine, y todavía no (como en la Comuna de 1871) los del proletario barrio de Belleville.<sup>3</sup>

Señalemos finalmente que más de dos quintos de los miembros destacados y fundadores de la Asociación Internacional de Trabajadores (la *Primera Internacional*, creada en 1864) eran artesanos y gentes de oficio, y sólo 20 % eran obreros o trabajadores no artesanales (véase el cuadro I.1).

Nos hemos detenido en estas referencias porque ellas son útiles para colocar en debida perspectiva la cuestión de la formación de la clase obrera en el capitalismo latinoamericano, y salirle al paso a cierta tendencia a enfocar las luchas sociales que se escenifican en él como un conjunto de "peculiaridades" (entiéndase *desviaciones*) respecto del desenvolvimiento capitalista *clásico* (es decir europeo). Las situaciones que hemos traído a colación demuestran que la especificidad de las formaciones capitalistas latinoamericanas no consiste en la heterogeneidad de lo que genéricamente se denomina *proletariado* y en la magnitud exigua de la clase obrera propiamente tal en muchas de esas formaciones, sino en la circunstancia decisiva de que esta situación tiene lugar *en plena etapa de dominación del capital monopolista y de transnacionalización del ciclo del capital*, enfrentando el incipiente movimiento obrero, así constituido, no al capital concurrencial de una novel burguesía na-

<sup>3</sup> Similar era la composición de los motines populares de fines del siglo XVIII en Inglaterra: "En Witney encontramos informes contra un tejedor de mantas, un sastre, la mujer de un vendedor de bebidas alcohólicas y un criado, en Saffron-Walden (Essex) acusaciones contra dos cabestreros, un zapatero, un albañil, un carpintero, un aserrador, un trabajador de estambre, y nueve labradores; en varias aldeas de Devonshire... se acusa a un hilandero, dos tejedores, un cardador de lana, un zapatero, un bordador y diez trabajadores; (...) un carpintero, un cantero, un aserrador y siete labradores" (Thompson, 1979: 112). De acuerdo con una investigación, el mayor éxito organizativo bolchevique en Moscú antes de la primera guerra mundial, tuvo lugar en el sector artesano de la economía y no en las grandes plantas industriales con gran cantidad de obreros (Bonnell, 1975).

cional, pujante y hasta demócrata a su manera, sino a un bloque de poder hegemonizado por el imperialismo, que articula en su dominación a ciertos grupos y fracciones de las clases dominantes locales, y cuyas formas de dominación política consisten, salvo excepciones, en variantes del autoritarismo y del estado de excepción.

### Cuadro 1.1

#### Perfil ocupacional de fundadores, directivos y miembros destacados de la Asociación Internacional de Trabajadores hacia 1870

Ocupación	Nº	%
<i>Artesanos y gentes de oficio</i> (10 zapateros, 7 sastres, 6 carpinteros, 5 pintores, 5 grabadores, 5 mecánicos, 3 relojeros, 3 tipógrafos, 3 encuadernadores, 2 panaderos, 1 mueblero, 1 fabricante de instrumentos musicales, 1 peluquero, 1 cerrajero, 1 orfebre, 1 estuquista)	55	43
<i>Periodistas, escritores, políticos</i>	27	21
<i>Obreros y sindicalistas</i>	26	20
<i>Profesionales</i> (2 ingenieros, 2 historiadores, 2 maestros, 2 filósofos, 2 médicos, 2 juristas, 2 arquitectos)	14	11
<i>Otros</i> (2 ex militares, 2 comerciantes, 1 juez, 1 artista)*	6	5
<b>TOTAL</b>	<b>128</b>	<b>100</b>
<i>Sin información</i>	61	
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>189</b>	

\* No incluye dos espías infiltrados en la membresía de la AIT por los servicios policiales de Inglaterra y Francia.

Fuente: elaboración propia sobre la base de la información biográfica contenida en Pudover (ed.) (1973), 589-603.

Deben rechazarse por lo tanto las dos desviaciones frecuentes en esta materia. Por un lado, la tendencia dogmática a considerar al proletariado de buena parte de América Latina con los mismos atributos del de Europa y otras áreas desarrolladas. Como señala una organización centroamericana:

En apariencia, la repetición de postulados que emanan de ese error tiene un carácter clasista, "obrero", pero de hecho oculta las tareas que debemos realizar para promover nuestro proletariado concreto a su misión de vanguardia; atribuye a éste características revolucionarias ya logradas, las cuales en verdad aún están por forjarse en nuestro país (PCS 1980:42).

Por el otro, se descarta la tendencia sociologista a llevar a cabo trasposiciones formales entre uno y otro tipo de capitalismo —por ejemplo, llegar a considerar al capitalismo latinoamericano algo así como un "equivalente" o "sustituto funcional" del capitalismo europeo del siglo XVIII. El desarrollo del capital monopolista y de la transnacionalización de la valorización del capital plantea en las formaciones periféricas problemas inéditos. La articulación de formas heterogéneas de producción en una única estructura económica hace más complejo su perfil de clases y cambia la fisonomía del sujeto de la revolución. Si de acuerdo al análisis clásico, el proletariado surge como la vanguardia de la revolución en las formaciones capitalistas desarrolladas, Lenin introdujo la reflexión sobre la problemática campesina y sobre la necesidad y las condiciones de la alianza del campesinado con la clase obrera en un capitalismo atrasado como el de Rusia. En las formaciones dependientes, coloniales y neocoloniales, se plantea además la cuestión de las "fracciones intermedias": los trabajadores no asalariados, el pequeño comercio, la pequeña burguesía de profesionales, técnicos, intelectuales, y su incorporación a la lucha por la liberación nacional y por profundas transformaciones sociales.

Si bien las clases y grupos que constituyen el terreno popular cobran existencia como tales en el ámbito de las relaciones de producción/circulación —sea por su situación en la estructura productiva, sea por su relación con ella—, su conjugación como *pueblo* es el resultado del modo en que la lucha política se desenvuelve, del tipo y nivel de los enfrentamientos, y del

alineamiento concreto que, en cada momento, aquellas clases y fracciones adoptan en torno a la contradicción que conduce la lucha. El pueblo como realidad histórica y como concepto teórico es producto de las mil formas de protesta, movilizaciones, revueltas, con que las clases dominadas se resisten contra la explotación económica y la opresión política, contra la pobreza y el absolutismo, contra la imposición cultural y la subyugación colonial o imperialista, en un proceso de constitución como sujeto político que no tiene lugar al margen del sistema de dominación sino dentro de él, y en el que expresan su identidad de pueblo y su voluntad de emancipación.

Entendemos por pueblo, cuando hablamos de lucha, la gran masa irredenta, a la que todos ofrecen y a la que todos engañan y traicionan, la que anhela una patria mejor y más digna y más justa; la que está movida por ansias ancestrales de justicia por haber padecido la injusticia y la burla generación tras generación, la que ansía grandes y sabias transformaciones en todos los órdenes y está dispuesta a dar para lograrlo, cuando crea en algo o en alguien, sobre todo cuando crea suficientemente en sí misma, hasta la última gota de sangre. (...) Nosotros llamamos pueblo, si de lucha se trata, a los seiscientos mil cubanos que están sin trabajo (...); a los quinientos mil obreros del campo (...); a los cuatrocientos mil obreros industriales y braceros (...); a los cien mil agricultores pequeños (...); a los treinta mil maestros y profesores (...); a los veinte mil pequeños comerciantes abrumados de deudas (...); a los diez mil profesionales jóvenes (...). ¡Este es el pueblo, el que sufre todas las desdichas y es por tanto capaz de pelear con todo el coraje! (F. Castro 1981, 36:37).

Este famoso alegato presenta con claridad los elementos señalados. En primer lugar, la explicitación de que la constitución del sujeto popular tiene lugar en la lucha política. En segundo lugar, y derivado de lo anterior, la importancia de la cuestión ideológica: 1) el desarrollo de la conciencia popular de la explotación y la opresión; 2) la conciencia de que esa explotación y opresión *unifican* al pueblo por encima de sus diferenciaciones laborales, educativas, de ingreso, etc. En tercer lugar, el enmarcamiento de clase del sujeto popular, en cuanto no aparece mencionado ningún gran explotador de excedente: la convocatoria se dirige a las masas trabajadoras, a la

pequeña propiedad, a los intelectuales y profesionales (cf. sobre esto O. Fernández, 1981).

La gravitación de estos elementos en la configuración de las clases populares y en su constitución como sujeto de la acción política señala, por un lado, la limitación de la caracterización abstracta de las clases que las reduce a su nivel de meros agentes de la estructura material de la sociedad. Las clases se diferencian en dicha dimensión, pero se *plenifican* y adquieren fisonomía propia en el terreno político ideológico. No son dos procesos distintos, o dos etapas diferentes, sino dos niveles de creciente determinación del sujeto histórico de la práctica social.

Por otro lado la constitución del sujeto *popular* como proceso político-ideológico que tiene una determinación estructural de clase pero que no lo reduce a ella, llama la atención sobre la cuestión de la subordinación de las masas trabajadoras no proletarizadas —o no plenamente proletarizadas— a las clases fundamentales de la estructura capitalista, y su incorporación al campo popular. Su relativa lejanía respecto de las relaciones de producción dominantes determina un peso particularmente fuerte de elementos y consideraciones ideológicas en la definición de las posiciones políticas de estas masas (Laclau, 1977, 117). Este modo de inserción en la formación social da una tonalidad difusa a sus intereses "de clase" y favorece una tendencia a vivir las condiciones materiales de existencia como un puro proceso ideológico. Si, como plantea Gramsci, los hombres toman conciencia de los conflictos de la estructura en el terreno de las ideologías (loc. cit.), cuanto más determinante sea este tipo de clases y fracciones en la formación social, más determinante será el papel de la lucha político-ideológica en el desenvolvimiento de la formación social en su conjunto. De ahí por lo tanto la enorme relevancia de las interpelaciones democráticas, patrióticas, religiosas y, en general, de lo ideológico, en la determinación de las definiciones y alineamientos de estas masas populares, en su constitución como sujetos de acción política.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> No haber prestado la debida atención a los elementos político-ideológicos de constitución de estas fracciones y grupos —en especial el papel de la ideología en la determinación de sus definiciones políticas—, y la consiguiente reducción de su identificación a los elementos económico-estructurales, condujo a errores políticos de consecuencias graves. Por ejemplo, la hipótesis



Pero al mismo tiempo, esta marcada diversidad de grupos y fracciones dominadas incide en el modo en que se formula y se desenvuelve la lucha contra el orden social imperante, planteando el espacio objetivo para que proyectos aparentemente similares e interpelaciones ideológicas dirigidas hacia el mismo espectro de agentes, tengan en la práctica alcances y proyecciones desiguales, y crea condiciones para el desarrollo de contradicciones y eventualmente enfrentamientos en el seno de este campo de fuerzas, por la orientación efectiva, las características reales y la conducción política de las luchas sociales. Buena parte de los desencuentros y el aislamiento de la izquierda latinoamericana se originan en la elaboración de paradigmas sociales a partir de los intereses y la óptica de fracciones y clases que, sin perjuicio de su común pertenencia al campo nacional-popular, se encuentran recíprocamente diferenciados por la materialidad de sus bases estructurales y por el modo como ellos se viven en el terreno ideológico. El prole-

aceptada por amplios sectores de la izquierda y el movimiento obrero europeo de la década de 1920, según la cual el desarrollo del proceso de concentración capitalista lleva, por un lado, a la ruina progresiva de los sectores medios —pequeños comerciantes, artesanos, pequeños rentistas— cuya inestabilidad económica terminaría por insertarlos inevitablemente en la pendiente de la proletarianización, de otra parte, la concentración capitalista, al intensificar las contradicciones sociales, lleva a la disgregación de los privilegios burgueses de que goza esa fracción peculiar del asalariado que son los empleados, y por lo tanto, los priva del único elemento que liga a dicho sector con la burguesía, proyectándola directamente al campo del proletariado. En ambos casos este movimiento de empobrecimiento y proletarianización de la pequeña burguesía urbana debería provocar no sólo la polarización "económica" de esas fracciones en torno a la clase obrera, sino también su polarización política en similar sentido. En esta situación, habría de realizarse, de manera casi natural, la alianza entre el proletariado y los grupos y fracciones medias, limpiando el escenario político de posiciones intermedias anacrónicas, puesto que el elemento asalariado en la configuración de todos estos grupos terminaría por ser más fuerte y decisivo que cualquier vínculo de la pequeña burguesía con el medio social y la tradición a la que había estado ligada hasta entonces. Sin embargo, contra todas las previsiones socialdemócratas y comunistas —salvo pocas y aisladas excepciones—, la crisis de estas fracciones intermedias derivó en el desplazamiento político e ideológico de grandes masas de la pequeña burguesía hacia posiciones y organizaciones fascistas y nazis. El elemento económico que aproximaba a esas masas pequeñoburguesas al proletariado no fue suficiente para impedir ese desplazamiento, o en todo caso pudo ser articulado en las interpelaciones ideológicas y en la práctica política de la burguesía como uno de los pilares de las experiencias nazis y fascistas. Cf. un análisis detenido de esto, en Colarizi (1976).

ariado propiamente tal, el campesinado, la pequeña burguesía de las ciudades, son otros tantos ejes de articulación del campo nacional-popular en torno a los cuales se proyectan formas alternativas de organización social que, no por su común enmarcamiento popular, implican identidad de horizontes o de estrategias.<sup>7</sup>

Del mismo modo, el socialismo aparece muchas veces más como una cuestión de relaciones internacionales que de relaciones de producción. A menudo los elementos que se toman en cuenta por dirigentes y movimientos o partidos del Tercer Mundo, para juzgarse como *socialistas*, es su proyecto de liberación nacional, el antiimperialismo que practican, la democratización general de la vida económica que promueven, el énfasis en la igualdad social y en la justicia, la convicción de que el sistema capitalista internacional se opone a la autonomía nacional y al desarrollo económico —y no tanto la transformación de las relaciones de producción y la socialización de la economía, que se presentan como un proceso largo y complicado. Buena parte de las discusiones académicas sobre la *transición* y del teoreticismo que las rodea parten de no entender esto. Más adelante volveremos sobre este punto.

### 3. La cuestión nacional

La articulación dependiente de la formación económico-social al proceso transnacional de valorización del capital define el modo en que se plantea la cuestión nacional. El Estado no es solamente la condensación político-institucional de una dominación de clase antipopular, sino también y simultáneamente, la expresión de la subordinación al exterior e instrumento de ésta. La nación como forma ideológica de la articulación de la clase dominante local a la dominación internacional del imperialismo, se enfrenta a la nación como proyecto de lucha antiimperialista de las clases populares: la soberanía nacional como atributo y corolario de la emancipación social.

<sup>7</sup> Véase sobre esto, por ejemplo, Lenin (1905).

No toda revolución social en el Tercer Mundo es necesariamente una revolución de liberación nacional, pero toda revolución social tiene en el Tercer Mundo un componente de liberación nacional. La cuestión nacional no se reduce a la eliminación de la dominación colonial ni por lo tanto desaparece con ésta. La experiencia de América Latina en particular, enseña que la independencia política formal no implica necesariamente una verdadera emancipación de la dominación foránea, en la medida en que ésta puede continuarse por otros canales no menos decisivos.<sup>8</sup> La existencia de una dominación colonial directa —y en consecuencia la ausencia de una estructura nacional de poder— no es el elemento determinante para caracterizar a una revolución de liberación nacional, sino la existencia de la dominación imperialista. Ésta puede expresarse por las vías del colonialismo, como a través de estructuras de poder formalmente autónomas. Cuando el desarrollo de las transformaciones socioeconómicas implica la necesidad de remover la sujeción —político-militar, económica, financiera u otra— de la formación social dada hacia el capitalismo desarrollado y sus estados, las tareas de la liberación nacional resultan insoslayables. Pero su gravitación en la revolución social, sobre todo en las situaciones poscoloniales, varía de acuerdo a la solidez del enraizamiento interno de la estructura de poder político y económico y, por lo tanto, al grado de mediación que ella define respecto del sistema capitalista internacional. En este sentido es nítido el contraste, en América Latina, entre la situación en América Central, cuyas estructuras de poder local presentan una subordinación fuerte —incluso en términos político-militares— respecto de los Estados Unidos, y el panorama en América del Sur, cuyas clases dominantes ostentan una autonomía relativa mayor respecto de la dominación imperialista y donde los elementos de *asociación* suelen ser más fuertes que los de *subordinación*. En el primer caso,

<sup>8</sup> El tema es conocido y no requiere mayor desarrollo. Ya Lenin (1916b) había señalado la existencia de "las formas variadas de países dependientes que desde un punto de vista formal gozan de independencia política, pero que en realidad se hallan envueltos en las redes de la dependencia financiera y diplomática. Una de estas formas, la semicolonía, la hemos indicado ya antes. Modelo de otra forma es, por ejemplo, la Argentina". No obstante existe aún en algunos autores europeos el reduccionismo que se señala en el texto; cf. por ejemplo Halliday y Molyneux (1981), pág. 18 y ss.

la sólida ligazón de la estructura de poder local al exterior tiende a separarla de sus bases internas y plantea con fuertes rasgos el carácter antiimperialista de la lucha contra el poder establecido; en el segundo, el enraizamiento en definitiva interno de la estructura de poder, su autonomía relativa respecto del sector externo, explicitan con énfasis el carácter clasista de la revolución social y de la cuestión nacional.<sup>9</sup>

La dominación imperialista no puede ser caracterizada simplemente como una relación *entre estados-naciones*. Relación internacional *por su forma*, es por su contenido una relación de clase, y en un doble sentido. Por un lado, porque expresa la presencia, en la periferia, de las clases dominantes metropolitanas: la ampliación y cualificación en escala internacional de la dominación de clase de las burguesías centrales. Por el otro, porque la dominación imperialista desarrolla una relación contradictoria de subordinación y asociación privilegiada entre las burguesías centrales y las clases dominantes periféricas. En virtud de esa vinculación éstas consolidan su dominación interna al par que pueden alcanzar, directa o indirectamente, alguna forma de inserción en el mercado internacional.

En general este segundo aspecto de la dominación imperialista es más fácil de discernir en algunas formaciones de América Central y el Caribe (Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Haití...) a causa del menor grado de desarrollo de las fuerzas productivas en el momento en que el imperialismo irrumpió en ellas, y de la gravitación de esos rasgos estructurales en el terreno político y en el Estado: debilidad económica y política de los grupos gobernantes, fragilidad o ausencia de un sistema nacional de dominación política, organización de la actividad exportadora bajo la forma de enclave, etc. Las invasiones norteamericanas de principios de siglo en el Caribe son ilustrativas en este sentido. La infantería de marina sustituyó a los grupos dominantes locales y desarrolló tareas político-militares, económicas y culturales que pusieron a

<sup>9</sup> En países de América Central como Nicaragua y Guatemala, la cuestión nacional aparece dotada asimismo de componentes étnicos; la cuestión de clase, por su lado, surge con características diferentes en cada sociedad de la región. Cf. ORPA (1982); EGP (1982); PGT (1982); EGP-FAR-ORPA-PGT (1982); CIERA (1981a); Ortega Hegge (1982).

estas formaciones "en condiciones" de incorporarse a la nueva etapa de la expansión imperialista norteamericana (cf. Vilas 1979a).

Pero la vinculación no ha sido menor ni menos profunda en las formaciones cuyas clases dominantes controlaban el sector de exportación en el momento de integrarse al mercado internacional, y se hallaban relativamente avanzadas en la constitución de un orden político interno. La expansión imperialista fortaleció la inserción internacional a través de la introducción de modificaciones profundas en el sector exportador —en la comercialización internacional, el financiamiento, el transporte y almacenamiento, etc. Incluso más claramente aquí que en el primer grupo de países, el capital y los estados imperialistas aparecieron como los aliados de los grupos dominantes locales, ampliando la escala de su acumulación y consolidando su poder político. Gracias a los ferrocarriles, frigoríficos, puertos y el financiamiento europeos, las burguesías agrarias de Uruguay y Argentina, por ejemplo, alcanzaron una efectiva participación en el proceso transnacional de acumulación capitalista desde fines del siglo pasado.

Mientras en el primer grupo de sociedades la dominación imperialista se presentó con una fisonomía político-militar que a veces hizo oscurecer la percepción del proyecto económico que se impulsaba, en el segundo grupo la apariencia más claramente económico-financiera y tecnológica actuó para ocultar sus proyecciones político-institucionales igualmente estratégicas.

En uno y otro caso clase dominante *nacional* fue la fracción o grupo local que logró generar una relación estable con la expansión *internacional* del capitalismo. El carácter nacional de la dominación política en el capitalismo dominado es una función de la eficacia con que determinada fracción o grupo de las clases dominantes locales puede articularse subordinadamente a la expansión extranjera. Lo nacional, como atributo de la burguesía latinoamericana, tiene como elemento constitutivo y definitorio a lo extranjero, a lo *internacional*, y se fundamenta en la subordinación de una clase, y del conjunto de la formación social a través de la clase, a la expansión del imperialismo.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Cf. un análisis más detallado en Vilas (1980a).

La existencia de un Estado *nacional* y de una estructura de poder que responde a las determinaciones locales de la lucha de clases, y la mediación que uno y otra desempeñan respecto de la dominación imperialista, abren el espacio para la existencia de contradicciones entre los grupos locales asociados de manera privilegiada al imperialismo, y algunas fracciones de las clases dominantes que, por efecto de factores diversos, quedan relegadas a posiciones secundarias.

La asociación privilegiada al imperialismo de las clases dominantes latinoamericanas tuvo su primera expresión en el marco de la división internacional del trabajo que adjudicó a las formaciones dependientes el rol de productores de mercancías primarias. El Estado periférico fue la expresión superestructural de este esquema de especialización internacional y reforzó su funcionamiento. Pero la reproducción ampliada del mismo, y acontecimientos en la escena internacional —crisis, guerras— crearon condiciones para cierta diferenciación del aparato productivo periférico y del perfil de clases. En algunas formaciones la expansión del sector exportador planteó la posibilidad de crecimiento de actividades manufactureras, pero que al mismo tiempo, y de manera contradictoria, se enfrentaban a las limitaciones generadas por la reproducción del esquema primario exportador. Además, la debilidad material de los grupos que impulsaban estas nuevas facetas del proceso de acumulación, su origen más reciente, su orfandad en materia de expresión ideológica de sus intereses de clase —la falta de *intelectuales orgánicos*—, abonaban adicionalmente su subordinación frente a los grupos exportadores. El mismo proceso que creaba la posibilidad de existencia de estas nuevas fracciones de la burguesía, planteaba las limitaciones que debían observar. Los enfrentamientos en torno a la política arancelaria, la política impositiva, el financiamiento bancario, el tipo de cambio, etc., son otros tantos frentes en los que se expresaban las contradicciones entre unas y otras fracciones de la burguesía periférica. Más aún: en la medida en que la división internacional del trabajo que se manifiesta en la especialización primario exportadora y fundamenta la dominación de esas fracciones de la burguesía, es menos el resultado de una dotación "natural" de factores, que producto de la dominación externa, ante los ojos de estas fracciones de la burguesía las trabas a su propio desarrollo provienen en gran medida de as-



pectos muy concretos de la penetración imperialista: diseño de la estructura productiva por el sistema de transporte y comunicaciones, el control de los mecanismos de financiamiento y de comercialización, etcétera.

Sería insensato desconocer la relevancia de estas contradicciones. En torno a ellas giraron durante varias décadas aspectos significativos de la lucha de clases en la región. El paso de un modo de explotación de la fuerza de trabajo basado en la extracción de plusvalía absoluta a otro basado en la explotación de plusvalía relativa —con todas las transformaciones materiales y político-ideológicas que ello conlleva— tuvo lugar al calor del desarrollo de tales contradicciones. La modificación en el tipo de relación con el mercado mundial, y en particular con los nuevos centros hegemónicos del capitalismo —el desplazamiento de Inglaterra en beneficio de Estados Unidos, la integración de la actividad productiva local y de las esferas de circulación a las operaciones de las firmas transnacionales de la industria y el *agribusiness*, etc.— son otras tantas modalidades de expresión de aquellas contradicciones.

Pero su sola enunciación demuestra lo reducido de su alcance. No se trató de eliminar la explotación social sino de modernizar sus términos. Tampoco se trató de romper con la dominación imperialista sino de poner fin a un tipo de relación externa que se traducía en la relegación de ciertos grupos de la clase dominante. Como señaló Mariátegui (1929), para estos elementos de la burguesía el antiimperialismo es atractivo "por razones de expansión y de crecimiento capitalistas y no por razones de justicia social y doctrina socialista". Y en todo caso, el proyecto de estas fracciones subordinadas de la clase dominante, limitado como fue, sólo pudo alcanzar vigencia en la medida en que existió una movilización de masas que aportó una fuerza política que los portadores del proyecto generalmente no tuvieron, y un Estado que le otorgó una coherencia y una continuidad de las que, en general, sus beneficiarios también carecieron.

No obstante su carácter subordinado, las fracciones menores de la burguesía local participan del proceso capitalista de expropiación del excedente generado por la clase obrera, el campesinado, el artesanado, y se benefician también —de manera reducida tal vez en algunos casos, pero siempre real— de las condiciones generales de acumulación fijadas o garantiza-

das por el Estado periférico. Para estas fracciones la contradicción nacional gira usualmente en torno a la participación de los distintos grupos dominantes en el reparto clasista del producto del proceso social global de explotación, y en especial alrededor de su posición subordinada en ese reparto, a las limitaciones de su propio proceso de acumulación, etc., consecuencia de la primacía de las fracciones directamente aliadas al imperialismo. La superación de la contradicción nacional aparece así como la condición para un desarrollo más pleno del proceso de acumulación sobre el cual se apoyan.

El populismo presenta una de las expresiones más claras de las contradicciones y las limitaciones de los procesos de enfrentamiento antiimperialista hegemónizados por fracciones de la burguesía latinoamericana. El nacionalismo que originalmente caracterizó a algunas de las orientaciones económicas de la burguesía populista del continente fue siempre selectivo, limitado a los aspectos de la actividad extranjera que planteaban obstáculos a la expansión del mercado interno. En general dejó de lado a las modalidades de expansión imperialista que se desarrollaron en el sector industrial y que se convertirían en la modalidad predominante de dominación externa a partir de la década de 1950. Es más: al mismo tiempo que se nacionalizaban ferrocarriles y yacimientos minerales, alentábase la inversión extranjera en los nuevos polos de dinamismo —industria de bienes intermedios y de capital sobre todo. El nacionalismo de la burguesía populista y de su estado consistió así, básicamente, en una reorientación de la naturaleza y la dirección del proceso de acumulación y de la inversión extranjera. Su meta fue la creación de modalidades nuevas de actuación periférica del capital monopolista, cierta diversificación de las fuentes externas de inversión y financiamiento, y por lo tanto una relación de nuevo tipo entre los nuevos sectores de punta impulsados conjuntamente por el capital extranjero, las fracciones industriales, comerciales y financieras de la burguesía local ligadas al crecimiento del mercado interno, y el estado periférico.<sup>11</sup>

Para los trabajadores, en cambio, la contradicción nacional es, *objetivamente*, un capítulo o dimensión de la contradicción fundamental, desde que la explotación imperialista no es algo

<sup>11</sup> Para mayor desarrollo de este tema cf. Vilas (1979b).

distinto de la explotación capitalista, sino esa misma explotación capitalista cuando ha alcanzado la etapa superior de su desarrollo (Lenin 1916b). Además, cuando la propiedad privada sobre los medios de producción es principalmente o en gran medida, propiedad imperialista, la lucha antiimperialista conducida por las clases populares genera alteraciones profundas en las relaciones de producción, merced a la creación, a partir de la nacionalización de esos medios de producción, de un área de propiedad social que puede llegar a convertirse en el núcleo de dinamismo de una nueva racionalidad económica.

Puesto que la dominación imperialista es en fin de cuentas una modalidad de la explotación capitalista, la liquidación de toda forma de subordinación al imperialismo es una tarea que sólo puede tener éxito con la conducción hegemónica de la nación por las clases populares y, dentro del campo popular, por la clase obrera. La identidad estructural de clase entre las fracciones nacionalistas y las fracciones proimperialistas de la burguesía llena de dudas a las primeras, atrapadas como están entre la necesidad de recurrir a la activación de las fuerzas populares para paliar su propia debilidad frente a los grupos que controlan el Estado periférico y se relacionan privilegiadamente con el imperialismo, y el temor a la autonomización y la organización popular y a un avance de las masas más allá de sus limitadas contradicciones internas a la clase dominante. Sus reivindicaciones frente al sector externo, el capital monopolista extranjero, etc., las incorporan al campo nacional, pero el carácter limitado de las mismas les impide asumir un rol protagónico.

Es por ello que la práctica de los movimientos de liberación nacional tanto en situaciones coloniales como poscoloniales, plantea la necesidad de la conducción obrera y popular:

Los vacilantes, los tímidos, por el carácter que toma la lucha, nos abandonan. (...) Sólo los obreros y campesinos irán hasta el fin, sólo su fuerza organizada logrará el triunfo (A. Sando, 1979, 8).

La lucha contra el imperialismo, que es el enemigo del pueblo, sólo tendrá plena significación política y económica si el problema de la opresión de una clase débil por otra poderosa es resuelto correctamente (Hou Yuon, 1964).

Para que triunfe la revolución nacional pasando todas las fases de desarrollo del Estado nacional democrático, la clase

obrero y su Partido deberían asumir la dirección de la revolución (Ho Chi Minh, 1979, 127).

Sea que se la llame "liberación nacional", *Black Power*, o simplemente "democracia", la lucha por la liberación de la dominación imperialista está inseparablemente ligada por miles de hilos a la lucha para hacer de la clase obrera quien decida cómo será el futuro (J. Percy, 1982).

La conducción obrera y popular del proceso de liberación nacional se plantea como una forma de expresarse el proceso de progresiva emancipación social de las clases dominadas, y por lo tanto de retroceso frente a éstas, de las viejas fuerzas dominantes —incluidas las fracciones nacionales de la burguesía. El nivel y la continuidad de la lucha, la capacidad de aglutinar las fuerzas del campo nacional-popular, e incluso de sumar a éste elementos subordinados del bloque dominante —por lo tanto, la eventualidad de un desplazamiento político-ideológico de tales elementos por encima de su situación estructural de clase—, etc., son todos aspectos que dependen de la efectiva conducción política del proceso por la clase obrera organizada como vanguardia.

En torno al eje de la dominación imperialista se configuran por lo tanto dos campos de intereses contradictorios. De un lado, las clases y fracciones que se incorporan como socios subordinados a la expansión imperialista. Son los beneficiarios de la dominación imperialista: el campo antinacional —lo que en el lenguaje político cotidiano se llama *cendepatrias*, *cipayos*, *oligarcas*. De otro lado, el complejo de clases y fracciones explotadas u oprimidas por la dominación imperialista: el campo nacional.

La contradicción entre uno y otro, es decir la *contradicción nacional*, no es en sí misma una contradicción de clase, ya que el campo nacional puede estar constituido por clases o fracciones de clases opuestas, pero unificadas por la subyugación que les impone el imperialismo. La contradicción fundamental del capitalismo —contradicción burguesía/proletariado— no es en principio externa al campo nacional. Sólo cuando ese campo es también enteramente un campo popular, se desarrolla tal relación de externalidad. Mientras no se llegue a ese punto la contradicción fundamental se desarrolla entre las fuerzas que constituyen el campo nacional, no menos que entre algunas de ellas y el campo antinacional.

La contradicción nacional se conjuga con la contradicción fundamental, de clase, en la medida en que la primera es un aspecto del modo en que se desenvuelve la segunda. No agota a la contradicción de clase ni suspende la dialéctica de su movimiento. Antes bien, se subordina a ella: la dialéctica de la contradicción nacional —los términos de la oposición antiimperialista, el nivel y las modalidades de la lucha, etc.—, está sobre-determinada por la lucha de clases. Y desde que la situación de clase de las fuerzas que constituyen en principio el campo nacional es distinta —puesto que la contradicción fundamental las empuja en campos opuestos— la profundidad y el alcance de la contradicción nacional también son diferentes.

Por estas razones la convocatoria a la lucha antiimperialista es siempre más amplia que la convocatoria al socialismo. Vietnam presenta un ejemplo claro. El *Llamamiento con motivo de la fundación del Partido Comunista de Indochina* (18 de febrero 1930) se dirigía a los "Obreros, campesinos, soldados, jóvenes y estudiantes, ¡Compatriotas oprimidos y explotados!" (Ho Chi Minh, 1973, 99), en una explícita interpelación clasista, mientras que la convocatoria de la *Liga para la Independencia de Viet-Nam* (el famoso *Viet-Minh*) creada por el propio PCI en 1941, apelaba a los "respetables ancianos, personalidades patrióticas" y a los "notables ricos, soldados, obreros, campesinos, comerciantes, funcionarios jóvenes y mujeres que aman a la patria!": actualmente el problema más importante es la liberación nacional. ¡Unámonos!" (ibid., 104). Mientras aquella tiene como eje central de constitución del sujeto político a la explotación y opresión de clase, ésta lo constituye a partir de la opresión nacional, por encima de las contradicciones de clase.

El "notable rico", el obrero, el comerciante, el campesino, tienen todos algo que ganar en la lucha contra el imperialismo. Pero entre estas clases existen contradicciones. La contradicción clase/nación plantea por lo tanto, desde la perspectiva de la praxis política, la cuestión de cómo resolver el conflicto de clases sin deteriorar la unidad de la nación en la lucha antiimperialista.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> "Debemos comprender que: 1) si el conflicto interno es resuelto correctamente en el marco de la unidad consciente de la nación, el Frente que lucha contra los imperialistas será mucho más fuerte y tenaz; 2) si el conflicto interno no se resuelve correctamente en el marco de la unidad consciente de la

#### 4. La cuestión del desarrollo

La base material de las formaciones periféricas consiste de una estructura económica desarticulada y heterogénea que testimonia los efectos de la dominación imperialista. El *atraso*, vale decir el exiguo desarrollo de las fuerzas productivas, de las formas de producir, los niveles tecnológicos primitivos, etc., se articula con agudos desequilibrios internos, producto aquél y éstos de la subordinación de la estructura productiva local a las necesidades del proceso de valorización del capital en escala transnacional. No es solamente el problema del tipo de especialización productiva impuesta por dicho proceso, sino el modo en que tal especialización fue organizada históricamente; no un problema de valores *de uso* (qué se produce) sino de valores *de cambio*: cómo y para quién se produce. Incluso en las formaciones más avanzadas de América Latina, donde la desarticulación estructural y el atraso productivo son menos marcados, el diseño original del aparato productivo por las economías capitalistas metropolitanas, y la estructura social derivada de aquél, siguen limitando aún hoy sus posibilidades de desarrollo.

Desarrollo y subdesarrollo son dos fases de un único proceso histórico de expansión capitalista; el subdesarrollo es una forma de manifestarse la división internacional del trabajo generada por el capitalismo. En la medida que el atraso de las fuerzas productivas, la heterogeneidad y la desarticulación de la estructura económica, son el producto y al mismo tiempo la base de sustentación del tipo de capitalismo dominado por el imperialismo, la cuestión del desarrollo económico aparece como uno de los puntos centrales de los procesos revolucionarios.

nación (o si no se resuelve del todo) las consecuencias serán malas para el Frente en su lucha contra el imperialismo, que destruirá su unidad o debilitará su capacidad de confrontación con él" (Hou Yuon 1964). Hou Yuon es uno de los dirigentes revolucionarios kumpucheanos eliminados en la década del 70 por el grupo de Pol. Pot. La contradicción clase/nación en el marco de la lucha antiimperialista había sido señalada ya por Mariátegui (1929): "El antiimperialismo, admitido que pudiese movilizar al lado de las masas obreras y campesinas, a la burguesía y pequeña burguesía nacionalistas (...) no anula el antagonismo entre las clases, no suprime su diferencia de intereses".



rios. Más aún, constituye una cuestión estrechamente ligada a la lucha antiimperialista —sobredeterminada, lo mismo que ésta, por la contradicción fundamental del capitalismo.

Esta determinación de la cuestión del desarrollo por la cuestión nacional y, a través de ésta, por la perspectiva de clase, no siempre es evidente, pero no por eso carece de realidad. Los problemas del desarrollo son problemas de dominación económica y, por lo tanto, política y cultural, donde también aquí la dimensión internacional es una manera de expresarse la presencia transnacional de clases y grupos. No existe un desarrollo de las fuerzas productivas al margen de la lucha de clases y de formas determinadas de organización social de la producción. Al contrario, sólo relaciones de producción superiores aseguran la continuidad de aquél. Por lo tanto, las tareas del desarrollo, de la etapa "de reconstrucción nacional", no existen ni pueden ser encaradas sino desde determinadas perspectivas de clase. Las interrogantes básicas del desarrollo —*qué producir, cómo, para quién*— tampoco tienen respuesta más que a partir de proyectos de clase: el *costo social* del desarrollo tiene también un carácter de clase.

Incluso cuestiones convencionalmente consideradas como *naturales* son el producto de la acción de estos factores socio-políticos. Por ejemplo, la cuestión del tamaño físico de algunas formaciones de América Latina y el Tercer Mundo (la reducida dimensión geográfica de su territorio, su escasa población, etc.); de acuerdo al enfoque convencional estos países carecen, por sus dimensiones exiguas, de viabilidad nacional (Jaguaribe 1964). Desde una perspectiva revolucionaria en cambio, el tamaño pequeño sólo es un obstáculo insuperable para el desarrollo de las fuerzas productivas cuando el objetivo consiste en impulsar alguna forma de capitalismo nacional (Thomas 1974, 16). En consecuencia,

el problema real no es la cuestión del tamaño reducido en sí mismo, sino la cuestión del imperialismo.

¿Cómo podemos planificar? ¿Cómo podemos desarrollarnos? ¿Cómo podemos crecer económicamente y satisfacer las necesidades de nuestro pueblo cuando estamos bajo varios tipos de guerra dirigidos por el país más grande y poderoso, que está justo en nuestro umbral, y cuando nosotros mismos somos uno de los países más pequeños y pobres del mundo?

El obstáculo clave que detiene el desarrollo progresivo de nuestros países no es el hecho físico de lo pequeño. El obstáculo clave es el imperialismo (M. Bishop 1982, 198, 205, 206).

Dentro del campo nacional se generan contradicciones en torno al proyecto de desarrollo que la revolución impulsará. Muchas veces la mayor experiencia técnica permite a grupos de la burguesía local en contradicción con el imperialismo, alcanzar el control de las políticas y los aparatos económicos del nuevo Estado; la orfandad de cuadros técnicos revolucionarios en estas primeras etapas es proverbial. Por otro lado, la crisis de los criterios tradicionales —*clasisistas*— de disciplina laboral, eficiencia, productividad, no es inmediatamente sucedida por criterios nuevos —superiores a los anteriores en cuanto no se apoyan, o se apoyan menos, en la explotación de la fuerza de trabajo—. Se produce generalmente un hiato ocupado por búsquedas, ensayos, idas y vueltas, confusiones y desencuentros, que los grupos de la burguesía visualizan y denuncian como *caos* y del que tratan de sacar provecho proponiendo fórmulas de *orden* que reiteran, en el nuevo contexto, la subordinación de las organizaciones obreras y populares en el proceso mismo de producción.

En la medida en que desde la óptica de estas fracciones de la burguesía, de lo que se trata es de eliminar las trabas que, desde la economía internacional y desde el Estado nacional, dificultan su propio proceso de valorización, el *desarrollo* no puede ser otra cosa que fortalecimiento de sus propias bases materiales, redefinición de las vinculaciones económicas, comerciales y financieras externas, y ratificación del principio empresarial privado de autoridad. El propio mejoramiento de las condiciones de vida de las masas es caracterizado como una condición, o como un mal inevitable, para el desarrollo de la valorización del capital y, por lo tanto, sometido a su dominio.

Desde la perspectiva revolucionaria, el desarrollo en cambio es parte de las profundas transformaciones que el proyecto de la revolución busca introducir en todos los ámbitos de la sociedad. La creación de nuevas formas de producción, de relaciones sociales de nuevo tipo, busca liberar las trabas a que las fuerzas productivas materiales y humanas se hallaban sometidas. La reconstrucción, lejos de ser considerada un proceso de recomposición de la estructura económica prevaleciente,

es caracterizada más bien como la puesta a punto del activo sobreviviente a la dominación imperialista y a los efectos de la guerra de liberación, para hacer frente con este mínimo punto de partida a las tareas de la transformación social.

## 5. La cuestión democrática

La diferente posición de clase frente a la cuestión nacional y a la del desarrollo expresa asimismo el enfrentamiento de dos concepciones clasistas de la cuestión democrática: una contradicción entre una conjunción de fuerzas democrático-burguesas, y un bloque de fuerzas popular-democráticas.

Las orientaciones democráticas de algunas fracciones de la burguesía latinoamericana no pueden reducirse sin más a sus bases materiales de clase, pero un examen de su contenido, sus alcances y sus limitaciones no pueden soslayar la identificación de tales bases. En este sentido, y simplificando mucho en aras de la brevedad, es posible plantear dos situaciones que en las últimas tres décadas han generado condiciones favorables para el desarrollo de una perspectiva democrática en algunas fracciones de la burguesía de la región. Una y otra tienen como rasgo común el control del poder político por fracciones del capital que obstaculizan el desenvolvimiento del proceso de valorización de las fracciones de la burguesía marginadas del centro de la escena política, y la necesidad de recurrir al auxilio de clases y grupos dominados —el movimiento obrero, la pequeña burguesía— para aspirar e imponer las modificaciones políticas que sus intereses materiales reclaman.

Una primera situación se configura en casos de prolongadas dictaduras o gobiernos autocráticos, como los de Rafael Leónidas Trujillo (1930-61) o Joaquín Balaguer (1966-78) en la República Dominicana, o la familia Somoza (1937-79) en Nicaragua —para mencionar solamente las situaciones más notorias. El ejercicio directo y absoluto del poder del Estado por reducidas camarillas, genera una verdadera personalización del poder político y opera como plataforma de lanzamiento hacia el enriquecimiento y la acumulación, a través de la manipulación de los aparatos del Estado. El control del Estado es

en sí mismo una potencia económica que permite la conversión de grupos y fracciones que originalmente se definían por rasgos político-ideológicos —fracciones de la burocracia, grupos profesionales, séquitos armados— en fracciones y clases definidas estructuralmente por su control de medios de producción y cambio (cf. por ejemplo Vilas, 1980b). Aparecen de esta manera contradicciones de complejidad y profundidad variables entre las fracciones que acumulan gracias a, o a partir de, la manipulación del poder y los aparatos del Estado, y las que tienen en el mercado su ámbito único o predominante de acumulación. El *modus operandi* de los detentadores del poder político aparece frente a las otras fracciones de la burguesía violando sistemáticamente las reglas del juego —vale decir la racionalidad del mercado— y cuestionando su propia capacidad de expresión económica: particularismo, privilegios, apropiación privada de fondos públicos, utilización no reproductiva de fondos de inversión, etcétera.

Una segunda situación tiene lugar en niveles más avanzados de desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo, cuando las líneas fundamentales del proceso de acumulación se encuentran impulsadas por los sectores más concentrados y desnacionalizados del capital monopolista. Sea a través de formas terroristas de Estado o fascistoides como las asumidas en Argentina, Chile, Uruguay entre otras, sea a través de esquemas más sutiles o sofisticados, la hegemonía del capital monopolista transnacional implica un redimensionamiento del mercado local y el desplazamiento del poder político en detrimento de los grupos de la burguesía interna de tipo competitivo, con unidades de producción de menor envergadura y menores niveles de integración financiera, y orientadas fundamentalmente hacia mercados donde participan de manera gravitante sectores de ingresos medios y asalariados. La política impulsada por el Estado tiene ahora como referente y como horizonte los intereses de los sectores más concentrados del capitalismo local y de las firmas transnacionales, acelerando el desplazamiento de aquellas fracciones más ligadas al consumo de masas. El movimiento de la estructura, que apunta por sus propias tendencias a un creciente marginamiento de las fracciones menores del capital local, se ve acelerado por las políticas implementadas desde el Estado. En estas condiciones, y en medio de los efectos conocidos generados por el nuevo modelo

—recesión productiva, inflación muy alta y sostenida, caída del salario real y del empleo, fortísimo y creciente endeudamiento externo, etc. (véase p. ej. Ferrer 1981)— suelen definirse en el seno de los grupos subordinados de la burguesía local tendencias hacia una aproximación al movimiento obrero y la pequeña burguesía, sobre la base de un programa de reactivación económica, elevación y redistribución de los ingresos reales, y reconstitución del espacio democrático-representativo: convocatoria electoral, restablecimiento de la arena parlamentaria, vigencia de las libertades públicas, relativa autonomía sindical, y otros.

Los factores estructurales constituyen una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo de orientaciones democráticas en algunas fracciones del capital. Se requiere asimismo la presencia de condiciones político-ideológicas que se articulan con aquéllas pero que tienen una especificidad propia y una autonomía relativa. Básicamente estas condiciones se refieren al grado de activación política de las clases populares —a sus niveles y modalidades de organización y lucha, al grado de percepción de sus intereses de clase, al nivel de desarrollo de métodos y formas propias de reivindicación social y de enfrentamiento político, entre otras. En conjunto, estos elementos constituyen las *coyunturas políticas* a partir de las cuales puede emerger algún tipo de fórmula democrática. Este resultado no es empero ineluctable: las orientaciones democráticas no hacen a la esencia de ciertas fracciones del capital, ni la democracia burguesa constituye el régimen político típico o propio de una determinada etapa del desarrollo capitalista, central o periférico.<sup>12</sup>

En general las orientaciones democrático-burguesas han tenido mayor auge en situaciones de debilidad política de la clase obrera y demás sectores populares, mientras que en las coyunturas de auge de las luchas populares las fracciones subordinadas del capital han tendido a formar una sola fila detrás de su fracción hegemónica; en estos casos la contradicción fundamental opaca a las contradicciones secundarias en el seno de la clase. Ello así porque la democratización del poder político es, en la práctica política de estas fracciones menores de la burguesía local, un requisito para la valorización de su propio

capital, pero no la posibilidad de un cuestionamiento de la dominación capitalista. De ahí también que el proyecto democrático de estos sectores sea fundamentalmente, aunque no exclusivamente, *superestructural*. Se trata de democratizar los aparatos y prácticas político-institucionales, antes que la dimensión material de la sociedad sobre la cual aquéllos se desenvuelven. En último análisis, para estas fracciones democratización es prácticamente sinónimo de cambio de gobierno por algún tipo de práctica electoral —independientemente de las condiciones materiales que efectivamente enmarquen, y eventualmente restrinjan, esa práctica electoral. Esto no excluye que en ciertas coyunturas el proyecto demoburgués admita elementos de democratización material, pero ello ha sido generalmente el resultado de la capacidad de presión, organización y lucha de las clases populares, antes que de la flexibilidad de dicho proyecto o de la sagacidad de la clase que lo impulsa.

La inestabilidad y el corto vuelo de estas iniciativas democráticas de sectores de la burguesía latinoamericana son conocidas. La progresiva marginación económica de sus portadores como resultado de las fuerzas que conducen el movimiento de la estructura, su subordinación ante un Estado que de más en más expresa esa marginación y la reproduce, su debilidad ante los grupos hegemónicos del nuevo esquema de dominación y acumulación, impiden a estos elementos menores de la burguesía sustituir, por la vía de los hechos directos, la primacía política de aquéllos y su control del Estado —su proyecto tiene escaso arraigo en los aparatos represivos del Estado como para permitirles intentar un golpe militar; su debilidad política y el consiguiente temor a un desborde popular inhiben cualquier imaginación de una convocatoria a la insurrección popular. La apelación a prácticas electorales les permite entonces aspirar a un apoyo de masas, disimulado su contenido de clase tras la fachada universal del rótulo ciudadano —una manera de expresarse la naturaleza de clase de la convocatoria política—, dentro de canales institucionales bien definidos, con el cual vencer la resistencia de las fracciones hegemónicas —proverbalmente minoritarias en el terreno electoral—, y con garantías de que el desborde popular no se producirá, o podrá ser manejado institucionalmente. Sin embargo, el reaseguro de este esquema sigue reposando en un aparato represivo cuya

<sup>12</sup> Cf. un desarrollo de esto en Therborn (1977, 1979).



adhesión a los grupos hegemónicos más fuertes plantea la necesidad de un delicado proceso de democratización del Estado y, por otra parte, el espacio representativo deviene rápidamente el ámbito de expresión de las demandas y reivindicaciones populares que, si no siempre plantean un asalto al poder, implican en su reivindicacionismo militante la generación de obstáculos al proceso global de valorización del capital, y no sólo al segmento controlado por las fracciones más ligadas al capital monopolista y al exterior. La incorporación popular al sistema político deja de ser visualizada en este punto como una condición para el desenvolvimiento de la acumulación, para transformarse en sinónimo de caos. La diferencia entre *participación* y *subversión* no suele ser mayor que algunos puntos de diferencia en la tasa de ganancia. La eliminación —política, y en el límite, física— de la actividad popular aparece ahora como la condición para el avance del proceso de acumulación.

Para las clases populares, en cambio, la democratización se plantea como una tarea de un movimiento más complejo, profundo y prolongado, que tiene como horizonte la eliminación de toda forma de explotación y opresión.

Aunque con menor fuerza que en el capitalismo desarrollado, el movimiento obrero fue, en América Latina, desde sus orígenes, uno de los participantes más decisivos del campo democrático —junto a la pequeña burguesía—, aunque raramente la fuerza conductora (cf. p. ej. Godio 1980). Sin embargo, el enfoque popular de la cuestión democrática estuvo hasta recientemente centrado fundamentalmente en el espacio urbano y las reivindicaciones democráticas fueron articuladas más como una modalidad de incorporación a un Estado y a una economía que ya estaban diseñados —por la tanto, con un carácter de clase dado—, que como el intento de impulsar un diseño obrero-popular de uno y otra. La cuestión democrática tendió a ser caracterizada implícitamente como atributo de una clase dada, o de una fracción de clase, proyecto inconcluso que el sujeto portador sólo podría culminar con el apoyo obrero y popular. Las tareas democráticas fueron visualizadas en consecuencia como parte o componente de una etapa cuyo objetivo consistía en sentar las condiciones a partir de las cuales las clases populares podrían plantearse, finalmente, la cuestión del poder —desarrollo de las fuerzas productivas, revolución democrático-burguesa, etc. Pero una etapa en la cual la con-

ducción política del proceso era ajena a las clases trabajadoras y a sus organizaciones políticas.

O bien, la caracterización de las tareas democráticas como tareas *reformistas* cuando no *burguesas*, condujo a repudiarlas como extrañas al proyecto *revolucionario* y a la hegemonía popular, contribuyendo al aislamiento político de las organizaciones revolucionarias no sólo respecto de las fracciones democráticas del empresariado local —cuando las hubo— sino, lo que es más grave, del campesinado y la pequeña burguesía.

En uno y otro caso el reduccionismo de clase lleva a negar la constitución del terreno democrático como espacio popular, como resultado de la adjudicación *a priori* de un carácter determinista de clase a proyectos y regímenes dados, a través de un sistema de ecuaciones rígidas que aplastan la riqueza de la coyuntura: proletariado = socialismo; pequeña burguesía o burguesía = democracia; burguesía monopólica = fascismo.

El Caribe ofrece dos ejemplos opuestos de la gravitación que tiene, en el desarrollo ulterior de los procesos revolucionarios, la capacidad de una organización revolucionaria para conducir, desde la óptica de las clases populares, la cuestión democrática. En Cuba, el planteamiento de la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista y la dominación imperialista como una dimensión de la lucha obrera y popular por su emancipación social, garantizó la autonomía de clase del proletariado y demás sectores populares en el espacio democrático-nacional y obligó a las fracciones antidictatoriales de la burguesía cubana a resignarse frente a la conducción política del proceso por el Movimiento Revolucionario 26 de Julio.<sup>14</sup> En República Dominicana, la temprana derrota militar del Movimiento de Liberación Dominicana —que conjugaba el horizonte socialista de su lucha guerrillera con un programa inmediato de carácter democrático-revolucionario de enfrentamiento a la dictadura de Trujillo<sup>15</sup>— y la eliminación del dic-

<sup>14</sup> Cf. el programa del asalto al cuartel Moncada en Castro (1981).

<sup>15</sup> El programa del MLD contemplaba medidas como la convocatoria a una Asamblea Constituyente, derogación de la "legislación antidemocrática de la tiranía", reforma agraria "que garantice al campesino la posesión de la tierra", libre organización de la clase obrera y del campesinado, alfabetización masiva, seguridad social, desarrollo y protección de la industria nacional, estatización de todas las propiedades de la dictadura, reforma tributaria, fomento del mercado interno y del poder adquisitivo de las masas, salud y vivienda para el

tador en mayo 1961 por una conjura del gobierno norteamericano y fracciones antitrujillistas de la burguesía dominicana, y posteriormente el aplastamiento de la insurrección de abril 1965 por la infantería de marina norteamericana, crearon condiciones para que la cuestión democrática quedara en manos de la burguesía, mientras el movimiento revolucionario se planteaba como tarea inmediata —en una sociedad atrasada como pocas— la revolución proletaria, ahondando su aislamiento de las masas campesinas, la pequeña burguesía e, incluso, el nivel de conciencia real del exiguo proletariado —en suma, la enorme mayoría de la población del país.

El advenimiento de dictaduras fascistas y del terrorismo de Estado en varias formaciones de la región, la evidencia de las limitaciones de las perspectivas democráticas y reformistas de los grupos subordinados de la burguesía, la necesidad de ampliar las bases sociales de los movimientos revolucionarios, el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, crearon la posibilidad de que la cuestión democrática se fuera incorporando como una dimensión integral de las luchas populares. Se trata, desde esta perspectiva, de crear un sistema político que, al par que impulse las transformaciones socioeconómicas, abra todos los ámbitos, instancias y niveles de la sociedad —la política, la economía, la defensa, la cultura...— a la amplia participación del pueblo.

...no se puede realizar la revolución socialista sino con las banderas democráticas antiimperialistas desplegadas (...) ni puede realizarse hasta el fondo la revolución democrática antiimperialista ni se pueden defender sus conquistas si no se va al socialismo. Dicho de otra manera: no se puede ir al socialismo sino por la vía de la revolución democrática-antiimperialista, pero tampoco se puede consumir la revolución democrática-antiimperialista sin ir hasta el socialismo. De manera que entre ambas hay un nexo esencial indisoluble, son facetas de *una sola revolución y no dos revoluciones*.<sup>17</sup>

Nosotros sentimos que debemos construir en nuestro país una nueva democracia de base, orientada hacia el pueblo, desde el nivel local hasta el nivel nacional. Vemos la necesidad de

pueblo, respeto y convivencia pacífica especialmente con los demás países de Centroamérica y el Caribe. Cf. Movimiento de Liberación Dominicana (1959).

<sup>17</sup> Cf. Handal (1982); los subrayados son míos.

construir organizaciones populares nacionales, basadas en el pueblo, importantes para la vida y los problemas reales del pueblo, para asegurar su participación diaria en esta democracia revolucionaria (Bishop 1982: 37).<sup>17</sup>

## 6. El carácter de la revolución

Los procesos revolucionarios del Tercer Mundo engloban y articulan, en consecuencia, cuatro tipo de cuestiones: la *cuestión nacional*, la *cuestión del desarrollo*, la *cuestión democrática* y la *cuestión de clase*, esta última cortando con su contradicción fundamental a las otras tres. El carácter de cada proceso es una resultante del modo en que estas cuatro cuestiones se articulan en el marco global de la lucha revolucionaria.

La discusión en torno al carácter de clase de las revoluciones de liberación nacional surge del hecho que ellas son, *en cierta medida y durante cierto trayecto*, procesos policlasistas, cuando las tareas nacional-democráticas y del desarrollo convocan a clases que se ubican en campos diferentes y opuestos respecto de la contradicción fundamental, e involucran reivindicaciones y objetivos de desigual alcance y profundidad.

El modo de conjugación de aquellas cuestiones explica la *primacía de lo político* en los movimientos de liberación y en la constitución del campo nacional-popular, a que se ha hecho referencia anteriormente. No niegan su encuadramiento final en una matriz de posibilidades objetivas generada por las fuerzas materiales y el movimiento de la estructura, pero acentúan su eficacia propia y su autonomía relativa.

<sup>17</sup> El programa político del Movimiento New Jewel (1976) plantea: "1. Participación popular, política popular, democracia popular; 2) Cooperativas populares para el desarrollo del pueblo; 3) Atención a la salud de acuerdo a las necesidades; 4) Pleno desarrollo de los talentos, las aptitudes y la cultura del pueblo; 5) Pleno control popular de los recursos naturales; 6) Empleo para todos; 7) Decente *standard* de vida para todas las familias; 8) Libertad de expresión y la religión; 9) Liberación de todos los pueblos oprimidos del mundo; 10) Un pueblo unido... una sociedad nueva... una sociedad justa". Cf. Bishop (1982).

En primer lugar, porque si el campo nacional-popular se encuentra cruzado por la contradicción de clase, sólo la conducción política del proceso global puede mantener la unidad de los contrarios hasta donde sea necesario, o posible, para el movimiento revolucionario. En segundo lugar, porque la construcción del campo nacional-popular en torno a la conducción de la clase obrera no puede tener lugar sino como efecto y acción de una *organización política* de las clases populares que exprese, en su estructura, estrategia y formas de lucha, dicha conducción. Sobre todo en etapas en que el peso material de la clase obrera en la estructura social aparece relativamente diluido en las masas del campesinado, el semiproletariado urbano y rural, el artesanado, los sin trabajo, etcétera.

El análisis apresurado o directamente sectario de los movimientos de liberación en América Latina ha llevado muchas veces a descalificar —sobre todo cuando sus posibilidades de triunfo parecen reducidas o lejanas— en nombre de una hipotética pureza teórica sólo compatible con el aislamiento político y la inercia operativa, a las organizaciones que impulsan las luchas de liberación, tildándolas de pequeñoburguesas y por ende reformistas, a causa de la presencia en su seno de elementos pertenecientes a estos sectores *intermedios*, y del hecho de que tales organizaciones levanten e impulsen, junto a las demandas del proletariado, las reivindicaciones y reclamos de amplios sectores del pueblo.

Un ángulo tan estrecho y esquemático no deja ver que esta configuración de los movimientos revolucionarios de liberación no sólo expresa y articula, como organización política, el perfil concreto de contradicciones que dinamiza a la formación social, sino que al mismo tiempo constituye el elemento que, a partir de las demandas efectivas, de las insatisfacciones y problemas concretos, y de la intelección dialéctica de los intereses obreros y populares, de la difusión de la teoría revolucionaria, de la comprensión y propagandización de las luchas obreras y populares en el campo internacional, impulsa y consolida el movimiento de progresiva constitución político-ideológica de la clase obrera, su creciente diferenciación subjetiva respecto de los otros componentes del campo nacional-popular, y por lo tanto acelera la convergencia entre su situación en la materialidad de la estructura productiva —la "clase en sí"— y su posición en el terreno de la lucha política —la "clase para sí".

La cuestión se refiere, en definitiva, al complejo problema de la *representación*. Frecuentemente se apunta, para determinar la representación de una clase o fracción por ciertos grupos, individuos, organizaciones o aparatos, a la identidad sociológica del representante. Si la situación de clase de los miembros (o dirigentes) de la organización es similar a la de tal o cual sector de la población, hay representación; si la situación es diferente, no la hay. En consecuencia, si la mayoría de los miembros de un partido son obreros, estamos en presencia de un partido obrero; si son minoría, no. Si buena parte de los miembros de la conducción de una organización se reclutan en la pequeña burguesía, tendremos una organización pequeñoburguesa. Si los oficiales de las Fuerzas Armadas pertenecen por su origen sociofamiliar a la *clase media*, los golpes que protagonicen serán golpes militares de clase media.<sup>18</sup> Y así sucesivamente. De acuerdo a este criterio *pretendidamente* clasista, la relación de representación sería una relación de *identidad social*.

Se trata por supuesto de una concepción profundamente errónea. La presencia masiva de obreros y artesanos en las barricadas de París de 1789 no controvierte el carácter burgués de la Revolución Francesa, ni el activo papel desempeñado por las masas pequeñoburguesas altera el carácter de clase del fascismo europeo. Y tampoco basta para salvar estas realidades, y muchas otras similares, señalar la "falsa conciencia" de las masas o la "demagogia" de ciertos dirigentes.

La representación es una relación *política y no sociológica*. El carácter de clase de una organización no deriva de la situación social de su dirigencia, sino de su posición en la lucha de clases y, por lo tanto, del proyecto de clase que asume, expresa y promueve. Lo que convierte a una organización, grupo, individuo, aparato, en representante de una determinada clase o fracción de clase, no es necesariamente la pertenencia a esa clase o fracción. "Pueden estar a un mundo de distancia" de esa clase, "por su cultura y su situación individual". Lo que los hace representantes de la clase "es que no van más allá, en cuanto a mentalidad", de donde va la clase "en sistema de vida; que, por lo tanto, se ven teóricamente impulsados a los

<sup>18</sup> Según el viejo ensayo de Nun (1967). Cf. asimismo la crítica de Poulantzas (1977) al libro de Miliband (1970) donde se sostiene un enfoque similar.



mismos problemas y a las mismas soluciones a que impulsan (a la clase), prácticamente, el interés material y la situación social" (Marx 1852).

Lo que caracteriza al representante es la *función* que desarrolla con relación a la clase dada. En consecuencia la representación de una clase, alianza o proyecto puede estar a cargo de organizaciones o de aparatos de Estado cuyo control o manejo puede responder a clases o fracciones distintas de aquellas cuyos intereses se impulsan en un proyecto dado. La relación política puede encerrar un desfase sociológico que no desvirtúa necesariamente el contenido de aquella. Gramsci (1977b) llamó la atención sobre este punto, al señalar la formación de sectores intelectuales que en la realidad concreta se lleva a cabo a través de procesos históricos complejos, constituyéndose grupos o fracciones que "producen" intelectuales para las clases fundamentales de la sociedad capitalista: la pequeña y mediana burguesía urbana, la pequeña burguesía agraria.

La cuestión es particularmente importante en los movimientos de liberación nacional. En ellos

muchas veces el sujeto histórico que lleva a cabo la lucha no coincide con el contenido de la lucha ni con los métodos utilizados, mezclándose así varios sujetos, diferentes aspiraciones y combinándose diversos métodos de lucha (López *et al.*, 1979, 13).

Es decir, la conducción del conjunto del movimiento de liberación en la etapa que apunta a la toma del poder político, por la contradicción nacional-democrática, puede involucrar y de hecho involucra a fuerzas y grupos distintos de aquellos que impulsan desde la perspectiva obrera el campo popular y el proyecto de transformaciones sociales de mayor alcance.

El tema se relaciona directamente con la cuestión del carácter de la revolución en sociedades atrasadas. La posibilidad de una revolución socialista en formaciones con fuertes componentes precapitalistas y un patrón de desarrollo diferente al de Europa Occidental —especialmente al de Inglaterra— fue planteado por primera vez por algunos populistas rusos, con motivo de la traducción del primer volumen de *El Capital*. Ellos sostuvieron la especificidad de la vía de desarrollo de la revolución en su país y la posibilidad de pasar directamente de

una sociedad semifeudal al socialismo sobre la base de la pervivencia de la comuna rural, sin atravesar por los rigores y las contradicciones del capitalismo. En esa época la cuestión tuvo un alcance fundamentalmente teórico: los *narodniki* no eran una alternativa de poder y su preocupación principal era conocer la opinión de Marx acerca de la validez para Rusia de su análisis del capitalismo —particularmente la cuestión del carácter necesario o históricamente contingente de la expropiación del productor directo. Como es sabido, Marx apoyó con algunos matices la tesis populista, mientras que Engels fue más bien reticente (Marx y Engels 1980).<sup>19</sup>

La discusión en torno a las tesis populistas, y en particular las reflexiones de Marx, sirvieron entre otras cosas para demostrar la especificidad del desarrollo del capitalismo en sociedades atrasadas, y la posibilidad y necesidad del socialismo para ponerle fin. El hecho de que las respuestas ofrecidas por los *narodniki* no hayan sido siempre acertadas no debería impedir reconocer que en general las preguntas que se formularon fueron correctas, ni la comprobación de que muchas de esas preguntas sean retomadas por los movimientos revolucionarios de América Latina y el Tercer Mundo hasta para tildarlos de *populismo*, *utopismo* o *romanticismo*.<sup>20</sup>

En el último tercio de siglo las revoluciones sociales han tenido lugar en Asia, América Latina, África: los eslabones débiles de la cadena imperialista; por eso mismo, se han expresado por lo menos durante cierto trayecto, como revoluciones de liberación nacional. Estas experiencias demuestran que la revolución socialista es posible en formaciones atrasadas y que

existen excelentes perspectivas para poder pasar prácticamente del tribalismo al socialismo, sin tener que atravesar por ciertas

<sup>19</sup> La cuestión volvió a plantearse a fines del siglo y principios del actual, coincidiendo con cierto ascenso político del populismo y con el desarrollo en su seno de tendencias liberales. Pero entonces Lenin (1974a y b) demostró el carácter abstracto del debate: para esa época la comuna rural estaba totalmente degradada y el capitalismo se había consolidado como modo de producción dominante en Rusia. La cuestión del "atajo" carecía ya, por lo tanto, de interés político práctico.

<sup>20</sup> Es, por ejemplo, el caso de Godío (1983, 91 y ss.), para quien tanto el Movimiento 26 de Julio cubano como el FSLN "pueden ser incluidos por sus características en la categoría de 'populismos'".

etapas que tuvieron que recorrer otras regiones del mundo (F. Castro 1977).

Más aún, plantea la necesidad de la revolución para superar las deformaciones estructurales, la dominación externa, la explotación social, la opresión política en que el capitalismo se expresa y a las que reproduce.

Sin embargo la tendencia a caracterizar el capitalismo como una conjugación omnivalente de industrialización, salarización y urbanización, llevó a menudo, primero, a negar el carácter capitalista de las formaciones sociales donde éste asumía rasgos diferentes, y luego a negar la posibilidad o la viabilidad estructurales a una revolución socialista. En vez de ver el socialismo como el camino para superar el atraso, se miraba al atraso como un obstáculo al socialismo.

Si "Ningún orden social es nunca destruido antes que todas las fuerzas productivas que están implícitas en él se han desarrollado, y nuevas y superiores relaciones de producción nunca reemplazan a las antiguas antes que hayan madurado, en el seno de la vieja sociedad, las condiciones materiales de su existencia" (Marx 1859); si en consecuencia "La humanidad inevitablemente sólo se plantea las tareas que es capaz de resolver" y éstas "sólo surgen como problema cuando las condiciones materiales para su solución están ya presentes o en vías de gestación" (ibid.), el socialismo sólo podría ser viable a partir de una sociedad capitalista, en el sentido de industrializada, salarizada y urbanizada. El texto de Marx fue así interpretado, no como un desafío a la praxis creativa y al coraje intelectual y como herramienta de búsqueda en la matriz de contradicciones de las sociedades de América Latina, de los elementos que impulsarían el avance de las luchas sociales y del proyecto revolucionario, sino frecuentemente como una convocatoria a impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas materiales para que, entonces sí, en una sociedad donde los campesinos y los artesanos estén salarizados, la sociedad urbanizada y la economía industrializada, el socialismo sea posible.

Matrices más o menos esta interpretación constituyó el fundamento teórico de la estrategia de algunas organizaciones políticas del continente, y pervive todavía hoy en las concepciones de algunos académicos. De lo que se trataba era de impulsar la *revolución democrático-burguesa*. Aparte de la erró-

nea caracterización del capitalismo latinoamericano y de la manera poco feliz en que la revolución democrático-burguesa aparecía conceptualizada, parece claro que no hay revolución democrático-burguesa sin burguesía interesada en ella. El recelo de la burguesía ante las reivindicaciones y movilizaciones populares trató de ser remediado supeditando unas y otras al nivel de conciencia unitaria de la burguesía y al desenvolvimiento de sus contradicciones con "el feudalismo". La necesidad histórica de ciertas tareas se confundió con la necesidad histórica de ciertos agentes en el marco de las revoluciones burguesas de Europa y justificó en los hechos la renuncia a la conducción política del proceso y su abdicación en aras de alguna fracción de la burguesía. Por temor a que las fuerzas populares hicieran "de más" y espantaran a sus aliados, se arriesgó a que éstos hicieran, como en realidad hicieron, "de menos". Hubo sin dudas burguesía, pero no revolución ni, generalmente, tampoco democracia. El materialismo fue sustituido, como método de análisis, por el objetivismo. Correlativamente, cualquier planteo político que fuera más allá de un horizonte tan reducido y que optara por estrategias y métodos de lucha diferentes, fue descalificado por *aventurero*, *provocador*, *divisionista* y, sobre todo, *pequeño burgués*.

Ahora bien: es claro que si el capitalismo se manifiesta de manera diferente en América Latina y en Europa, el modo de desarrollarse el proceso revolucionario también habrá de ser distinto aunque su contenido de clase sea el mismo. El atraso productivo, la diferenciación capitalista menos marcada de la estructura de clases, la dominación imperialista, imponen tareas, métodos, estrategias y alianzas diferentes y no siempre contempladas en la bibliografía clásica. Pero es precisamente por esto que la práctica revolucionaria enriquece a la teoría. Y del mismo modo que el capitalismo se manifiesta de manera diferente en Suecia y en Honduras, así también la construcción del socialismo es distinta en Checoslovaquia o la República Democrática Alemana, que en Mozambique o Vietnam. La posibilidad objetiva de un tránsito "del tribalismo al socialismo" rodea a la transición de características que la diferencian necesariamente de otros caminos revolucionarios, por más que la meta sea la misma.

Uno de estos aspectos diferenciales—ya señalado anteriormente—consiste en el carácter cuantitativamente reducido

del proletariado por comparación con el peso demográfico predominante del campesinado y las masas pequeñoburguesas que hace sin dudas más compleja la cuestión del predominio clasista de aquél, pero no lo descarta como cuestión de principio. Aquí, el papel de la vanguardia política del proceso revolucionario es clave. No sólo para dirigir las transformaciones socioeconómicas que siguen a la toma del poder político, sino para hacerlo desde una perspectiva clasista que exprese, en el seno del pueblo, la hegemonía de la clase obrera. Y hegemonía es *conducción*: una cuestión política que tiene poco que ver, en principio, con el peso estadístico de una clase en la población. Pero también es cierto que si bien un peso cuantitativamente dominante del proletariado no es por sí mismo sinónimo de conducción política proletaria, también es cierto que la cuestión de la hegemonía obrera cuando el proletariado es pequeño numéricamente, cuenta con experiencia reducida de organización y autonomía, y además no está totalmente diferenciado de la propiedad familiar, el trabajo estacional, las actividades "por cuenta propia", etc., se carga con rasgos específicos y de gran complejidad.

En estas sociedades el espacio popular está poblado de una amplia variedad de clases, grupos y fracciones, en un espectro donde la dominación del sistema capitalista no es incompatible con una proletarianización incipiente de la fuerza de trabajo. El desarrollo de un polo capitalista en el plano de la estructura productiva plantea la posibilidad objetiva de desarrollo de su negación y superación del modo más completo y radical, sobre los hombros de las luchas obreras. Pero la articulación del proletariado con las otras clases explotadas y oprimidas por las clases dominantes del capitalismo y de los modos y formas de producción subordinados a él, plantea la necesidad de conjugar el proyecto de liberación social de más amplios alcances, con las demandas y contradicciones protagonizadas por el campesinado, el artesanado, el pequeño comercio, la juventud, los pobres del campo y de la ciudad, y con los amplios sectores de población que se identifican más por su emplazamiento en el ámbito de la reproducción que en el de la producción —amas de casa, pobladores de terrenos urbanos invadidos, movimientos de inquilinos, etc.— o por su inserción en prácticas ideológicas —estudiantado, grupos religiosos, profesionales y similares.

Abandonadas a su propia dinámica, las reivindicaciones de estas clases y fracciones tienden a diluirse en un conjunto de presiones sectoriales y segmentarizadas. El carácter subordinado de sus bases materiales respecto del polo capitalista de la formación social, y su consiguiente alejamiento del núcleo determinante de su estructura productiva, condicionan y limitan el alcance y la profundidad de sus propios proyectos. La experiencia de las luchas de liberación de los pueblos del Tercer Mundo señala de manera reiterada que incluso las formas más amplias y explosivas de la rebelión y la protesta de estas fracciones, han tendido a agotarse antes o después toda vez que su accionar no pudo ser encuadrado en organizaciones y procesos políticos de alcance nacional que expresaran, por lo menos tendencialmente, la hegemonía obrera en el campo popular.

La Revolución Mexicana entre 1910 y 1915 testimonia dramáticamente estas limitaciones. Refiriéndose a los campesinos señala al respecto Arnaldo Córdova (1979):

Su odio a los terratenientes no se tradujo en una acción programática coherente en contra del capitalismo (en realidad eran antiterratenientes, pero no anticapitalistas) y su localismo impidió que pudieran hacer frente al programa reformista de los constitucionalistas y luchar por la conquista del poder político, objetivo que, en el fondo, ni siquiera llegaron a proponer y que cuando lo tuvieron a su alcance no supieron qué hacer con él.

Los sucesores de Madero (...) adoptaron las exigencias populares para ganar a su causa a las masas y manipularlas. Éstas los siguieron al fin y a la postre, como lo demostrarían los acontecimientos de 1915, pero exactamente como masas manipuladas, integradas a un nuevo sistema político, al cual iban a aliarse, pero cuya dirección no estaría en manos de las propias masas. La razón es que esas masas no pudieron ir más allá de sus intereses inmediatos (...) ni crearon una ideología que las organizara independientemente. Su ideología y aun sus dirigentes, pese a haber tenido una legitimación y un reconocimiento a nivel nacional, no expresaron proyectos de desarrollo o de organización nacional. La proyección a ese nivel de sus posiciones o fue casual o se limitó a las demandas inmediatas. En ellos está ausente una idea precisa de un nuevo Estado: falta una concepción acabada de organización de la economía y de la sociedad; falta, en una palabra, una visión clara del futuro, y se mira más al pasado, como al mundo perdido que debe ser reconquistado. (...) Angustiadas hasta la desesperación por su situación



real y presente crearon caudillos a quienes no exigieron más o que no fueron más que la encarnación de sus necesidades inmediatas y limitadas (pp. 25, 143, 144).

La heteronomía final de estas rebeliones y del accionar político de estas clases y fracciones, esta final integración subordinada de sus protestas y reivindicaciones al proyecto político de alguna de las clases fundamentales del capitalismo, no implica sin embargo plantear la intransitividad de estas experiencias. Después de ellas las cosas difícilmente vuelven a ser lo que antes, por más que el resultado final sea distinto al pretendido por los grupos y fracciones campesinos, pequeñoburgueses y similares.

No pueden cuestionar estructuralmente la dominación capitalista, pero la negación del capitalismo por la clase obrera no puede desarrollarse al margen de las contradicciones protagonizadas por esas fracciones subordinadas del campo popular. La conducción popular del campo nacional está estrechamente ligada, de esta manera, a la unidad del campo popular en torno a la capacidad de conducción política e ideológica del mismo por la clase obrera.

Durante el trayecto que culmina con la toma del poder político, y mientras la nueva correlación de fuerzas se consolida, el proceso tiende a ser conducido por la contradicción nacional-democrática. En esta etapa la revolución asume una fisonomía *antiimperialista, democrática y popular*, donde la categoría político-ideológica de *pueblo* engloba y sintetiza al conjunto de fuerzas sociales que se suman a la lucha del lado nacional-democrático junto a las clases explotadas y oprimidas. Durante este trayecto la unidad en el seno del campo popular no suspende el desenvolvimiento de la lucha de clases en torno a la contradicción fundamental, aunque subordina su desarrollo al desarrollo de la lucha contra la dominación imperialista, el atraso económico, y la contrarrevolución.

En este trayecto la consolidación del poder popular implica la realización de tareas que no son *en sí mismas* proletarias, pero que sólo son posibles bajo la conducción obrera del campo popular. El contenido de clase de tal o cual tarea depende menos de ella misma que del carácter del proceso que la impulsa; no son las tareas las que califican al proceso, sino el proceso el que califica a las tareas. Es erróneo considerar que

existe un correlato rígido y previamente determinado de clases y tareas, en virtud del cual habría tareas en sí mismas burguesas, tareas por definición pequeñoburguesas, tareas proletarias *per se*, etc. El carácter de clase de una política no depende de sus rasgos formales o de sus aspectos técnicos sino del proyecto político en el que se inscribe, y del nivel de organización y de lucha de las clases populares que su promoción involucra. En consecuencia medidas que en otro contexto podrían ser tildadas de *reformistas*, pequeñoburguesas, etc., cambian de sentido en función del nivel alcanzado por las luchas populares y por su articulación en un proyecto revolucionario. Es este marco de posibilidad —fue necesario hacer una revolución para que tales o cuales tareas fueran posibles— el que le otorga a las medidas carácter revolucionario y, de esta forma, naturaleza de clase. Lo que en otras experiencias pueden haber sido decisiones adoptadas "desde arriba", o subordinadas a un proyecto en definitiva ajeno a las clases populares, en un contexto revolucionario son medidas de un proyecto que surge "desde abajo":

El poder que hemos conquistado lo estamos expresando a través de una democracia popular, lo que significa que aquí en este país estamos tratando y vamos a cumplir tareas que históricamente les tocó resolver a otros, porque una Reforma Agraria no es una demanda, es una exigencia, una necesidad para el mismo desarrollo del capitalismo, y aquí tampoco se dio la industrialización y a nosotros nos toca también echar adelante una serie de problemas que históricamente la burguesía fue incapaz de echar adelante, porque se dedicó solamente a robar, a explotar junto al somocismo, la fuerza de trabajo de nuestro pueblo, de la manera más brutal, sin importarle su propio desarrollo como burguesía nacional (...)

(...) el hecho de que nosotros tengamos que cumplir reivindicaciones que no cumplieron esos sectores, y que les tocaba cumplir históricamente, no significa que esta Revolución esté enmarcada en una democracia burguesa, como a veces han pretendido algunos sendomarxistas, algunos radicalistas. Aquí en Nicaragua hay una democracia popular, en donde el poder lo ejerce el sandinismo, que significa el pueblo, a través de una forma de organización superior y de su propia forma de organización de masas; aquí subsisten otros sectores que no son sandinistas, pero subsisten en tanto este poder les permita subsistir y en tanto realmente no afecten el proyecto revolucionario (H. Ortega 1981, 89 y 90).

Por otra parte, la relación entre la etapa político-democrática de la revolución (la lucha contra el Estado como ámbito privilegiado de la dominación de clase) y las transformaciones en la estructura socioeconómica, es diferente en las revoluciones burguesas y en las revoluciones populares. La burguesía fue antes clase socialmente dominante que clase políticamente dominante; revolucionó primero la sociedad para después tomar por asalto el Estado (en Inglaterra, Francia) o participar de su conducción (Alemania, Europa Central). En las revoluciones populares la relación se da al revés. Es necesario apoderarse primero del poder político, expropiar políticamente a las clases dominantes, para a partir de la constitución del Estado popular impulsar las transformaciones en la estructura material de la vieja sociedad. No son dos procesos distintos, pero sí dos dimensiones o niveles que involucran métodos y estrategias distintas y, eventualmente, alianzas diferentes.

El *sujeto social* de la lucha contra el Estado opresor no es necesariamente el mismo que el *sujeto histórico* de las transformaciones revolucionarias de la estructura material de la sociedad. El primero dice relación con el *perfil sociológico* empírico de las *tropas* revolucionarias; el segundo se refiere al *proyecto político* de clase que conduce la guerra, y que determina por lo tanto el alcance, profundidad y sentido de las transformaciones revolucionarias. La articulación entre aquél y éste señala el camino de la transición de lo popular a lo proletario, el pasaje dentro de la revolución de la hegemonía de las fuerzas populares en la lucha antiimperialista, en las tareas del desarrollo y en la construcción de un poder político de nuevo tipo, a la hegemonía obrera en el campo popular. La conducción popular-revolucionaria del proceso plantea las condiciones para que esta transformación tenga lugar y señala, una vez más, la relevancia estratégica que en este sentido desempeña la vanguardia.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> O. Núñez (1982b) recurre a la figura del *alluaca*, que cuida la herencia hasta que el heredero pueda ejercer sus derechos por sí mismo. La Vanguardia "administraría" los intereses de clase del proletariado hasta que éste, superado su atraso ideológico, su desorganización, su "mezcla" con elementos no proletarizados de la fuerza de trabajo, etc., propios de los momentos iniciales de la construcción revolucionaria, pueda asumir por sí mismo la conducción del proceso. La imagen está presente también en las declaraciones del Comandante Henry Ruiz recogidas en *El Nuevo Diario* (Managua), 21 de mar-

No se trata de algo inédito o imaginario.<sup>22</sup> Pero también parece claro que esta transformación obedece, en sus pasos concretos, a las condiciones específicas, particulares, con que cada proceso revolucionario se inscribe en el marco general de las luchas de liberación nacional y social. Y que se trata de un proceso abierto al desarrollo de sus fuerzas internas y a las tensiones y contradicciones que emanan del entorno internacional, y que por lo tanto no tiene nada de mecánico, de fácil, de breve, o de ineluctable.

## 7. La Revolución Popular Sandinista

Nicaragua se inscribe con rasgos propios en estas consideraciones generales.

Aunque formalmente independiente desde principios del siglo XIX, el país estuvo sometido a sucesivas agresiones militares por parte de Estados Unidos, y el Estado alcanzó control medianamente efectivo de todo su territorio recién a fines del siglo, cuando el gobierno liberal del presidente Zelaya recuperó la inmensa Mosquitia usurpada hasta entonces por Inglaterra y convertida por ésta en una "monarquía independiente".

En 1983. La situación tiene una particular relevancia en las revoluciones de África y Asia. Refiriéndose al caso de Angola señala un autor: "Sin dudas, el MPLA era al principio el trabajo de intelectuales pequeñoburgueses, la mayoría de los cuales eran mestizos kimbundu y asimilados de Luanda —nada peculiar de esta organización al respecto. En efecto, además de su carácter pequeño burgués, tanto UNITA como el FNLA tenían una base regional y racial. Más aún, todos los movimientos previos a ellos estaban organizados sobre las mismas líneas". "Lo importante es que el MPLA trascendió las barreras tanto raciales como regionales." "Es necesario distinguir la situación de clase social y la pigmentación de la piel o la región de origen, de la posición política en la lucha por la liberación nacional. Hacer algo distinto es asumir que el color o la etnia o el origen social determinan necesariamente la posición política. Nada puede ser más falaz que esto. En efecto, tanto el FNLA como UNITA son conducidas por gente de orígenes modestos, todos ellos africanos 'de pura sangre' como sus seguidores. Sin embargo su posición política es reaccionaria antipopular, para decir lo menos." Cf. Makidi-Ku-Ntima (1983).

<sup>22</sup> Cf. Rodríguez (1979); Piñeiro Losada (1982); también algunas experiencias concretas en Rodríguez García (1979); Valdez Paz (1980); Houtart y Le-merciniér (1981).

Las invasiones y ocupaciones militares de Estados Unidos, inauguradas por la aventura geopolítica de William Walker en la década de 1850 se sucedieron hasta la década de 1930, cuando las tropas norteamericanas fueron derrotadas por el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional conducido por Augusto Sandino y debieron abandonar el país. Para entonces empero los Estados Unidos habían reestructurado el Estado nicaragüense, creado la Guardia Nacional y colocado en su tope a Anastasio Somoza García, respaldándolo cuando éste tomó por asalto el gobierno y, luego de asesinar a Sandino y reprimir salvajemente a sus bases sociales, inició una experiencia de dictadura familiar que se prolongaría hasta 1979.<sup>23</sup>

Durante todo este extendido lapso los Estados Unidos fueron el reaseguro de la dictadura. Instalada en el poder con el auxilio foráneo, la familia Somoza contó siempre con el apoyo político y diplomático de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y sectores del Congreso, y con la suficiente asistencia económica y financiera de las agencias de desarrollo norteamericanas y de los organismos financieros internacionales. El imperialismo tuvo en Nicaragua más presencia político-militar que económica, y dentro de lo económico, más en la esfera de la circulación y la realización que en la de la producción. Nicaragua no revistió nunca la fisonomía de sociedad de enclave tan frecuente en la región, y su principal importancia para Estados Unidos fue siempre su posición geográfica —eventual sede de un nuevo canal interoceánico— y la fidelidad política de la dictadura.<sup>24</sup>

El atraso general del país actuó en este sentido. El desarrollo capitalista de Nicaragua fue particularmente tardío y se circunscribió básicamente a ciertos sectores de la agroexportación y a la región occidental del país. En general, fue un capitalismo más avanzado en el ámbito de la comercialización y el financiamiento que en el área de la producción. Por ausencia o gravitación exigua de un sector de enclave, la mayor parte de la producción se mantuvo en manos de productores locales, pero subordinados al capital comercial y financiero y al procesamiento controlados por el capital extranjero y la gran bur-

<sup>23</sup> Cf. un panorama histórico en Diederich (1981).

<sup>24</sup> Retratada en la gruesa ironía del entonces presidente F. D. Roosevelt: "Somoza is a son of a bitch, but he's *our* son of a bitch!..."

guesía local. El proceso de proletarización de la fuerza de trabajo fue lento, y sometido a una fuerte estacionalidad. Las desigualdades espaciales e intersectoriales, la falta de integración física de partes importantes del territorio por ausencia de vías de acceso, comunicaciones, etc., acentuaron la desarticulación general de la economía nicaragüense. La fragilidad y el atraso del aparato productivo se veían agravadas por una muy amplia apertura del conjunto de la economía respecto del sistema capitalista internacional.

El papel decisivo del imperialismo en la constitución de la dictadura y en su desenvolvimiento ulterior otorgó un fuerte contenido antiimperialista a las luchas populares, sin parangón en otros países de América Latina. Al mismo tiempo la complicidad de los grupos dominantes locales con la dominación externa y con la dictadura, y las buenas relaciones que ésta mantuvo con ellos hasta la década de 1970, dotaron de un componente clasista a las luchas contra la dictadura.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional pudo así actuar sobre un terreno fértil para su práctica revolucionaria. Para amplios sectores del pueblo, el FSLN era la continuación, con métodos, estrategias y enfoque nuevos, de una guerra contra la agresión imperialista y la opresión dictatorial que databa por lo menos desde principios de siglo.<sup>25</sup> La conciencia nacional del pueblo nicaragüense estuvo siempre nutrida de componentes antiimperialistas y antidictatoriales, surgidos de su propia historia y recuperados por sus intelectuales más representativos y por sus dirigentes más auténticos.<sup>26</sup> Las denuncias antiimperialistas de la poesía y la prosa de Rubén Darío se continuaron en la gesta de Zeledón; el nacionalismo popular se conjugó en la lucha de Augusto Sandino con un claro antiimperialismo. Y, en todo momento, la necesidad y la legitimidad de la lucha armada: "La soberanía de un pueblo no se discute; se defiende con las armas en la mano" (Sandino, *apud* Ramírez 1981).

El FSLN recogió estos elementos de la conciencia popular

<sup>25</sup> Cf. vívidos testimonios de la fuerte presencia de la lucha del general Sandino en la memoria política de los campesinos del norte de Nicaragua, en Cabezas (1982); Morales (1981).

<sup>26</sup> Cf. la recopilación antológica efectuada recientemente por el Instituto de Estudio del Sandinismo (IES 1982a).



y asentó en ellos su estrategia revolucionaria.<sup>27</sup> El corte que estableció con las prácticas políticas tradicionales —incluidas las de las organizaciones de izquierda existentes— pudo ser presentado al mismo tiempo como la continuación de una lucha popular que enraizaba en lo más profundo de la cultura popular nicaragüense. Pero, por eso mismo, una continuidad que reposaba sobre los hombros y en los fusiles de las clases explotadas.

El capítulo siguiente trata con cierto detenimiento los aspectos principales del capitalismo nicaragüense que han sido mencionados en este apartado; ellos contribuyeron de manera decisiva a la configuración de las tareas de la revolución en la etapa actual y, de hecho, a su caracterización: *popular, democrática, antiimperialista, apoyada en una economía mixta*.

<sup>27</sup> "En la educación política de nuestra militancia y de nuestro pueblo, tenemos que utilizar en una medida todavía mayor que en el pasado, los textos revolucionarios representativos de nuestro pueblo, de nuestra tradición histórica. (...) No contribuye a fortalecer la imagen nacional del movimiento la repetición excesiva de lemas revolucionarios procedentes del exterior, cuando en nuestra tradición se dan expresiones con iguales significaciones que pueden ser utilizadas como lemas. (...) los revolucionarios puede decirse que todavía no se han decidido por encontrar la médula patriótica y popular en la obra y vida de Darío. Desde los tiempos de la lucha contra Walker hasta los años de la lucha contra la tiranía somocista, aparecieron una serie de textos que requieren ser seleccionados y editados en un solo volumen, cuya difusión ayudaría a sostener la confianza en la capacidad de sostener la lucha por la liberación nacional y social" (Fonseca 1981, pág. 315).

## CAPÍTULO II

### Un capitalismo dominado y desigualmente desarrollado

#### 1. Panorama general <sup>1</sup>

Igual que los otros países de América Central, Nicaragua se incorporó a la división internacional del trabajo como economía primario exportadora. Sin embargo las exportaciones fueron de poca relevancia hasta que en el último tercio del siglo XIX comenzó el período cafetalero. Durante la etapa colonial la producción de añil había constituido la principal fuente de ingresos externos; ella se combinaba con la ganadería extensiva y cultivos de subsistencia en una estructura productiva sumamente atrasada. La baja densidad de población y la amplia disponibilidad de tierras aptas generaron un patrón de vinculación directa del trabajador con la tierra, subordinado a mecanismos de extracción del excedente como la renta en trabajo (colonato) y la renta en especie (mediería, aparcería).

La producción de café comenzó más tarde que en otros países del istmo y alcanzó su mayor auge entre 1920 y 1940. La formación de una burguesía agraria está estrechamente ligada a la expansión cafetalera, aunque el café no introdujo modificaciones sustanciales en la estructura heredada del período ante-

<sup>1</sup> Cf. Belli (1975), Biderman (1983), De Franco y Hurtado de Vivil (1978), De Franco y Chamorro (1979), Martínez Heredia (1980), Matute Ruiz (s/f), O. Núñez (1980a), Weeks (1981), Wheelock (1976).

rior. El cultivo del café reprodujo los patrones latifundistas de la ganadería extensiva, que se adaptó con poca dificultad al nuevo perfil de la producción para la exportación. La búsqueda de tierras aptas para el nuevo cultivo no afectó a la oligarquía terrateniente sino a los colonos, comuneros indígenas, asentados sin título, y similares, que fueron despojados violentamente de sus posesiones y expulsados hacia zonas marginales. Para muchos terratenientes y comerciantes el café significó la oportunidad de expandir su actividad a un rubro nuevo y muy lucrativo.

El café implicó en consecuencia una reorientación y mayor diversificación de la vieja estructura productiva, más que una ruptura con ella, y el desarrollo de tensiones y contradicciones entre los nuevos grupos de productores —funcionarios, profesionales— y los más antiguos, por el control del Estado y la conducción de la sociedad. Las orientaciones innovadoras de los grupos emergentes —con todas sus limitaciones— resultaron tempranamente truncadas por la invasión norteamericana de 1909. La infantería de marina contribuyó de manera decisiva al derrocamiento del gobierno liberal de José Santos Zelaya y consolidó el retorno al poder de los grupos terratenientes y comerciantes más retrógrados y, por ello mismo, más necesitados del auxilio externo.

La conjugación de la hacienda ganadera y la hacienda cafetalera fue la base de la economía nicaragüense hasta mediados del siglo actual. En las décadas de 1920 y 1930 el café llegó a representar entre la mitad y dos tercios de todas las exportaciones del país. Pero para la Segunda Guerra Mundial su dinamismo había declinado sensiblemente, sin que pudiera ser compensado por otros rubros agropecuarios (banano, cueros, maderas, azúcar...) ni por el fuerte pero efímero auge del oro durante el desarrollo del conflicto.

El algodón habría de ocupar el vacío. Impulsado por el alza de los precios internacionales, el nuevo cultivo introdujo modificaciones profundas en la economía nacional y en la estructura de clases. En pocos años la producción algodonera creció vertiginosamente, cambiando el perfil de la producción agrícola y la composición de las exportaciones. Entre 1950 y 1965 la producción de algodón saltó de 3,300 toneladas a más de 125 mil, y su participación en el total de las exportaciones nicaragüenses pasó entre ambos años de 5 % a 45 %. Las mejores

tierras para el cultivo se encontraban sobre todo en la zona noroccidental (departamentos de Chinandega y León); la expansión algodonera implicó el desplazamiento forzado de los agricultores previamente asentados en ellas, dedicados a la producción de rubros alimenticios —granos básicos principalmente. En la medida en que el incremento de los volúmenes de producción se llevó a cabo a través de la incorporación de nuevas tierras al cultivo, más que por elevación de los rendimientos, el cultivo de algodón generó un prolongado y masivo movimiento de población empujada hacia las zonas de frontera agrícola (departamentos de Nueva Segovia en el norte, y de Zelaya y Río San Juan sobre la costa atlántica) y a los centros urbanos. Este proceso migratorio, que se extendería hasta la década de 1970, habría de ser reforzado en años posteriores por el desarrollo de la ganadería de exportación y por la producción de arroz de riego (CSUCA 1978a y b). La superficie cosechada de algodón pasó de 23.9 mil manzanas en 1950-51 a 123.6 mil en 1953-54, a 164.7 mil en 1963-64 y a 259.3 mil en 1973-74. La violenta y prolongada expropiación campesina modificó drásticamente la estructura de tenencia rural; entre 1950 y 1963 el índice de Gini de concentración de la tenencia de la tierra creció de  $G = .74$  (el más bajo de América Central) a  $G = .81$  (Seligman 1980, pág. 35, y Censo Nacional Agropecuario de 1963).

La expansión algodonera dio un fuerte impulso a las relaciones capitalistas de producción e introdujo nuevo dinamismo al conjunto de la economía, aunque obviamente sus frutos se distribuyeron muy desigualmente. El incremento del algodón en las exportaciones y en el producto agrícola fue así menos relevante que su impacto en la estructura socioeconómica del país. Aceleró el proceso de proletarianización de la fuerza de trabajo, aunque al principio el carácter estacional del empleo determinó que ese proceso fuera más fuerte en términos de desposesión campesina que en términos de salarización permanente de los trabajadores. Por su lado, los mayores requerimientos de maquinaria y equipo —tractores para la preparación de los suelos, aviones para la fumigación, cosechadoras, desmotadoras—, insumos industriales —abonos, plaguicidas, herbicidas...—, tecnología moderna, financiamiento, generaron una mayor demanda de capital; el desarrollo del capital comercial y financiero de la gran burguesía local y extranjero está

ligado íntimamente al desarrollo de la producción de algodón en gran escala. Finalmente, debe destacarse que con el algodón Nicaragua se introdujo en un rubro agrícola que, a diferencia de los exportables tradicionales (café, banano, etc.), 1) no es exclusivo de las zonas tropicales del Tercer Mundo, sino que se desarrolla también en países capitalistas avanzados; esta circunstancia obligó a los productores locales a enfatizar los criterios de eficiencia y modernización general de la actividad;<sup>2</sup> 2) definía eslabonamientos internos importantes hacia un espectro amplio de actividades industriales cuyo desarrollo local impulsó en diferente medida (aceites, agroquímicos, textiles).<sup>3</sup>

El PNB, que en 1945-49 había crecido 3.6 % promedio anual, lo hizo en 8.5 % en 1950-54 y 6.3 % promedio anual durante todo el decenio de los '50 —las cifras más altas de todo Centroamérica. La diversificación de la estructura productiva y de la composición de las exportaciones generó una diversificación de los mercados externos. Si en la segunda mitad de la década del '40 entre 70 % y 90 % de las exportaciones se dirigía hacia Estados Unidos, en el segundo quinquenio de los '50 esa cifra se había reducido a 35 %. No obstante las importaciones siguieron dependiendo fuertemente del mercado norteamericano: 56 % a fines de los '50.

En la década de 1960 el desarrollo de la ganadería para la exportación de carne habría de impulsar una diversificación mayor de la agroexportación. La superficie dedicada a este rubro se duplicó entre 1960 y 1975, expansión que provocó un nuevo desplazamiento de los pequeños productores de la región central, muchos de los cuales se habían asentado en ella después de ser expulsados por el algodón, hacia la Costa Atlántica. Entre 1960 y 1970 la participación relativa de la carne en las exportaciones se triplicó. A mediados de la década de 1970

<sup>2</sup> Los rendimientos culturales crecieron de 14 quintales por manzana a principios de los '50, a 25 qq a fines de esa misma década y a 41 qq en 1964-65, ubicándose entre los más altos del mundo para el algodón de secano.

<sup>3</sup> Señala al respecto Belli que "la planta de algodón se beneficia con el uso intensivo de insecticidas, maquinaria y fertilizantes. Además, sus productos —semilla y fibra— tienen muchos usos que estimulan el crecimiento de industrias nativas. Así, en 1952 aproximadamente el 25 % del consumo total de insecticida fue mezclado en Nicaragua; para 1955 la proporción había subido al 40 % y para 1959 era un 98 %" (Belli 1975).

el valor de la producción de carne vacuna representaba 25 % del valor de la producción total de alimentos; 90 % de las exportaciones era absorbido por Estados Unidos y casi todo el resto por Puerto Rico.

Hasta fines del decenio de 1950 y principios del siguiente el capitalismo se desarrolló, así, fundamentalmente en el campo. En la década siguiente el panorama cambió, pero sin alterar la primacía dinámica de la agroexportación (cf. cuadro II.1).

La creación del Mercado Común Centroamericano abrió la economía nicaragüense a un movimiento de inversiones industriales en plantas de montaje y elaboración de productos de origen agropecuario con miras a la exportación. La participación de la industria en el PIB subió de 16 % en 1960 a 22 % en 1970. El crecimiento industrial se llevó a cabo bajo control del capital extranjero (inversiones directas, licencias, financiamiento). Aunque Nicaragua es el país de América Central que recibió menos inversión extranjera, esa inversión se concentró en él en la industria manufacturera en mayor medida que en el resto del istmo. De 27.8 % de la inversión extranjera total en el país en 1959, la inversión extranjera en industria manufacturera pasó a 54.4 % en 1969, mientras en el conjunto del área era ese año 30.8 %, en Guatemala 43.6 %, El Salvador 38.1 %, Costa Rica 21.1 %, y Honduras 11.2 %.

Diversos indicadores señalan la fuerte dependencia externa de la industria manufacturera en Nicaragua. El cuadro II.2 presenta los coeficientes de importación y de consumo de insumos importados para todas las ramas de la producción industrial a mediados de la década de 1970. Aparte del caso previsible de la refinación de petróleo —hidrocarburo que Nicaragua no produce—, destacan por su elevada dependencia la industria del papel, imprentas y editoriales, sustancias y productos químicos, fabricación de productos de caucho, metalbásicas y construcción de maquinaria. En conjunto estas ramas daban cuenta en esa época de casi 40 % del VBP y 30 % del valor agregado en el sector manufacturero.

El cuadro II.3 muestra la balanza comercial del sector industrial. Entre 1960 y 1977 arrojó un saldo negativo de casi 700 millones de dólares, con déficit progresivamente crecientes de quinquenio en quinquenio. El sector industrial es un importador neto y contrasta claramente con el carácter exportador neto del sector agropecuario, a pesar de que a lo largo



## Cuadro II.1

Nicaragua: Composición de las exportaciones, FOB (en %)

Rubros	1930	1935	1940	1945	1950	1955	1960	1965	1970	1977
Café en oro	45	55	22	26	50	35	31	18	18	31
Algodón	1	1	2	—	5	39	24	45	19	24
Oro	5	10	61	51	23	10	11	4	2	1
Carne	—	—	—	—	—	—	5	5	15	6
Azúcar	4	2	—	—	—	—	6	4	6	5
Banano	27	21	5	—	—	—	—	1	—	1
Ajonjolí	—	—	—	—	4	2	4	1	1	—
Otros	18	11	10	23	18	14	19	22	39	32
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Fuentes: 1930-1955: Belli (1975)  
 1960-1977: Banco Central de Nicaragua

del período la participación de las exportaciones industriales en el total exportado se incrementó, y la del agropecuario se redujo (cf. cuadro II.4). En todo el período considerado el saldo negativo del balance comercial del sector industrial fue equivalente a casi 40 % del saldo favorable del balance comercial del sector agropecuario en el mismo período.

## Cuadro II.2

Nicaragua: Coeficientes de importaciones directas en la industria manufacturera, 1976

Sectores	Coeficientes de importaciones	Insumos importados / Insumos totales
Alimentos	.087	.133
Bebidas	.177	.471
Tabaco	.055	.297
Textiles	.277	.618
Vestido y calzado	.199	.392
Industria del cuero	.120	.204
Madera	.045	.100
Muebles y accesorios	.189	.536
Papel y sus productos	.646	.992
Imprentas y editoriales	.330	.876
Productos y sustancias químicas	.494	.653
Refinación de petróleo	.928	.980
Productos de caucho	.412	.961
Productos minerales no metálicos	.081	.372
Industrias metálicas básicas *	.470	.851
Construcción de maquinaria **	.435	.957
Construcción de material de transporte	.385	.953
Otras	.040	.045
Todos los sectores	.228	.411

\* Incluye fabricación de productos metálicos.

\*\* Incluye maquinaria y equipo eléctrico.

Fuente: Weeks (1981).

## Cuadro II.3

Nicaragua: Balance comercial de los sectores industrial y agropecuario  
(Millones de dólares corrientes)

Período	(1) Exportaciones de origen industrial	(2) Importaciones* para la industria	(3)	(4) Exportaciones de origen agropecuario	(5) Importaciones* para el sector agropecuario	(6)
			1-2			4-5
1960-64	97.5	209.3	- 111.8	301.3	34.4	266.9
1965-69	243.2	403.4	- 160.2	471.7	94.6	377.1
1970-74	633.6	749.9	- 116.3	624.5	122.9	501.6
1975-77	701.1	988.3	- 287.2	825.0	139.0	686.0
1960-77	1675.4	2350.9	- 675.5	2222.5	390.9	1831.6

\* No incluye combustibles.

Fuente: Elaboración propia de cifras del Banco Central de Nicaragua.

## Cuadro II.4

Nicaragua: Valor de las exportaciones por sector de origen  
(en %)

Período	Sectores			Total
	Agropecuario	Industrial	Otros	
1960-64	66.2	21.2	12.6	100.0
1965-69	62.0	31.4	6.6	100.0
1970-74	48.0	50.5	1.5	100.0
1975-77	52.0	46.2	1.8	100.0

Fuente: Elaboración propia de cifras del BCN.

El efecto de sustitución de importaciones fue asimismo reducido. En 1960 la producción industrial nacional representaba 60 % del valor de las importaciones industriales del país, y en 1970 se mantenía en el mismo nivel, pero en 1977 había bajado a 54 %. Además, el diseño de la estructura industrial en función del esquema de integración regional determinó que, cuando éste hizo crisis a fines del decenio de 1960, el sector tuviera que operar con elevados márgenes de capacidad ociosa.<sup>4</sup>

Sin perjuicio de cierta especialización en agroquímicos, agroindustria (productos lácteos, azúcar) y metalmecánica, la diversificación de la producción industrial ha sido mínima en las dos últimas décadas. En 1979 la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco daba cuenta de 60 % del valor agregado industrial total, prácticamente lo mismo que en 1969 (63 %).

La capacidad de generación de empleo también fue reducida. La PEA industrial pasó de 11.6 % del total en 1963 a 12.3 % en 1971 y 9.6 % en 1975; en cifras absolutas creció de 55.631 personas el primer año a 62.864 el último (un aumento de 7.233 en 12 años). Como el sector agrario, por las razones señaladas más arriba, expulsa fuerza de trabajo hacia las ciudades, y en éstas la industria genera poco empleo, es el sector

<sup>4</sup> Según De Franco y Hurtado de Viljil (1978), en 1972 la capacidad ociosa de la industria manufacturera alcanzó a 65 % para el conjunto del sector.

terciario el que debe dar refugio a los trabajadores migrantes y a las nuevas camadas de fuerza de trabajo urbano. La PEA en el sector de servicios personales se duplicó entre 1963 y 1975, creciendo de 65.546 personas a 131.945 (de 33 % a 39 % de la PEA total). Este último año 70 % de la PEA urbana se encontraba en sectores no productivos, contra 61 % en 1963 (cf. cuadro II.5).

El capitalismo creció con profundas desigualdades intersectoriales, espaciales y, por supuesto, sociales, reforzando la desarticulación de la estructura económica y agudizando su subordinación al exterior. El crecimiento se circunscribió fundamentalmente a la región del Pacífico (departamentos de Managua, León, Chinandega, Carazo, Masaya y Granada), y a reducidos grupos sociales. Hacia fines del somocismo el "corazón" de la agroexportación absorbía como máximo unas 500 mil manzanas —130 mil de café, 250 mil de algodón, 60 mil de caña de azúcar, y otras—, de una superficie total de casi 7 millones de manzanas: menos de 10 % de la tierra en fincas, pero dado su carácter intensivo en mano de obra controlaba casi 54 % de la fuerza de trabajo rural (Baumeister 1982).<sup>3</sup> El PIB por habitante creció en términos reales (precios de 1978) de u\$s 451 en 1950 a u\$s 595 en 1960, u\$s 898 en 1965 y u\$s 955 en 1975, llegando en 1977 a u\$s 966, pero la distribución fue marcadamente desigual. El PIB per cápita del 50 % inferior de la población era este último año menos de 300 dólares al año y representaba 15 % del PIB total, mientras el 20 % superior concentraba 60 % del producto con un medio de casi u\$s 3.000 al año (cf. CEPAL 1979).

El perfil de la distribución del ingreso ofrece una aproximación complementaria a lo que se viene señalando. Es sabido que la estructura de la distribución está determinada por la estructura de la producción "y es como su reverso; más aún, la distribución es ella misma un producto de las relaciones de producción" (Marx 1968, 44). El cuadro II.6 permite una rápida comparación de la línea de distribución del ingreso que existía en Nicaragua poco antes del triunfo de la Revolución Popular Sandinista con los demás países del istmo, y las de dos países de fuera de la región: uno con un patrón de desarrollo

<sup>3</sup> Una manzana equivale a 0.7 hectárea.

Cuadro II.5  
Nicaragua: PEA por rama de actividad, 1963 y 1975

	1963		1975	
	Miles	%	Miles	%
Total	479.9	100.0	654.6	100.0
Agropecuaria	283.1	59.0	313.5	48.0
No agropecuaria	196.8	41.0	341.1	52.0
Explotación de minas y canteras				
Industria manufacturera		100.0		100.0
Construcción		2.0		1.4
Electricidad, gas y agua		28.2		18.4
(Productiva)		8.0		8.1
Comercio, hoteles y restaurantes		0.6		1.4
Transporte, almacenamiento		38.8		29.3
y comunicaciones		17.5		21.9
Establecimientos financieros		6.1		6.5
Servicios personales		4.0		3.4
(No productiva)		33.2		38.6
Otros, no especificados		60.8		70.4
		0.4		0.3

Fuente: Censo Nacional de Población, 1963 y Oficina de Estimación de Estadísticas.



Cuadro II.6  
Distribución del ingreso en Centroamérica y otros países

Grupo perceptor	Nicaragua <i>a</i>	Costa Rica <i>b</i>	El Salvador <i>b</i>	Honduras <i>b</i>	Guatemala <i>b</i>	Rep. Dominicana <i>c</i>	Argentina <i>d</i>
5 % superior	28	22.8	15.4	21.8	35.0	38	21.4
15 % medio superior	32	27.9	49.4	29.5	23.9	15	26.0
30 % medio	25	28.5	22.8	25.2	23.8	27	29.4
50 % más bajo	15	20.8	12.4	23.5	17.3	20	23.2
Total	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100	100.0
Índice de polarización <i>e</i>	18.6	11.2	15.0	9.2	20.0	19.0	10.7

*a* 1977. Fuente: CEPAL (1979).

*b* Fuente: Basenthal (1982), cuadro 8. Costa Rica: 1971. El Salvador: 1974. Honduras: 1976-79. Guatemala: 1976.

*c* 1980. Fuente: Vilas (1973), cuadro 12. La información corresponde a la ciudad de Santo Domingo solamente.

*d* 1970. Fuente: Vilas (1974), cuadro XX. La información corresponde al área metropolitana.

*e* Índice de polarización:  $\frac{Y_5}{P_5} \div \frac{Y_{50}}{P_{50}}$ , donde  $Y_5$ ,  $Y_{50}$  representan el porcentaje de ingreso percibido por el 5 % superior y el 50 % más bajo de la población (respectivamente  $P_5$  y  $P_{50}$ ).

capitalista y una trayectoria política próximos a los de Nicaragua —la República Dominicana—, y otro que, al contrario, ofrecía en la época en que se tomó la información un tipo de desarrollo bastante diferente —Argentina.

Después de El Salvador, Nicaragua es el país donde los grupos superiores concentran la mayor tajada del ingreso (60 %) y donde la mitad inferior percibe la porción más reducida. La polarización de los grupos perceptores extremos es la mayor de América Central, con excepción de Guatemala, y casi igual a la existente en la República Dominicana.

Este tipo de capitalismo agroindustrial definió una diferenciación marcada entre la agricultura de exportación y la de granos básicos para el mercado interno. Las mejores tierras, el progreso técnico y las condiciones modernas de explotación se concentraron en aquella. Como consecuencia la producción de granos básicos, sobre la que reposa la reproducción de la fuerza de trabajo, se mantuvo en un profundo atraso. A principios de los años '70 sólo 3 % de las fincas empleaba fertilizantes, y sólo 14 % usaba insecticidas. Todavía a comienzos de la década actual las técnicas y procedimientos del sector son extremadamente primitivos: de acuerdo a estimaciones recientes 75 % de la producción de granos básicos se lleva a cabo por el sistema del *espeque*.<sup>6</sup> La producción para el mercado interno declinó en la década del '50 y la producción por habitante de maíz y frijoles se estancó después de 1960 pese a aumentos de la superficie cultivada. El abastecimiento local dependía en proporciones significativas de la importación, pero así y todo no alcanzaba a la totalidad de la población.<sup>7</sup>

Merced a su capacidad generadora de divisas, la agroexportación ha sido la fuente de financiamiento para la importación de insumos industriales, bienes de consumo final, y para el pago del endeudamiento externo que caracterizó al somocismo. Este papel estratégico ha dado pie para que el sector agro-

<sup>6</sup> Cf. declaraciones del Comandante Henry Ruiz, Ministro de Planificación y miembro de la Dirección Nacional del FSLN, en *Barricada*, 5 de junio 1983.

<sup>7</sup> En 1970 la disponibilidad de alimentos (producción+existencias+importaciones) representaba en productos lácteos 36 % del consumo nacional; 73 % en carne y pescado; 88 % en frijol, 21 % en vegetales; 61 % en huevos, etc. En esa misma década 54 % de los nicaragüenses estaba subalimentado, y 90 % padecía de parasitismo; cf. O. Nónes (1980a); Álvarez Montalván (1980).

exportador nicaragüense haya sido considerado el equivalente del "departamento I" del esquema de reproducción ampliada de *El Capital*, y haría por lo tanto las veces de la "industria pesada" (cf. Fitzgerald 1982a).

Se trata de una metáfora poco feliz producto de un enfoque que se queda en las apariencias y confunde las cosas. En primer lugar, es cierto que, teóricamente, las materias primas son medios de producción, pero una cosa es exportar petróleo, o hierro, o bauxita, y otra bastante diferente exportar café, carne, azúcar, mariscos, cueros —productos que componen dos tercios de la agroexportación de Nicaragua. La metáfora resulta en este caso excesiva. En segundo lugar, la oferta de medios de producción está emplazada espacialmente fuera de la economía nicaragüense y mediada respecto de ésta por un mercado internacional controlado por el imperialismo y sometido a las leyes del intercambio desigual. Esto determina que el papel de la agroexportación nicaragüense como "medio de producción de divisas" haya sido siempre problemático. Entre 1960 y 1978 Nicaragua acumuló, por efecto del deterioro de los términos del intercambio, una relación negativa de más de 8.000 millones de dólares (cf. cuadro II.7), circunstancia que, llamativamente, no es siquiera mencionada por el informe que estamos comentando. Por último, una proporción importante de las importaciones consistía de bienes de consumo —alimentos sin duda, pero también bienes de consumo no

básico para los grupos de ingresos más altos. Los insumos industriales, salvo los que se ocupaban en la producción de agroquímicos, se destinaban asimismo a la producción local de mercancías industriales para el consumo de los grupos de ingresos medios y altos locales —fundamentalmente urbanos— y de los demás países del istmo, merced al esquema de integración regional. Como muchos otros países del Tercer Mundo, Nicaragua tuvo un capitalismo cuyo aparato productivo se especializó en la producción de medios de consumo, quedando el "departamento I" localizado en la economía dominante.

La desarticulación agroindustrial se vio reforzada por el bajísimo grado de elaboración de la producción agropecuaria: 50 % de ésta llegaba al consumidor local o a la exportación sin procesamiento industrial alguno, y el resto consistía de carne vacuna, azúcar de caña, productos lácteos y similares, con un procesamiento reducido en términos de valor agregado.

El funcionamiento del sistema industrial alimentaba los patrones de consumo de los grupos dominantes y reforzaba la vulnerabilidad general de la economía. La apertura externa se acentuó durante la década de 1970, llegando a más de 60 % del PIB en las postrimerías de la dictadura. Los saldos negativos del intercambio comercial se sumaron a los pagos de servicios, utilidades, etc., para traducirse en saldos sistemáticamente negativos de la cuenta corriente del balance de pagos y a un creciente endeudamiento externo (cf. cuadro II.8). En 1975 casi 55 % de la inversión se financiaba con recursos externos, mientras en 1970 solamente 26 %. La deuda externa total, que en 1950 no pasaba de 2 millones de dólares, y en 1960 llegaba a 22 millones, era de 145 millones en 1970, de 466 millones en 1974 y sumaba 900 millones de dólares en 1977. Sólo la fidelidad política a los Estados Unidos y, especialmente, el virulento anticomunismo de la política internacional de la dictadura, garantizaban la asistencia financiera para paliar los efectos más visibles del atraso general y la vulnerabilidad externa de la economía.

En realidad el ingreso de divisas por la vía del financiamiento externo funcionaba para alimentar la acumulación de algunos grupos financieros locales y del somocismo. En 1963 el Banco Central eliminó los controles cambiarios y estableció la libre convertibilidad de la moneda; este mecanismo, más la existencia de dólares baratos por la sobrevaluación del códo-

Cuadro II.7

Nicaragua: Efecto de la relación de precios del intercambio  
(u\$s millones de 1980, acumulados por quinquenio)

Período	Efecto
1960-64	+ 132.8
1965-69	- 1268.7
1970-74	- 3408.1
1975-77	- 3687.3
1960-77	- 8231.3

Fuente: BCN

## Nicaragua: Vulnerabilidad externa de la economía, 1970-78

Años	Apertura externa (%) <sup>1</sup>	Coefficiente de importaciones <sup>2</sup>	Saldo de la balanza comercial (u\$s millones) <sup>3</sup>	Saldo de la cuenta corriente (u\$s millones) <sup>4</sup>	Coefficiente de endeudamiento <sup>5</sup>
1970	48,6	,256	- 20,1	- 38,1	,225
1971	48,1	,254	- 23,2	- 42,8	,258
1972	53,1	,248	- 30,9	- 21,7	,290
1973	55,3	,299	- 49,0	- 65,1	,317
1974	61,9	,369	- 180,7	- 256,7	,331
1975	56,1	,325	- 141,7	- 184,1	,405
1976	58,1	,288	+ 9,8	- 38,7	,368
1977	66,3	,361	- 125,1	- 182,0	,315
1978	61,6	,295	+ 52,0	- 25,0	,373

<sup>1</sup>  $\frac{X + M}{PIB} \times 100$ . Fuente: Elaboración de cifras de INEC.<sup>2</sup>  $\frac{M}{PIB}$ . Fuente: INEC y CEPAL.<sup>3</sup> Fuente: INEC y BCN.<sup>4</sup> Fuente: CEPAL.<sup>5</sup>  $\frac{\text{Saldo de la deuda}}{PIB}$ . Fuente: INEC.

ba, facilitaron la salida al exterior de los excedentes generados en la agroexportación y en la industria, a costa naturalmente del crecimiento del endeudamiento externo.

La base de sustentación de este esquema estuvo constituida siempre por una intensa explotación de la fuerza de trabajo. La eficiencia y competitividad internacional del sistema agro-exportador, y la capacidad de endeudamiento externo, dependían en última instancia del *adecuado tratamiento* de la cuestión laboral. Las condiciones inicuas de trabajo y de vida del proletariado agrícola e industrial, del campesinado, de las masas trabajadoras en general (hombres, niños, mujeres), se conjugaban con elevados índices de desempleo y subempleo, ingresos bajos e irregulares, mendicidad, hacinamiento, muerte prematura. El atraso productivo en el sector de granos básicos se traducía en un tiempo de trabajo efectivamente incorporado en la producción, mayor que el tiempo de trabajo socialmente expresado en la remuneración pagada a los trabajadores de la agroexportación y la industria, creando las condiciones objetivas para una sobreexplotación de la fuerza de trabajo.

La dislocación de la estructura productiva, el atraso de las formas de producción, la férrea dominación externa, que modelaron de manera tan firme este capitalismo, eran a su turno reproducidas por él. El excedente extraído de manera brutal a las masas trabajadoras en el conjunto de la economía pero sobre todo en la agroexportación, iba a dar en definitiva por la vía del intercambio desigual, las remesas de utilidades y servicios del capital extranjero, y el endeudamiento externo, al proceso transnacional de valorización del capital controlado por el imperialismo, a través de la mediación de los grupos dominantes locales asociados a él.

En las secciones siguientes de este capítulo se exponen algunos aspectos específicos que contribuyen a perfilar de manera más precisa este tipo de capitalismo. Ellas son importantes para identificar mejor la estructura económica y de clases de Nicaragua, como para explicar algunas de las cuestiones más relevantes de la etapa que se abre con el triunfo sandinista del 19 de julio de 1979, y de los debates que han tenido y tienen lugar en estos primeros cuatro años de transformación revolucionaria: ¿qué hacer con la industria? ¿Cómo encarar la



cuestión urbana? ¿Qué tipo de reforma agraria? ¿Cuáles son las condiciones de la alianza obrero-campesina? ¿Qué tratamiento dar a la pequeña propiedad?...

## 2. Un proletariado desigualmente desarrollado

El tipo de capitalismo agroindustrial que se desarrolló en Nicaragua generó un proletariado desigualmente desarrollado, con una gran inestabilidad ocupacional y un proceso no concluido de separación respecto de los medios e instrumentos de producción y de un fondo familiar de reproducción. Esto ha llevado a que se afirme con frecuencia el carácter cuantitativamente reducido del proletariado nicaragüense, especialmente en comparación con la pequeña producción mercantil simple. La falta de cifras actualizadas —el último censo de población data de 1971— ha obligado a trabajar con estimaciones, y éstas se han orientado en el sentido indicado. En particular, se señala la exigua magnitud que revestiría el proletariado agrícola permanente, frente al gran volumen de una fuerza de trabajo que laboraría de manera asalariada durante no más de dos o tres meses al año —en las cosechas de la agroexportación—, para luego regresar a formas no asalariadas de prestación laboral.

Posiblemente el más difundido de estos trabajos es el de Deere y Marchetti (1981). Los autores estiman que, hacia fines de la década de 1970, el proletariado agrícola consistiría de solamente unas 33.000 personas, o 7.5 % de la PEA agropecuaria. Se trataría de trabajadores sin tierra que venden su fuerza de trabajo en forma permanente y tienen trabajo estable en alguna empresa agrícola. Además de esta minúscula clase obrera rural, existiría lo que los autores llaman *sub-proletariado* agrícola, constituido por trabajadores que venden su fuerza de trabajo de manera estacional, por carecer de trabajo estable. Sumarían unas 138.000 personas, o 32 % de la PEA agropecuaria; el pico del empleo asalariado de estos trabajadores se encontraría en los cortes de café y algodón, pasando el resto del año a ocupaciones no asalariadas. Deere y Marchetti establecen así una diferenciación marcada entre los

obreros rurales que cuentan con un empleo estable, y los que carecen de él, y cambian de ocupación a impulsos de la fluctuación de la demanda de fuerza de trabajo. Esta situación ha llevado a poner en duda el carácter propiamente proletario de estos trabajadores. Finalmente existiría un *semiproletariado* de campesinos pobres, minifundistas, cuyas familias no pueden vivir del producto de sus fincas, y se ven obligados a vender su fuerza de trabajo a otros productores. Sumarían unas 165.000 personas, o 38 % de la PEA sectorial.

Pensamos que las estimaciones de estos autores subvalúan la magnitud real del proletariado rural *permanente* y dan una imagen distorsionada de la estructura de clases del país. En particular la noción de *sub-proletariado* es confusa y se asienta sobre una hipótesis que carece de sustentación en la práctica. Sin embargo la debilidad de las estimaciones de los autores es conceptual y no meramente empírica, por lo cual antes de contrastar sus datos con otros más adecuados, resulta conveniente formular muy rápidamente algunas precisiones conceptuales.

El concepto de *proletarización de la fuerza de trabajo* se refiere al modo en que el productor directo se relaciona con los medios de producción y se enfrenta al capital: una relación de desposesión y de oposición. Su condición de asalariado es una derivación de dicha relación, pero no una derivación mecánica, ya que está mediada por la posibilidad efectiva de cada proletario para encontrar una *ocupación* remunerada. Pero que la encuentre o no, no altera su condición de proletario.

En consecuencia la estacionalidad de tal o cual actividad —la cosecha de productos agrícolas exportables en este caso— determina la estacionalidad de la ocupación, pero no proyecta dicha estacionalidad a la situación de clase de la fuerza de trabajo. *Lo estacional es el empleo, no la clase o fracción que ocupa ese empleo.* La fuerza de trabajo no deja de estar proletarizada por el hecho de concluir su relación laboral con un capitalista dado, o con una fracción de los capitalistas; sigue siendo proletaria respecto del capital en general. Los trabajadores afectados por este movimiento cíclico de la demanda de mano de obra y del nivel general de actividad agropecuaria se ven forzados a buscar otras ocupaciones o a soportar períodos más o menos largos de desempleo, pero nada de eso desvirtúa su carácter de proletariado.

Cuadro II.9  
Itinerario laboral de los asalariados en el corte de algodón, 1980\*

Departamentos	Meses del año											
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1. <i>Chinandega y León</i>												
% asalariados	82	78	75	73	64	66	65	68	67	69	68	70
% no asalariados	18	22	25	27	36	34	35	22	33	31	32	30
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
n	480	459	457	449	448	432	453	431	458	463	472	475
2. <i>Chinandega</i>												
% asalariados	85	83	79	74	69	70	71	72	71	75	75	76
% no asalariados	15	17	21	26	31	30	29	28	29	25	25	24
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
n	297	280	281	274	275	277	280	270	281	287	296	299
3. <i>León</i>												
% asalariados	76	70	69	70	56	59	55	61	59	53	60	64
% no asalariados	24	30	31	30	44	41	45	39	41	47	40	36
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
n	183	179	176	175	173	155	173	161	177	176	176	173

\* Se preguntó a los entrevistados qué tipo de ocupación habían desempeñado durante cada uno de los 12 meses anteriores al de la encuesta (enero 1981).

Fuente: Elaboración propia de los resultados de la encuesta Ministerio del Trabajo/CSUCA a cortadores de algodón.

Aunque la información disponible no es completa, tiende a confirmar lo que se acaba de decir. La encuesta a cortadores de algodón efectuada en enero de 1981 por el proyecto de cooperación Ministerio del Trabajo-CSUCA, señala el contraste entre la estacionalidad del empleo en la agroexportación y la permanencia de la condición proletaria a lo largo de todo el año. En promedio, 71 % de los cortadores de algodón mantenían su condición de trabajador asalariado durante todo el año (cf. cuadro II.9). El promedio es mayor en el departamento de Chinandega que en el de León, y sugiere la existencia de una proletarianización mayor en aquel departamento. Complementariamente, el promedio de trabajadores no asalariados (por cuenta propia, familiares no remunerados) es sensiblemente mayor en León.

El cuadro II.10 ofrece un panorama complementario. Considerando como base 100 al promedio de asalariados en los meses del corte del algodón (diciembre, enero y febrero), 84.5 % promedio de los asalariados se mantiene en esa condición a lo largo de todo el año —también aquí de manera más pronunciada en Chinandega que en León.

Durante los meses del año en que no hay cosecha, los asalariados "liberados" por el algodón pasan fundamentalmente al sector servicios (57 %), a la agricultura para el mercado interno (18.4 %), a la construcción (15 %), a la ganadería (8 %), etc., pero *siempre como asalariados*. El mayor cambio de asalaria-

Cuadro II.10

Nivel de empleo asalariado en cortadores de algodón  
(Promedio D, E, F = 100)

Departamentos	Meses									
	M	A	M	J	J	A	S	O	N	$\bar{X}$
Chinandega y León	95	90	79	78	82	81	84	88	90	84.5
Chinandega	94	86	80	81	84	83	85	91	94	86
León	98	98	78	73	77	78	84	82	84	83

Fuente: Elaboración propia de los resultados de la Encuesta Ministerio del Trabajo/CSUCA a cortadores de algodón.

dos a trabajadores por cuenta propia se registra en los que pasan a la producción de granos básicos, pero de todos modos la cifra resulta poco significativa (7 %).

Estos resultados son consistentes con los de la encuesta a cortadores de algodón y café efectuada por el Centro de Investigación y Estudios de la Reforma Agraria (CIERA). El 67 % de los cortadores de algodón, y el 61 % de los cortadores de café carecían de tierra antes del triunfo revolucionario.<sup>8</sup> De manera coincidente, 62 % del tiempo de trabajo de la fuerza laboral de las familias de los cortadores de algodón, y casi 48 % del de las familias de los cortadores de café, fue absorbido por algún tipo de actividad asalariada —en la agroexportación, en la producción agrícola para el mercado interno, o en actividades no agrícolas; estas últimas ocuparon 17 % del tiempo de trabajo de las familias de los cortadores de algodón, y 15 % del tiempo de trabajo de las de los cortadores de café.

En síntesis, parece existir un grado de proletarianización de la fuerza de trabajo agropecuaria considerablemente mayor que el que sugerían las estimaciones más difundidas. El *carácter estacional del empleo* en los cortes de la agroexportación no parece ser obstáculo para el *carácter permanente de la proletarianización* de una proporción importante de la fuerza de trabajo. Tanto por su carencia de medios de producción (tierra fundamentalmente) como por el tipo predominante de prestación laboral (asalariado), esta masa de trabajadores constituye claramente una fuerza de trabajo *obrera*. La designación de proletariado *estacional* es engañosa porque proyecta el adjetivo de la actividad (cosecha) a la situación de clase del sujeto que ocupa el empleo y desempeña la actividad, y la noción de *subproletariado* confunde. Pensamos que, si se quiere buscar un calificativo para esta fracción del proletariado agrícola, el más apropiado es el de *proletariado itinerante*, en cuanto su condición proletaria se expresa y especifica en esa movilidad entre ocupaciones y sectores de la economía.

Ya el censo de población de 1971 permitía ver que el proceso de proletarianización de la fuerza de trabajo rural estaba bastante más avanzado de lo que estimaciones posteriores habrían de sugerir. De acuerdo con esa fuente los asalariados

<sup>8</sup> Las cifras para la etapa posterior al triunfo revolucionario son 63 % y 51 % respectivamente.

agrícolas sumaban casi 109 mil trabajadores y representaban 41 % de la PEA del sector; como el censo fue levantado en el mes de abril, esos resultados no estuvieron afectados por el aumento estacional del empleo agrícola en los meses de diciembre a febrero. Este censo es el último que se ha realizado hasta la fecha, motivo por el cual cifras más actualizadas sólo son posibles por vía de estimaciones. A partir de la proyección de los resultados de aquel censo, y de la evidencia brindada por investigaciones llevadas a cabo en años recientes por el Ministerio de Trabajo y el CIERA, puede estimarse que hacia fines de la década de 1970 el proletariado del sector agropecuario sumaba entre 120.000 y 130.000 trabajadores promedio en el año (un tercio de la PEA agropecuaria aproximadamente), aunque solamente unos 50.000 habrían tenido empleo asalariado fijo durante todo el año, mientras el resto habría contado con empleo fijo no más de tres meses al año como máximo.<sup>9</sup> El resto del año funcionaba como un *proletariado itinerante* que, finalizada la temporada de máximo empleo agrícola —los cortes de café y algodón— pasaba a desempeñarse en los servicios urbanos, la construcción, la ganadería, la agricultura para el mercado interno, etc., en un proceso de circulación laboral rural-urbano y rural-rural en el que mantenían en general su condición de asalariados.<sup>10</sup>

Además de este proletariado permanente existe un vasto *semiproletariado* de campesinos pobres, minifundistas, que no puede vivir del producto de su finca (propia o arrendada) y que se ve obligado a vender su fuerza de trabajo a otros productores. De acuerdo a algunas estimaciones (Deere y Marchetti 1981; PREALC/OIT 1982) esta fracción representaría dos tercios del campesinado y sumaría casi 165.000 personas, o más de un tercio de la PEA agropecuaria. Claramente se trata de una fracción de la fuerza de trabajo cuyo movimiento hacia la proletarianización aún se encuentra en proceso.

El empobrecimiento del pequeño campesinado y la fuerte estacionalidad del empleo en la agroexportación repercuten

<sup>9</sup> En realidad el *empleo fijo* de estos trabajadores es más bien una rotación laboral por diversas fincas, con periodos de empleo de no más de dos o tres semanas en cada finca.

<sup>10</sup> En un trabajo anterior (cf. 1982b) sin embargo, reproducimos las estimaciones de Deere y Marchetti, haciéndonos pasivos por lo tanto de la crítica que hemos planteado en las páginas precedentes.

en la intensidad y el ritmo del proceso de proletarización de esta fracción de trabajadores, llevándola

a sufrir de forma estructural un proceso de *proletarización-desproletarización*, o mejor dicho, ésta es una de las formas peculiares del proceso de proletarización del modelo capitalista agroexportador (O. Núñez, 1980a, 39).

Ahora bien: este proceso no tiene un horizonte mecánicamente predecible. No sólo porque el triunfo revolucionario y las transformaciones que a partir de él están teniendo lugar, introdujeron un quiebre profundo en su evolución, sino asimismo por la estrecha y contradictoria articulación que tiene lugar entre la parcela y el salario: si, por un lado, la insuficiente dotación de tierra y otros recursos fuerza al campesino a salarizarse durante cierta época del año —o, en el caso de sus hijas que se ubican en el servicio doméstico, durante todo el año—, por el otro el salario así percibido contribuye decisivamente a la recreación de la economía campesina y refuerza el apego del productor a su parcela.

Sea como fuere, es evidente que la configuración de la estructura productiva dependiente de unos pocos cultivos de exportación repercutió en la población trabajadora forzándola a movimientos migratorios en función del calendario de cosechas y del emplazamiento espacial de las actividades. Si al semiproletariado de origen campesino se le suma la fracción *itinerante* de los obreros agrícolas, se tendría entre 230 mil y 240 mil trabajadores en estas condiciones de forzoso desplazamiento ocupacional/espacial.

En resumen, la estructura de clases en el campo presentaba a fines de la década de 1970 el perfil estimativo que figura en el cuadro II.11.

Con todas sus limitaciones y complejidades, *el proceso de proletarización de la fuerza de trabajo se ha desarrollado más en el sector rural que en el ámbito urbano* —también aquí al contrario de lo que sugiere la imagen más frecuente. A fines de la década de 1970 la clase obrera urbana sumaba unos 113.000 trabajadores (en la industria, la construcción, el transporte, la producción de energía y sectores asimilados), o 20 % de la PEA no agropecuaria. La exigua capacidad de generación de empleo por el tipo de industrialización que se desarrolló desde

Cuadro II.11

Nicaragua: Estimación de la estructura de clases en el campo, a fines de los '70

	P E A	
	%	Miles
Proletariado	29.3	125.0
Semiproletariado (campesinos pobres)	38.4	164.5
Campesinos medios	22.3	95.5
Campesinos ricos	8.0	34.5
Burguesía	2.0	9.0
Total	100.0	428.5

Fuente: Elaboración propia de cifras de INEC, MIPLAN, MITRAB, CIERA y MIDINRA.

los '60, combinada con el tipo de economía urbana preexistente, derivaron hacia el autoempleo, el pequeño comercio, el artesanado, los servicios personales, a una proporción grande de la población activa ya existente, y de las nuevas camadas de fuerza de trabajo, urbanas y urbanizadas.

Sin embargo, en la medida en que proletarización significa *desposesión* del trabajador respecto de sus medios e instrumentos de producción y de un fondo de reproducción, y no necesariamente *salarización* industrial, es claro que el movimiento de proletarización de la fuerza de trabajo tuvo un alcance real, sin perjuicio de su lento desarrollo, y que una proporción grande de las masas trabajadoras estuvieran subordinadas al capital de manera formal —es decir desde fuera del proceso mismo de trabajo— más que de manera real.

El cuadro II.12 muestra el progresivo desplazamiento de la producción artesanal durante la década de 1960 en el sector industrial, y el correlativo aumento de una fuerza de trabajo crecientemente proletarizada. Vale la pena destacar asimismo cómo junto con el incremento del proletariado industrial tiene lugar un aumento de la presencia de cuadros técnicos y profesionales de pequeña burguesía, y de una capa gerencial y de empleados administrativos.



La mayor lentitud del proceso de proletarización de la fuerza de trabajo en el ámbito urbano frente al sector rural, contrasta con los niveles de centralización de la fuerza de trabajo obrera en torno a unidades dadas de capital, que son mucho más altos en la ciudad que en el campo. Tomando como un indicador aproximativo la relación asalariado/empleador, en 1971 dicha relación era de 13.9 asalariados por empleador en el sector rural, 28.8 asalariados por empleador en la industria manufacturera y construcciones, y 35.6 en el conjunto de actividades económicas no agropecuarias. Vale decir que si por un lado el proceso de proletarización de la fuerza de trabajo estaba más avanzado en el campo que en la ciudad tanto en términos absolutos como relativos, por otro lado las concentraciones proletarias eran mayores en la ciudad que en el campo. A finales de la misma década, 75 % de los trabajadores industriales se concentraba en establecimientos fabriles de más de 170 puestos de trabajo promedio (INEC 1981).

Hacia la misma época los obreros constituían la fracción de trabajadores urbanos que, tanto en valores absolutos como en términos relativos, percibían el menor nivel de ingreso, por debajo incluso de los trabajadores de servicios personales. De acuerdo con los datos recogidos por la encuesta sobre la situación del empleo urbano a mediados de 1976, para un valor promedio 100 correspondiente al conjunto de actividades eco-

nómicas urbanas, el ingreso mensual de los obreros equivalía a 35.9, frente a 55.2 para los artesanos, 44.6 para los trabajadores de servicios personales, 196.3 para los profesionales, 274.5 para los gerentes, etc. (OEDEC 1976).

Nada más alejado de esta realidad, por lo tanto, que la imagen estereotipada de un proletariado industrial en situación laboral y de ingresos *privilegiada* respecto del resto de las masas trabajadoras urbanas. Como se verá en el capítulo próximo, los bajos niveles de ingresos se conjugaban con una fuerte inestabilidad laboral y con inicuas condiciones de trabajo, en el marco de la arbitrariedad patronal y de un clima institucional represivo.

Los altos niveles de concentración laboral de la clase obrera industrial —en comparación a la situación prevaleciente en el campo— contrastan con la dispersión de la clase en el paisaje socioeconómico urbano. En efecto, hacia finales de la década de 1970 este reducido proletariado convivía con una masa de trabajadores no asalariados, y de asalariados no productivos, que lo superaban holgadamente en términos absolutos y relativos. Aproximadamente un tercio de la PEA no agropecuaria (unas 150.000 personas) consistía de asalariados no productivos —empleados administrativos privados y del sector público, trabajadores asalariados de servicios personales, etc.—, y casi 40 % consistía de artesanos, pequeños comerciantes, buhoneros, y en general trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares no remunerados, del ámbito de la pequeña producción y la pequeña propiedad.

Estos marcados desbalances de cifras y proporciones, sumados a los salarios exiguos y en muchos casos a una experiencia proletaria, o urbana, relativamente breve, influyeron para que la diferenciación y separación entre la clase obrera y los trabajadores no proletarizados fuera menos clara o tajante de lo que un enfoque mecánico podría llevar a pensar. Sobre todo en el ámbito de la reproducción de la fuerza de trabajo, donde en una proporción elevada de los casos el salario se combinaba con las mil formas del pequeño comercio, la producción mercantil simple, los servicios (o seudoservicios) personales, etc. Los estudios disponibles sobre el particular indican que la familia obrera —con todo lo relativo que este concepto resulta en una economía como la de Nicaragua— no se reproduce exclusivamente, y a veces tampoco *principalmente*, sobre la base

## Cuadro II. 12

### Nicaragua: Composición de la PEA en la industria (en porcentajes)

Categoría ocupacional	1963	1971
Artesanos y operarios	91.5	72.8
Obreros y jornaleros	0.8	5.7
Empleados de oficina	3.5	6.7
Profesionales, técnicos y afines	0.6	3.7
Gerentes, administradores y directivos	0.8	2.5
Resto	2.8	8.6
Total	100.0	100.0

Fuente: De Franco y Hurtado de Vilil (1978).

del salario. El ingreso aportado por el trabajo de los menores —vendedores ambulantes, limpiabotas, cuida carros, y similares—, de las mujeres —preparación y venta de comidas, pequeños comercios, vendedoras de frutas y hortalizas, lavanderas y planchadoras, etc.— supera frecuentemente el monto del salario obrero.<sup>11</sup>

El desigual desarrollo del proceso de proletarización de la fuerza de trabajo en el campo y la ciudad, las complejas formas de articulación de la clase obrera urbana con la producción mercantil simple y el pequeño comercio, y el fuerte peso que adquiere en las ciudades la población no productiva, habrán de incidir nitidamente en el modo en que se planteará y desarrollará la cuestión de la alianza obrero-campesina. Como se verá más adelante, si tradicionalmente esta alianza ha sido pensada e impulsada como un proceso urbano-rural (los obreros en la ciudad, los campesinos en el campo), en Nicaragua ella se presenta, en importante medida, como una cuestión rural-rural, en cuanto el proletariado agropecuario constituye la fracción mayoritaria de la clase obrera. Puesto que las condiciones objetivas de proletarización de los obreros del campo y de la industria son diferentes, la dinámica concreta de la alianza planteará esos elementos diferenciales introduciendo mayor complejidad a su desenvolvimiento. Ello, en el marco de un polo urbano en el cual el componente mayoritario de las masas trabajadoras no proletarizadas reclama su parte en los beneficios de tal alianza.

### 3. La pequeña y mediana producción

El carácter desigual del proceso de desarrollo capitalista determinó no sólo diferentes niveles de proletarización de la fuerza de trabajo en el campo y la ciudad, sino también la existencia de niveles distintos de concentración de la propiedad y

<sup>11</sup> De acuerdo a una investigación efectuada por el Centro Tutelar de Menores del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y Bienestar (INSSBI), sobre los menores trabajadores en las calles de Managua, 39 % de los menores investigados (1279 en un total de 3.263 casos) eran hijos de obreros; casi 22 % hijos de trabajadores de servicios, 10 % hijos de empleados, 9 % hijos de transportistas o choferes (CTM-INSSBI 1983).

la producción en un sector y otro de la sociedad. La temprana aparición de formas oligopólicas de concentración del capital industrial y financiero contrasta con una estructura agraria en la que los medianos productores pudieron retener una participación importante en el producto.

El cuadro II.13 presenta la distribución de la tierra en la década de 1960 en cada uno de los países de América Central y en el conjunto de la región. Nicaragua es, junto con Costa Rica, el país donde las fincas multifamiliares grandes (la gran burguesía agraria) concentran mayor proporción de tierra. Pero al mismo tiempo es el país donde las unidades familiares y multifamiliares medianas (la pequeña y mediana burguesía rural) tienen mayor peso en la estructura de tenencia: casi la mitad del total de unidades, con más de la mitad de la tierra.<sup>12</sup> En Costa Rica estos mismos estratos reúnen una proporción similar de la superficie, pero su participación en el conjunto de las fincas es un tercio más reducida que en Nicaragua. La diferencia se advierte en el peso proporcionalmente mucho más alto de las fincas subfamiliares (campesinos minifundistas) en Costa Rica y demás países del área, que en Nicaragua.

Por su parte las fincas multifamiliares medianas no sólo representan en Nicaragua una proporción mayor, sino que su peso absoluto es más fuerte que en el resto del istmo. En El Salvador las fincas de este tipo sumaban poco más de 3.000, en Costa Rica unas 13.000 y en Guatemala alrededor de 7.000, frente a más de 20.000 en Nicaragua. Al mismo tiempo el ingreso familiar agrícola generado por estas fincas era mucho menor en Nicaragua (2.248 dólares anuales) que en casi toda la región: u\$s 8.000 en Guatemala, algo más de 7.100 en El Salvador, y mucho más distante del ingreso familiar medio anual generado en las fincas multifamiliares grandes de los países respectivos: 88 % menos en Nicaragua, 80 % menos en Guatemala, 73 % menos en El Salvador (CEPAL/FAO/OIT..., 1972).

<sup>12</sup> Se considera finca familiar la que es explotada sin recurrir al empleo de fuerza de trabajo ajena a la familia del productor —quien además vive en la finca. Finca multifamiliar mediana es la que emplea hasta 12 personas ajenas a la familia del productor en el año, pero éste y su familia participan de las labores. Finca multifamiliar grande es la que emplea más de 12 trabajadores no familiares al año, siendo irrelevante que el productor y su familia participen o no de las labores agropecuarias.

## Cuadro II.13

## América Central: Distribución de la tierra por tamaño de las fincas

(Años '60, en porcentajes)

Grupos de tamaño	América Central		Costa Rica		El Salvador		Guatemala		Honduras		Nicaragua	
	Nº	Sup.	Nº	Sup.	Nº	Sup.	Nº	Sup.	Nº	Sup.	Nº	Sup.
Subfamiliar	78.9	9.8	68.0	3.2	91.4	21.9	88.4	14.3	67.5	12.4	50.8	3.5
Familiar	15.0	16.2	19.8	11.2	6.7	20.6	9.5	13.5	26.4	27.4	27.4	11.2
Multifamiliar												
mediano	5.6	35.6	11.3	41.2	1.5	19.8	2.0	31.4	5.7	32.7	20.3	44.1
grande	0.5	38.4	0.9	41.4	0.4	37.7	0.1	40.8	0.4	27.5	1.5	41.2
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: CEPAL/FAO OT-ICA-SIECA OCT-ORA 1972.

Estos elementos —mayor proporción de fincas multifamiliares medianas, con ingreso familiar mucho más reducido que en los otros países de la región, y mucho más distante de la fracción superior de la burguesía agraria que en éstos— sugieren que para la segunda mitad de este siglo la figura de la gran hacienda ya no era predominante en Nicaragua —a diferencia de lo que ocurría en Guatemala y El Salvador. En este sentido las cifras sobre tenencia de la tierra, número de fincas y niveles de ingreso son consistentes con la exposición de la sección anterior de este mismo capítulo sobre la proletarianización de la fuerza de trabajo agropecuaria. Junto con esta avanzada proletarianización de los trabajadores del campo, el peso marcado de la mediana burguesía rural es uno de los datos centrales de la estructura agraria nicaragüense y marca una clara diferencia respecto de sus vecinos.

Las cifras de tenencia se reiteran en materia de producción. El cuadro II.14 presenta la distribución de la producción agropecuaria por tamaño de finca. El campesinado aporta una cuarta parte del producto total, y la burguesía mediana casi la mitad. En granos básicos la participación de la pequeña producción es más grande que en exportables. Por su parte la mitad de la producción ganadera está a cargo de pequeños productores, pero se trata de un rebaño cuya producción va fundamentalmente al mercado interno. Algo similar ocurre en el café: 4/5 de la producción estaba en manos de productores pequeños y medianos, aunque 70 % de la producción destinada al mercado mundial estaba controlada por los grandes propietarios (Wheelock 1976, 143). Pero incluso en algodón, casi 60 % de la producción corre por cuenta de pequeños y medianos productores.

La gran burguesía agraria representaba en conjunto solamente un tercio de la producción rural, con una participación decisiva en apenas dos rubros: caña de azúcar y arroz —intensivos en capital y con un eslabonamiento necesario hacia la agroindustria.

En el sector no agropecuario el panorama es mucho menos definido, pero igualmente apreciable. El 54 % de los establecimientos industriales emplea menos de 5 personas cada uno y puede ser caracterizado como artesanal. Una vez excluidos, el cuadro II.15 ofrece una aproximación a la situación existente en el sector manufacturero. Los establecimientos pequeños

Cuadro II.14

Nicaragua: Distribución de la producción agropecuaria por tamaño del productor, 1971  
(en % de la producción)

Productores	Algodón	Café	Ganado vacuno <sup>a</sup>	Caña de azúcar	Arroz	Sorgo	Maíz	Frijol	Total
Pequeños <sup>1</sup>	6	22	52	4	9	34	32	59	25
Medianos <sup>2</sup>	52	58	29	18	18	28	57	38	45
Grandes <sup>3</sup>	42	20	19	78	73	38	11	3	30
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

<sup>1</sup> Hasta 50 manzanas.

<sup>2</sup> De 51 a 500 manzanas.

<sup>3</sup> Más de 500 manzanas.

<sup>a</sup> Pequeños: hasta 200 vacunos.

Medianos: 201 hasta 1.000 manzanas.

Grandes: más de 1.000 manzanas.

Fuente: E. Baumeister (1982).

de acuerdo con su volumen de empleo de fuerza de trabajo (menos de 30 trabajadores por establecimiento) constituyen 83 % del total y generan solamente 24 % del empleo y 10 % del valor agregado. La industria mediana por su lado (de 30 a 99 puestos de trabajo por establecimiento), con 10 % de los establecimientos y 18 % del personal, genera 28 % del valor agregado.

La menor participación en la producción (frente a la situación ya señalada para el agro) no expresa forzosamente sin embargo atraso tecnológico o ineficiencia productiva de los establecimientos chicos y medianos respecto de los grandes (100 trabajadores y más). Las diferencias de tamaño —en términos de empleo medio y de valor agregado por establecimiento— no tienen como contrapartida diferencias equivalentes en materia de productividad, de composición orgánica del capital ni de explotación capitalista de la fuerza de trabajo, lo cual indica que los establecimientos más grandes no son necesariamente ni proporcionalmente más productivos ni eficientes —en tér-

Cuadro II.15

Nicaragua: Estructura del sector industrial, por tamaño de empleo, 1980 (en porcentajes)

Personal ocupado	Establecimientos	Empleo	Remuneraciones	Valor agregado
5 a 9	59.3	13.0	7.4	3.9
10 a 29	24.2	11.6	10.0	5.8
30 a 49	4.7	5.7	5.7	3.6
50 a 99	5.6	12.5	13.1	24.2
100 y más	6.2	57.2	63.6	62.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
	(1412)	(45040)	(1256.8*)	(3941.8*)

\* Millones de córdobas.

Fuente: Elaboración de cifras de INEC (1980).



minos capitalistas— que los establecimientos de tamaño menor.<sup>12</sup>

La pequeña industria cuenta con casi 8.000 establecimientos, con 37 % del empleo industrial (casi 28.000 trabajadores) y cerca de 18 % del valor bruto de producción (VBP).<sup>13</sup> Como se señala en el cuadro II.16, el 85 % de los establecimientos y el 83 % del empleo se concentran en sólo cuatro ramas. El 96 % del VBP va al mercado interno, aunque en 1980 el sector generó exportaciones por valor de casi 9 millones de dólares —dirigidas en su mayoría (97 %) al mercado centroamericano. El mayor exportador es calzado y productos del cuero (55 %), seguido por vestuario (31 %). En general las exportaciones de la pequeña industria se efectúan por numerosos comerciantes individuales que se trasladan con las mercancías a los países vecinos, en una proyección en escala internacional de la vieja figura del buhonero. Casi 40 % del empleo generado por la

Cuadro II.16

Nicaragua: Pequeña industria, 1980

Ramas	% de establecimientos	% de empleo
Alimentos	28.4	28.3
Calzado y cuero	22.3	22.2
Vestido	20.0	20.0
Madera y muebles	13.6	12.7
Otras	15.7	16.8
Total	100.0	100.0

Fuente: Ministerio de Industria (1980).

<sup>12</sup> La dispersión del tamaño de los establecimientos es el doble que la de la productividad: 1.25 si se toma como indicador de tamaño la relación personal/establecimiento, y 1.23 si se toma la relación valor agregado/establecimiento, frente a una dispersión de la productividad (valor agregado/personal) de .65. La dispersión de la composición orgánica del capital sería .76 y la de la tasa de plusvalía 1.01 (Vilas 1982b).

<sup>13</sup> Se considera *pequeña industria* la que ocupa menos de 30 trabajadores. Por lo tanto incluye los establecimientos con menos de 5 trabajadores, que en cambio se excluyen del cuadro II.15. Cf. Ministerio de Industria (1980).

pequeña industria corresponde a trabajadores familiares no remunerados, pero en establecimientos con menos de tres trabajadores llega a 57 %. El 77 % de los establecimientos está ubicado dentro de la vivienda del propietario —83 % en alimentos, 80 % en vestido, 81 % en calzado, 74 % en madera y muebles.

Por su magnitud y por su articulación en el conjunto de la economía, la pequeña industria no puede pensarse como *marginal*. La demanda de amplios sectores del mercado —incluidos los grupos de ingresos medios y altos— se satisface con la producción generada por ella. La imagen de una especie de mercado industrial paralelo para los grupos de ingresos inferiores, que correría por cuenta de la pequeña producción industrial, tampoco tiene validez en Nicaragua. La pequeña industria compite con la mediana y grande por el mismo mercado, y en algunos rubros llega a controlar porciones significativas de él: calzado, vestido, panificación, imprentas... Tampoco es un sector *tradicional*; participa activamente en las exportaciones y es un importante importador de insumos. En vestido 87 % de los insumos utilizados en 1980 fue importado (telas, colorantes, hilos), en imprentas 83 %, en químicas 66 %, etcétera.

La participación de la pequeña y mediana propiedad y producción tiene como complemento una participación relativamente reducida de la gran burguesía en la actividad productiva directa. Ya se ha visto no obstante que el panorama no es homogéneo y que existe un corte bastante marcado entre el sector agropecuario y el sector industrial. En aquel, la gran burguesía representa efectivamente una proporción pequeña de la producción, mientras que en la industria genera más de 80 % del valor agregado y dos tercios del empleo, configurando el perfil de una concentración oligopólica del capital. La pequeña dimensión del país, una población reducida, la concentración del ingreso en grupos minoritarios, favorecieron las tendencias concentradoras de la economía industrial-urbana y le permitieron alcanzar niveles de concentración monopolítica u oligopólica más temprano que otras economías capitalistas de dimensiones mayores.

La participación de la gran burguesía nicaragüense fue particularmente fuerte en lo referente al capital comercial y financiero —este último sobre todo a partir de los años '50. Es aquí donde se encontraba el centro del poder económico del gran

capital local y el ámbito de su articulación fundamental con el imperialismo y con el Estado. El control del capital financiero y comercial en su sentido más amplio —bancos y compañías financieras, operaciones inmobiliarias, seguros y reaseguros, financiamiento de actividades productivas, importación y exportación, etc.— más que una participación cuantitativamente significativa en la propiedad de los medios de producción, fue lo que puso en manos de esa fracción de clase el manejo de la economía del país y la función de mediación respecto de los intereses y la presencia imperialista.

A diferencia de lo que se observa en otras formaciones económico-sociales del continente, en Nicaragua la ausencia de una articulación al mercado internacional a través de un enclave extranjero no significó que esa vinculación fuera canalizada por una gran burguesía local propietaria en gran escala de los medios y condiciones de producción en el sector exportador. Pero la participación en el sector de exportación, de las fracciones pequeñas y medianas del capital productivo nacional, no significó en definitiva un paralelo control de la producción, en la medida que esas fracciones estaban subordinadas a través del financiamiento, la comercialización y el procesamiento agroindustrial, al capital de la gran burguesía local y del exterior, y a las agencias del Estado dictatorial. En su momento, la constitución de un área de propiedad social sobre los medios de producción a partir del triunfo revolucionario del 19 de julio de 1979, habrá de expresar en su efectiva configuración y alcances estas especificaciones del capitalismo nicaragüense.

Pero lo propio de este capitalismo, y sobre todo del capitalismo agrario, no consistió únicamente en el fuerte peso de la pequeña y la mediana producción, sino asimismo en *el modo en que ellas se articularon al ciclo general del capital*.

Sí ir más lejos, también en Costa Rica la pequeña propiedad tiene una presencia marcada en la estructura agraria, incluso en escala de tamaño menor que en Nicaragua (cf. *supra* cuadro II.13). Pero la articulación de esta masa de pequeños productores con la burguesía agraria se dio en términos tales que generó la base material de un sistema político relativamente estable y, hasta hace pocos años, de indudable legitimidad (cf. Stone 1975; Vega Carballo 1979).

Lo que en Costa Rica fue interdependencia y complementación entre latifundio y minifundio, entre agricultura, comer-

cialización y procesamiento, en Nicaragua fueron contradicciones y explotación.

En primer lugar, en Nicaragua se desarrolló relativamente temprano —por comparación con economías de mayor nivel de desarrollo capitalista— un proceso de progresiva integración y fusión del capital comercial y financiero con el capital agroindustrial y en general productivo, configurándose como resultado un conjunto pequeño pero poderoso de *grupos financieros*. En un tiempo relativamente corto estos grupos llegaron a controlar porciones importantes de actividad en sectores como construcción, finanzas (bancos, seguros), comercio, agroindustria, manufacturas, negocios inmobiliarios (cf. Strachan 1976, cap. II; Wheelock 1976, cap. VI). La velocidad de este movimiento de capitales, su impacto sobre la estructura de producción y en la esfera de la circulación, la asociación con capitales imperialistas, la participación del Estado somocista, y el contraste con las prácticas económicas de la gran burguesía tradicional y de las fracciones medias y pequeñas del capital, influyeron para que a veces se sobredimensionara la magnitud del control de la economía por estas fracciones modernas del gran capital. Ello no obstante es indudable que a lo largo de las décadas de 1960 y 1970 estos grupos alcanzaron una participación importante en la gestión del capitalismo nicaragüense, particularmente en sus sectores más dinámicos, constituyeron la contraparte local de las nuevas modalidades del proceso de valorización del capital en escala transnacional, y definieron nuevas y más eficientes formas de subordinación de las fracciones menores del capital local y de explotación de la fuerza de trabajo.

En segundo lugar, las orientaciones económicas de buena parte de la gran burguesía —especialmente terrateniente— parecen no haber estado totalmente liberadas de elementos que no son propiamente capitalistas. Formas de subordinación de la fuerza de trabajo como el colonato, la mediería, la aparcería, aunque no fueron dominantes, subsistieron hasta el derrumbe de la dictadura en 1979. La posesión de vastas extensiones significó en muchos casos más la disposición de un bien de renta —o incluso de atesoramiento— que un medio de producción. O bien su utilización productiva demandaba un capital de trabajo que excedía las posibilidades del terrateniente, poniéndolo en la alternativa de reproducir esos patro-

nes de comportamiento no-empresario marginándose de la modernización, o aceptar las condiciones del capital financiero y comercial de los nuevos grupos.

Ya se ha señalado que a diferencia de Guatemala o El Salvador, la figura de la hacienda tradicional no es en absoluto el elemento central de la organización de la economía agropecuaria en Nicaragua. Pero de todos modos la reducida participación de la gran burguesía agraria en la producción, tal como se muestra en el cuadro II.14, contrasta vivamente con la elevada concentración de tierra en sus manos (cf. cuadro II.13). Esta relación tan agudamente polarizada entre tenencia y producción indica la existencia de un comportamiento de clase con fuertes elementos de ociosidad y ausentismo; se ha estimado en este sentido que 65 % de los grandes terratenientes no residía en las fincas: la mitad de ellos se trasladaba al campo sólo en la época de la cosecha, y el resto sólo lo hacía esporádicamente.

El comportamiento político de estos grupos expresó con bastante fidelidad las determinaciones de esa forma de inserción en la estructura material de la sociedad. Su progresiva subordinación respecto del polo dinámico hegemonizado por los nuevos grupos financieros y el Estado somocista, la falta de un proyecto alternativo de dominación, su debilidad como fracción de clase desde una perspectiva propiamente capitalista, condicionaron su participación en el terreno político a un papel estrictamente subordinado. Carentes de fuerza, y posiblemente de interés, para aspirar a un control efectivo del poder político nacional —lo cual habría implicado un enfrentamiento abierto y directo con la dictadura—, se limitaron en general a presionar desde afuera del Estado, para luego negociar y transar alguna forma de inserción en los ámbitos marginales de la institucionalidad del Estado dictatorial.

La fracción de productores agrícolas que se halla debajo de esa gran burguesía terrateniente y encima del minifundio —lo que en el cuadro II.14 se identifica como burguesía mediana— presenta en cambio un perfil diferente. Clase de gente hecha por sí misma, su relación con la tierra se da en términos eminentemente productivos. En el caso de los productores propietarios se trata de una relación de *propiedad económica* y no simplemente jurídica, vale decir capacidad efectiva de destinar los medios de producción a aplicaciones determinadas y de

organizar y dirigir el proceso productivo —aunque su subordinación al gran capital comercial, financiero y agroindustrial relativizaba bastante esa capacidad real de dirección. El empleo de trabajadores ajenos a la unidad familiar es reducido y sobre todo estacional en el caso de los cultivos de exportación. Estos rasgos, más la atención directa de la marcha de la producción, e incluso su incorporación, en los estratos inferiores de la fracción, a las tareas productivas, se conjugan con la residencia en la finca o en núcleos urbanos de la zona, y con un estilo de vida no consumista y en general modesto: lo que Baumeister (1982) llama *burguesía chapiolla*. El excedente que finalmente quedaba en manos del productor se destinaba fundamentalmente a la satisfacción de sus necesidades básicas y a revertirse productivamente en la finca.<sup>15</sup>

Las contradicciones que relacionaban a la pequeña y mediana producción con la gran burguesía y el Estado somocista surgían de la propia estructura económica y se expresaban en sus definiciones políticas.

Baumeister (1982 y 1983) ha analizado de qué manera esta amplia fracción de productores quedaba subordinada al capital financiero, comercial y agroindustrial de la gran burguesía nicaragüense y el imperialismo, y al Estado somocista. Ya se ha visto que la mayor parte de la producción agropecuaria estaba en manos de sectores con una presencia débil en el control del procesamiento agroindustrial, la comercialización interna y externa y el financiamiento bancario o extrabancario. Recíprocamente, los capitales establecidos fuera de la producción agropecuaria (en el comercio, el financiamiento, el procesamiento) no generaban proporciones significativas de la producción en fincas. Vale decir, existía una débil integración entre la etapa de la producción directa, y la comercialización, financiamiento

<sup>15</sup> Cf. por ejemplo Coronel Kautz (1961): "Aunque parece fácil ser ganadero, se necesitan ciertas cualidades indispensables. Se necesita una actitud moderada ante la vida, un gran sentido común, una pequeña cantidad de conocimientos técnicos, o saber dónde encontrarlos, un gran amor por los animales y añadir a todo esto, para tener éxito, vivir en la hacienda todo el tiempo. Esto último es lo verdaderamente indispensable, todo lo demás se adquiere llenando ese requisito. En Nicaragua, me atrevería a decir que menos del 5 % de los dueños de haciendas viven en ellas". "Es claro que este modo de ver las cosas y de verse a sí mismo, debía entrar en contradicción con la práctica de los grandes terratenientes, ausentistas y poseedores de tierras ociosas."

y elaboración industrial, pero en cambio era estrecha la integración entre estas tres esferas.

En el café los propietarios de beneficios de café eran importantes compradores e incluso exportadores que, al mismo tiempo, financiaban a sus vendedores (los productores directos) de café. Todavía a fines del período somocista una sola firma comercializaba más de 50 % de la producción de café de la zona norte central (Matagalpa y Jinotega). La diversificación de sus negocios iba desde el financiamiento, beneficio, trillo, etc., hasta la compra y operaciones de exportación, pasando por la venta de accesorios, maquinaria agrícola, abonos, la propiedad de fincas, etc. (Wheelock 1976, 144). En el sector ganadero más de 30.000 productores se enfrentaban a solamente siete mataderos de exportación, tres firmas exportadoras y tres bancos. Los grandes mataderos —donde la presencia del capital somocista era importante— compraban el ganado, financiaban a los productores, procesaban la carne, y la exportaban. Entre 50 % y 60 % del faenamiento nacional era controlado por cuatro grandes mataderos de exportación, mientras el resto se desperdigaba en más de un centenar de rastros municipales (D. Castiño 1980a: 109).

En el algodón varios miles de productores se relacionaban con 28 desmotadoras, 11 firmas exportadoras y tres bancos —el más importante de ellos, estatal. El papel financiero del capital comercial-agroindustrial era relativamente menor que en el café y la ganadería, pero la cadena de capitales extra-agrarios era más compleja ya que se agregaban los terratenientes rentistas, los proveedores de agroquímicos y las aceiteras. Entre 50 % y 60 % de la producción algodonnera se realizaba en tierras arrendadas a terratenientes, y la expansión de la superficie cultivada se efectuaba ampliando el área arrendada; en los últimos años del somocismo la renta del suelo llegó a representar hasta 25 % del ingreso del productor (O. Núñez 1980a; Baumeister 1983). La proporción de tierras arrendadas era mayor en los productores medianos; los grandes productores empleaban fundamentalmente tierras propias y, al contrario, era frecuente simular arrendamientos a miembros de sus familias. El 75 % de las ventas de algodón en rama era controlado por las desmotadoras y 95 % de las ventas de algodón oro estaba en manos de intermediarios (O. Núñez 1980a, pág. 30). La formulación y comercialización de agroquímicos estaba controla-

da asimismo por un pequeño número de casas comerciales privadas en varias de las cuales había capitales de los grandes productores.

Esta contradicción entre niveles relativamente altos de concentración de la propiedad en los sectores no agropecuarios y la relativa dispersión de la producción en fincas se veía reforzada por la fuerte dependencia del crédito. Hacia fines del somocismo el crédito bancario agropecuario representaba en Nicaragua 62 % del producto del sector, frente a 64 % en Costa Rica, 25 % en El Salvador, 31 % en Honduras y 10 % en Guatemala (Baumeister 1982). Pero los productores pequeños no tenían acceso al crédito bancario y dependían del financiamiento de los comerciantes o del capital agroindustrial, quedando endeudados por adelantado, entrampados en un sistema de ventas forzosamente anticipadas de las cosechas, sin capacidad de ingerencia en el precio de las mismas. Según Orlando Núñez (1980a) 93 % del algodón oro se vendía de futuro, pero sólo 13 % de los agricultores conocía los precios del mercado nacional, y apenas 11 % los del mercado internacional.<sup>10</sup>

El productor agropecuario debía así tributar renta de la tierra, interés y renta comercial, a sectores ubicados en lo fundamental fuera de la producción. El capital productivo aparecía en consecuencia subordinado al capital comercial y finan-

<sup>10</sup> La supeditación de la entrega de crédito a los productores que obtuvieran cierto rendimiento mínimo (25 qq/manzana) discriminó a los algodoneros pequeños y los condenó a un círculo vicioso de crecimiento-marginamiento: no percibían crédito bancario por sus bajos rendimientos, y la falta de crédito les impedía efectuar las inversiones necesarias para elevar los rendimientos. Por otro lado, la fijación de precios para la semilla de algodón definía en los hechos un subsidio a las plantas industrializadoras de aceite, en perjuicio del productor agrícola. En el ciclo agrícola 1973-74 las ventas de futuro efectuadas a Japón se transaron a un precio que resultó ser casi 10 dólares menor, por quintal, que el efectivamente alcanzado por el mercado internacional cuando debía materializarse la entrega del producto. Los algodoneros se movilizaron para obtener del Estado una reformulación del acuerdo que les permitiera beneficiarse de la bonanza; sin embargo, el decreto del 9 de marzo de 1974 los obligó a entregar inmediatamente el 70 % del algodón contratado de futuro a los precios convenidos en los contratos respectivos, dejando liberado sólo 30 % de la producción. La pérdida que esto ocasionó a los algodoneros nicaragüenses se ha estimado en alrededor de 40 millones de dólares. Cf. una reseña de las contradicciones entre las distintas fracciones de productores de algodón y el Estado somocista, en Navas Mendoza *et al.* (1983).



ciero de la gran burguesía y extranjero. Pero en realidad, esa subordinación era la forma de expresarse la dominación que el proceso de valorización del capital en escala transnacional ejercía sobre la economía nicaragüense, y la articulación de la gran burguesía y el Estado dictatorial a esa dominación.

Estos elementos objetivos en la configuración de los medianos productores rurales favorecieron en ellos el desarrollo de orientaciones democráticas y reformistas. Al no descansar su actividad productiva en la explotación de fuerza de trabajo, o al hacerlo de manera reducida o estacional, pudieron sentir y visualizar con más claridad las diversas modalidades de opresión política y de subordinación a los terratenientes y al gran capital, sin tener como retaguardia la posibilidad de trasladar hacia el asalariado por lo menos una parte del costo de una y otra. Al mismo tiempo la heterogeneidad de estas fracciones medias de la burguesía agraria en lo que toca a su acceso a la tierra y a las condiciones de organización de la producción, generaron una paralela heterogeneidad y complejidad en las demandas formuladas. La presión por la tierra se conjuga aquí con la reivindicación de condiciones empresariales de explotación: crédito, insumos, asistencia técnica, precios, condiciones favorables de comercialización...

Las contradicciones con la gran propiedad terrateniente y el gran capital comercial, financiero y agroindustrial se agudizaron en los años '70, en un contexto de expansión de la producción agropecuaria y de alza de los precios internacionales. La evidencia de que la bonanza exógena era apropiada exclusivamente por la gran burguesía, y que el Estado somocista participaba activamente en esta desigual distribución de ganancias y pérdidas, profundizó las contradicciones y abonó el terreno para la política de acumulación de fuerzas del FSLN respecto de estos sectores de la producción rural.

Sin embargo, el dinamismo de la mediana producción rural y sus reivindicaciones frente al Estado dictatorial y la gran burguesía no deben ocultar la existencia de una enorme masa campesina, por debajo de ella, y que fue quien en definitiva pagó las cuentas del sistema económico imperante. En términos generales el campesinado nicaragüense representaba a fines de los '70, el 60 % de la PEA rural —aproximadamente unas 260.000 personas. De acuerdo a estimaciones aproximadamente 22 % son campesinos medios, y el resto minifundis-

tas en proceso de proletarización, que estacionalmente se incorporan a relaciones salariales ya que su acceso a la tierra no genera un ingreso suficiente para la subsistencia (cf. *supra* cuadro II.11). Carentes de tierra suficiente y apropiada, con condiciones primitivas de explotación, rendimientos bajos, sin acceso a financiamiento o tecnología, en los últimos treinta años los campesinos nicaragüenses sufrieron un acelerado proceso de expulsión de sus tierras originales, primero por el algodón y posteriormente por la ganadería de exportación, y fueron desplazados hacia zonas de frontera. La falta de vías de acceso y la baja densidad de población ahondan la dispersión de la clase y su aislamiento espacial.

Ya se ha visto sin embargo que con poco más de 10 % de la superficie generan una cuarta parte del producto agropecuario; el atraso productivo no equivale en consecuencia a *marginalidad*, sino que expresa antes bien las condiciones de explotación y opresión en que la clase se integra a la estructura económica.

Se trata sin embargo de una clase que presenta profundas diferenciaciones internas, tanto en términos de la dotación de factores como por sus orígenes históricos y su emplazamiento espacial. Es posible distinguir en este sentido entre el campesino pauperizado de la zona del Pacífico y el campesino medio y rico del interior del país. En aquella, el desarrollo de la agroexportación se expresa en la presencia de un gran número de campesinos semiproletarios, empujados por el cultivo de algodón a las tierras marginales de los departamentos de León y Chinandega, y que funciona como fuerza de trabajo de reserva para la cosecha algodonera; en otros departamentos de la misma zona, existe en cambio articulado a la producción ganadera más moderna y a la producción cafetalera (Rivas, Carazo, Granada). El sustento de este campesinado reposa en la producción de subsistencia (maíz, frijol, trigo) y en el trabajo temporal en la agroexportación; en algunos lugares de la zona se caracteriza asimismo por la existencia de un minifundio muy fragmentado que combina la producción de café en muy pequeña escala, frutas, hortalizas y granos básicos, con las migraciones temporales a los cortes de café (MIDINRA 1982a). Todavía a fines de la década del '70 la renta monetaria que debían tributar a los dueños de la tierra, se combinaba con la renta en trabajo y especie.

En cambio, en el interior del país el menor desarrollo del capitalismo dependiente y la existencia de una amplia frontera agrícola posibilitaron la formación de un campesinado medio y rico sobre la base de la producción cafetalera y ganadera en las zonas donde el latifundio no había penetrado. El campesino medio y rico de los departamentos de Matagalpa, Jinotega, y parte de Boaco, Chontales, coexiste con las explotaciones de café y ganado y se aprovecha de la infraestructura existente; si en la zona del Pacífico la falta de tierra suficiente y el peso de la renta terrateniente constituyen el problema principal, en el caso de los campesinos cafetaleros del interior radica más bien en la falta de capital y de fuerza de trabajo, mientras que los ganaderos son afectados por la falta de tierra suficiente para aumentar el rebaño (MIDINRA 1982c). Por su parte el campesino medio de frontera agrícola (Nueva Segovia, norte de Jinotega, Matriz) practica una agricultura migratoria en unidades de producción relativamente extensas y de posesión precaria; el sistema de preparación de la tierra (desmonte y quema) y la falta de fuerza de trabajo suficiente sólo le permiten poner en producción, cada año, porciones muy reducidas de su superficie.<sup>17</sup> En su gran mayoría, son campesinos expulsados de sus tierras por el desarrollo del café y la ganadería que se dio en la región; su principal problema consiste en la falta de condiciones que les permitan poner en producción porciones mayores de su tierra (tecnología, fuerza de trabajo, crédito...) y de infraestructura (camino y vías de acceso) para la comercialización (G. Báez 1981; Morales 1981); esto compele a parte de ellos a vender su fuerza de trabajo en el corte del café. Finalmente se encuentran en esta región campesinos de subsistencia de la zona seca que constituye el ejército de cortadores de café y tabaco (desde el norte de Nueva Segovia, pasando por los departamentos de Matriz, Estelí, y el suroeste de Matagalpa). Aquí se registran los mayores índices de pobreza rural, y el predominio de formas precapitalistas articuladas al latifundio ganadero extensivo.

Esta diferenciación se traduce en una marcada diversidad de las demandas del campesinado: tierra, condiciones empre-

<sup>17</sup> Este método de preparación de la tierra ha sido descrito con detalle por Lévy (1976: 385-387); sus efectos sobre la ecología generalmente son muy negativos.

sariales de explotación, infraestructura, condiciones de comercialización. Con posterioridad al triunfo de la revolución, esta diferenciación se expresará asimismo en el distinto involucramiento en formas diferentes de organización (cf. *infra*, capítulo IV, sección 5).

También en esto la situación fue diferente en el área urbana. La gran burguesía da cuenta aquí de una proporción importante de la producción. Ya se señaló no obstante que la eficiencia capitalista de esta fracción no debe ser exagerada, por más que contraste nítidamente con las orientaciones y prácticas de la burguesía terrateniente. La pujanza que alcanzaron en su actividad se explica no sólo por la eficiencia productiva o una acertada gestión empresarial, sino también por un hábil relacionamiento con el Estado dictatorial y con las nuevas modalidades de penetración imperialista en la economía nacional. La política, como práctica de la organización y conducción de la sociedad —por lo tanto, como proyecto nacional— no parece haber formado parte del orbe de preocupaciones de estas fracciones sino muy recientemente, cuando el avance de la lucha sandinista era ya irrefrenable. Hasta entonces estos grupos se mantuvieron más bien concentrados en su propia práctica económica, presionando al Estado desde afuera y en función de medidas y reivindicaciones fundamentalmente categoriales. La política se diluía en un sistema de presiones específicas y demandas concretas orientadas a la valorización de su capital. Reconocía por lo tanto la legitimidad del orden político de la dictadura; sus reclamos fueron en general cautos y sólo cuando la revolución se hizo evidente como posibilidad real e inmediata, las contradicciones categoriales con la camarilla somocista empezaron a procesarse en términos de diferencias políticas.

El pequeño y mediano empresario productivo urbano, por su parte, tiene una participación relativamente reducida en la producción y en el empleo, pero la base de la valorización de su capital y de su reproducción como clase es la misma que la del gran capital: la explotación de la fuerza de trabajo. Hay aquí la articulación de dos contradicciones. Una, en el seno de la clase, con el gran capital en la medida en que éste expropia parte del excedente de las fracciones menores a través de mecanismos como la generación de rentas monopólicas, las diferencias de productividad, el tipo de interés del capital de prés-

tamo, etc. Y otra contradicción, ésta sí antagónica, con la clase obrera y con sus expresiones organizativas, que en caso de éxito se traducen en una reducción adicional de la cuota de ganancia. Ya se ha señalado, además, que estas fracciones menores del capital no son mucho más ineficientes que la gran burguesía, y aunque la tasa de plusvalía que extraen de su fuerza de trabajo es más baja que la que extrae el gran capital —denotando en algunos casos elementos no propiamente capitalistas de gestión de la fuerza de trabajo—, esa diferencia es en general menor que las diferencias de tamaño de los establecimientos respectivos.

La mayor presión sobre la fuerza de trabajo —en términos económicos y políticos— fue la respuesta adaptativa a las contradicciones emanadas del proceso productivo en el seno de la clase: la política laboral del Estado somocista y sus aparatos represivos estuvieron siempre al servicio de las demandas patronales de "mano dura" y disciplina obrera. En esto la unidad de la clase demostró ser muy sólida. En consecuencia el desarrollo de posiciones democráticas, antiimperialistas y revolucionarias tuvo lugar en las ciudades, fundamentalmente, en el amplio espacio del artesanado y en general en el ámbito de la pequeña propiedad personal o familiar.

#### 4. Débil presencia económica directa extranjera

El capital extranjero no alcanzó una gravitación determinante en la estructura económica de Nicaragua. La propiedad de medios de producción estuvo siempre fundamentalmente en manos de capitalistas y productores locales. Las inversiones extranjeras en sectores como el bananero, maderero y minería fueron de monto global relativamente reducido. El enclave de plantación al estilo de Honduras, o incluso de Costa Rica y Guatemala, casi no existió en Nicaragua, y la participación de estos rubros en la actividad económica del país y en su articulación al sistema internacional a través de las exportaciones venía en retroceso desde varias décadas antes del triunfo revolucionario.

El punto máximo de la producción bananera por las corporaciones norteamericanas (United Fruit/Standard Brands, y Standard Fruit/Castle & Cook) se alcanzó en la década de 1930, pero de todos modos con un peso secundario respecto del café (Velázquez 1977 y *supra* cuadro II.1). Éste, como posteriormente el algodón y la ganadería de exportación, siempre estuvo a cargo de productores locales. Desde esta perspectiva, Nicaragua presentaría una situación de "control nacional del sistema productivo" de exportación en todos los períodos de "expansión hacia afuera", de acuerdo a la categorización de Cardoso y Faletto (1969), aunque sin la nitidez del caso salvadoreño a causa de estas formas subordinadas de agroexportación a cargo de corporaciones extranjeras. Ya se señaló en la sección anterior, sin embargo, que la propiedad nacional del sector de exportación no aparejó un efectivo control del mismo, en cuanto la gravitación extranjera, débil en la esfera de la producción, fue sin embargo considerablemente fuerte en el ámbito de la comercialización y el financiamiento, y en la determinación de los precios externos; esto permitió al capital extranjero obtener la subordinación de la producción local con poca inversión en el ámbito estrictamente productivo.

Con el auge algodonero y la vigencia del esquema de integración regional las inversiones extranjeras directas, norteamericanas sobre todo, incrementaron su magnitud, pero siempre dentro de una escala reducida. Entre 1959 y 1969 pasaron de 18.7 millones de dólares a 76.3 millones, y se orientaron de manera creciente hacia la industria manufacturera. Pero de todos modos a mediados de la década de 1970 Nicaragua recibía solamente 9.4 % (90 millones de dólares) de toda la inversión directa de los países del CAD-OCDE radicada en el istmo, y hacia 1977-78 sólo 15 % de los 614 establecimientos de firmas transnacionales con actividad en Centroamérica estaba radicado en Nicaragua; el 86 % de esas firmas era de origen norteamericano (D. Castillo 1980a). En vísperas de la caída de la dictadura se estimaba que el total de la inversión extranjera en el país oscilaba entre 95 y 130 millones de dólares.

Además de la ya mencionada alta concentración de la inversión extranjera directa en el sector manufacturero, dentro de éste 71 % de las empresas extranjeras operaba en la industria química y en agroindustria. Vale decir, actividades complementarias de la producción de exportables. La inversión

directa extranjera tendió así a especializarse en rubros complementarios de la actividad exportadora: insumos, procesamiento y similares, en un esquema de relacionamiento dinámico con los productores locales que no los desplaza de la propiedad de los medios de producción en los sectores más estratégicos de la economía, pero que a la postre los subordina a las etapas del ciclo del capital controladas directamente por el capital extranjero.

La fuerte dependencia externa de la economía nicaragüense se consiguió en consecuencia con relativamente poco capital y se dio a través de la circulación y la realización del capital más que a través de la producción directa de exportables o para el mercado interno. La especialización exportadora, la reducida incidencia en los mercados internacionales, la incapacidad para fijar precios, la extrema apertura externa de la economía, son otros tantos canales de sujeción a un sistema económico internacional diseñado y controlado por el imperialismo. El comportamiento político genuflexo de la dictadura somocista y de la gran burguesía reforzó la dinámica objetiva del diseño imperialista, reproduciéndola como estrategia política de valorización de su propio capital.

Por lo tanto, más que en términos económicos directos, la gravitación del imperialismo, intensa como fue, se manifestó sobre todo como potencia político-militar. Bajo la dictadura somocista Nicaragua fue para Estados Unidos más un voto obsecuente en los organismos internacionales y un aliado seguro para su control de la región, o territorio de reserva para un eventual segundo canal interoceánico, que un emplazamiento significativo de inversiones productivas.

Fue un imperialismo de embajadores y generales, más que de industriales y de banqueros. Desde su independencia de España, la historia de Nicaragua tiene como hilo conductor la lucha por la sobrevivencia nacional frente a las agresiones militares norteamericanas. La entronización de la dictadura de Somoza en la década de 1930 es la culminación de una serie de intentos que se inician en realidad con Walker a mediados del siglo XIX. El estilo personal que éste impuso a su aventura no debería oscurecer la articulación de su proyecto con los designios imperiales norteamericanos, que se mantendrán como una constante a lo largo de todo el siglo siguiente. País pobre, pequeño, atrasado, Nicaragua fue siempre presa fácil de las

ambiciones expansionistas del norte conjugadas con la obsecuencia genuflexa de las clases dominantes locales. El antiimperialismo, en consecuencia, es la manera de expresarse a un mismo tiempo la identidad nacional y de clase de un pueblo en lucha.<sup>18</sup>

En estas condiciones el componente político-ideológico de las tareas antiimperialistas, su dimensión en materia de relaciones internacionales, de no alineamiento, de redefinición de la inserción en la economía internacional, de aproximación al sistema socialista de países, serán de tanta o más relevancia que la cuestión de la nacionalización de los activos extranjeros radicados en el país.

## 5. El papel del Estado somocista

Las facetas más conocidas del Estado somocista son su fuerte contenido represivo y su instrumentalidad en el proceso de rápido enriquecimiento de la familia Somoza, todo ello en el marco de una fuerte personalización del poder. Sin embargo la personalización del Estado y la política y el carácter evidentemente dinástico de la dictadura no deberían opacar el contenido de clase de uno y otra. Esos aspectos fueron en definitiva producto y expresión del tipo de capitalismo medio burgués y medio oligárquico que se desarrolló en Nicaragua a impulsos de su subordinación a la dominación imperialista; un capitalismo en el cual los linajes familiares, las relaciones personales, el caudillismo, eran todavía la forma de manifestarse el trabajo movimiento de constitución de una burguesía desde el seno de una sociedad oligárquica. Las pugnas entre familias, las riñas entre *generales* autodesignados, fueron durante un largo trayecto la expresión que adquirieron en este tipo de capitalismo periférico las contradicciones internas de una clase cuya formación estaba aún en proceso.

El Estado somocista fue un efecto de este movimiento y de la dominación que sobre él ejerció el imperialismo estadounidense. Más aún, fue un producto directo de las invasiones mili-

<sup>18</sup> Cf. Morales (1981: 24-25); Ramírez (1983a y b).



tares norteamericanas; ellas sentaron las condiciones para la estructuración de un Estado cuyo poder y cuyos aparatos estuvieron desde su origen ligados a la figura del dictador. Con todas sus limitaciones, con el espacio que dejaba para la presencia y reproducción de fuerzas y relaciones no plenamente capitalistas, el Estado somocista fue la forma históricamente determinada que asumió en Nicaragua el Estado capitalista. Fue, pues, el Estado de la familia Somoza, pero fue también, a su manera, el Estado del capital.

Como tal, el Estado nicaragüense contribuyó decisivamente al avance del capitalismo en el país. La expansión, diversificación y modernización de la economía que tuvo lugar a partir de la década del '50 halló en él un aliado fundamental. El Estado asumió un papel activo en el proceso de valorización, especialmente a través de la construcción de una infraestructura vial y energética y del financiamiento otorgado por el Banco Nacional.

A comienzos de los años '50 Nicaragua era todavía un país con una problemática integración física, incluso la región del Pacífico. La falta de vías de acceso dificultaba la llegada de la producción a los centros de acopio y distribución, y a los puertos de embarque. En 1951 la red vial cubría menos de 2.500 km, pero la acción decidida del Estado la extendió rápidamente; en 1958 llegaba a más de 5.500 km y en 1962 a casi 6.300 km. En el mismo lapso la inversión pública destinada a servicios económicos se multiplicó por seis en valores reales. La inversión en energía pasó de C\$ 3.4 millones promedio anual en 1950-54 a C\$ 20.4 millones promedio anual en 1960-63 (Belli 1975). El crédito público por su lado facilitó a los productores algodoneros el acceso a insumos agroquímicos, a nuevas variedades de semillas y a la compra de maquinaria y equipo.<sup>19</sup> A través del Banco Nacional y del Instituto de Fomento Nacional (INFONAC) el Estado otorgó capital de préstamo a precio barato y asistencia técnica para la promoción de actividades como tabaco, carne, mariscos, banano, arroz de riego —en muchas de las cuales la familia Somoza incurrió—. Pero según ya se señaló, las políticas de fomento, las inversiones en infraestructura

(caminos, energía, irrigación) y el crédito y los insumos subsidiados, estuvieron orientados sobre todo hacia los grandes productores para la exportación y las actividades conexas de procesamiento.

Las tensiones generadas por las transformaciones que tenían lugar en el agro nicaragüense incrementaron el malestar en la población rural por el favoritismo hacia los grandes productores, la pérdida de tierras y el empobrecimiento creciente del campesinado y el semiproletariado. Durante la década de 1960 se registraron más de doscientas invasiones de tierras y desalojos en la región del Pacífico, y lentamente fue creciendo la adhesión de los sectores desplazados por la expansión capitalista en el campo, a la oposición a la dictadura.

En esta época, de aires reformistas y modernizantes impulsados por la Alianza para el Progreso, el Estado somocista encaró algunas medidas redistributivas tendientes a morigerar el malestar rural e impulsar modificaciones necesarias para el tipo de capitalismo agroindustrial que se desarrollaba en la región. Tierras marginales fueron distribuidas a grupos campesinos, pero en cantidad reducida, de calidad inferior, y sin el necesario complemento de asistencia técnica e insumos. El corto alcance de estas medidas provocó más frustración que soluciones y fortaleció el enfrentamiento de los sectores desilusionados con el régimen (Talavera, 1978; Morales, 1981).

A mediados de los años '70 se creó el Instituto de Bienestar Campesino, con financiamiento de la AID. El Instituto orientó su acción en el sentido del desarrollo rural integrado, con proyectos que combinaban otorgamiento de crédito y asistencia, entrega de tierras, construcción de caminos, salud, desarrollo comunitario. Aunque más dinámico que las experiencias del decenio previo, su cobertura fue escasa y tuvo en cuenta más a los estratos superiores del campesinado que a los más necesitados, sirviendo en los hechos para consolidar a una reducida fracción de la pequeña burguesía rural. Por otro lado, la masa de financiamiento externo era depositada en las instituciones bancarias de la gran burguesía financiera y de la familia Somoza y utilizada por ellas para sus propias inversiones, funcionando en consecuencia como canales de transferencia de recursos líquidos hacia los sectores de actividad controlados por los grupos respectivos (O. Núñez 1980a; Mayorga 1981).

<sup>19</sup> Ya en 1951 el 50 % de las habilitaciones crediticias del Banco Nacional de Nicaragua estaba destinado a la producción de algodón (Núñez Mendoza *et al.*, 1983).

La subordinación de las tímidas políticas reformistas a un proyecto de modernización y expansión del capital hegemonizado por el grupo gobernante apuraron su fracaso y pusieron de relieve una vez más que la represión constituía la forma privilegiada de relacionamiento del Estado con las masas populares. El reformismo, como antes las veleidades demagógicas, eran producto de la necesidad de acumulación y de reproducción política, no de la justicia social o la democracia. Del mismo modo que las medidas represivas eran instrumentales para el proyecto de enriquecimiento y acumulación palaciego. La implantación del estado de sitio desde finales de 1974 —tras el audaz operativo sandinista contra la residencia de José María Castillo— hasta setiembre de 1977, serviría al régimen no sólo para tratar de desarticular la organización del FSLN y de cortar su enraizamiento en las masas, sino asimismo como enmarcamiento institucional para incrementar la explotación de la fuerza de trabajo: represión sindical, cercenamiento de conquistas laborales, etc., que se tradujeron en un incremento de la presión del capital sobre las masas trabajadoras.<sup>20</sup>

La usual reducción del somocismo a mero aparato represivo ha llevado algunas veces a enfatizar los intentos de la dictadura de ganarse algún apoyo popular y constituirse una base de hegemonía y no sólo de coerción (cf. por ejemplo A. Chamorro 1982). La idea es correcta en cuanto contribuye a elaborar un panorama más completo del régimen, pero el análisis de estos aspectos no debe perder la perspectiva de conjunto ni soslayar por lo tanto el papel subordinado de esos intentos a una estrategia de poder de clase.

Las aproximaciones de la dictadura a algunos segmentos de la clase trabajadora, cuando tuvieron lugar, fueron en realidad producto de una estrategia del somocismo en la cual la relación Estado/clases populares era parte de la relación que se buscaba establecer entre el Estado y el resto de las clases dominantes enroladas en el Partido Conservador. Cuando esta relación se trabó y consolidó, la necesidad o utilidad de un enfoque de

<sup>20</sup> El mayor incremento de la asistencia norteamericana al régimen somocista tuvo lugar en los inicios del programa de la Alianza para el Progreso, especialmente en materia de asistencia militar. En 1962 la asistencia económica media anual se duplicó, pero la asistencia militar creció siete veces (Booth 1982a, pág. 75).

las clases populares en términos de hegemonía perdió sentido y viabilidad.

Sobre todo en la coyuntura abierta hacia las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, la dictadura del primer Somoza se vio enfrentada a movilizaciones de grupos de pequeña y mediana burguesía respaldados por el Partido Conservador, similares a las que en la misma época contribuyeron a derrocar, con signo ideológico y proyecciones disímiles, a las viejas dictaduras en Guatemala, El Salvador, Honduras. De todas ellas sólo la dictadura de Anastasio Somoza García pudo salir airoso. En esto fue decisiva la aproximación del régimen a sectores de las clases trabajadoras. El incipiente movimiento obrero luchaba por formar una central sindical; en su necesidad de debilitar la oposición conservadora, Somoza no vaciló en aproximarse a él y en ofrecer una política acorde a las reivindicaciones populares —elaboración de un Código del Trabajo, libertad de organización y movilización. Esta actitud del régimen permitió sin dudas que el joven movimiento obrero ganara fuerza, pero de esto se benefició en primer lugar el mismo Somoza, en la medida en que restaron concurso obrero a las fuerzas opositoras (Gutiérrez 1978; Booth 1982a, 65). Esta estrategia estuvo consolidada por el primitivismo ideológico de la oposición conservadora. La sanción del Código del Trabajo —y posteriormente el establecimiento de un incipiente sistema de seguridad social— causó alarma en ella y fue duramente criticada desde una posición típicamente precapitalista.<sup>21</sup> Por contraste, el régimen no podía menos que aparecer como relativamente democrático y hasta *progresista*.

Pero el carácter instrumental de estas maniobras a un entendimiento estable de la dictadura con las clases propietarias

<sup>21</sup> Uno de los voceros del Partido Conservador opinaba lo siguiente del Código del Trabajo: "En realidad de verdad no es un código escrito lo que más necesitamos en Nicaragua, sino la difusión entre patronos y obreros de los sanos conceptos del deber, que incumben a cada sector, en el campo de la producción y de la vida nacional, y es defecto de los códigos modernos que hacen más hincapié en los derechos que en los deberes, por lo que se ha roto la cristiana avenencia que existía antaño cuando no se conocía más código para reglamentar nuestras mutuas relaciones, que el Catecismo de la Religión Cristiana, en que todos aprendían del Decálogo cuyos mandamientos se encierran en dos: Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, y quien ama al prójimo no hace mal. De ahí la paz social que sólo sabe dar al mundo la ley de Cristo creída y practicada". *Apud* Gutiérrez (1978).

enroladas en el Partido Conservador resultó evidente a partir de 1950, cuando el *Pacto de los Generales* entre Somoza García y el caudillo conservador Emiliano Chamorro aseguró la aceptación de la primacía somocista a cambio de una participación minoritaria del Partido Conservador en el aparato del Estado —y por lo tanto en los beneficios que de él derivaban.<sup>22</sup> A partir de entonces sucesivos pactos asegurarían la hegemonía somocista en la burguesía nicaragüense y constituirían el marco político del nuevo esquema de crecimiento capitalista que comenzaba a desarrollarse en esos mismos años. La ubicación de las preocupaciones hegemónicas en el ámbito de las contradicciones internas a la clase dominante determinó que perdieran sentido como forma de relacionamiento entre clases antagónicas. A partir de la explicitación de la alianza política liberal-conservadora, que expresaba la unidad interna de la clase con conducción somocista, la represión fue el modo dominante de procesarse el manejo de la cuestión popular. La Guardia Nacional devino el eje central del Estado, permanentemente armada, adiestrada y asesorada por los Estados Unidos; como señala Bendaña (1978), el gobierno era manejado "como una extensión" de la Guardia.

En el campo, la represión abierta se complementó con la represión ideológica desempeñada por la Iglesia católica que, en este sentido, se comportó como un auténtico aparato del Estado hasta la década de 1970. "Para un régimen de hegemonía tan débil como el somocista, la contribución de la Iglesia, con gran arraigo en las clases populares, fue un soporte ideológico nada despreciable" (Samandú y Jansen 1982). La jerarquía y el clero, de los más atrasados del continente, difundieron a través de un cristianismo de sumisión y acatamiento al orden temporal una ideología de aceptación al poder dictatorial presentado como producto de una voluntad divina, y de rechazo de cualquier intento de rebelión a la dictadura como una insubordinación a Dios. Con excepción de algunos jóvenes curas, "el resto de los líderes católicos o bien colaboraban activamente con la élite gobernante o por lo menos toleraban de una manera pasiva los excesos del gobierno" (Alonso 1973). Pero la eficacia de esta represión ideológica fue reducida y a la

<sup>22</sup> El Pacto, firmado en abril 1950, comenzaba denunciando la "amenaza comunista" que a juicio de los firmantes se cernía sobre Nicaragua.

postre no pudo primar sobre las contradicciones generadas por la inícuca explotación de las masas rurales. Cuando la adhesión de éstas al FSLN se hizo creciente, la represión abierta fue también aquí el procedimiento adoptado por el Estado para enfrentarse a la protesta y el activismo popular. Un expediente que, por lo demás, jamás estuvo ausente ni dormido, sino que —aunque sin la masividad de los años 1975 y posteriores— siempre se ejecutó a través de los jueces de mesta, destacamentos locales de la Guardia Nacional, o directamente por los séquitos personales del terrateniente del lugar (cf. Amnistía Internacional 1976; A. J. Guido 1981).

Estas variantes facetas y coyunturas tuvieron como denominador común la primacía que siempre se concedió a los intereses de la familia Somoza. El Estado no sólo fue un agente político-económico del capital: fue también un instrumento de enriquecimiento y acumulación de los Somoza y de sus más leales allegados. El ejercicio excluyente del poder estatal y los lazos umbilicales con Estados Unidos, el control de la Guardia Nacional y del Partido Liberal, la amistad con los sucesivos embajadores norteamericanos, la utilización en beneficio propio de los recursos públicos y de la ayuda financiera y la asistencia técnica extranjeras, brindaron las condiciones y los medios para un espectacular proceso de acumulación de riqueza. Al triunfar la Revolución Sandinista la fortuna Somoza se estimaba entre 500 y 900 millones de dólares (López *et al.* 1979, 345; Black 1981, 34-36 y 62-64).

La formación de este inmenso patrimonio está íntimamente asociada con el tipo de acumulación capitalista que se desenvolvió en el país.<sup>23</sup> Al finalizar la Segunda Guerra Mundial Anastasio Somoza García era ya el más grande terrateniente ganadero y uno de los mayores cafetaleros y productores de caña de azúcar. La adquisición de estas tierras estuvo ligada a la manipulación en beneficio propio del aparato represivo del Estado —la Guardia Nacional— y de sus instituciones crediticias —el Banco Nacional—. Después de la guerra extendió sus actividades a la concesiones mineras —en alianza con firmas norteamericanas— y a las exportaciones de carne. Posteriormente efectuó inversiones en cemento, textiles, lácteos, líneas marítimas y aéreas, puertos, tabaco, mataderos, pesquerías,

<sup>23</sup> Cf. una crónica prolija de este proceso en Diederich (1981).

seguros, construcciones, finanzas, industria manufacturera, especulación inmobiliaria. A mediados de la década de 1970 la familia Somoza constituía el tercer grupo financiero del país (Strachan 1976): el "grupo de los dados cargados" (Wheelock 1976).

Como en otras experiencias de este tipo —la de Trujillo en la República Dominicana, para mencionar la más próxima—, la dictadura empleó todos los recursos puestos a su disposición por el control absoluto del Estado para impulsar este acelerado crecimiento económico: privatización de fondos públicos, evasión impositiva, manipulación de información, ventas-compras-reventas, especulación con recursos públicos, etc. Pero a diferencia del caso Trujillo, este proceso no se circunscribió exclusivamente a la familia gobernante. Hubo también un conjunto de familias y de altos oficiales de la Guardia Nacional que gozaron de manera subordinada de sus beneficios a cambio de su lealtad al régimen, y que se constituyeron a lo largo de casi medio siglo de dictadura en una verdadera *burguesía somocista* (Torres Rivas 1980). Apellidos como Hüeck, Sengelman, Urcuyo, Pallais, Montiel y otros, alcanzaron relieve político y económico de esta manera. Algunos de ellos tenían alguna relación de parentesco con los Somoza (por ejemplo, los Sacasa, o los Pallais), pero otros, al contrario, llegaron al emparentamiento a partir de relaciones políticas y económicas. El *famillismo*, que ha sido señalado como un rasgo característico de la dictadura (Alonso 1973), devino cada vez más un producto de la estructura social y política del régimen, y cada vez menos su elemento cohesionador, a medida que el desarrollo capitalista iba avanzando en complejidad y profundidad.<sup>24</sup>

La funcionalidad de este estilo de dominación política al desarrollo del capitalismo no fue permanente y habría de entrar en crisis en los primeros años de la década de 1970. Lo que hasta entonces fue fuerza motriz de la expansión capitalis-

<sup>24</sup> Ya Max Weber (1947, 354 y ss.) advertía que "sólo ciertos tipos de capitalismo" —plantaciones y otras empresas coloniales, comercio— son compatibles con el tipo de dominación patrimonial, pero no "el verdadero tipo de empresa con grandes inversiones en capital fijo y una organización racional de una fuerza de trabajo libre, orientada hacia un mercado de consumidores privados". Este tipo de empresa es "demasiado sensible a cualquier forma de irracionalidades en la administración de justicia, en otras formas de práctica administrativa, y en materia impositiva".

Cuadro II.17

Nicaragua: Participación de las distintas áreas de propiedad en la economía, 1978 y 1980 (en %)

Sectores de actividad	1978			1980		
	Área pública	Área privada	APP	Gran empresa	Pequeña empresa	
Agropecuaria	—	100	21	29	50	
Industria manufacturera	—	100	25	45	30	
Construcción	40	60	70	5	25	
Minería	—	100	95	5	—	
Subtotal de la producción material	8	92	25	37	38	
Servicios	31	69	56	22	22	
PNB	15	85	41	34	25	

Fuente: Ministerio de Planificación.



ta, habría de transformarse en una fuente de contradicciones, abonando el terreno para una paulatina diferenciación política de importantes sectores de la burguesía, a medida que el cuestionamiento de la dictadura por las luchas populares ganaba en profundidad y avance.

El carácter vertiginoso y espectacular del proceso de enriquecimiento de la dictadura, las contradicciones que éste generó en los últimos años con la gran burguesía local, y la falta de información cierta sobre el tema, llevaron a formar una imagen de la cuestión que probó no ser totalmente exacta. El cuadro II.17 muestra el peso relativo del Área de Propiedad del Pueblo (APP), de la gran burguesía, y de la pequeña producción, en la economía nicaragüense a principios de 1980. Dado que para esta fecha el APP consistía fundamentalmente de las propiedades confiscadas a la familia Somoza y sus allegados, la diferencia entre 1978 y 1980 ofrece una buena aproximación a la magnitud del control del régimen sobre la economía nacional.

Es evidente que la imagen generalizada de que Somoza era dueño "de medio país" no era del todo exacta, pero sí es cierto que el somocismo era dueño de la mitad, o casi, de todo lo grande.

## CAPÍTULO III

### Economía y política en la insurrección popular

#### 1. Introducción

La literatura sobre el potencial revolucionario de las sociedades agrarias ofrece dos perspectivas de interpretación. Una corriente enfatizó el papel estratégico del campesinado medio como fuerza impulsora de transformaciones profundas, con una alta disponibilidad para el enfrentamiento a las formas económicas y extraeconómicas de explotación y opresión que se ejercen sobre ellos tanto por el Estado como por los grandes terratenientes. La fuerza dinámica de las revoluciones agrarias serían en consecuencia los que tienen todavía algo que perder y, por lo tanto, que defender (cf. por ejemplo Moore 1966; Wolf 1969). Otra perspectiva de análisis, derivada directamente de la tradición marxista y, sobre todo, de los análisis leninistas de la sociedad rusa (Lenin, 1981) destaca el papel de vanguardia revolucionaria del proletariado agrícola y de los campesinos minifundistas, introducidos en un proceso de pérdida de sus tierras; la revolución sería, en consecuencia, una tarea de los que ya lo han perdido todo, salvo sus cadenas.

El desarrollo del capitalismo en el campo en Nicaragua se llevó a cabo de manera que simplifica la tarea del investigador. En el capítulo anterior hemos podido ver cómo la estructura socioeconómica desarrollada en los últimos treinta años articuló un campesinado medio, ubicado fundamentalmente en el interior del país, con un acelerado proceso de proletarización en la

región del Pacífico, que generó una masa de obreros agrícolas y de semiproletarios con un fuerte peso en el mercado de trabajo y en el funcionamiento del esquema agroexportador.

Durante toda la década del '60 el Frente Sandinista de Liberación Nacional llevó a cabo una lucha guerrillera rural en el interior de Nicaragua, con una base fundamentalmente campesina; las ciudades funcionaron en este esquema como retaguardia y apoyo. En la década siguiente la región del Pacífico —sobre todo los departamentos de Chinandega, León, Carazo, Managua— comenzaron a recibir una creciente atención política del FSLN, tanto el proletariado y semiproletariado agrícolas, como las masas trabajadoras urbanas; el Frente impulsó sus reivindicaciones, fortaleció sus niveles de organización, articuló las demandas de amplios sectores de la población a su proyecto de lucha contra la dictadura.

Este capítulo estudia el modo en que el FSLN supo aprovecharse de las contradicciones objetivas de la estructura socioeconómica del país, en aras de su estrategia revolucionaria. En primer lugar se discute la existencia de una crisis económica en Nicaragua a fines de la década en 1970; nuestro estudio sostiene que, en todo caso, la crisis económica fue un producto de la crisis revolucionaria global de la sociedad, y no a la inversa. Luego, estudiamos el impacto del desarrollo capitalista en las masas urbanas, sobre todo en Managua: la desarticulación general de la vida de la gente, la inseguridad económica y psicosocial, la aguda pobreza. Presentamos a continuación un análisis del perfil socioeconómico específico de los combatientes de la insurrección, como una forma de aproximarnos al sujeto social de la etapa final de la lucha contra la dictadura. Finalmente, discutimos la interrelación de los factores objetivos y subjetivos en el triunfo revolucionario del FSLN y, en particular, la articulación del potencial insurgente de las masas con el papel organizador y dinamizador de la vanguardia.

## 2. ¿Crisis de la economía o crisis de la sociedad?

Una interpretación bastante frecuente de la Revolución Sandinista plantea el carácter decisivo de la crisis del capitalismo dependiente nicaragüense y su articulación con la crisis

económica mundial, en el derrocamiento del régimen somocista y la victoria sandinista.

El masivo involucramiento del pueblo e incluso de algunas fracciones de la burguesía en la lucha revolucionaria, el derrumbe de la dictadura, habrían sido en el fondo efectos del desarrollo de una crisis profunda de la economía, sobre la cual operó la ofensiva del FSLN. Por lo menos, la crisis económica se plantea como la condición objetiva que hizo posible el desarrollo y avance de la lucha revolucionaria. Con matices variados, el enfoque es practicado por numerosos autores: Bendaña (1978), O. Núñez (1980a), D. Castillo (1980b), Black (1981), H. Weber (1981), etcétera.

En otros análisis en cambio el desarrollo de esa misma crisis económica, lejos de llevar al régimen somocista a la bancarrota, debió al contrario haberlo consolidado, a través del fortalecimiento de sus fracciones reformistas o modernizantes (Vargas 1978, 1979). En ambos casos, la crisis económica aparece generando determinados efectos políticos, bien que de signo opuesto.

Aparte de que el concepto mismo de *crisis económica* no aparece claro ni explícito en estos trabajos —salvo referencias genéricas a la crisis *permanente* del capitalismo dependiente, o a la crisis *general* del capitalismo—, y que los efectos predichos por uno y otro enfoque son obviamente antitéticos, la hipótesis misma de la crisis no aparece suficientemente avalada por el desenvolvimiento real de la economía nicaragüense, ni por sus modalidades de articulación en la economía capitalista mundial.

En esta sección se contrastará la hipótesis de la crisis económica con la información disponible al respecto, proponiendo en cambio un enfoque alternativo: la caída de la dictadura somocista fue el producto de una *crisis política revolucionaria* que, en determinado momento de su desenvolvimiento, activó una crisis económica. Ésta, por lo tanto, fue resultado de aquélla, y no a la inversa.

El cuadro III.1 presenta la evolución del PIB y de dos de sus sectores productivos durante el período anterior al triunfo revolucionario. De acuerdo con los datos, la economía nicaragüense creció. No lo hizo con tasas espectaculares, y los ritmos fueron desiguales y erráticos, expresión de una estructura desarticulada y fuertemente subordinada al mercado internacio-

### Cuadro III.1

#### Evolución del PIB, 1970-78

Años	Millones de córdobas de 1980	Tasas de crecimiento (%)		
		PIB global	Producto agropecuario	Producto industrial
1970	20,098.3	—	—	—
1971	21,088.9	4.9	8.0	5.0
1972	21,759.9	3.1	0.9	5.2
1973	22,867.7	5.1	5.8	4.0
1974	25,773.2	12.7	8.7	12.7
1975	26,339.4	2.2	6.5	3.2
1976	27,667.9	5.0	1.7	4.5
1977	27,926.0	0.9	3.8	10.3
1978	25,977.5	— 6.9	8.7	2.4
Promedio 1971-78		3.3	5.5	5.9

Fuente: World Bank (1981).

nal. Pero de todos modos la economía creció, sobre todo en los sectores de la producción agropecuaria e industrial.

Durante la segunda parte del período se advierte, sin embargo, una fuerte desaceleración del crecimiento. Si la tasa media anual fue 6.4 % en 1971-74, en 1975-78 se redujo a 0.3 %, y este último año el producto cayó en valores absolutos. No obstante en los sectores productivos la desaceleración fue mucho menos notoria: de 5.8 % a 5.3 % en el sector agropecuario, y de 6.7 % a 5.1 % en la industria manufacturera, para ambos subperíodos respectivamente.

La tendencia decreciente en el dinamismo de la economía nacional es de largo plazo. Entre 1960 y 1965 el PIB creció con una tasa media anual de 10.2 % mientras en el conjunto del istmo lo hizo en 6 %; en 1965-70 el PIB de Nicaragua creció 4.2 % anual y el regional 5.4 %, mientras que en 1970-78 las tasas medias anuales fueron 4 % y 5.4 % respectivamente (Rosenthal 1982). Pero es evidente que desaceleración del crecimiento y tendencia al estancamiento son una cosa, y estancamiento y recesión son otra. Si por crisis de la economía se

entiende estancamiento o recesión, parece difícil afirmar que había en Nicaragua una crisis económica.

El cuadro III.2 muestra la marcha de la inversión durante el mismo período. El comportamiento de esta variable no parece haber experimentado alteraciones relevantes durante los años anteriores a la insurrección final y la caída de la dictadura. El coeficiente de inversiones se mantuvo en general estable salvo en 1978, pero aun así el corte relativo que se indicó respecto del crecimiento del PIB aparece aquí mucho más diluido: 18.5 % promedio en 1971-74 y 17.2 % en 1975-78; el coeficiente de inversión de 1977 no tiene parangón con ninguno de los años precedentes. Si por crisis económica se entiende un fuerte movimiento de descapitalización o, a la inversa, la descapitalización se interpreta como causa o al menos como indicador de la crisis, tampoco en este sentido podría hablarse con propiedad de una crisis económica en la Nicaragua pre-revolucionaria.

### Cuadro III.2

#### Evolución de las inversiones, 1970-78 (Millones de córdobas de 1980)

Años	Inversión bruta fija	Inversión privada	Coeficiente de inversiones*
1970	3268.0	2448.6	17.5
1971	3373.6	2295.4	17.2
1972	2997.8	1946.8	12.5
1973	4109.6	2822.8	20.6
1974	5023.9	3497.0	23.9
1975	4561.1	3041.8	16.4
1976	4820.4	2884.7	16.3
1977	6184.0	3138.9	25.1
1978	3436.4	1895.9	11.0

\*  $\frac{\text{Inversión interna bruta}}{\text{PIB}} \times 100$

Fuente: World Bank (1981).

### Cuadro III.3

#### Algunos indicadores de producción agrícola 1973-79

Año agrícola	Manzanas sembradas de algodón*	Manzanas cosechadas de ajonjolí*	Cafetos en producción*	Manzanas cosechadas de caña de azúcar*
1973-74	259.3	6.1	204.2	44.5
1974-75	254.3	6.7	231.5	50.1
1975-76	204.6	9.2	254.1	60.8
1976-77	283.0	7.9	190.9	56.6
1977-78	310.8	12.1	193.3	57.3
1978-79	248.1	13.7	195.7	56.7

\* En miles.

Fuente: Cifras del Banco Central de Nicaragua.

El cuadro III.3 confirma este panorama en lo que se refiere al capitalismo agrario. El año agrícola 1977-78 fue, desde esta perspectiva, excelente. El cuadro ratifica asimismo lo señalado en diversas oportunidades respecto del involucramiento de último momento de la burguesía en la oposición a la dictadura (Diederich 1981; Vilas 1982c). Sin perjuicio de la inseguridad y la "crisis de confianza" que la burguesía nicaragüense habría experimentado en esta época frente a la *competencia desleal* de la dictadura, a su zigzagante política económica, etc. (cf. por ejemplo Jarquín 1977), parece claro que todavía a mediados de 1977 la burguesía nicaragüense estaba pensando en la economía, no en la política, y apostando fuerte a un año favorable.

En síntesis, estas tres aproximaciones complementarias a la cuestión no aportan elementos para refrendar la hipótesis de una crisis económica en la bancarrota de la dictadura, y más bien aconsejan descalificarla. No se advierte un corte significativo en la marcha de la economía, o una acumulación y condensación de contradicciones estructurales que, por eso mismo, llevan al sistema a la parálisis o el desbarajuste total, rompiendo el encadenamiento de sus sectores y desarticulando su vinculación con el mercado internacional. Lo más que podría

decirse, con base en la realidad, es que existía una *tendencia* a la desaceleración del crecimiento económico, que se hace más clara en la segunda parte del decenio de 1970. Pero en esto la economía de Nicaragua no se diferencia significativamente del conjunto de la economía centroamericana.

El cuadro III.4 confirma lo señalado, en lo que toca al impacto del mercado internacional sobre la economía nacional. Tampoco existen aquí cortes o rupturas, o al contrario reiteración y acumulación de tendencias negativas que permitan identificar la crisis, o de ligar a ésta el ascenso revolucionario. Los años anteriores a la etapa final de la guerra de liberación fueron nada malos, y el saldo acumulado del subperíodo 1975-78 es de efectos positivos, mientras que el de 1971-74 fue negativo. Es decir que el corte se da, pero en el sentido de un refuerzo ligeramente positivo a la economía local. Por último, la comparación de Nicaragua con la situación de los demás países no petroleros de América Latina muestra que, en términos generales, la articulación de la economía nacional al comercio internacional no fue peor que la del resto del continente.

### Cuadro III.4

#### Nicaragua y América Latina: Relación de precios del intercambio (1972-1979)\*\*

Años	Nicaragua	América latina**
1972	10.4	3.6
1973	- 4.6	10.3
1974	- 4.4	- 2.4
1975	- 16.3	- 9.1
1976	17.7	2.0
1977	27.4	9.0
1978	- 11.3	- 19.0
1979	- 11.9	- 6.0

\* Porcentaje de cambio respecto del año anterior.

\*\* Incluye únicamente a los países que no son exportadores de petróleo.  
Fuente: Cifras de CEPAL.



### Cuadro III.5

Índice de precios al consumidor, 1972-79\*

Años	Índice general	Crecimiento (%)	Alimentos, bebidas y tabaco	Crecimiento (%)
1972	100.0	—	100.0	—
1973	127.02	27.0	141.17	41.2
1974	143.94	13.3	162.83	15.3
1975	154.77	7.5	175.44	7.7
1976	159.13	2.8	177.44	1.2
1977	177.26	11.4	203.75	14.8
1978	183.34	4.5	211.02	3.5
1979	274.64	48.1	344.66	63.3

\* Base: Mayo-octubre 1972 = 100.

Fuente: INEC.

El cuadro III.5 presenta el alza del costo de vida. Los alimentos crecieron más que el índice general, y en la medida en que la participación de este rubro en dicho índice es mayor cuanto menor es el nivel de los ingresos, la serie indica que las clases populares sintieron más que nadie el aumento de los precios. Pero el incremento fue lento, incluso en el rubro alimentación. No parece evidente que el costo de vida se hiciera insostenible o más desesperante que a principios del decenio.

Una conclusión parecida surge del cuadro III.6. No hay dudas que el nivel *absoluto* de las remuneraciones era bajo. En 1972, por ejemplo, el mínimo legal diario era casi 11 córdobas, el semanal no llegaba a C\$ 76, el quincenal a C\$ 164, y el mensual a C\$ 323; en 1975 eran respectivamente C\$ 13, C\$ 92, C\$ 200 y C\$ 401.<sup>1</sup> Además, una cosa son las disposiciones legales —a menudo promulgadas para hacer buen papel ante los organismos internacionales— y otra cosa las prácticas capitalistas, sobre todo en un capitalismo como el somocista. Seguramente los niveles efectivamente pagados fueron sensiblemente inferiores a los fijados por las normas legales, aunque no se dispone de información sobre el particular. Pero de

<sup>1</sup> Cifras del Banco Central de Nicaragua, para la ciudad de Managua.

todos modos resulta claro que, aun reteniendo estas observaciones, las remuneraciones mantuvieron relativamente su nivel real, y no surge de los datos consultados un deterioro sensible del poder adquisitivo de los trabajadores en el período anterior a la etapa final de la lucha contra la dictadura.

La información del cuadro III.6 desvirtúa la argumentación acerca de un agudo deterioro del salario real como expresión, o bien como causa, de la crisis económica. Sin embargo, su valor es más genérico que específico para el caso concreto de la economía nicaragüense, como toda consideración que pretenda reducir la cuestión de las masas trabajadoras al problema de los salarios.

En primer lugar, porque los asalariados constituyen solamente una parte de los trabajadores; aunque su volumen es mayor que el que sugerían las estimaciones más usuales, ya se ha visto en la sección 2 del capítulo anterior que de todas maneras una gran parte de los trabajadores nicaragüenses no se encuentra salarizada. Los trabajadores "por cuenta propia" constituyen 2/5 de la PEA urbana, y los campesinos semiproletarios un tercio de la PEA rural. En segundo lugar, porque sólo una pequeña porción de los asalariados percibía su remuneración de manera mensual: a mediados de la década del 70 alrededor de 80 % de los trabajadores recibía su paga diariamente, semanalmente o por quincena (Vilas 1982b).

### Cuadro III.6

Salario real (1972 = 100)\*

Años	Promedio general	Agri-cultura	Industria manufacturera	Comercio	Servicios
1972	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1973	85.5	89.3	84.6	74.6	80.3
1974	86.6	92.6	86.2	75.6	83.6
1975	66.0	89.3	82.3	75.5	82.5
1976	87.8	91.5	86.4	75.7	83.2
1977	86.3	103.0	84.6	73.9	78.9
1978	86.3	97.6	85.3	71.8	78.5

\* Salario promedio mensual.

Fuente: Elaboración propia de cifras del BCN e INEC.

En estas condiciones de empleo y remuneración, el valor del deterioro del salario real, o del aumento del costo de vida, como indicadores del impacto de la crisis económica sobre este tipo de masas trabajadoras, es mucho más reducido de lo que generalmente se cree. Para un trabajador estacional por ejemplo, la crisis puede significar, fundamentalmente, más tiempo sin trabajo, o más tiempo sobreviviendo en alguna actividad "informal", más que el paso de una situación de empleo a otra de desempleo. Para el artesano, o para el trabajador por "cuenta propia", la crisis puede traducirse en la prolongación de la jornada de trabajo *necesario* para su reproducción material, más que en el cierre o la cesantía. Los que perciben ingresos a través de precios —artesanos, talleristas, pequeños comerciantes, vendedores ambulantes...— pueden en principio maniobrar con ellos para mitigar o transferir el impacto de la inflación. Y así en otros casos. En todos ellos parece claro que la crisis no es una constante para las diferentes modalidades de desarrollo del capitalismo y para sus distintas clases, grupos y fracciones, y por lo tanto el dimensionamiento de sus efectos

Cuadro III.7

PIB por habitante, 1970-79  
(u\$s corrientes)

Años	u\$s	Tasa de crecimiento (%)
1970	1095	—
1971	1116	1.9
1972	1113	- 0.2
1973	1135	2.0
1974	1235	8.8
1975	1218	- 1.3
1976	1233	1.2
1977	1201	- 2.6
1978	1078	- 10.2
1979	777	- 27.9

Fuente: World Bank (1981).

no puede ser llevado a cabo con un "paquete" rígido de instrumentos.

El cuadro III.7 con la evolución del producto por habitante, trata de superar las limitaciones del salario real como indicador de crisis desde la perspectiva de las masas trabajadoras en una sociedad poco industrializada. Aquí sí se advierte, con bastante nitidez, el deterioro de su condición de vida. Más aún, existe un corte muy marcado entre los dos subperíodos de la década; mientras en 1971-74 el PIB por habitante creció a un ritmo promedio anual de 3.1 %, en 1975-78 la tasa media anual fue exactamente la opuesta: - 3.2 %.

Vale decir que el crecimiento de la primera mitad del decenio se transformó en reducción en la segunda, aunque seguramente las ganancias y las pérdidas no se repartieron de la misma manera, y no fueron los grupos que concentraron el crecimiento los que experimentaron las reducciones. Sin necesidad de ser demasiado imaginativos, parece claro que así como los tramos superiores de la escala de ingresos concentraron las ganancias, así también las pérdidas fueron monopolizadas por las clases populares y, hasta donde es posible hacer inferencias de la combinación de los cuadros III.6 y III.7 fundamentalmente por los grupos no asalariados y en general de ingresos no mensuales. En 1977, 1.2 millón de personas (casi la mitad de la población del país) tenía un promedio per cápita de menos de 25 dólares por mes...

A partir de la segunda mitad de la década de 1970 hubo pues un proceso de ahondamiento de la pauperización de las masas populares, que sin dudas jugó un papel dinamizador de su integración a la lucha revolucionaria. Este agravamiento de las condiciones generales de vida habría sido más intenso para las clases populares urbanas que para las del campo, para los sin trabajo y los que trabajan en actividades no productivas más que para los que lo hacían en los sectores productivos, y para los no asalariados más que para los asalariados.<sup>2</sup>

Pero el empobrecimiento de las masas, la degradación de sus niveles de vida, incluso en los aspectos brutales de la última etapa de la dictadura, no bastan para configurar una crisis económica. Ni la crisis económica significa mucho en sí misma

<sup>2</sup> Cf. conclusiones consistentes con las del texto, desde una perspectiva teórica diferente, en Booth (1982b).

cundo no existen las condiciones políticas para hacer de ella un factor que impulse la revolución. Dejadas a su espontaneidad, las masas pueden generar explosiones violentas, estallidos de ira que ponen en tensión al régimen, pero intransitivas desde la perspectiva de la eficacia política de su derrocamiento; o bien, pueden recurrir a una respuesta individual: migrar, mudarse de lugar o de país, buscar otros horizontes. Sin la confluencia de ciertas condiciones políticas, que no se generan espontánea o automáticamente por la mera dinámica de lo económico, la crisis puede incluso ser reabsorbida por las clases dominantes y convertirse en el punto de partida de una nueva etapa de explotación social y opresión política de las masas.

La contradicción masas populares/clases dominantes es una manera de expresarse la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las existentes relaciones de producción. Es, por lo tanto, la contradicción que abre paso a "una era de revolución social" (Marx 1859), pero es también la contradicción que está en la base de la reproducción ampliada del sistema capitalista. Que actúe en uno u otro sentido depende, en último análisis, del "uso" político de la contradicción por las fuerzas en lucha. Una crisis económica no tiene generalmente más efecto que el de crear un terreno más propicio para la difusión de ciertos modos de pensar y de actuar, de plantear y resolver las cuestiones centrales de la lucha social. Tan importante como la crisis es la forma en que las fuerzas antagónicas —el Estado por un lado, la vanguardia revolucionaria por el otro— la encaran y operan con y sobre ella.

El análisis objetivo de la evolución económica de Nicaragua demuestra que ella no estaba exenta de problemas y contradicciones, pero que no alcanzan a configurar en sí mismos una verdadera crisis. El mismo embrocamiento de las masas es más una resultante del desenvolvimiento del proceso de acumulación capitalista que un indicador de la crisis —a menos, claro está, que se adhiera a alguna teoría del subconsumo.

Nuestra posición sugiere que a mediados de 1977 se abre en Nicaragua una verdadera crisis revolucionaria, de la cual la crisis económica que se desencadena en 1978 —y no antes— será un capítulo o dimensión. El agravamiento de las condiciones de vida de las masas, que se acelera hacia 1976-77, y la

represión genocida que la dictadura lanza sobre ellas a partir de Monimbó (febrero 1978), se conjugan con el avance revolucionario del FSLN, que combina la lucha militar con la organización de las masas y la apertura hacia fracciones opositoras y democráticas de la burguesía y el frente internacional.

Es en este contexto de acelerado derrumbe político-militar de la dictadura, enfrentada al accionar del FSLN y su arraigo creciente en las masas, y al erosionamiento de sus bases sociales, que la crisis económica se activa y evoluciona vertiginosamente a medida que la lucha revolucionaria crecía y su aproximación a la victoria era de más en más evidente. La economía se autonomizaba del Estado y de sus instrumentos de política —y de los auxilios financieros de los organismos internacionales—, porque se convertía cada vez más en una dimensión de la guerra de liberación. Fue el ascenso de la lucha sandinista, y la crisis política general y definitiva de la dictadura —la pérdida progresiva de respaldo de la Casa Blanca, la exacerbación del saqueo de la economía por los grupos palaciegos, la inseguridad que se apoderó de las clases dominantes por la brutalidad represiva y por el propio avance revolucionario— lo que motivó la gestación y el desarrollo tan veloz de la crisis económica, y no al revés.

La crisis económica que se desencadena en 1978 y alcanza su culminación en abril-mayo 1979 no fue el producto del funcionamiento objetivo de la economía nicaragüense, o de su articulación contradictoria al mercado mundial, sino de la reorientación política de una parte creciente de sus recursos (el endeudamiento externo por ejemplo) para tratar de frenar el ascenso revolucionario, o para acelerar el enriquecimiento de los titulares del poder dictatorial; de la fuga de capitales ante la proximidad de la derrota, de la expatriación de activos, en fin, de la progresiva parálisis de la economía a medida que la guerra de liberación cubría con su desarrollo al conjunto de la sociedad y aceleraba la quiebra de un sistema de dominación inicu. En la medida en que el capitalismo periférico de Nicaragua tenía como una de sus bases estratégicas de sustentación al Estado somocista, la bancarrota del Estado arrastraba consigo la crisis de la economía.

En la *débacle* económica de la dictadura dos factores parecen haber sido de especial relevancia. Por un lado, el propio comportamiento del somocismo, que subordinó el conjunto

del sistema económico al desarrollo de la guerra contra el FSLN, y al desenfreno de las prácticas de enriquecimiento y acumulación.

Por otro lado, el miedo y la inseguridad de la burguesía, sobre todo después del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro. No porque los más importantes empresarios opositores hubieran adherido a las posiciones políticas de Chamorro y a la organización que dirigía (UDEL), sino porque el crimen demostró, de manera brutal, que nadie podía sentirse a salvo de la represión somocista. La falta de horizonte de la burguesía era tanto más grave cuanto que se le hacía evidente que tampoco la victoria del FSLN le auguraba un porvenir más propicio.

Sin experiencia política, con organizaciones frágiles y recientes, la burguesía opositora no tuvo más remedio que apostar a un "somocismo sin Somoza" pero con Guardia Nacional, enanado en la mediación norteamericana, bien que debiendo competir en esa búsqueda de apoyo imperial, con los esfuerzos del propio Somoza, y con la estrategia neutralizadora del FSLN. La salida de capitales hacia el exterior, la liquidación de activos, la retracción general de la actividad productiva, fueron la expresión económica de esta inseguridad de la burguesía ante un proceso político que, en cualquiera de sus desenlaces polares, problematizaba más aún su porvenir como clase, llevándola a reproducir el comportamiento descapitalizador de sus antiguos aliados y protectores.

En la sección 2 del capítulo IV estudiamos el comportamiento político de la burguesía nicaragüense. Aquí queremos señalar que estas contradicciones entre un poder político estatal que funciona como mecanismo de enriquecimiento y acumulación para los grupos que lo controlan directamente, y las fracciones de la burguesía que se apoyan en el mercado, no son nuevas en América Latina, y no desembocan forzosamente en un proceso revolucionario. En República Dominicana, por ejemplo, esta contradicción se desarrolló con agudeza durante el último período presidencial de Joaquín Balaguer (1974-78), pero la desorganización de las clases populares, la falta de una vanguardia político-militar, incidieron, junto a otros factores, para que esta contradicción se resolviera en los términos planteados por las fracciones reformistas de la burguesía (Vilas 1980b).

Lo específico de Nicaragua es que las contradicciones de los grupos dominantes —somocistas y no somocistas, dictatoriales y democráticos—, eran en realidad el producto de la contradicción antagónica FSLN/Estado y se desenvolvían subordinadas a ella, en una etapa en que dicha contradicción era ya la expresión político-militar del antagonismo fundamental pueblo/clases dominantes, y el modo de presentarse la contradicción básica del capitalismo dependiente nicaragüense, con toda la explosividad de una crisis revolucionaria.

Como tal, la contradicción fuerzas productivas (*pueblo*) / relaciones de producción (*clases dominantes*), estuvo presente siempre en el desenvolvimiento de la dialéctica social, pero fue la acción política de las masas, su incorporación a la lucha sandinista, la que hizo de ella una crisis revolucionaria. El pueblo que salió a las calles a pelear lo hizo porque existían las condiciones políticas creadas por casi dos décadas de lucha sandinista, que le permitían entrever la eficacia de su participación y creer en la probabilidad del triunfo. Fue la lucha sandinista la que hizo posible convertir los elementos cotidianos de la vida de las masas nicaragüenses —el hambre, la miseria, la falta de trabajo estable, el odio a la Guardia Nacional...— en fuerzas de combate para la guerra contra el régimen.

Reducir esta crisis general, orgánica, de la sociedad nicaragüense, a una crisis económica, es confundir el relámpago con la tempestad. No hubo crisis económica; hubo una Revolución.

### 3. Las masas trabajadoras y la pobreza urbana

En el capítulo anterior se vio cómo el capitalismo se desarrolló en Nicaragua, hasta finales de la década de 1950, fundamentalmente en el campo, articulado a formas mercantil simples de producción. En la década siguiente el crecimiento industrial enmarcado en el esquema de integración regional contribuyó poco a la introducción de modificaciones en el funcionamiento general de la economía urbana, que siguió caracterizada por el gran peso del comercio y los servicios y, en particular, por una enorme cantidad de pequeñas unidades de



actividad. El sector terciario continuó recibiendo, bien que con limitaciones marcadas, el crecimiento poblacional de las ciudades y, sobre todo, de la capital.

Entre 1950 y 1971 Managua casi cuadruplicó su población, pasando de algo menos de 110.000 habitantes a casi 400.000. La falta de sectores productivos que dieran empleo a esta masa creciente de población, la carencia de infraestructura, etc., aceleraron la tugurización de la ciudad e introdujeron elementos de refuerzo a la terciarización de la vida urbana y a las condiciones paupérrimas de existencia para la mayoría de la población.

El terremoto de diciembre 1972 complicó aún más este panorama urbano y ahondó su desarticulación general. Además de los miles de muertos y heridos, la catástrofe dejó sin trabajo a casi 52.000 personas (57 % de la PEA de la ciudad) y forzó el desplazamiento de unas 250.000 —60 % de la población total de Managua. 27 km<sup>2</sup> de ciudad resultaron afectados, con 13 km<sup>2</sup> totalmente destruidos y 14 km<sup>2</sup> dañados, incluyendo la mayor parte del sistema de alcantarillado y de distribución de agua y luz. 75 % de las unidades de vivienda familiar quedaron destruidas, la mayoría pertenecientes a familias de ingresos medios y bajos. 95 % de los talleres y fábricas pequeñas (carpinterías, imprentas, zapaterías...) y 11 fábricas grandes se perdieron o sufrieron daños serios. Lo mismo ocurrió con 400.000 m<sup>2</sup> de edificios comerciales y bodegas y con 340.000 m<sup>2</sup> de oficinas públicas y privadas. Cuatro hospitales con 1.650 camas se perdieron o dañaron seriamente, y 740 aulas de escuela resultaron inutilizadas (INCAE 1973).

La catástrofe dejó en la calle a las masas trabajadoras de la ciudad y a vastos sectores de pequeña burguesía —sin casa, sin trabajo, sin pertenencias personales, con una tremenda tensión emocional, a merced de la arbitrariedad y la prepotencia de la Guardia Nacional de la dictadura.

Después de la catástrofe que hubo, se vio la cantidad de muertos, de niños, de madres, la escasez de alimentos, de agua. No hubo protección de parte de nuestras autoridades de esta época, de la dictadura somocista. Estas personas se dedicaron más bien a tomar todo lo que venía en ayuda de Nicaragua, y nosotros prácticamente andábamos desnudos, nos dejaban sin amparo. (...) Nosotros fuimos a Chinandega y llegamos

a una escuela donde estaba bastante gente de Managua. La gente en estos días estaba traumatizada, nerviosa, enferma y en vez de llegar a dar un aliento se nos llegaron los guardias a decir que tenemos que trabajar, ya que no podíamos vivir allí toda la vida. (...) Nos dieron veinticuatro horas para lanzarnos y tuvimos que desocupar y dormir en la calle. La misma Guardia nos sacó. Dormimos en las calles hasta que cada uno podía encontrar dónde ir a meterse, ya por su cuenta. Decían que estaban haciendo unas casas para los damnificados pero todo eran promesas; las casas se las daban a las personas más allegadas a ellos. No eran para todos los pobres. (...) La situación terrible en que vivíamos, de andar ambulando sin techo, duró casi un año. (...) Nos engañaron aquí porque nunca se nos hizo nada. Aquí ha sido criadero de cucarachas, de ratones, de todo. Aquí hay paludismo, hay mucha pobreza".<sup>1</sup>

Las encuestas de empleo urbano que empiezan a efectuarse a mediados de la década de 1970 permiten aproximarse con relativa certidumbre al perfil ocupacional de las principales ciudades, y dimensionar la magnitud real y las características del proceso de proletarianización de la fuerza de trabajo.

El cuadro III.8 ofrece una perspectiva del tipo de empleo prevaleciente en los momentos iniciales del desarrollo del capitalismo industrial en Nicaragua: fuerte gravitación de los servicios personales y las actividades mercantiles (en conjunto un tercio de la población ocupada), marcada presencia de ocupaciones de tipo artesanal, posiblemente con un sólido entrelazamiento respecto del pequeño comercio —testimonio de una reducida división social del trabajo— y un proletariado de magnitud en extremo reducida. En general, un claro predominio de las actividades con menor grado de formalización, carentes de pautas generales e institucionales de disciplina —o con pautas poco desarrolladas— y que reposan fuertemente en la iniciativa, los recursos y las características personales del agente.

La diversificación ocupacional, como expresión del tipo dominante de división social del trabajo, se manifiesta asimismo como diferenciación laboral entre los sexos. Las mujeres, que

<sup>1</sup> Testimonio recogido por Maier (1980: 31-32). La ayuda internacional, estimada en US\$ 250 millones, fue a parar a los bolsillos de Somoza y de sus parientes y colaboradores más cercanos (Black 1981: 58 y ss.).

Cuadro III.8

Empleo urbano a mediados de la década de 1970,  
por categoría ocupacional  
(en % del total)

Categorías	1974a		1975c
	Total <sup>b</sup>	Managua	Managua
Profesionales y técnicos	11.0	12.1	10.7
Gerentes, administradores y directivos de la administración pública	2.9	3.3	4.0
Empleados de oficina y afines	11.0	12.2	15.8
Comerciantes, vendedores y afines	14.4	14.0	15.4
Agricultores, ganaderos y afines	2.2	0.8	1.1
Conductores de medios de transporte y afines	6.6	6.2	6.3
Artesanos, operarios y otros (hilanderas, modistas, carpinteros, albañiles, mecánicos y afines)	27.1	26.0	22.2
Obreros y jornaleros	6.5	7.6	6.8
Trabajadores en servicios personales y afines	18.0	17.7	17.6
Otros	0.3	0.1	0.1
Total	100.0	100.0	100.0

a INCAE (1975).

b Managua, Masaya, León y Estelí.

c OEDEC (1975).

d Incluye a los que buscan trabajo por primera vez.

significan 30 % de la PEA ocupada de Managua en esa época, constituyen 70 % de los trabajadores en servicios personales, 55 % de los vendedores y comerciantes, 37 % de los empleados y oficinistas, 24 % de los artesanos y operarios, y sólo 14 %

de los obreros y jornaleros, acentuándose claramente en ellas los rasgos preindustriales de la ocupación urbana.

Este perfil de actividad se articula con tasas de desempleo relativamente altas (cf. cuadro III.9). El desempleo urbano sin embargo se hacía sentir de manera mucho más fuerte en algunas actividades que en otras —sobre todo en los sectores productivos. En 1975 casi la mitad de los desempleados eran artesanos y obreros y jornaleros, y más de la mitad en la fuerza de trabajo masculina de ambas categorías de empleo.

La inestabilidad ocupacional se conjuga con la inestabilidad de los ingresos, y la refuerza. Casi 40 % de los trabajadores percibían la remuneración de su fuerza de trabajo de manera diaria o semanal, pero estas formas regían para casi 85 % de los obreros y jornaleros y para más de 70 % de los artesanos y operarios. La inseguridad de los ingresos, así inferida, parece haber sido mayor en la fuerza de trabajo masculina que en la femenina, ya que las formas de pago quincenal y mensual abarcaban a 51 % de los hombres y a 76 % de las mujeres.<sup>1</sup>

Cuadro III.9

Tasas de desocupación urbana, 1973-1976 (en %)

Años	Tasa global	Managua	Otras ciudades
Mayo-junio 1973 <sup>a</sup>	14.03	16.39	11.45
Junio 1974 <sup>a</sup>	6.88	8.04	5.12
Setiembre-octubre 1974 <sup>b</sup>	16.5	17.0	15.2
Junio 1975 <sup>a</sup>	9.62	11.11	6.64
Junio 1976 <sup>a</sup>	8.72	9.80	6.70

<sup>a</sup> OEDEC (1973, 1976).

<sup>b</sup> INCAE (1975).

<sup>1</sup> Algunos estudios sugieren que, más que los ingresos bajos, el elemento central de estos sectores urbanos es la *inseguridad* de los ingresos, derivada a su turno de la inestabilidad en el empleo. "En determinados aspectos, la economía de los marginados en la ciudad puede compararse a la de las bandas de cazadores y recolectores, quienes enfrentan el problema de la supervivencia con los solos recursos de su destreza, su astucia y su solidaridad social" (Lomnitz 1975: 96). Según esta investigación, no debe excluirse de esta situación a

Cuadro III.10

Distribución de la ocupación urbana según ingreso semanal, 1974 y 1975, en %

Ingreso <sup>a</sup>	1974		1975	
	Total <sup>b</sup>	Managua	Total <sup>b</sup>	Managua
Menos de 100	32.1	26.3	25.5	19.2
100 a 299	45.0	46.4	46.1	46.2
300 a 999	17.5	20.0	22.4	26.7
1.000 y más	5.4	7.3	6.0	7.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0

<sup>a</sup> Córdoba por semana.<sup>b</sup> Managua, Masaya, León, Estelí.

Fuente: INCAE (1975 y 1976).

Ingresos inestables, y por añadidura de monto reducido y desigualmente distribuido. El cuadro III.10 presenta la situación de los ingresos semanales, que constituyen la forma de remuneración de una tercera parte de la población ocupada urbana. Más de dos tercios de esos ingresos no alcanzaban a los 300 córdobas (poco más de 40 dólares), pero en algunas categorías ocupacionales los remunerados por debajo de ese nivel eran aún más: 83 % de los artesanos, 86 % de los prestadores de servicios personales, 96 % de los obreros y jornaleros.

El concepto de *pobreza*, como síntesis de fuerte desempleo, empleo inestable, mala vivienda, carencia de servicios básicos, ingresos bajos e inseguros, expresa la condición de vida de la gran mayoría de las masas trabajadoras urbanas de Nicaragua. Al mismo tiempo, califica al proceso de proletariza-

los trabajadores calificados (llamados "maestros"), que carecen de ocupación estable: "Estos 'maestros' ganan más que el salario mínimo, siempre que tengan trabajo; pero en realidad su salario medio mensual generalmente está por debajo del salario mínimo. Este ejemplo demuestra que el criterio del salario puede ser engañoso, y que el factor más relevante para la definición de la marginalidad es la *inseguridad económica*. Hay maestros de escuela que ganan menos que un capataz en una construcción y sin embargo no son marginados como éste" (ibid., loc. cit.: los subrayados son de la autora). Aunque no compartimos la caracterización de estos sectores como *marginales*, creemos que el estudio de Lomnitz plantea el punto central de la cuestión.

ción que impone a esas masas el tipo de capitalismo dependiente y agroindustrial que se escenifica en el país a mediados de la década de 1970. Un proceso de proletarización en el cual una clase obrera pequeña, que labora en un número reducido de unidades empresariales modernas, no está aún plenamente diferenciada del resto de los trabajadores urbanos ni por su modo de inserción en las relaciones de producción, ni por sus condiciones generales de vida, y donde una enorme y multifacética diferenciación, encadenamiento y articulación de actividades, oficios, prestaciones y habilidades, formales e informales, expresan en su conjunto la subordinación de las masas trabajadoras a la dinámica del capital.

Lo que generalmente se denomina *proletariado* todavía hoy en Nicaragua responde a este momento de la proletarización de la fuerza de trabajo y está constituido así, sobre todo, por estas masas trabajadoras subordinadas en sus prácticas ocupacionales a la valorización del capital, más que por una clase obrera en sentido estricto.

Proviene de familia campesina, humilde y trabajadora. Transcurrió su vida en un ir y venir de penurias como toda la clase proletaria de nuestro pueblo bajo el régimen corrupto y explotador de la dinastía somociana. El compañero T. era comerciante de verduras entre la capital y Bluefields... La viuda e hijos de T. todavía viven... cerca del mercado donde T. trabajó para mantenerlos (Smutko 1980: 9).

La extracción de clase de M. era proletaria; don Ricardo (su padre) era técnico electricista y su mamá, costurera (IES 1982b: 213).

...ambos son de extracción proletaria y trabajaron varios años como obreros de la ciudad y del campo cuando no había trabajo en la ciudad. No tuvieron acceso a la educación superior. (...) H. fue mecánico de desmotadoras, soldador y cortador de algodón (...). Su padre... era picapedrero y su madre (...) ama de casa. R. (...) fue carpintero, albañil, zapatero, cortador, sembrador y cinchonador de tabaco. Su padre... trabajó en carpintería... Su madre, era una campesina, analfabeta (Barricada, 2 de febrero 1983).

Su abuela materna vendía carne, y su madre... sigue en ese mismo oficio en el enorme Mercado Oriental de Managua. Su padre también es de origen proletario: de joven trabajó como limpiabotas, albañil y luego maestro de obra (Testimonio recogido en Randall 1980: 39).

Pasar estos cinco meses como viven los campesinos, comer, exponernos como ellos, nos incrementó el amor hacia el proletariado (...) (Martínez 1980).

Soy de una familia obrera: mi papá es electricista y mi mamá modista (Testimonio recogido en Randall 1980: 197).

... miles de obreros, entre ellos más de 5.000 trabajadores hospitalarios del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, paralizaron indefinidamente sus actividades (IES 1982c: 91-92).

Un gesto digno de ser ejemplo para la clase obrera en este país, protagonizaron ocho ex empleados del Centro Comercial Managua. (...) El grupo de trabajadores afirmó que muy pronto darán muestras que la clase obrera puede ejercer su poder en los medios de producción (...).<sup>5</sup>

Mi papá era estudiante de derecho, de extracción proletaria, hijo de una empleada doméstica (...). Mi mamá, también de extracción proletaria, hija de un carpintero y su esposa. Mi mamá era bien pobre, pues trabajaba en una tienda, vendiendo; (...) Ella tuvo una venta (...) (Testimonio recogido en Randall 1980: 95).

Esta caracterización, este modo de ver como proletarios a estos grupos y fracciones, dependen a su turno de una perspectiva de clase. Si desde el ángulo popular y revolucionario ellos son vistos como proletariado, desde la perspectiva de la burguesía son enfocados como empresariado:

Queremos resaltar una vez más que de la población económicamente activa del país, que es de 800 mil personas, más de 200 mil son autoempleados o propietarios de una parcela de tierra o dueños de un taxi o de un camión; pequeños industriales o artesanos; dueños de pulperías o tienditas; empresarios grandes o pequeños; o simplemente profesionales. Todos ellos son sector privado. (...) Asimismo el sector privado juega un papel muy importante en el comercio nicaragüense. El pulpero de Matiguás, así como el comerciante de ropa del Centro Comercial Managua, contribuyen a generar empleos, a la vez que a distribuir los productos e, inclusive, a recaudar impuestos para los gastos del gobierno. Más de 65 mil pequeñas pulperías y vivanderas existen en el país. Todas ellas desempeñan, no solamente la función económica de comprar y vender, sino una fun-

<sup>5</sup> Cf. *El Nuevo Diario*, 4 de febrero 1983. La casa comercial donde los empleados trabajaban cerró, con el importe de las prestaciones por cesantía instalarán un nuevo establecimiento comercial.

ción social que está arraigada en nuestra historia (...). (El pequeño empresario ... es una parte vital de nuestra economía. Nicaragua está hecha de pequeños empresarios."

... consideramos empresario a toda aquella persona que crea un bien o un servicio para la comunidad en forma organizada, sin importar el tamaño del mismo. Tan empresario es aquella mujer que vende en los mercados populares como los que producen. Tan empresario es el que maneja una pequeña pulpería como una cadena de supermercados.<sup>7</sup>

Este choque de caracterizaciones contradictorias es una forma de expresarse el enfrentamiento de las clases antagónicas del capitalismo en una formación económico-social donde la polarización capitalista de las clases está lejos de haber culminado, y donde proletariado y burguesía están aún en proceso de diferenciación respecto de estos agentes del desarrollo social. Proletarios desde la óptica revolucionaria, burgueses desde la perspectiva patronal, una y otra caracterización ilustran la ambigüedad esencial de estos grupos "intermedios" de la pequeña propiedad y la pequeña producción, la falta de un horizonte propio y su subordinación real a las clases fundamentales del capitalismo.<sup>8</sup>

En esta ambigüedad estructural, los factores de cambio y de conservación, de rebeldía y de sumisión, se articulan y coexisten. Unos prevalecerán sobre otros de acuerdo al desenvolvimiento de las contradicciones entre los polos antagónicos

<sup>6</sup> Discurso del dirigente empresario Enrique Dreyfus, presidente del Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE). En *La Prensa*, 14 de marzo 1982.

<sup>7</sup> *Ibid.*, en *La Prensa*, 15 de marzo 1983. Pero si los trabajadores son vistos como empresarios, en compensación los empresarios son vistos como trabajadores: "En Masaya falleció el líder obrero y destacado intelectual don ... propietario de la tipografía 'El Heraldo'". *La Prensa*, 18 de julio 1983 (los subrayados son míos).

<sup>8</sup> "En sus pequeñas empresas hacen de patrono y de empleado a la vez, sintiéndose ora patronos, ora obreros, según la situación económica que atraviesa el país, sin llegar a ser ni lo uno ni lo otro, salvo desapareciendo como pequeños burgueses. Si la situación es la insurrección tendrán más prisa que los propios insurrectos; si la situación es de calma (aunque sea calma de cementerio) serán celosos guardianes del orden público, de las buenas costumbres y de las leyes y los buenos hábitos" (J. López, O. Núñez et. al., 1979: 110). Cf. asimismo O. Núñez (1980b) y, para una discusión más general, Mayer (1975).



de la sociedad, y a la práctica política de las organizaciones que las expresan e impulsan:

La pequeña burguesía se identifica totalmente con la revolución (...) en la medida en que el movimiento revolucionario, el movimiento obrero, el movimiento popular en su conjunto, tenga una gran fortaleza. (...) en la medida en que el movimiento revolucionario se fortalezca o se debilite la pequeña burguesía oscila. Cuando el movimiento revolucionario está fuerte siempre tiende a abrazar los intereses revolucionarios y si nosotros nos empeñamos en educarlos, por inculcarles la disciplina, el ejemplo, la técnica, la abnegación del proletariado, podemos tenerla a nuestro lado permanentemente (Comandante de la Revolución C. Núñez, 1980a).

#### 4. El sujeto social de la insurrección popular <sup>9</sup>

Este es el perfil real del pueblo nicaragüense. Una compleja muchedumbre trabajadora de artesanos, campesinos, semi-proletarios, vendedores, gentes de oficio, gentes sin oficio, jornaleros, estudiantes, pobres de la ciudad y del campo, de cuyo seno el proletariado va diferenciándose poco a poco; la forja de donde emergió el *sujeto social* de la revolución sandinista y de la insurrección popular con que ella culminó.

La creación, luego del triunfo revolucionario, de un programa de pensiones y subsidios para familiares de combatientes, colaboradores, etc., caídos en la guerra de liberación contra la dictadura somocista, abre la posibilidad de acceder a una información bastante amplia sobre el origen social de los participantes y de sus familias, su ocupación, forma de vida, educación formal, etc., y de reconstruir, a partir de ella, la fisonomía

<sup>9</sup> Se entiende aquí por *sujeto social* al participante real de la insurrección, como síntesis de determinaciones socioeconómicas —de clase, ocupacionales, familiares, etc.— e ideológicas. El concepto se construye a partir de estos elementos en su manifestación concreta; tiene por lo tanto un referente de clase, pero no reduce el sujeto a la clase.

concreta de los protagonistas de la etapa de la lucha revolucionaria.<sup>10</sup>

La extrema juventud de los participantes se advierte en el cuadro III.11. El 71 % tenía, en el momento de caer, entre 15 y 24 años, una proporción casi tres veces más alta que el peso de ese mismo grupo de edad en la pirámide demográfica (20 %). El papel predominante de la juventud en la lucha contra la dictadura somocista ha sido analizado ya (cf. por ejemplo, Núñez 1982a: 125-147), y dentro de un momento efectuaremos algunos señalamientos al respecto.

Cuadro III.11

Edad y sexo de los participantes

Edad	Hombres	Mujeres	Total	
			N°	%
Menos de 15 años	10	1	11	1.4
15 a 19 años	187	14	201	31.0
20 a 24 años	229	14	243	40.0
25 a 30 años	113	10	123	19.0
31 a 40 años	48	1	49	7.0
41 años y más	11	2	13	1.6
Total	598	42	640	100.0
	(93.4 %)	(6.6 %)	(100 %)	

<sup>10</sup> Se trata del Programa "Héroes y Mártires" del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y Bienestar (INSSBI). El programa cuenta con un registro de 6.000 casos; cada uno de ellos se compone de un conjunto de documentos, informes, declaraciones, de familiares, vecinos y en general gente que conoció al combatiente en diferentes momentos de su vida; informes de trabajadores sociales del INSSBI sobre las condiciones de vida de los familiares del combatiente, testimonios o acreditaciones del CDS (Comité de Defensa Sandinista) respectivo, partidas de nacimiento del combatiente y de los peticionantes, y en general cuanta documentación acredite el vínculo familiar y la participación del caído en la lucha contra la dictadura. Obra asimismo en cada expediente la constancia oficial del FSLN de que el combatiente estaba encuadrado en dicha organización —aunque personalmente creemos que en este aspecto el FSLN adoptó un criterio más bien amplio. El análisis que se lleva a cabo en este capítulo se basa en una muestra aleatoria simple de 640 casos, extraída a partir de una tabla de números aleatorios.

El predominio absoluto de los hombres es llamativo y contrasta con la imagen prevaleciente sobre el grado de participación de la mujer en la lucha revolucionaria y, sobre todo, en la insurrección final. En realidad, las cifras del cuadro III.11 no cuestionan esa participación, pero sugieren que la incorporación de la mujer a la lucha se llevó a cabo, en la mayoría de los casos, a través de formas y modalidades *distintas*, que no son registradas por el tipo de información que se analiza aquí. Más que en el combate directo, la participación de la mujer parece haber tenido lugar fundamentalmente en tareas de apoyo: correo, casas de seguridad, abastecimiento de alimentos y medicinas, ocultamiento y trasiego de armas, atención de hospitales clandestinos, y similares.<sup>11</sup>

Más de la mitad de los participantes (54 %) son hijos ilegítimos; casi la mitad (47 %) se crió y vivió hasta aproximadamente los 12 años en familias de una sola cabeza —la madre en casi todos los casos.<sup>12</sup> Se trata asimismo de una cabeza de familia que, por razones ocupacionales, debe pasar gran parte del día fuera del hogar. Los niños se crían acompañados por otros niños —hermanos,<sup>13</sup> amigos, primos... — bajo la mirada distante de una vecina, o el farrago del mercado donde la madre —y muchas veces también los niños— trabaja.

La proporción de familias con una sola cabeza —sobre todo, con cabeza femenina— es muy alta incluso para los patrones de estructuración familiar prevalecientes en la sociedad nicaragüense. De acuerdo a la Encuesta Demográfica Nacional de 1978, de un total investigado de 6.600 jefes de familia, unos 1.500 eran mujeres —alrededor de 23 %. Es decir, que entre los combatientes de la insurrección hubo *el doble de jó-*

<sup>11</sup> Esto se advierte asimismo en las placas recordatorias emplazadas en Managua y otras ciudades: la inmensa mayoría de ellas se refiere a combatientes hombres. Cf. Maier (1980: cap. II) para una discusión de los diferentes modos de participación de hombres y mujeres durante la insurrección.

<sup>12</sup> La información sobre el tipo de filiación proviene de las partidas de nacimiento de los combatientes. La muestra fue aquí mucho más pequeña ( $n = 98$ ), posiblemente debido a la inexistencia de registros de población en las áreas rurales y en la mayoría de los poblados pequeños, y a que en definitiva la inscripción de los nacimientos parece ser una práctica poco frecuente en amplios sectores de la población. La información sobre el tipo de familia se obtuvo para 388 casos (61 %).

<sup>13</sup> Una gran cantidad de las familias de las que se obtuvo información tiene más de seis hijos cada una.

venes crecidos en familias de una sola cabeza, que en el conjunto de la población.

La cuestión tiene, sin dudas, un enmarcamiento de clase. En una investigación sobre los barrios "marginales" de la Managua preterremoto se halló que 48 % de los jefes de familia encuestados eran mujeres (Tefel 1978: 52, 58). Más recientemente una investigación sobre los menores trabajadores en las calles de Managua (vendedores ambulantes, cuidacarros, etc.) señala que, de 334 responsables de hogar, 58 % son mujeres, y solamente 54 % de los menores trabajadores vive en un hogar con ambos padres (CTM/INSSBI 1983).

Estos datos sugieren algunas hipótesis que, aunque no pueden ser desarrolladas dentro de los alcances de este trabajo, resulta importante explicitar. Si, como afirma la Psicología, la familia es el ámbito donde el ser humano entra en contacto por vez primera y en edad muy temprana con la autoridad, parece posible plantear que una proporción muy alta de los participantes en la insurrección y en las etapas finales de la lucha, tuvo sus primeras experiencias de desarrollo psicosocial en familias donde el componente autoritario parece haber sido diferente, y habérse expresado de manera distinta, que en los estereotipos dominantes de la familia burguesa o la familia patriarcal. El esquema autoritario de unas relaciones adulto-niño de tipo vertical e inmediato, parece aquí desplazado o por lo menos conjugado con un esquema de relaciones de tipo horizontal entre iguales —las relaciones entre niños ocupan una gran parte del día—, en familias con una sola cabeza como imagen de autoridad, que además pasa mucho tiempo fuera del hogar o dedicada a actividades que la alejan de una atención directa de los niños —atención que suele delegarse en la abuela u otro adulto. Los niños en consecuencia viven buena parte de su infancia en interacción básicamente con otros niños, en la casa o en la calle o el mercado, pero en todo caso con un control adulto relativamente distante —espacial o afectivamente.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> El caso de Luisa Amanda Espinoza es ilustrativo. El 19 de agosto de 1948, en Managua, doña Antonia Espinoza da a luz a Luisa Antonia, conocida como Luisa Amanda. En el Barrio El Calvario, Managua, y en condiciones de marginación económica y social, crece Luisa Amanda. La madre, mujer humilde, lavaba y planchaba para ayudar a la sobrevivencia de la familia, obteniendo una pequeña paga por ese duro trabajo. A los 7 años de edad, se tras-

Esta modalidad específica de este tipo de familia en su función generadora de imágenes de autoridad se articula con las debilidades de otras agencias tradicionales de control social. El elevado analfabetismo y las altas tasas de deserción ponen a la institución escolar fuera del alcance de las clases populares; la figura de la maestra —la imagen convencional de la *segunda madre* de la ideología escolar de la burguesía latinoamericana— como referente de autoridad fue ajena a las tempranas experiencias de la infancia popular.

Algo similar habría ocurrido con la iglesia. De acuerdo a una investigación en los barrios más pobres de Managua (Tefel 1978), la actitud prevaleciente en la población parece haber sido entre indiferente y crítica:

En total 30.9 % de los jefes de familia contestó que sólo va "de vez en cuando" a la iglesia o templo, y 13.5 % nunca. (La práctica religiosa de los que concurren al templo de vez en cuando obedece, más que a una convicción profunda, a un ritualismo social que gira alrededor de ciertos acontecimientos importantes, como bautismo, matrimonio, muerte. Una parte considerable de los jefes de familia tiene una actitud crítica frente a la Iglesia jerárquica, aunque quizá no con el rigor y la crudeza de la juventud (pp. 136-137).

Una encuesta sociorreligiosa... revela "una opinión pública desfavorable a las estructuras eclesiásticas. Así veía a la Jerarquía: Anquilosada, conservadora, estática, avanzada en edad,

lida a Granada, a la casa de Nicolás Gutiérrez, un tío materno, dueño de una panadería, quien tenía una mejor situación económica. Aquí Luisa Amanda va a la escuela primaria y trabaja vendiendo pan en las calles. De 12 años de edad regresa a Managua, al Barrio San Luis donde vivía su mamá. Empieza sus estudios de Comercio en el Instituto Centroamericano (...). Cuando la familia Espinoza se traslada a vivir al Reparto Amanda, kilómetro ocho y medio de la Carretera Norte, para no dejar los estudios Luisa Amanda se queda viviendo en el Barrio San Luis, en casa de Doña Carmen, quien vendía comida en el barrio y colaboraba con el FSLN. (...) Luisa Amanda se vincula con el Frente Sandinista de Liberación Nacional en esta casa, la que era visitada por el jefe de la Revolución, Comandante Carlos Fonseca, José Benito Escobar, Julio Buitrago y otros compañeros dirigentes de la Vanguardia. Su primera labor fue de "correo", llevaba correspondencia a los compañeros clandestinos y era contacto entre las casas de seguridad en Managua" (Departamento de Propaganda y Educación Política del FSLN 1981:3-4). Luisa Amanda Espinoza fue una de las primeras mujeres incorporadas activamente al FSLN; militante destacada, murió en combate contra la Guardia Nacional en León, el 3 de abril de 1970; aún no había cumplido 22 años.

apática, negativa, desunida, poco accesible al pueblo, parte de la cual la desconoce e ignora. Representa el inmovilismo (...). La opinión expresada a través de esa encuesta sobre el clero diocesano es también crítica. Se señala "la falta de diálogo y su poco *aggiornamento*, permaneciendo en un estado de anquilosamiento ideológico, marginado por la jerarquía y por el pueblo". También se nota que "sólo buscan su propio interés económico" y su "poca sensibilidad social ante los problemas de su fe- ligresía".

La crítica no es sólo para la Iglesia jerárquica sino también para la Iglesia como "pueblo de Dios". Al leerseles a los encuestados la afirmación de que "la mayoría de los que van a la iglesia no practican lo que oyen", el 68.8 % se manifestó de acuerdo y el 15.9 % expresó tener dudas. Solamente 11.7 % rechazó la afirmación. Es decir que sólo estos últimos encuentran una correspondencia lógica entre el culto religioso y la vida de los que asisten a él (págs. 136-137).

Podría argumentarse, a partir de estas consideraciones, que la capacidad de la iglesia para desempeñarse como agencia de reproducción ideológica del orden social imperante parece haber sido reducida respecto de estos sectores populares. Después del terremoto de Managua el desarrollo de prácticas pastorales inspiradas en las nuevas corrientes del cristianismo latinoamericano, la renovación de los cuadros sacerdotales, la atención prestada por el FSLN a las organizaciones de cristianos de base, redujeron más aún esa capacidad, y en cambio abrieron un ámbito de cuestionamiento a la dictadura somocista y a las injusticias sociales (cf. Argüello 1979; Molina 1981).

El panorama en materia de organizaciones políticas y comunales es de similar desolación. La investigación dirigida por Tefel en los barrios de Managua revela la inexistencia de organizaciones "comunitarias" y patronatos escolares, o el completo desconocimiento de ellas por la gente de los barrios; los clubes juveniles o similares eran asimismo inexistentes. Tampoco los partidos políticos contaban en estas zonas de la ciudad con organizaciones de base de carácter permanente:

Los partidos nuevos no han penetrado todavía en forma masiva en el cinturón de miseria, y los partidos históricos, liberal y conservador, por su naturaleza electorera, sólo se movilizan durante las campañas electorales creando en los barrios comités

efímeros que desaparecen después de las elecciones. La actividad partidista en los barrios es sumamente baja y limitada (Telfel 1978: 159).

En virtud de estos elementos puede plantearse como hipótesis que el contacto con la autoridad debe haberse dado, en los sectores populares, sobre todo en su relacionamiento conflictivo con los aparatos represivos del Estado somocista —como víctimas o forzados testigos de su prepotencia, su corrupción, sus abusos—, y en edades en que ya la estructura básica de la personalidad está configurada. Una represión que se introduce violenta en el horizonte cotidiano de la vida de la gente:

Cuando chavalo en mi barrio había una cantina que era de una señora gorda —que le pegaba a su marido—, le decían la cantina de los Dimas. Entonces como en esa cantina había pleitos de bolos,\* la guardia llegaba y malmataba a los bolos. Esa es la primera impresión que yo tengo de la Guardia. Los golpeaban, eran unos salvajes golpeándolos en la cara con las culatas. Se miraba la sangre... (Cabezas 1982: 11).

El aislamiento de la Guardia Nacional respecto de estas masas populares debe haber incrementado el peso de su presencia represiva ante los ojos —y las espaldas— de la gente. Booth (1982a: 57) ha llamado la atención respecto de la estrategia somocista de aislar a la Guardia de la población civil. Los miembros de la Guardia (tropas y oficiales) y sus familias vivían en general en repartos o barrios distintos y mantenían relaciones sociales fundamentalmente entre sí con el fin de incrementar la unidad interna y, según Booth, reducir sus escrúpulos respecto de la represión a los civiles, convirtiéndose en los hechos en "detestado y temido ejército de ocupación de su propio territorio nacional" (ibíd., loc. cit.).

Parece claro que estos elementos de tipo psicosocial no bastan para explicar la rebelión de la gente, su incorporación a la lucha. Pero también puede plantearse que en estas condiciones el componente opresivo del orden social y político puede hacerse más perceptible. La arbitrariedad del ejercicio del

\* Bolos: borrachos.

poder político-militar de la dictadura, el carácter indiscriminado —y al final, genocida— de la represión, se hacen sentir de manera más directa y generalizada en las clases populares y convierten a la rebeldía activa y a la participación en la lucha revolucionaria en una cuestión defensiva, de vida o muerte.<sup>15</sup>

El cuadro III.12 presenta el perfil ocupacional de los participantes en la insurrección. Los estudiantes constituyen, indudablemente, la primera fuerza,<sup>16</sup> seguidos por las *gentes de*

Cuadro III.12

Ocupación de los participantes

Ocupación	%
Estudiantes	29.0
Gentes de oficio (artesanos, talleristas, comideras, planchadoras, transportistas, mecánicos, carpinteros, hojalateros, colchoneros, zapateros, fontaneros, reparadores, etc.)	22.0
Obreros y jornaleros	16.0
Empleados y oficinistas	16.0
Técnicos, profesionales, maestros, profesores	7.0
Pequeños comerciantes, buhoneros	5.0
Campesinos, agricultores	4.5
Otros	0.5
Total	100.0 (n=542)
Ignorados	98

<sup>15</sup> Esta no es una peculiaridad de la Revolución Sandinista. Moore Jr. (1978) ha señalado la presencia de estos elementos defensivos en la incorporación de la gente a la lucha contra el orden establecido en las revoluciones europeas de la década de 1840, en la revolución rusa de 1917 y en la revolución alemana de 1918.

<sup>16</sup> Debe destacarse que 37 % de los casos que figuran como estudiantes son en realidad trabajadores que estudian por la noche (92 casos). Estos participantes fueron ubicados en la categoría ocupacional correspondiente, quedando como estudiantes sólo los que no trabajan, o de cuyo trabajo no existe información (136 casos).



*oficio*: una categoría que engloba a artesanos, talleristas, trabajadores por cuenta propia en una multiplicidad de ocupaciones, habilidades y tareas productivas y de reparaciones: zapateros, mecánicos, albañiles por contrato, fontaneros, muebleros, comederos, modistas, planchadoras, hojalateros, sastres, barberos, carpinteros... Los asalariados constituyen en conjunto 32 % del total, pero no parece conveniente incluir en la misma categoría a los oficinistas y empleados junto con los obreros y jornaleros; las diferencias ocupacionales expresan aquí diferencias de clase más profundas. Por otro lado, una proporción importante de los "obrerros y jornaleros" son aprendices o trabajadores en los que la relación salarial no implica un divorcio respecto de instrumentos de producción. La presencia de obreros es baja no sólo respecto de los estudiantes y trabajadores de oficios, sino también respecto de lo que podría esperarse de acuerdo a algunas caracterizaciones de la insurrección. Es importante señalar sin embargo que la proporción de obreros y jornaleros en la lucha es más del doble que su participación en la estructura ocupacional urbana (cf. cuadro III.8). Finalmente, la reducida participación de campesinos y agricultores es consistente con el carácter eminentemente urbano de los tramos finales de la lucha.

Este panorama es coherente asimismo con el que emerge de una muestra adicional de 113 casos extraídos de biografías de militantes y dirigentes sandinistas, listas de prisioneros de la dictadura y testimonios de participantes y observadores, y que figura en el cuadro III.13. Es interesante destacar el mayor peso que adquieren aquí los grupos intelectuales —estudiantes, pero sobre todo maestros, profesores, técnicos y profesionales— y los de origen campesino, mientras la participación obrera es mucho más reducida que en el cuadro III.12. Una hipótesis explicativa de estas diferencias podría referirse al *tipo diferente de participante* en uno y otro caso: mientras la información del cuadro III.12 se refiere fundamentalmente a lo que podríamos llamar las bases de la insurrección, la información contenida en el cuadro III.13 presenta una mayor presencia de cuadros dirigentes, militantes destacados, y en un período que comienza mucho antes de la insurrección.

La marcada inestabilidad ocupacional y de ingresos de las masas trabajadoras se advierte con nitidez en los participantes en la insurrección y en sus familias. Un combatiente fue, en el

lapso de no más de tres años, repartidor de pan, joyero, obrero estacional en las empresas bananeras, cartero. Otro fue carpintero, albañil, trabajador agrícola estacional, zapatero. La madre de un combatiente cuidó en Masaya "alquila revistas e inyecta". Una campesina madre de ocho hijos y viuda de un combatiente, combina el cultivo de maíz en su finquita con la preparación y venta de comida y el trabajo temporal como obrera agrícola en los cafetales. Un combatiente muerto en Masaya fue maestro de primaria, vendedor de pan, aprendiz de zapatero, profesor de enseñanza media. Otro, maestro rural y empleado de motonaves en el río Rama. Otro más ebanista, obrero fabril, albañil, mueblero y, en el momento de morir, dueño de un pequeño taller mecánico. Otro fue mecánico, obrero agrícola estacional, soldador.

Cuadro III.13

Ocupación de un grupo escogido de participantes

Ocupación	%
Estudiantes	31
Gentes de oficio, artesanos, trabajadores domiciliarios	17
Técnicos y profesionales, maestros y profesores	17
Campesinos y agricultores	13
Obreros y jornaleros	8
Pequeños empresarios, buhoneros y pequeños comerciantes	8
Empleados y oficinistas	6
Total	100
	(n = 113)

El fuerte peso del artesanado y gentes de oficio en general se acentúa cuando se presta atención a la ocupación de los padres de los participantes. La presencia del pequeño comercio y del campesinado es sustancialmente mayor en los padres

de los participantes que en los participantes mismos, pero a la inversa, el componente obrero es sensiblemente menor.<sup>17</sup>

En el cuadro III.14 se presenta la situación ocupacional de los padres de los participantes. En todos los casos el origen predominante es artesanal y de oficios; sumado éste al origen comerciante y pequeño empresario, se tiene entre la mitad y dos tercios de los participantes de cada uno de los principales grupos ocupacionales.

La extracción pequeñoburguesa y de clase media es mayor entre los estudiantes; más de 80 % tiene ese origen. De acuerdo a esto, la decisiva incorporación de los estudiantes a la lucha revolucionaria no habría sido exclusivo efecto de elementos conocidos —la rebeldía propia de las jóvenes generaciones, su mayor exposición a procesos ideológicos críticos, la inestabilidad propia de quienes carecen aún de un modo de inserción en el orden social...—<sup>18</sup> sino que asimismo habría expresado los factores de tensión y las contradicciones de sus clases de origen, con todas las mediaciones —familiares, psicosociales, etc.— del caso.

La amplia presencia de los estudiantes es coherente con el origen histórico del FSLN y con el amplio espacio para el reclutamiento político que conquistó, tempranamente, en los centros educativos. El estudiantado fue visualizado por el FSLN como un elemento particularmente estratégico de agitación y movilización, dados el carácter reducido del proletariado industrial, la debilidad de sus organizaciones, el enfoque reivindicacionista que prevalecía en ellas:

En nuestro país existe un proletariado industrial muy joven, que todavía se encuentra desorganizado sindicalmente en su abrumadora mayoría, lo cual, en la actualidad, limita su capacidad de lucha. Asimismo, el movimiento campesino con reivindicaciones clasistas, data de los años recientes. Por razón de un proceso dialéctico, es el sector del pueblo constituido por los

<sup>17</sup> Aunque por *padres* se hace referencia a padre y madre, la información sobre éstas es más difícil de discernir. En casi 65 % de los casos para los que hay datos, la madre aparece desempeñando *oficios domésticos*, una denominación que abarca actividades que pueden ser remuneradas o no —lavado y planchado de ropa por ejemplo—, según se realicen para la casa propia o para terceros, pero sin que esta circunstancia conste en los registros.

<sup>18</sup> Cf. por ejemplo Arellano (1969).

Cuadro III.14

Ocupación de los padres de los participantes (en %)

Ocupación de los padres	Participantes				
	Total	Estudiantes	Gentes de oficio	Obreros y jornaleros	
Gentes de oficio	39.0	35.0	45.5	46.0	
Campesinos, agricultores	19.0	13.0	15.0	15.0	
Pequeños empresarios, buhoneros, pequeños comerciantes	17.0	15.0	16.5	16.0	
Empleados y oficinistas	9.5	14.0	11.0	—	
Técnicos, profesionales, maestros, profesores	9.5	17.0	—	—	
Obreros y jornaleros	5.0	4.0	5.0	12.0	
Otros	1.0	2.0	7.0	11.0	
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	

(n=390)

estudiantes el que con mayor entusiasmo acoge en la primera etapa los ideales revolucionarios. Durante cierto período, los estudiantes deben ser la fuerza que ha de encabezar la lucha popular (Fonseca 1981: 137).<sup>19</sup>

Además, escuelas, colegios, universidades, constituyen el punto de encuentro de masas estudiantiles pequeñoburguesas que, fuera de ellos, carecen de otros ámbitos de confluencia —por el carácter individual de sus ocupaciones, por el fracturamiento de sus formas de reproducción social. La escuela se convierte en el espacio donde estos sectores pueden superar el aislamiento recíproco a que los confina su modo de existencia material; en este sentido, cumple una función equivalente a la de los mercados en el ámbito de la circulación mercantil.

Por su lado, 62 % de los participantes obreros también es hijo de gentes de oficio y de comerciantes, buhoneros, pequeños empresarios. De alguna manera, estos resultados permiten apreciar, desde el ángulo de este estudio, un momento concreto del proceso de proletarianización de estas fracciones "intermedias" o pequeñoburguesas, en dos generaciones de cada familia; ellos son consistentes con lo señalado en el capítulo anterior acerca de la progresiva reducción del artesanado y en general la pequeña producción urbana, por efecto del proceso de expansión industrial (cf. cuadro II, 12).

Por último el cuadro III, 15 presenta una aproximación regional a la situación ocupacional de los participantes; para facilitar la lectura se destaca en cada departamento el grupo de mayor peso relativo, o los dos mayores. Los resultados son consistentes con las características socioeconómicas de cada lugar. Los estudiantes aparecen como la fuerza principal en siete departamentos: Managua y León, sedes de la Universidad Nacional; Rivas, teatro de operaciones del Frente Sur, donde el reclutamiento estudiantil por la vía de Costa Rica parece haber sido alto; el resto, departamentos cuyas cabeceras concentran contingentes importantes de estudiantes de secundaria. Las gentes de oficio predominan en cuatro depar-

<sup>19</sup> El texto, dirigido a los estudiantes de la universidad, data de 1977. Cf. también Comandante de la Revolución H. Ruiz (1980a): "Nuestro origen dominante era pequeño burgués, origen estudiantil (...)", Cf. también Cabezas (1982), caps. 1 a 6.

Cuadro III. 15  
Ocupación de los participantes, por departamento (en %)  
Departamentos

Ocupación	Managua	Estelí	Masaya	León	Rivas	Chinandega	Matagalpa	Zelaya	Carazo	Nueva Segovia	Resto
Estudiantes	32	21	16	28	32	21	29	15	33.0	12	15
Técnicos, profesionales, maestros, profesores	6	6	9	8	4	4	6	15	—	—	15
Empleados y oficinistas	19	11	17	16	12	15	18	8	8.5	—	5
Obreros y jornaleros	13	15	10	16	11	26	24	8	33.0	—	15
Campeños y agricultores	2	30	15	10	18	13	6	15	8.5	76	25
Gentes de oficio	22	14	29	19	18	19	11	31	17.0	12	15
Pequeños comerciantes y empresarios, buhoneros	6	3	4	3	5	2	6	8	—	—	10
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0	100	100
n	(143)	(54)	(62)	(51)	(48)	(42)	(57)	(22)	(24)	(16)	(20)

tamentos, si bien solamente en dos tienen la primacía (Masaya y Zelaya). Los obreros y jornaleros, y los campesinos, aparecen como fuerza importante en tres departamentos cada uno. Los grupos de clase media intelectual y de pequeña burguesía oficinista tuvieron una presencia bastante reducida en todos los departamentos, aunque no tan exigua como los vendedores, pequeños comerciantes y similares.

Es importante destacar que los únicos tres casos en que los obreros aparecen como una fuerza de peso relevante, se trata de departamentos agrícolas; esto lleva a pensar que se está en presencia de trabajadores del campo, o agroindustriales (café en Matagalpa y Carazo, azúcar y algodón en Chinandega), más que de obreros industriales. De alguna manera este desigual involucramiento del proletariado urbano y del proletariado rural estaría explicando el desigual grado de desarrollo de la convocatoria insurreccional en una y otra fracción de la clase obrera. La organización de los trabajadores del campo es un espacio creado y desarrollado indisputablemente por el FSLN, desde varios años antes del triunfo revolucionario. Carazo y Chinandega figuran precisamente entre los departamentos donde más temprano comenzó el trabajo político del FSLN con los obreros agrícolas; la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) se creó en 1978 en el departamento de Carazo, y desde el comienzo impulsó intensas movilizaciones, ocupaciones de tierras, etc. de conformidad con las orientaciones del FSLN. En cambio, el trabajo político en el movimiento obrero industrial recibió una atención menor y más tardía (Talavera 1979; Rivas M. 1983), y tuvo además que enfrentarse a la reticencia, u oposición, de las dirigencias sindicales y políticas de la izquierda tradicional y del socialcristianismo, a una estrategia de lucha revolucionaria.

Nuestra historia registra intentos de vinculación directa con las clases trabajadoras del país desde 1963, con las huelgas de los estibadores de Corinto, en las mismas empresas textiles de Somoza. Pero también en aquel entonces los que se sentían con las patentes de los sindicatos, una vez que ubicaban la inclinación política de nuestros organizadores, no vacilaban en señalarlos en las asambleas públicas como militantes del FSLN que pretendían, decían, "llevar a los trabajadores a una muerte segura, a un método aventurero de lucha" y de esa manera conseguían en algunos casos y durante algún tiempo detener la inte-

gración de los trabajadores al proceso revolucionario (Comandante de la Revolución B. Arce, 1980a: 19).

Yo tenía más conceptos del Frente bien arraigados, conceptos que los mismos dirigentes del Partido me habían metido: que los del FSLN eran oportunistas, aventureros, locos, vagos y demás (Testimonio de Gladys Báez, *apud* Randall 1980: 228).

Y se hacían asaltos, ajusticiamientos, que la prensa reportaba porque eran acciones directas contra la dictadura; aquello era una osadía sin límites, una herejía política dentro del marco de los partidos políticos burgueses, el conservador y el liberal y, por supuesto, también el socialcristiano y el socialista. Estos últimos nos catalogaban de aventureros, de pequeño-burgueses, y en las asambleas universitarias nos recitaban párrafos de aquel libro de Lenin *El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo* (O. Cabezas 1982: 27).

En estas condiciones de manifiesta hostilidad, la aproximación del FSLN a los trabajadores, su reclutamiento para la lucha revolucionaria, debió llevarse a cabo más en los barrios —que, por las razones señaladas anteriormente, aparecían como un campo abierto al trabajo político sandinista— que en las fábricas; más en los centros de reproducción que en los de producción.<sup>20</sup>

El sujeto social de la insurrección y de los tramos finales de la lucha revolucionaria sandinista surge así con un carácter más

<sup>20</sup> "Desgraciadamente nuestro país históricamente ha sufrido el flagelo del desempleo, y recordamos con qué facilidad un obrero o un campesino brindaba su casa para tener escondidos a combatientes sandinistas clandestinos, o se prestaba a trasegar armas, a participar en acciones riesgosas, y cómo se negaba cerradamente a ir a convertirse en agitador de su centro de trabajo y de su sindicato, temeroso de perder su empleo. Había una lógica práctica que sólo la vivencia directa con la masa permite entender. Podemos sintetizar una conversación con un compañero obrero que nos decía: 'Si a mí me detectan en este trabajo con el FSLN, yo me voy a la clandestinidad. Si me voy a la clandestinidad, yo no vuelvo a ver a mi mujer y a mis hijos, y a lo mejor se mueren de hambre, pero no lo estoy viendo. Y si me corren del trabajo, ¿cómo aguanto yo de ellos la demanda de comida, el pago de la casa, estando todo el día en la casa?'. Esto no aparece en los libros. Generalmente las particularidades de las revoluciones no aparecen en los libros. De ahí que la participación de los trabajadores en nuestro país se desarrolló más en formas organizativas clandestinas o semi-clandestinas, se desarrolló más vinculada al enfrentamiento frontal contra la dictadura y su aparato represivo, que en ese marco de lucha reivindicacionista en el que muchos quieren encontrar retratada la participación de las clases fundamentales de la sociedad" (B. Arce 1980a: 25-26).



popular, en el sentido amplio de *masas trabajadoras*, que proletario en el sentido estrecho, o más exactamente, con un perfil donde los componentes proletarios se articulan y entremezclan en un amplio y complejo espectro de situaciones de pobreza generalizada y muy aguda, de subordinación *formal* más que *real* al capital, y de inestabilidad e inseguridad en todas las dimensiones de la vida —coherente con la estructura socioeconómica del tipo de capitalismo que venía desarrollándose en el país.<sup>21</sup>

La pequeña producción y el trabajo no asalariado —lo que en este capítulo se ha venido denominando, por falta de un nombre mejor, *gentes de oficio*— emerge claramente como la fuerza social principal en la insurrección. Ellas constituyen la mayor parte de los participantes directos y de los sectores socio-ocupacionales que engendran participantes. Es cierto que los estudiantes los superan como grupo de participación directa, pero a su turno estos estudiantes son, mayoritariamente, hijos de esa fracción social.

En principio, el proletariado no parece haber sido una fuerza cuantitativamente determinante. Sin embargo su participación no debería ser minimizada. La presencia obrera en la insurrección es *dos veces mayor que en la estructura ocupacional urbana*, algo que no ocurre ni con las gentes de oficio ni con la pequeña propiedad. La presencia obrera fue así mayor en la lucha revolucionaria que en la economía; más determinante en la producción de la sociedad nueva que en la reproducción de la sociedad vieja. Este desfase entre una y otra puede explicarse, creemos, por los elementos señalados más arriba —ámbito y modo de reclutamiento, desigual nivel del trabajo político.

El sector no productivo del asalariado —empleados, oficinistas y similares— tuvo una participación cuantitativamente similar a la del proletariado, y en algunos departamentos —Masaya por ejemplo— se constituyó en el segundo grupo en orden de magnitud. Los grupos intelectuales —profesionales,

<sup>21</sup> Esto fue advertido por Carlos Fonseca: "Según vienen sucediendo las cosas en Nicaragua, el Frente Sandinista se convierte en un destacamento de vanguardia pero también en algo más que un destacamento de vanguardia, al cumplir también las veces de destacamento del pueblo, o sea, un movimiento nacional. Tal vez sea apropiado calificar a nuestro destacamento de proletario-popular" (Fonseca 1981: 309).

maestros, técnicos— y, sobre todo, el pequeño comercio que marca de manera tan fuerte el paisaje urbano nicaragüense —pulperías, pequeñas ventas y similares— tuvieron una participación insurreccional poco relevante.

El sujeto social de la Revolución Sandinista en la etapa que culmina con el triunfo del 19 de julio 1979, se aproxima así mucho más al de otras revoluciones de liberación nacional del Tercer Mundo que a la imagen prevaleciente en algunos ámbitos de la izquierda académica, de una revolución proletaria en el sentido de revolución *por* proletarios. Revolución popular y antiimperialista, asentada en las amplias mayorías del pueblo, es en el marco de la liberación nacional que las tareas anticapitalistas tienen posibilidad de desarrollo.

Este sujeto social no es la sobrevivencia de formas atrasadas o precapitalistas de producción, sino producto y protagonista central del capitalismo que se desarrolló en Nicaragua a través de la dominación imperialista, y del modo en que ese capitalismo dependiente se articula con formas preexistentes de producción, y las reproduce. En este capitalismo la proletarización de la fuerza de trabajo tuvo lugar mediante la subordinación formal al capital, y no sólo por la vía de la salarización del trabajador "libre". Una proporción alta de los trabajadores siguió estando ligada a la tierra, a instrumentos de trabajo, a fondos de reproducción, que funcionaron como otros tantos mecanismos de atadura de la fuerza de trabajo al capital en los momentos en que éste la necesitaba, y de interrupción de la relación cada vez que el capital ya no la requería.

El concepto de *pobreza* que circunscribe a este amplio y diferenciado espectro de grupos ocupacionales y clases y fracciones, no se reduce al bajo nivel de los ingresos, al analfabetismo y la falta de enseñanza media y superior, a la pésima vivienda —es decir a *tener poco*, en una simplista aproximación cuantitativa al problema— sino que configura el marco global que define el modo de existencia de las masas populares bajo el tipo de capitalismo agroindustrial y dependiente de la década del '70 en Nicaragua. Una situación social cuyos forzados protagonistas se encuentran sometidos a intensas y contradictorias presiones y tensiones, cambios profundos o por lo menos bruscos en el marco de una misma generación —migraciones, catástrofes, degradación económica, pérdida de la casa, del empleo, etc.— que impactan directamente en la vida

cotidiana de la gente y se traducen en una inseguridad e inestabilidad general y, en el fondo, en la falta de un lugar bajo el sol.

El desarrollo capitalista de las décadas de 1950 y posteriores golpeó fuertemente a las masas populares —un efecto que, no por "normal" es menos relevante. Las elevadas tasas de crecimiento del PIB, la rápida formación de nuevas fortunas, la modificación del paisaje urbano —no sólo por el terremoto sino asimismo por la construcción de nuevos repartos, de plantas fabriles, etc.— y rural, la modernización general de la actividad económica y de la vida social, se tradujeron, para la inmensa mayoría de la población, en una desarticulación más profunda de sus condiciones de vida. Los campesinos perdieron sus tierras y debieron migrar hacia zonas de frontera, o a las ciudades. En éstas, el avance del capital industrial y comercial reducía el espacio económico del artesanado, el pequeño comercio, el trabajo personal por cuenta propia, sin generar formas alternativas de empleo: como se señaló en el capítulo II, el proceso de proletarianización de la fuerza de trabajo impulsado por el capitalismo dependiente nicaragüense fue más efectivo en términos de empobrecimiento de las masas trabajadoras, de degradación de sus condiciones generales de vida, que en términos de salarización de los trabajadores "libres".

La dictadura fue más que la forma de este tipo de capitalismo y de esta modalidad de proletarianización laboral. El Estado somocista operó sobre las tendencias estructurales de la sociedad nicaragüense que apuntaban a la desarticulación, aislamiento y desorganización de los trabajadores, reforzándolas mediante la represión. Pero al mismo tiempo, y de manera contradictoria, coadyuvó sin quererlo al progresivo desarrollo de una conciencia popular donde el rechazo a la miseria, a la falta de trabajo y de tierra, a una vida indigna, se articuló con el repudio a sus componentes extraeconómicos: la arbitrariedad policiaco-militar, el poder onímodo del patrón, la inseguridad cotidiana. Como lo sintetizó un trabajador de Managua:

Antes, si uno quería hacer valer sus derechos, lo hacían pa-pilla. De balde querían que uno trabajara.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Testimonio de un trabajador de 47 años, recogido por el autor.

La inestabilidad laboral se conjuga y refuerza, en estas condiciones, con la inestabilidad en los ingresos, en la vivienda, en la familia; con el trabajo duro y sin recompensa; con la opresión de la dictadura que todo lo controla; con la inseguridad frente a la Guardia que todo lo reprime; con la arbitrariedad de la administración pública (botín privado de la camarilla gobernante) que todo lo corrompe. Todo ello en el encuadramiento más amplio de una sociedad cuyo presente y cuya historia no hacen sino agudizar la falta de horizonte de sus clases populares: invasiones extranjeras, estacionalidad ocupacional, empobrecimiento creciente...

El ascenso de la lucha revolucionaria y, sobre todo, el carácter indiscriminado —y al final, genocida— de la represión dictatorial, hicieron posible superar las divisiones y fracturas internas de estos sectores, el aislamiento recíproco producto de sus propias condiciones de vida, y unificarlas en el enfrentamiento al Estado opresor. La rebeldía activa y la participación personal y directa en la lucha revolucionaria se convirtieron en una cuestión defensiva, de vida o muerte. Cuando ser víctima de la represión deja de ser algo que le sucede a otro —porque es *sandinista*, o *agitador*, o *subversivo*, o porque de alguna manera similar *se la busca* al colocarse en la extracotidianidad, en una situación *distinta* a la de uno— y pasa a ser algo que le ocurre a *cualquiera* aunque se quede pasivo en la casa, quedarse pasivo en la casa ya no sirve como defensa. El miedo a la represión como algo extracotidiano se transforma en certidumbre cotidiana de la represión y abre paso a la necesidad de una defensa activa:

Yo le decía a mi tía: "Si a mí me permitieran pelear así (embarazada) yo peleo", porque de todos modos, si me quedaba en la casa me mata una bala o un roquet o una bomba, pues, de todos modos me muero (Testimonio recogido por Maier 1980: 122).

Yo entré al Frente debido a que pensaba que íbamos a morir nosotros como pendejos\* (ibid., 123).

Cada acción del Frente... provoca la incorporación de decenas de jóvenes dispuestos a morir peleando antes que dejarse matar impunemente.<sup>23</sup>

\* "Pendejo": estúpido, tonto.

<sup>23</sup> Testimonio de un habitante del Barrio Riguero (Managua), recogido por el antropólogo Bernardo Albrecht.

Nos despedimos de nuestras esposas, hermanas y madres con lágrimas en los ojos pensando que ya no regresaríamos, pero pensando siempre que mejor morir peleando que morir de indallas pidiendo elemosina.<sup>21</sup>

... y yo les dije a mis chavalos que mejor se metían en el Frente, porque si no, de todos modos la Guardia me los mataba, por ser jóvenes nomás, figúrese.<sup>22</sup>

## 5. Vanguardia y masas

El rechazo a la explotación social y a la opresión política no implican la automática incorporación de las masas a la lucha revolucionaria, o incluso la aceptación de la idea de la necesidad de un cambio revolucionario. Tampoco basta el desenvolvimiento de una crisis económica, o el ejercicio de la represión. Abandonada a sus propios impulsos, la gente puede producir estallidos violentos, irrupciones dramáticas, espectaculares pero políticamente intransitivas. O bien, pueden optar por una respuesta evasiva: migrar, huir. Es la articulación de las masas en una organización política revolucionaria la que abre la posibilidad de una lucha eficaz, y otorga virtualidad transformadora a las rebeliones y protestas populares.

El terreno político de la Nicaragua de Somoza reproducía el panorama de contradicciones sociales sin resolución para las masas. Los sucesivos pactos entre el Partido Conservador y la dictadura demostraban que no era en la oposición tradicional —más tradicional que opositora— donde las masas populares podían expresar sus ansias de emancipación. La masacre del 27 de enero de 1967 añadió a la evidencia histórica una ratificación trágica: el Partido Conservador aceptó primero la matanza de sus bases populares —que veían en el liderazgo de Agüero una alternativa a la dictadura— para luego pactar con el somocismo el acatamiento al fraude electoral y la incorporación subordinada a la periferia del Estado opresor.

La incapacidad de la izquierda tradicional para insertarse en las masas y plantear una estrategia revolucionaria acorde a

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Testimonio de una madre de Esteli, recogido por el autor.

las características reales de la sociedad nicaragüense, y la falta de interés del neorreformismo en hacerlo, cerraban dichas posibilidades también por este lado. Es posible plantear en este sentido, al menos como hipótesis, la existencia de un desfase ideológico relativamente marcado entre las bases populares y las dirigencias establecidas. En algunos casos parece haberse tratado, directamente, de proyectos diferentes; en otros, de la incapacidad de las dirigencias por ligarse al modo efectivo en que las masas vivían la explotación social y la opresión política, y de reconocer el nivel real de conflicto que ellas encerraban.<sup>26</sup>

El asesinato de Pedro Joaquín Chamorro (10 de enero 1978) fue el detonante que activó el estallido popular. La muerte de quien hasta ese momento aparecía como el crítico personal más firme a la dictadura lanzó a la gente a la calle, a expresar con violencia su rabia acumulada; marchando, gritando, rompiendo, quemando, lanzando su ira de manera inorgánica pero unidireccional, con una mezcla de conciencia e instinto, contra los personeros y las propiedades de la dictadura:

Yo empecé a participar después de la muerte de Pedro Joaquín. Antes los que participaron, pues, uno no los conocía, los que salían eran muy callados y concretos. No habían estas masas de ahora... todo esto. Esto empezó ya con la muerte de

<sup>26</sup> Una investigación efectuada a mediados de la década de 1970 permite vislumbrar este destase entre obreros y dirigentes sindicales de la industria textil. Si bien las bases aparecen con una óptica mucho más reivindicacionista que los dirigentes —en el sentido que visualizan el sindicato sobre todo como instrumento para obtener mejoras salariales, ocupacionales, educativas— la politización de la dirigencia resulta ser más abstracta, menos ligada a los datos de la sociedad real. Todos los dirigentes contestaron que su objetivo era vivir "en una sociedad sin diferencias de clase", frente a 11 % de los obreros; asimismo 50 % de los dirigentes señaló al sistema capitalista como responsable de la mala situación de los trabajadores, frente a sólo 3 % de las bases. Pero 39 % de los obreros respondió que para alcanzar una sociedad mejor era necesario cambiar de gobierno, frente a 17 % de los dirigentes. 59 % de los obreros contestó que los ricos tienen mucho dinero "porque explotan a los pobres", y otro 18 % "porque han robado" —es decir, 77 % en conjunto—, mientras que entre los dirigentes ambas respuestas suman sólo 25 %, pero otro 33 % respondió que deben su riqueza a que "son trabajadores". Finalmente, a la pregunta "¿qué partido cree que va a ganar popularidad entre el pueblo en los próximos años?", 37 % de los obreros contestó "FSLN", convirtiéndolo en la organización más "votada", mientras que la mitad de los dirigentes planteó la necesidad de crear un partido clasista, "de los trabajadores", y ninguno mencionó al FSLN (Pasos, 1977).

Pedro Joaquín. Ya, pues, era un agigantamiento; fue entonces cuando la gente ya no tenía miedo, una manifestación tras otra; hasta quemaron casas y fábricas y todo.<sup>27</sup>

Las movilizaciones callejeras no eran algo nuevo en la lucha contra la dictadura. Durante la década de 1970 sobre todo, el FSLN había impulsado marchas estudiantiles, movilizaciones campesinas, tomas de escuelas y de iglesias, y similares. Sin perjuicio de su eficacia agitadora y propagandística, se trataba de formas de protesta que reclutaban a sectores específicos de la población y que apuntaban a objetivos determinados: libertad a los presos políticos, denuncia de las torturas y desapariciones, etc.; su creciente anclaje en el pueblo no impedía ver que todavía en amplios sectores de las masas privaba el miedo a aceptar los riesgos que implicaba incorporarse a estas formas de lucha —caer preso o desaparecer, ser golpeado, torturado, perder la vida.

El asesinato de Pedro Joaquín Chamorro terminó con todo esto. Es evidente que algo en el corazón y en la razón de las masas se quebró definitivamente con ese crimen; que para muchísima gente del pueblo esa muerte fue la prueba final, brutal, contundente, de que nadie estaba a salvo de la dictadura, de que no había posibilidad de escapatoria al margen de la eliminación de la dictadura y de una acción directa de las propias masas. No era solamente el dirigente de UDEL, o el director de *La Prensa*, o el hombre internacionalmente respetado, quien había sido asesinado:

... esa noche, yo tuve la sensación de que más que a Pedro Joaquín, era a la oposición a Somoza a la que habían matado.<sup>28</sup>

En todo caso, era un tipo determinado de oposición la que moría con Chamorro: la de los cambios dentro del sistema social vigente, de la modernización reformista, del capitalismo sin corrupción y sin excesos represivos. Para las masas, moría la esperanza, o la fantasía, del cambio sin esfuerzos propios y la ilusión de la suficiencia del esfuerzo ajeno, e irrumpía vio-

<sup>27</sup> Testimonio recogido por Maier (1980: 93).

<sup>28</sup> Testimonio de un dirigente del Movimiento Pueblo Unido, recogido por el autor.

lenta la convicción de que ya no cabía otra oposición que la que desde hacía casi veinte años el FSLN venía articulando.

Desde ese momento el pueblo no habría de abandonar las calles. Un mes después, la represión en Monimbó a una movilización con motivo de un nuevo aniversario del asesinato de Augusto C. Sandino, iniciaría la insurrección popular que habría de sellar definitivamente la integración orgánica de las mayorías populares con la vanguardia revolucionaria: si las masas se lanzaron espontáneamente a las calles, se consolidaron en ellas y triunfaron contra la dictadura a través de la organización y las armas sandinistas:

La verdad es que siempre se pensó en las masas, pero se pensó en ellas más bien como un apoyo a la guerrilla, para que la guerrilla como tal pudiera quebrar a la Guardia Nacional, y no como se dio en la práctica: fue la guerrilla la que sirvió de apoyo a las masas para que éstas, a través de la insurrección, desbarataran al enemigo (Comandante de la Revolución H. Ortega, 1980).

Lo que en octubre 1977 fueron acciones de vanguardia, y en enero 1978 una explosión de masas, a partir de Monimbó y Masaya sería una insurrección revolucionaria:

Para ese entonces ya sabíamos que andaba por aquí el Frente Sandinista, pero había quienes nos imaginábamos que iban a venir aquí en columnas, o algo así. Fue hasta después que nos dimos cuenta de que el Frente éramos nosotros; que ellos iban a orientar, pero que éramos nosotros, al lado de ellos, los que teníamos que luchar. Ese día comenzaron a salir los pañuelos rojo y negro. Por primera vez comenzamos a participar todos en la lucha. Me acuerdo que nos pusimos todos a alzar barricadas para que no entrara la Guardia; pero el problema era que no teníamos armas, pero eso no importaba. Nosotros decíamos: "O triunfamos o nos matan a todos".

La lucha de nosotros era la lucha de todo el pueblo. Sólo creíamos en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Nosotros nunca vimos combatiendo a esos burgueses que ahora dicen que ayudaron. Nosotros nunca vimos a los que dicen que son de los Derechos Humanos. Nosotros nunca vimos a nadie más que a nuestros hijos, que eran y son el Frente.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Testimonio de una madre de Masaya, en *Los Muchachos* (9 febrero 1983) 6:8.



Sobre todo en algunos ámbitos académicos, se ha afirmado a veces para explicar el vertiginoso ascenso revolucionario nicaragüense entre 1977 y 1979, que Somoza fue algo así como el "enemigo ideal": el carácter profundamente corrupto y crecientemente represivo de su régimen terminaron por aislarlo del conjunto de la sociedad y de buena parte de la comunidad internacional. Esto habría facilitado las cosas al FSLN, que pudo así actuar en un espacio abierto por los errores, o la tozudez, de su adversario.<sup>30</sup>

El argumento es, por supuesto, trivial. Desde este punto de vista, también Trujillo debió haber sido un "enemigo ideal"; ¿por qué entonces la historia dominicana se desarrolló de manera tan diferente a la de Nicaragua? Tampoco fue un fenómeno inédito en las luchas populares latinoamericanas, la insurrección final, Colombia en 1948, Argentina en 1970-71, vivieron explosiones insurreccionales de extraordinaria magnitud: ¿por qué en estas situaciones la rebelión popular no condujo a la destrucción del Estado opresor y a la constitución de un poder político de nuevo tipo?

La respuesta no pasa por el carácter primitivo o los errores del enemigo, sino por la capacidad de las fuerzas populares de encontrar las estrategias y los instrumentos para potenciar la efectividad de su lucha. Lo que diferencia a Nicaragua de los otros casos es la existencia de una organización revolucionaria consolidada y legitimada por dos décadas de lucha contra el somocismo. El impacto en la conciencia de la gente del testimonio de lucha contra la dictadura, la explotación, la opresión, es siempre enorme. La respuesta de masas puede no ser inmediata, pero el heroísmo, el arrojo, el sacrificio de los primeros crea progresivamente las condiciones para la incorporación —lenta al principio, masiva al final— del pueblo.<sup>31</sup> Y al mismo

<sup>30</sup> Me refiero a varias intervenciones en el XIV Congreso Latinoamericano de Sociología (San Juan de Puerto Rico, octubre 1981), y en el XI Congreso Internacional de la Latin American Studies Association (LASA), Ciudad de México (septiembre 1983).

<sup>31</sup> Varios testimonios recogidos por el autor en Matagalpa (septiembre 1980) y en Managua, sugieren que muchos jóvenes se lanzaron a pelear en setiembre 1978 y en junio-julio 1979 reclamándose del FSLN pero sin tener en realidad vinculación orgánica con el Frente e incluso sin conocer a miembros del Frente; su primer contacto con el FSLN tuvo lugar al calor del combate. Esto nos lleva a pensar que, para esta gente, el FSLN era sinónimo de lucha contra el somocismo.

tiempo la presencia activa de la organización revolucionaria significó que, cuando finalmente la gente se lanzó a las calles, hubo una estructura que sirvió de soporte a la rebelión, la organizó, la armó, le dio continuidad y la elevó hacia niveles políticos superiores.

Sin dudas, en el inicio del tramo final de la lucha contra la dictadura estuvieron presentes elementos de espontaneidad en la gente:

La sublevación de febrero (1978) en Monimbó tuvo... un carácter altamente espontáneo (...). El Frente Sandinista no condujo, no dirigió orgánicamente la lucha del pueblo en las acciones mismas, y en el inicio de éstas, más que una decisión de la vanguardia, fue una acción vital de una comunidad que espontáneamente revalidaba su tradición de lucha (IES 1982c: 54).

Sin embargo esos estallidos tuvieron lugar en un terreno preparado por las movilizaciones de masas, la propaganda y el ejemplo combativo del FSLN, y en un clima político general que denotaba la impronta del avance revolucionario. Después de la insurrección de Monimbó el FSLN decidió trasladar sus cuadros guerrilleros al frente de la lucha de masas. Esto significó que

compañeros fogueados en la guerrilla, experimentados en el arte militar, en las emboscadas (...) llevaron al trabajo de las masas una sólida experiencia militar. Entonces, ya en setiembre se da la insurrección salida en gran parte de aquella guerrilla (Comandante H. Ortega 1980: 30).<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Una anécdota poco difundida sirve para ilustrar la compleja relación entre espontaneidad y organización que caracterizó a las primeras experiencias insurreccionales. Tan pronto como supo de la insurrección de Monimbó, el FSLN destacó a varios de sus cuadros para apoyar y consolidar el movimiento. Estos cuadros lograron atravesar el cerco que la Guardia Nacional había tendido en torno del barrio, pero fueron detectados por las patrullas de autodefensa de la población, y hechos prisioneros. Esto se debió, según los propios protagonistas, a que no eran conocidos de la gente de Monimbó, y a que estaban armados y llevaban dinero —todo lo cual hizo pensar a los monimboseños que se trataba de un intento de infiltración de la Guardia. Sometidos a un prolongado y agresivo interrogatorio, los enviados del FSLN fueron dejados en libertad y pudieron integrarse a la lucha cuando la población se convenció de su filiación política. Para esto fue decisiva la intervención de un

Sobre la base de estas experiencias, a principios de enero 1979 el FSLN comenzó a planificar minuciosamente el complejo operativo militar de la insurrección en Managua, que se lanzaría seis meses más tarde. En un meticuloso estudio del terreno, fueron tomadas las decisiones relativas al barrio o barrios en que se iniciaría la insurrección, qué barrios actuarían como apoyo, diversión y retaguardia, dónde se construirían las trincheras y barricadas, cómo se construirían, etc. Nada, o muy poco, fue dejado al azar o a la improvisación.<sup>33</sup>

La historia del FSLN es sin dudas una historia de enfrentamiento armado a la dictadura somocista, pero también es una historia de organización campesina y obrera, de luchas barriales y sindicales, de defensa de los derechos humanos y las libertades cívicas, de movilizaciones estudiantiles y demandas culturales. El protagonismo de masas que tuvo lugar desde principios de 1978 fue al mismo tiempo fructificación del trabajo y del ejemplo precedentes, y abono para formas más organizadas y masivas de lucha.<sup>34</sup>

viejo e importante colaborador del FSLN, de activa participación en la organización de la insurrección, y que desde octubre de 1977 había perdido contacto orgánico con el Frente, cuando su responsable cayó en combate en el intento de toma del cuartel de la Guardia Nacional en Masaya. Cf. IES (1982a y 1982b).

<sup>33</sup> El responsable de esta tarea fue Cristian Pérez, uno de los mejores estrategas de la guerra insurreccional urbana del FSLN. Cristian Pérez, sin embargo, no pudo ver la coronación de su trabajo: murió en combate con la Guardia Nacional en mayo 1979, días antes del lanzamiento de la insurrección en Managua.

<sup>34</sup> Señala al respecto el Comandante Humberto Ortega: "La acción del Palacio movió de tal manera el cuadro político nacional e internacional, que llevó incluso a insurrecciones parciales, espontáneas, como la de Matagalpa; y ésta a su vez, motivó aún más a las masas, lo que las llevó prácticamente a un desbordamiento natural; ante esa situación nosotros dijimos: si dejamos al movimiento solo, sin conducción, el enemigo lo va a masacrar y va a ser difícil recuperar después el ánimo, la moral de lucha para más adelante, aquí hay que ponerse al frente de esa decisión, y conducirla y ganar mejores posiciones que las que tenemos hoy" (H. Ortega, 1980: 30-31). Esta capacidad de captar el efectivo nivel de desarrollo de la combatividad de las masas, y de dar respuesta adecuada a situaciones nuevas, contrasta con la posición de otras organizaciones antisomocistas revolucionarias. Todavía en abril 1979 el Frente Obrero, por ejemplo, planteaba que "la organización de las masas precede a la insurrección, como condición básica para el desarrollo victorioso de la misma", y criticaba la estrategia del FSLN que "lejos de colocarse bajo la dirección del proletariado... se afianza cada vez más en su aventajada práctica ultraizquier-

La reflexión del Comandante Henry Ruíz sobre la incorporación de los campesinos a la lucha sandinista es válida asimismo para la ciudad:

El campesino... respondió como por arte de magia, donde no había más magia que la actividad permanente de los años que nosotros estuvimos en la montaña (Ruíz 1980a).

La exposición de los dos últimos capítulos permite concluir que confluyeron en el triunfo de la Revolución Popular Sandinista tres grandes factores:

1. Un acelerado proceso de desarrollo capitalista que, en el curso de tan sólo una generación, alteró drásticamente las condiciones de vida de las masas trabajadoras rurales y urbanas, despojándolas de sus tierras y sus empleos, liquidando sus tallercitos, hundiéndolas en la miseria, incrementando su explotación;

2. Un Estado dictatorial, producto directo de la dominación militar imperialista, que reproducía esa explotación social, la expresaba como dominación de clase y estimulaba su desarrollo, pero que fue aislándose progresivamente de la sociedad y, al absolutizar el proyecto de acumulación de una fracción minúscula de la burguesía, terminó antagonizándose al conjunto del capital;

3. Una organización de vanguardia forjada en dos décadas de lucha que receptó las demandas populares, impulsó la combatividad de las masas articulando los combates presentes con la tradición antiimperialista del pueblo, las organizó y las proyectó hacia niveles superiores de conciencia y de eficacia, y que supo capitalizar en beneficio del proyecto popular las contradicciones internas de los grupos dominantes.

disto (...). El reclutamiento es fundamentalmente a través del populismo y del romanticismo que se ha tejido alrededor de los mártires populares y no a través de una línea política correcta que capte las aspiraciones de las masas populares, a través de tareas específicas a seguir por determinados sectores de la población para la consecución de objetivos inmediatos y mediatos". Cf. *El Pueblo*, 4 de abril 1979 (pág. 7).

## CAPÍTULO IV

### Unidad nacional y economía mixta

#### 1. Introducción

Uno de los aspectos más señalados en la Revolución Popular Sandinista es la participación de sectores de la burguesía en la lucha contra el régimen somocista y en la etapa actual del proceso revolucionario. La configuración de la estructura material de la sociedad, el modo en que el Frente Sandinista de Liberación Nacional articuló su estrategia revolucionaria a dicha estructura, y al final, la exacerbación del carácter represivo y depredador de la dictadura, hicieron posible la incorporación de grupos de la burguesía a la lucha antisomocista y al proceso de reconstrucción nacional.

La oposición de la burguesía nicaragüense al régimen somocista conoció modalidades y momentos variados, pero en todos los casos provino fundamentalmente de sus sectores medios más que del gran capital. Las contradicciones que diferenciaban y enfrentaban a los capitalistas nicaragüenses — particularmente la contradicción, analizada en el capítulo II, entre el gran capital somocista y no somocista, local y extranjero, ubicado sobre todo en las finanzas, el procesamiento y la comercialización, y la pequeña y mediana producción subordinadas al primero— actuaron para que la diferenciación económi-

ca de la clase impulsara una diferenciación política, y fuera ubicando progresivamente a estas fracciones subordinadas del capital en un enfrentamiento político a la dictadura.

Esta diferenciación en el seno de la clase fue abonada por el desenvolvimiento de la contradicción somocismo/sandinismo. Y en la medida en que el somocismo era la síntesis política del tipo de capitalismo dependiente efectivamente desarrollado en Nicaragua, y el sandinismo la forma más avanzada de la lucha popular, el enfrentamiento de estas fracciones de la burguesía a la dictadura era, en el fondo, un aspecto derivado de los antagonismos fundamentales, de clase, de la sociedad nicaragüense, más que un elemento autónomo en sí mismo.

Esta no es, ciertamente, la opinión de la burguesía, que tiende a dar a su lucha un carácter mucho más beligerante y decisivo —aunque el análisis de sus pronunciamientos y sus acciones directas muestra más bien una tonalidad moderada en sus fines y en su enfoque. De esta imagen, no obstante, también participan algunos observadores de la izquierda académica. Se ha afirmado así que

...el factor desencadenante del proceso revolucionario ha sido inicialmente, la *crisis interburguesa*, producto de la forma específica que tomó en Nicaragua la repercusión de la recesión prolongada del capitalismo combinada con los cambios operados en la economía del país en los últimos 15 años (A. Gilly 1980: 134).

No hay dudas que en Nicaragua la oposición burguesa abrió la crisis del régimen de Somoza y realmente condujo la primera fase de la revolución. Fue sólo al final del proceso, con la ayuda de la intransigencia de Somoza, que el FSLN se apropió del liderazgo de la lucha (H. Weber 1981: 33).

En estas apreciaciones influyen no sólo la distancia o el apresuramiento —y una arbitraria reducción de un proceso de dos décadas de lucha revolucionaria sandinista a sus últimos 24 meses—, sino también algunos elementos del discurso político del FSLN en este último tramo. Buscando acelerar la crisis general de la dictadura, el Frente Sandinista definió desde mediados de 1977 una estrategia de aproximación hacia sectores democráticos de la burguesía nicaragüense, estimulando su abierta incorporación a la oposición activa, convenciéndola

de la relevancia que su contribución podía tener, enfatizando el valor de sus aportes. Por último, el contraste de las acciones colectivas adoptadas por estas fracciones de la burguesía con la pasividad y el desentendimiento precedentes, y el propio miedo o inseguridad de algunos elementos de la clase, favorecieron que la burguesía viviera sus acciones como de una extrema osadía.

Un análisis desapasionado acuerda a la actividad opositora de la burguesía una relevancia menor. Su participación en el derrumbe del somocismo fue real, pero su eficacia fue mínima mientras quiso aspirar a un rol de primacía respecto de la lucha popular. La participación de estos sectores tuvo sentido en la medida en que se insertó en el proceso de ascenso de la lucha revolucionaria y se subordinó a ésta.

La sección siguiente de este capítulo enfoca algunos de los aspectos más relevantes del proceso de progresiva oposición de sectores de la burguesía al régimen somocista, y del proceso de enfrentamiento/articulación, dentro del campo de la lucha antidictatorial, de una estrategia revolucionaria, popular y antiimperialista conducida por el FSLN, y una estrategia reformista, ligada a algunos elementos del gobierno norteamericano impulsada por estas fracciones democráticas de la burguesía. Luego, la sección 3 presenta un análisis del proceso de consolidación de la hegemonía popular en el proyecto sandinista de unidad nacional a partir del triunfo del 19 de julio de 1979, y las contradicciones generadas en torno a esto, entre el campo popular revolucionario y los sectores reformistas de la burguesía —y, a su turno, la diferenciación en el seno de estos sectores, de grupos y elementos que van desplazándose directamente hacia posiciones contrarrevolucionarias a medida que la Revolución Sandinista avanza y se profundiza. En la discusión de estas cuestiones se retoman los temas planteados en el capítulo I.

En la sección 4 se expone el modo en que la Revolución Sandinista ha encarado la cuestión de la gran propiedad y, en general, de la economía mixta, en el marco de una rápida agudización de las tensiones y agresiones externas y de la lucha de clases. En la sección 5 se efectúa un análisis del papel del campesinado y la pequeña y mediana propiedad rural y urbana. Por su complejidad y extensión, la cuestión del movimiento obrero en la unidad nacional es discutida en el capítulo V.



## 2. Del sueño americano a la pesadilla revolucionaria

El "pacto de los generales" entre Anastasio Somoza García y Emiliano Chamorro en 1950 —referido en el capítulo II— soldó la alianza de las dos fuerzas políticas en que la burguesía nicaragüense hallaba expresión: el Partido Liberal y el Partido Conservador. La diferenciación entre uno y otro respondía al emplazamiento espacial de los grupos respectivos y a la pervivencia de elementos oligárquicos en el seno de una clase capitalista aún en formación, más que a una clara diferenciación de las bases materiales de unos y otros —por ejemplo del tipo terratenientes vs. industriales, productores vs. comerciantes, u otros de la misma envergadura—, o a proyectos político-ideológicos opuestos —estatistas vs. privatistas, clericales vs. librepensadores, etc. El punto de conflicto era, lisa y llanamente, el control exclusivo y excluyente del aparato del Estado por la familia Somoza y sus grupos afines y, a través de éste, el relacionamiento privilegiado con los Estados Unidos, en una etapa del desarrollo capitalista nicaragüense en que uno y otro aparecían como condiciones necesarias para la consolidación de las bases materiales de la dominación social. El pacto de 1950 aseguró a los conservadores su incorporación subordinada a la institucionalidad del Estado somocista y a sus beneficios y prebendas, y garantizó que de ahí en más las disputas en torno a la cuestión del poder se solventarían por vías distintas que el enfrentamiento armado. La adhesión explícita a la doctrina anticomunista de la guerra fría demostraba las *buenas intenciones* de ambas partes respecto de la primacía de los intereses norteamericanos en la región.

La ejecución de Somoza García en 1956 por el patriota Rigoberto López Pérez dio inicio a una sucesión de tentativas de poner fin a la dictadura dinástica por la vía de las armas, por grupos de la pequeña burguesía y de sectores reducidos de la burguesía mediana. Antes o después todos ellos fracasaron: o por su imposibilidad de insertarse en la población, o por la represión que se descargó sobre ellos. A fines de la década de 1950 algunos sectores de la juventud del Partido Conservador encaron en la zona de Olama y Mollejones una acción de

este tipo, que se frustró casi inmediatamente. La tentativa, protagonizada entre otros por Pedro Joaquín Chamorro, habría contado con el apoyo tácito de las máximas autoridades del partido y con la cooperación de José Figueres desde Costa Rica (Talavera 1978).

Con el movimiento de Olama y Mollejones concluyen las acciones directas de la burguesía contra Somoza hasta las movilizaciones y huelgas patronales de enero-febrero 1978. Durante las dos décadas que median entre ambas fechas la burguesía nicaragüense se integró activamente al proceso de expansión capitalista que se desarrolló en el país. La dinámica del proyecto integracionista y el papel desempeñado en él por el Estado abrieron a la burguesía nuevos canales de acumulación que morigeraron sus resentimientos políticos. A partir de entonces su posición ante la dictadura cambiaría radicalmente. Durante la primera década, el mercado más que el Estado concentraría sus preocupaciones y esfuerzos; su capacidad de reclutamiento político de amplios sectores de las masas populares —que a su turno haría crisis en 1967— fue utilizada para garantizarse un mejor trato en el proceso de acumulación y una mejor integración a un esquema institucional que no se cuestionaba, antes que para tratar de impulsar desde el Estado un (inexistente) proyecto político propio. En la década siguiente, y sobre todo a partir del terremoto de Managua, las contradicciones entre esta burguesía y el somocismo se agudizarían, pero sin trasponer el ámbito de la producción y la circulación ni generar una alternativa política. La burguesía no pudo superar su papel de fuerza de presión externa y por lo tanto sus disputas con el somocismo estuvieron siempre subordinadas a un acuerdo de base en torno al tipo de organización social y política en que las reventas económicas tenían lugar.

La burguesía nicaragüense colaboró así con las orientaciones tíbiamente reformistas del Estado en la década desarrollista de 1960, a través de un conjunto de instituciones de "bien común", "desarrollo comunitario", "promoción social" y similares, dotadas en general de abundante financiamiento norteamericano (J. Wheelock 1976: 150 y ss.). De naturaleza preventiva, la acción de estos organismos se orientó sobre todo al *community development* promocionado por la Alianza para el Progreso, al otorgamiento de pequeños préstamos, y medidas por el estilo, mezclando la beneficencia con el interés y apun-

tando objetivamente a introducir expectativas de progreso individual en los grupos más empobrecidos de las masas populares y a crear en ellos la fantasía de una alternativa interna al régimen. Es representativo de toda una concepción de las cosas el siguiente comentario de un alto funcionario de uno de estos organismos —FUNDE (Fundación Nicaragüense de Desarrollo):

Dicha institución presentaba la fórmula para hacer una revolución sin sangre, e incorporar a los descontentos —la gran mayoría en nuestros países latinoamericanos— al desarrollo del país.

En Managua se reunió un grupo de 22 empresarios que lanzaron la idea llenos de preocupación por el cambio de mentalidad en la ayuda de los marginados. (...) Platicaban, por así decirlo, del tema de un continente donde el clamor de justicia y la petición de oportunidades agigantan el tremendo clamor que amenaza con ir más allá de las conquistas de ese tipo. Los 22 empresarios de FUNDE dieron por llamar al nuevo movimiento emprendido por ellos: *Nueva Alternativa*, en base de que, "en realidad y sinceramente", como dijo uno de sus directores, "no se puede ser rico cuando hay pobreza alrededor" (W. Báez Sacasa 1970).

Este comportamiento de la burguesía, de reclusión en el ámbito de los negocios y delegación del manejo político en el régimen, cambió a partir del terremoto de Managua, y de las prácticas institucionales de la dictadura con relación a la reconstrucción. Somoza, en efecto, hizo uso privilegiado de los créditos internacionales para incursionar en el terreno de la banca y la construcción, dominado hasta entonces por capitales integrados en los dos grandes grupos financieros existentes en Nicaragua: BANIC y BANAMÉRICA (cf. *supra*, capítulo II; J. Wheelock, 1976; Strachan 1976; Diederich 1981). La corrupción gubernamental alcanzó niveles sin precedentes, y aunque la crisis internacional comenzó a hacerse sentir un par de años más tarde por la vía del aumento de los costos industriales y la caída de la demanda de las exportaciones tradicionales, la reactivación de la economía impulsada por la reconstrucción, bien que limitada, alimentó fundamentalmente las aguas del molino económico de los Somoza, dejando a la gran burguesía de los grupos financieros con el sabor amargo del negocio perdido. A partir de esta época, la *competencia desleal* del régimen

será la reivindicación fundamental de los capitalistas criollos marginados del uso del aparato estatal.

La cuestión de la *competencia desleal* expresaba el modo de desenvolverse la contradicción entre una fracción de la burguesía que impulsaba la valorización de su capital y la diversificación de sus intereses a partir del aparato del Estado, y las restantes fracciones de la burguesía, apoyadas en las fuerzas del mercado. Esta contradicción no es peculiar del capitalismo nicaragüense sino, más bien, del tipo y nivel de desarrollo capitalista que tenía lugar en esta época en Nicaragua (cf. *supra* capítulo I). Lo destacable del caso nicaragüense es más bien la cohesión con que las fracciones afectadas por esta contradicción respondieron a la camarilla somocista, y el confinamiento de esa respuesta en el plano meramente corporativo hasta que la crisis general del régimen se hizo evidente. Pero antes de prestar atención a la estrategia de estas fracciones, es necesario advertir que la contradicción Estado/mercado marca solamente una de las dimensiones de los enfrentamientos internos de la burguesía nicaragüense —fundamentalmente los que tuvieron lugar en los más altos niveles del capitalismo local—. En las fracciones medias de la burguesía, y sobre todo en la burguesía agraria, la contradicción Estado/mercado se articuló con las contradicciones analizadas en el capítulo II, entre el capital productivo de la burguesía pequeña y mediana, y el gran capital financiero —tanto somocista como *opositor*.

El primer enfrentamiento orgánico de las fracciones subordinadas del capital con el Estado somocista tuvo lugar en marzo 1974, con la *Primera Gran Convención de la Empresa Privada de Nicaragua*. Esta reunión, convocada por el Consejo Superior de la Iniciativa Privada (COSIP) —una instancia gremial en la que confluían los grandes grupos financieros del país—, es considerada por muchos observadores, y por sus propios protagonistas, como la adopción de una posición de firmeza del sector frente al somocismo, y como un claro llamado de atención acerca de

... la necesidad de cambios sociales profundos que beneficiarían las grandes mayorías desposeídas (E. Dreyfus 1980).

Nuestra opinión es menos categórica. La reunión efectuó sin dudas varias puntualizaciones al régimen, pero carentes de la

agresividad y de la profundidad con que, a través del tiempo, ha sido adornada. Se trató de un enfrentamiento tenue en el que los voceros de las fracciones medianas de la burguesía asumieron el papel más activo. Los empresarios se presentaron como *gremio*, con reivindicaciones categoriales y marginando, por lo tanto, planteamientos en torno a la cuestión del poder. Se trataba de mejorar el funcionamiento del sistema económico existente, potenciar sus niveles de eficiencia y, sobre todo, alcanzar una más equitativa participación en sus beneficios para todas las fracciones de la clase.

Los reclamos del "sector privado" al Estado se centraron en dos cuestiones principales: 1) garantizar la utilización correcta y eficiente de los recursos públicos, y 2) fortalecer el sistema de licitación pública para asegurar el uso adecuado de los fondos públicos destinados a obras nacionales —es decir, garantías de una *adecuada* utilización del excedente social para beneficio del capital en general y no de ciertas fracciones de capitalistas exclusivamente—. Asimismo, se incorporaron demandas de sectores particulares de empresarios —ganaderos, productores agrícolas medianos—, etc. Se planteó también la necesidad de elevar los salarios, y la conveniencia de reconocer a los trabajadores el derecho a la asociación sindical.<sup>1</sup> En el plano de las propuestas globales, se postuló la promoción del desarrollo de una agroindustria adecuadamente integrada, sobre todo en materia de productos alimenticios y fibras naturales —vale decir, ganadería y algodón.

Para los empresarios nicaragüenses, las funciones legítimas del gobierno debían ser cuatro: 1) mantenimiento del orden constitucional; 2) provisión de infraestructura física y social, esta última

encaminada a levantar el nivel cultural de la población, velar por su salud y asistirle en casos de adversidad, a fin de que no se pierdan, para la Nación y la empresa, sus capacidades productivas;

3) definir las reglas del juego entre el sector público y la empresa privada, y 4) mantenimiento del equilibrio macroeconó-

<sup>1</sup> Cf. la transcripción de las deliberaciones y propuestas en *La Prensa*, 1 y 2 de marzo de 1974.

mico —asegurar el mantenimiento del nivel de precios e ingresos, etc. (E. Cruz 1974: 16-17). Asimismo la empresa privada reclama participación

en la gestión de los asuntos públicos para asegurar el cumplimiento de (sus) responsabilidades. Los límites de esa participación le vienen claramente señalados por su función social como organización. Su papel en el manejo de la cosa pública debe limitarse a orientar y encauzar la acción del Estado y a reclamar cabal cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a la empresa (ibíd., 18-19).

El tipo de Estado reclamado por la burguesía nicaragüense era así un Estado capitalista moderno, que desempeñara a cabalidad las funciones político-económicas que le son propias.<sup>2</sup> Solamente el atraso capitalista del Estado somocista —botín cautivo en manos de una camarilla— y la falta de precedentes de un reclamo de esta índole, podían dotar al planteo empresarial del carácter agresivo con que a veces se lo presenta.

El primer intento de transformar esta presión corporativa en oposición tuvo lugar a fines de ese mismo año. En diciembre 1974 se creó la Unión Democrática para la Liberación (UDEL). Impulsada decisivamente por Pedro Joaquín Chamorro, UDEL nucleaba a varios partidos y grupos políticos de clase media y mediana burguesía —Partido Liberal Independiente (PLI), Partido Social Cristiano (PSC), Acción Nacional Conservadora (ANC, del propio Chamorro), Movimiento Liberal Constitucionalista (MLC) y otras—<sup>3</sup>, y al Partido Socialista de Nicaragua (PSN), que de acuerdo a la línea tradicional de otros partidos similares latinoamericanos, consideraba la realización de reformas democrático-burguesas una condición necesaria para el desarrollo de un proceso revolucionario posterior; participaban asimismo dos centrales sindicales: la Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN) orientada por el Partido Social Cristiano, y la Confederación General de Trabajadores (independiente), que respondía al PSN. UDEL se distinguió de anteriores iniciativas partidarias (como la Unión Nacional Opositora en 1967, o la Coalición Opositora Nacional a

<sup>2</sup> Cf. por ejemplo O'Connor (1973), Altvater (1977).

<sup>3</sup> Cf. una caracterización de estas organizaciones en Booth (1982a), cap. 6.

principios de los '70) por proponer un conjunto de reformas sociales y medidas progresistas, como reforma agraria, elecciones libres, autodeterminación nacional (Chamorro 1982). Sin embargo el Partido Conservador se resintió del intento de UDEL —y particularmente de Chamorro— de querer pasar sobre él, y la gran burguesía desconfiaba de su composición pluralista y de su programa político abiertamente reformista (Bendaña 1978). Es evidente que los banqueros e industriales no estaban interesados aún en una ruptura frontal con Somoza, y tampoco estaban convencidos de que un intento de esta índole contara con el apoyo norteamericano.

Además, para estos grupos estaba fuera de toda duda la victoria de la represión sobre el movimiento revolucionario. Dos semanas después de la creación de UDEL el FSLN llevó a cabo el operativo contra la residencia de Chema Castillo, concluyendo la etapa de la "acumulación en silencio" (cf. J. Wheelock 1979). Además de la eficacia operativa del FSLN y de su capacidad para imponerse al aparato somocista, la acción mostró el entusiasmo y la adhesión de la población a la lucha sandinista (Diederich 1981). Pero el establecimiento inmediatamente posterior del estado de sitio, la ley marcial y la censura de prensa, y sin duda el inconsciente de clase, llevaron a convencerse a estos grupos de la gran burguesía que el régimen se consolidaba. ¿Para qué involucrarse entonces en un enfrentamiento sin mayor perspectiva de ganancia?

Las medidas represivas mencionadas tuvieron una vigencia de 33 meses, hasta setiembre 1977. Durante ellos la persecución y matanza de campesinos, estudiantes, población civil en general, sospechosa de colaboración con el FSLN, conoció ribetes inusitados. La aviación somocista bombardeó poblados rurales al mismo tiempo que la Guardia Nacional atacaba a sindicatos, *desaparecía* a activistas obreros y estudiantiles, perseguía a sacerdotes y religiosas que denunciaban las atrocidades que se cometían contra el pueblo. El incremento brutal y la ampliación de la represión abrieron asimismo el espacio para el fortalecimiento del proceso de valorización del capital. La represión sindical hizo posible una más intensa explotación de la fuerza de trabajo, y el empresariado nicaragüense encontró en esto oportunidades excelentes para ganar dinero adicional. Por otro lado, el alza de los precios internacionales de algunos productos de exportación —el café sobre todo— actuó para

centrar más aún la atención de la burguesía y los grupos medios en la cuestión económica, sin indagarse demasiado acerca del costo social y político de la bonanza.

Esa bonanza, sin embargo, no estuvo libre de tensiones ni de agravios para la burguesía. La vigencia del estado de excepción dejó a Somoza y a la Guardia Nacional con las manos libres para encarar un verdadero saqueo a la economía, sin posibilidad para la burguesía no somocista de incidir en la cuestión o al menos de ejercer la crítica a través de su tradicional vocero —el diario *La Prensa*, dirigido por Pedro Joaquín Chamorro—; la *competencia desleal* se agravó durante este período. Y al mismo tiempo la estrecha alianza del capital somocista con el capital extranjero y el gran capital financiero local privaba al capital productivo de la mediana burguesía de las oportunidades de ganancias extraordinarias generadas por el alza de los precios internacionales —algo que ya fue analizado en el capítulo II.

Finalmente, la exacerbación de la represión somocista tampoco había logrado liquidar la lucha sandinista, que seguía haciéndose sentir tanto en el campo y en la montaña como en la ciudad pese a los golpes recibidos (IES 1981: 45 y ss.).

El levantamiento del estado de excepción obedeció ciertamente a la persistencia de las reivindicaciones populares, pero también a la presión de la burguesía opositora, sofocada en sus aspiraciones democráticas y sin poder extraer de ello beneficios sustanciales. Y, a su turno, el recrudecimiento de la presión empresarial por el retorno a la *normalidad* institucional se apoyó decisivamente en la modificación de la política internacional que tenía lugar desde fines de 1976. En noviembre de ese año el demócrata Jimmy Carter triunfó en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, asumiendo en enero 1977. Su enfoque de la cuestión de los derechos humanos —independientemente de sus sesgos ideológicos y de sus motivaciones últimas— amplió el espacio para las denuncias de las atrocidades del somocismo que venían efectuando ante el Congreso norteamericano representantes de la burguesía nicaragüense, elementos del clero, y sectores vinculados al movimiento revolucionario. El ascenso de Carter y del Partido Demócrata al gobierno norteamericano planteó así a los grupos más dinámicos y democráticos de la burguesía la posibilidad de ganarse un aliado de peso para una estrategia de erigirse en alternativa



tanto a la dictadura somocista como al proyecto revolucionario. Simultáneamente, el auge de la socialdemocracia en la región se presentaba como la posibilidad de alcanzar apoyo adicional para una estrategia de reformas democráticas con conducción del empresariado. En octubre, la burguesía, con la intermediación de la jerarquía de la Iglesia Católica, convoca a un *diálogo nacional* para encarar la situación del país, iniciando una asociación con la jerarquía eclesiástica que se prolongará hasta la actualidad.

Pero para entonces el FSLN tenía muy avanzada su propia estrategia de aproximación a elementos del empresariado y de las clases medias: el *Grupo de Los Doce*. Formado entre agosto y setiembre de ese año, estaba constituido por intelectuales, profesionales, sacerdotes y empresarios, algunos de ellos colaboradores del FSLN desde tiempo anterior, y otros con hijos dentro del Frente; su objetivo era la constitución de un gobierno provisional y la ampliación de las relaciones del FSLN con la oposición burguesa y en el ámbito internacional. La composición del grupo revela que no había representados en él grandes intereses económicos; nadie de los grandes intereses financieros formó parte del grupo, y los dos o tres empresarios o funcionarios de empresas que participaron lo hacían a título individual y, asimismo, por sus vinculaciones familiares con miembros del Frente. Se trató más bien de un conjunto de personalidades de prestigio nacional e internacional en sus respectivos campos de actuación, que permitió al FSLN ampliar significativamente sus relaciones políticas internas y en el exterior y, sobre todo, tender un puente de comunicación hacia la oposición "oficial".<sup>1</sup>

El grupo de *Los Doce* salió a la luz pública en octubre 1977 coincidiendo con el lanzamiento de la ofensiva militar del FSLN en San Carlos, Ocotal y Masaya. En un comunicado publicado en el diario *La Prensa* (21 de octubre 1977) el grupo denuncia el carácter represivo de la dictadura y señala el anhelo general por "una nueva forma de organización democrática y social". Más aún, *Los Doce* declaran que la crisis no puede ser resuelta sin la participación del Frente Sandinista, y con-

vocan a la constitución de un frente amplio antisomocista que incluya al FSLN.

Era la primera vez que representantes de sectores de la clase media y la mediana burguesía nicaragüense tomaban partido abierto contra la dictadura *reivindicando las posiciones revolucionarias del FSLN*. Para esta época entonces existen dos posiciones claras en la burguesía nicaragüense: 1) la del grupo de *Los Doce*, por las posiciones que asume, significa una ruptura con el tipo de planteamientos prevalecientes en el empresariado; asume las posiciones revolucionarias del Frente Sandinista y aboga por su reconocimiento y su incorporación a instancias amplias de oposición; 2) la de un amplio espectro de organizaciones políticas y gremiales, que llaman al *Diálogo Nacional*, sin hacer referencia al sandinismo y rechazando la lucha revolucionaria: UDEL, INDE (Instituto Nicaragüense de Desarrollo), Confederación de Cámaras de Comercio, Partido Conservador Auténtico, y otros (L. Lozano 1980).

Esta segunda posición será la predominante en la lucha antidictatorial de la burguesía, en esta coyuntura. El mayor peso y representatividad de las *organizaciones* de clase que las impulsaban contrastaba ventajosamente con el carácter *individual* del prestigio de los integrantes de *Los Doce*; el reconocimiento de la legitimidad de la lucha armada contra la dictadura era aún un paso demasiado grande para la burguesía. Sin embargo el *Diálogo Nacional* derivó velozmente hacia el fracaso a causa de la intransigencia de la dictadura y de las hesitaciones de la propia burguesía, mientras la creación de *Los Doce* mostraba la voluntad sandinista de establecer vinculaciones con toda la oposición burguesa, pero sin abdicar de su perspectiva revolucionaria y su estrategia de lucha armada.

El asesinato de Pedro Joaquín Chamorro —para acallar las denuncias de la corrupción somocista que efectuaba desde su diario— aceleró las cosas para la burguesía. El Consejo Superior de la Iniciativa Privada (COSIP) llamó a una huelga nacional para obtener de la dictadura el esclarecimiento del crimen; el objetivo real era más bien conseguir, a través de la paralización económica, la salida del dictador mediante su renuncia o por la vía de un golpe militar. El empresariado adhirió ampliamente a la convocatoria y para asegurarse el imprescindible concurso de los trabajadores optó por pagar los salarios devengados durante el paro. Pero cuando después de tres se-

<sup>1</sup> Sobre el *Grupo de Los Doce* cf. López et al. (1979), capítulos 5 y 6; Briones Torres (1980).

manas ni Somoza había renunciado ni el golpe militar había tenido lugar, y el costo de la medida era ya gravoso, la propia burguesía optó por dejarla sin efecto y normalizar su actividad.

La decisión de levantar la huelga puso en evidencia la debilidad política de la burguesía frente a la dictadura, y la falta de capacidad para conseguir un relajamiento del apoyo norteamericano a Somoza. Asimismo, mostró la pasividad de los trabajadores ante las convocatorias burguesas: se incorporaron a un paro patronal pagado, y del mismo modo aceptaron el reinicio de las actividades.

A partir de entonces, la inseguridad calará hondo en la burguesía; para todo el mundo era evidente que el aliado y el competidor de ayer, era ahora un enemigo del que resultaba imposible desembarazarse con sus propios esfuerzos. La ineficacia de la acción colectiva dio paso rápidamente a estrategias individuales: entre principios de 1978 y julio 1979 la salida de capitales hacia el exterior se ha estimado en unos u\$s 1.500 millones, de los cuales por los menos 600 millones correspondieron a la gran burguesía y el resto a la camarilla gobernante —aunque con posterioridad al triunfo revolucionario la propia burguesía caracterizará este “sálvese quien pueda” como una planeada estrategia de *desestabilización económica* del régimen (Dreyfus, 1980).

Tras el fracaso del paro patronal, surge en marzo 1978 la primera organización política de la burguesía como clase: el Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN), encabezado por Alfonso Robelo, un empresario con estrechos vínculos con el grupo financiero BANIC y el capital norteamericano en el país. La creación del MDN implicó la superación del plano gremial en que hasta entonces la burguesía había desenvuelto lo fundamental de su oposición, y de la escasa representatividad que UDEL había alcanzado en las fracciones superiores de la clase.

Dos meses más tarde, en mayo, el MDN, UDEL, el Partido Liberal Independiente (PLI), el PSN, el PSC y otros partidos menores de la oposición tradicional, la CTN, la CGT y la Confederación de Unidad Sindical (CUS), constituyen el Frente Amplio Opositor (FAO). *Los Doce* participan inicialmente; después de todo se trata de una iniciativa que el grupo había planteado en octubre 1977 y que recién ahora se hacía potable para la burguesía. Pero por su composición el FAO

expresaba la prevalencia de la óptica tímida de esa clase y esto se reflejó rápidamente en sus posiciones; además, la propuesta original de *Los Doce* de un frente amplio incluía al FSLN, ausente en su versión actual. El *Programa democrático de gobierno* del FAO incluía un conjunto de reformas políticas y sociales de tipo democrático: reorganización del ejército nacional, separación del ejército y la policía, prohibición del juzgamiento de civiles por tribunales militares; erradicación de la corrupción; derogación de las leyes represivas y eliminación de los servicios de espionaje; libre organización sindical y popular; reforma agraria; alfabetización; reforma fiscal; reforma urbana; elecciones libres (López et al. 1979: 357-359). Después de casi cuatro años, la burguesía insistía en el programa de UDEL, tanto en sus alcances como en sus limitaciones. Las demandas de reformas iban acompañadas, como en 1974, de una cuidadosa omisión a cualquier referencia a la lucha revolucionaria del FSLN. Lo mismo que entonces, la burguesía reformista no podía contar, *todavía*, con el respaldo norteamericano, pero a diferencia de 1974, no podía aspirar ya a acanallillar la protesta de las masas. Mayo, junio, julio del '78 evidenciaban los claros signos de la rápida evolución del pueblo hacia las posiciones sandinistas.

Al poco tiempo *Los Doce* se retiran del FAO y en julio el FSLN crea el Movimiento Pueblo Unido (MPU): una amplia alianza de organizaciones políticas, sindicales y estudiantiles.<sup>3</sup> Si el FAO fue el intento de consolidar la unidad de clase de la burguesía en su enfrentamiento a la dictadura, el MPU testimonia el esfuerzo por alcanzar la unidad del campo popular en el marco de una estrategia revolucionaria de derrocamiento del somocismo. No se trata solamente de reorganizar el ejército nacional, sino de

<sup>3</sup> Constituyen el MPU las siguientes organizaciones: Comité de Lucha de los Trabajadores (CLT), Central de Acción y Unidad Sindical (CAUS), Movimiento Sindical del Pueblo Trabajador (MSPT), Unión Nacional de Empleados (UNE), Frente Estudiantil Revolucionario (FER), Frente Estudiantil Revolucionario Marxista-Leninista (FER-ML), Movimiento Estudiantil de Secundaria (MES), Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN), Asociación de Estudiantes de Secundaria (AES), Asociación de Mujeres ante la Problemática Nacional (AMPRONAC), Federación de Movimientos Juveniles de Managua (FMJM), Juventud Revolucionaria Nicaragüense (JRN), Movimiento Obrero Revolucionario (MORE), Partido Comunista de Nicaragua (PC de N).

Abolir el Ejército somocista y crear un Ejército Defensor de la Soberanía Nacional que garantice la defensa activa del patrimonio, la independencia, la democracia y el proceso de desarrollo social del país. Este ejército estará integrado:

- por los combatientes que hayan participado en el derrocamiento de la dictadura somocista;
- por los soldados y oficiales que hayan demostrado una conducta honesta y patriótica frente a la corrupción, represión y entreguismo de la Dictadura, los que se hayan integrado a la lucha por el derrocamiento popular del régimen somocista, y los que se rebelan a las órdenes de combatir contra el pueblo;
- por los ciudadanos aptos que oportunamente presten su servicio militar obligatorio, el cual será restablecido debidamente.

Vale decir, el MPU plantea explícitamente la constitución de un nuevo ejército a partir de los combatientes revolucionarios —clara alusión al FSLN— y la definitiva liquidación de la Guardia Nacional. El programa postulaba asimismo la confiscación y nacionalización de las propiedades somocistas, la nacionalización de los recursos naturales y la estatización de las empresas que los explotan, la estatización del transporte marítimo, aéreo y colectivo urbano; una reforma agraria que impulse y diversifique la producción, limite la propiedad terrateniente y estatice los latifundios ociosos; libertad de organización sindical; reformas a la legislación laboral, etc. (cf. López *et al.* 1979: 360-372).

El FAO significó, con todas sus limitaciones, el punto de culminación de la iniciativa política autónoma de la burguesía nicaragüense (Lozano 1980; Gilbert 1983). En setiembre 1978 las organizaciones integradas en él convocaron a una segunda huelga nacional, pero ahora la respuesta popular pasó por encima de sus modestas expectativas y objetivos. El clima político general estaba extremadamente activado luego del operativo sandinista del 22 de agosto contra el Palacio Nacional; alzamientos espontáneos de la población tuvieron lugar en Matagalpa, y a principios de setiembre el FSLN lanzó la insurrección en varias ciudades del país. A fines de setiembre abortó un movimiento golpista dentro de la Guardia Nacional, acaudillado por el coronel Bernardino Larios.

La huelga patronal pasó así desapercibida en medio de una

polarización de los antagonismos políticos y de una elevación consiguiente de la lucha popular revolucionaria, que la superaba por completo. La ofensiva empresarial fracasó en lo *cívico* tanto como en lo *militar*, por la férrea resistencia de Somoza, por la adhesión que obtenía de la Guardia Nacional, por la incorporación de la mayoría de la gente a la estrategia revolucionaria sandinista, y por la resistencia que aún existía en el gobierno norteamericano a apoyar la salida del dictador.

Esta resistencia logró vencerse empero en octubre, y a través de la llamada *mediación internacional* Estados Unidos pasó a apoyar abiertamente la demanda empresarial de una salida negociada de Somoza. En esta época era evidente para todo el mundo que la permanencia de éste en el gobierno abonaba el avance de la lucha revolucionaria y reducía aceleradamente las posibilidades de triunfo de la opción burguesa. Estados Unidos abandona entonces a su aliado —y criatura— de medio siglo para ayudar a la burguesía a abrirse paso en medio del ascenso revolucionario.

A partir de este momento la burguesía se lanzará a una política apresurada de captación de los grupos y fracciones menores del capital, para los cuales no había tenido hasta entonces una política definida, y cuyas contradicciones con la gran burguesía pavimentaban el sendero de su aproximación a la oposición popular. En agosto 1978 —o sea casi treinta años después de iniciado el ciclo del algodón— se habían creado las primeras organizaciones gremiales de los productores algodoneros: la Asociación de Algodoneros de León (ADAL), la Asociación de Algodoneros de Chinandega (ADACH), y la Asociación de Algodoneros de Occidente (ADADO). Los dirigentes de estas asociaciones pertenecían a las familias terratenientes más tradicionales del sector, aunque subordinadas al capital comercial-financiero-procesador; las fracciones menores de la burguesía —lo que a veces se denomina la burguesía *chapiolla*— y las capas acomodadas del campesinado estaban débilmente representadas en estas organizaciones (Baumeister 1982). A principios de 1979, con el auspicio de INDE, se crea la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC),

con la finalidad de agrupar a todas las organizaciones gremiales de los empresarios agrícolas y ganaderos en una sola organización (Dreyfus 1980).

y poco después, también con el apoyo de INDE, la Confederación de Asociaciones de Profesionales de Nicaragua (CONA-PRO), apuntando a los sectores respectivos de clase media urbana.

Esta decisión también fue a la zaga de la iniciativa sandinista, ya que buscaba dar expresión corporativa, gremial, a fracciones determinadas del empresariado —y de manera subordinada al gran capital— cuando ya el FSLN estaba ofreciéndoles expresión política en el marco del proyecto revolucionario. En febrero de 1979, en efecto, se crea el Frente Patriótico Nacional (FPN) a instancias del Frente Sandinista. Además del MPU y de *Los Doce*, se incorporaron a él organizaciones que hasta entonces figuraban entre los aliados de la burguesía: el PLI y la CTN, a los que se sumaron el Partido Popular Socialcristiano (PPSC), el Sindicato de Radioperiodistas de Managua —particularmente estratégico en la batalla por los medios de comunicación— y el Frente Obrero, tradicionalmente ubicado en posiciones extremas de izquierda y crítico, desde ellas, de la estrategia del FSLN. El FPN se constituyó sobre la base de tres principios: 1) soberanía nacional, 2) democracia efectiva, y 3) justicia y progreso social. Rechazó

todo tipo de intervención extranjera que pretenda imponernos fórmulas para nuestra vida política, económica y social

en inequívoca referencia a las negociaciones del FAO con el gobierno norteamericano y con la OEA en torno a la llamada *mediación colectiva* y a la intervención de una fuerza armada "interamericana". Abogaba por el

Derrocamiento de la dictadura somocista y erradicación de todos sus vestigios; rechazando cualquier maniobra que signifique un "somocismo sin Somoza", para dar paso a la transformación democrática de la sociedad nicaragüense;

vale decir, el repudio a los intentos del FAO y la embajada norteamericana por salvaguardar hasta donde fuera posible los mandos de la Guardia Nacional con excepción de los más comprometidos con Somoza. Proponía

Crear y organizar un nuevo Ejército Nacional de carácter patriótico, dedicado a salvaguardar la soberanía y la integridad

territorial del país, formado por los soldados y oficiales que hayan demostrado una conducta honesta y patriótica frente a la corrupción, represión y entreguismo de la dictadura y los que se hayan sumado a la lucha por el derrocamiento del régimen somocista; por todos los sectores de la nación que hayan combatido por la liberación y deseen incorporarse al nuevo ejército; por los ciudadanos aptos que oportunamente presten su servicio militar obligatorio, el cual será establecido.

Este punto, ya se ha visto, figuraba en el programa del MPU, pero ahora aparecía respaldado por una coalición mucho más amplia de fuerzas. El programa del FPN insistía además en las transformaciones socioeconómicas que figuraban también en el programa del MPU (López *et al.*, 1979: 372-378).

De aquí en adelante la burguesía debería resignarse a seguir los pasos de la política norteamericana hacia Nicaragua. Acató la iniciativa de una ampliación de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional creada por el FSLN, simplemente para compartir con la embajada norteamericana la derrota ante la negativa sandinista; adhirió tardíamente al reconocimiento de dicha Junta; incidió marginalmente en algunos puntos del programa del futuro Gobierno de Reconstrucción Nacional, y durante la insurrección se limitó a elaborar pronunciamientos y declaraciones sin involucrarse directamente en la lucha, mascullando su frustración.<sup>8</sup>

La estrategia de lucha antidictatorial diseñada por el FSLN puso de relieve la falta de opciones políticas de una burguesía débil frente al Estado somocista, carente hasta último momento de expresiones políticas propias, y dependiente del auxilio que para sobrevivir, pudiera prestarle la Casa Blanca. Puso en descubierto asimismo el involucramiento de Estados Unidos

<sup>8</sup> En su informe sobre la insurrección en Managua, el Comandante de la Revolución Carlos Núñez registra algunas de las reacciones de los grupos subordinados de la burguesía ante la lucha: "A diferencia del barrio Riguero, uno no puede sentir más que la sensación de rechazo al observar el carácter timorato, hostil e hipócrita de la pequeña burguesía: unos elogiándonos porque no tenían más remedio, otros escondidos en sus casas, sacando la cabeza con evidente temor, y una minoría que amablemente ofrecía sus viviendas a los combatientes". "La población de El Dorado, por sus mismas características de clase, tendía a permanecer encerrada en sus casas y a no prestar ningún tipo de colaboración; más bien algunos le daban alojamiento a francotiradores (...)", Comandante C. Núñez (1980b): 36, 38.



con la dictadura hasta el momento mismo en que ésta se hizo insalvable, las modalidades e instrumentos de política empleados con tal fin en las diversas etapas de su desarrollo, y la futilidad de los intentos de la administración Carter cuando el triunfo revolucionario se presentaba ya como incuestionable, por desprenderse del dictador y para generar una alternativa no revolucionaria —es decir no sandinista— que sacando del medio a los Somoza preservara los aparatos del poder somocista: lo que en el discurso político del FSLN se denominó "somocismo sin Somoza". El fracaso de la mediación colectiva de Estados Unidos, República Dominicana y Guatemala primero (fines de 1978), de la iniciativa de la OEA más tarde (principios de 1979), y finalmente de la misión especial del embajador Bowdler, marcan otras tantas derrotas de la diplomacia de Washington para desprenderse de un aliado cuya caída, tal como la impulsaba la lucha sandinista, amenazaba con ir mucho más allá de un cambio de personas en el ejercicio del gobierno.<sup>2</sup>

Es evidente que la estrategia norteamericana fue elaborada y trató de ser implementada mucho más como un intento de respuesta y de alternativa a la estrategia revolucionaria del FSLN, que el producto de una política exterior que apuntara, como cuestión de principio y no de oportunidad, al apoyo a formas no dictatoriales de ejercicio del poder político. Esto no fue, posiblemente, responsabilidad exclusiva de la administración Carter, sino más bien el producto inevitable de la política norteamericana hacia Nicaragua durante medio siglo. La comodidad con que los Estados Unidos desarrollaron sus relaciones con los Somoza adormeció en el Departamento de Estado y en la Casa Blanca la formulación de la mera hipótesis de que la familia Somoza podía no ser eterna. Recién cuando la lucha sandinista enrumbó en su tramo final, Estados Unidos comprendió que esa hipótesis teórica era ya una realidad irrefutable. Por otra parte, la iniciativa política —y no sólo militar— en la lucha contra el somocismo pertenecía desde bastante antes al FSLN, y frente a ella cuesta mucho imaginar que pudiera haber prevalecido una acción diplomática que tendía a deshacerse de Somoza sin afectar significativamente el esquema somocista de poder —en especial la Guardia Nacional— y que

<sup>2</sup> Cf. Fonseca (1981) 171 y sigs.

además debía hallar, para triunfar, la anuencia del propio Somoza. Todo indica por lo tanto que los elementos que descalificaron la alternativa no revolucionaria diseñada —¿o soñada?— por la administración Carter, fueron no tanto las intrigas y dilaciones palaciegas de Somoza, que retardaron su salida hasta último momento, sino el involucramiento norteamericano, desde el inicio, en una aventura de poder personal, dominación dictatorial, explotación de las masas y masacre de la población civil.

Otra cuestión que corresponde destacar, y que está estrechamente ligada a la anterior, se refiere al relacionamiento que toma cuerpo, a partir de cierto momento de la lucha revolucionaria, entre la burguesía nicaragüense no-somocista y la política norteamericana hacia Nicaragua y Somoza. En efecto: la estrategia de Washington se apoyó, internamente, en la oposición a Somoza en el seno de las clases empresarias, sobre todo luego del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro. A partir de este hecho la burguesía se lanzó a acciones abiertas contra la dictadura, tratando de definir de ese modo una opción no revolucionaria, y desde su propia óptica más viable, de deshacerse del dictador. Parece claro, de acuerdo al análisis efectuado más arriba, que esa estrategia contó, como uno de sus componentes esenciales, con la necesidad de ganarse el apoyo de la embajada norteamericana y, en general, de la política norteamericana hacia Nicaragua. La prolija crónica de Diederich (1981) demuestra el interés tanto de la burguesía no-somocista, como del Departamento de Estado, por establecer estrechas relaciones recíprocas, y de la etapa propicia en que estas relaciones se desenvuelven desde la designación de Lawrence Pezzullo como embajador en Nicaragua en las postrimerías de la dictadura.

La aproximación de la burguesía no-somocista a los Estados Unidos es importante para el análisis político. Por un lado, demuestra que las denuncias sobre el involucramiento originario y permanente de Estados Unidos con el régimen somocista no eran simplemente una interpretación subjetiva de la historia por parte de grupos radicalizados, o una mera consignas del FSLN, sino un dato básico e insoslayable de la realidad. Este dato no era desconocido por la propia burguesía no-somocista, que como clase pudo participar de algunos de los beneficios del sistema de poder que Estados Unidos contribuyó tan

decisivamente a estructurar —sin perjuicio de la subordinación que debían aceptar respecto del grupo Somoza, como *costo* de aquellos beneficios. Para todo el mundo era sabido que si la familia Somoza llegó al control absoluto de Nicaragua, ello ocurrió gracias al apoyo militar de Washington. Y que si Somoza Debayle se mantenía en el gobierno pese a la oposición de estas fracciones de la burguesía, ello se debía a que Estados Unidos no se decidía, o no sabía cómo, deshacerse de él.

Por otro lado, las negociaciones de estas fracciones de la burguesía con los Estados Unidos hacen posible afirmar que la oposición que emanaba de ellas era de naturaleza en definitiva *interna* al sistema de dominación establecido en Nicaragua medio siglo antes por los propios Estados Unidos. El aval otorgado por el gobierno norteamericano constituía el denominador común de todas las formas y proyectos de la dominación política burguesa en Nicaragua; ni el somocismo, ni este tipo de antisomocismo, se concebían a sí mismos como viables sin el apoyo que pudieran obtener de los Estados Unidos. La defensa de la soberanía nacional, la liberación de toda forma de dominación externa, aparecían una vez más en la historia de Nicaragua como patrimonio de la lucha revolucionaria de su pueblo.

Se desarrolló de esta manera una acerba competencia entre Somoza y la burguesía antisomocista por retener o ganar el apoyo norteamericano y privar de él a su contrincante. En uno y otro caso, era una competencia alimentada por el temor hacia el programa de transformaciones sociales profundas impulsado por el FSLN. Somoza trató de reclamar para sí, una vez más, el papel de campeón del anticomunismo, denunciando la complicidad de sus enemigos de la burguesía con el FSLN. Pero este argumento, que había sido exitoso en tiempos de la guerra fría, resultaba poco útil en la era de la *détente*, y ante una administración demócrata que no suscribía la óptica revolucionaria del FSLN, pero que no podía ignorar hasta qué punto la argumentación anticomunista era una mera justificación para mantener a Somoza en el poder. Por su lado, la burguesía no-somocista trataba de erigirse en alternativa no revolucionaria al régimen, pero sin plantear el desmantelamiento total del mismo —en particular, en lo relativo al mantenimiento, previa cierta depuración, de la Guardia Nacional.

La alianza que la burguesía no-somocista trataba de establecer con la embajada norteamericana debía competir también, y sobre todo, con la lucha revolucionaria del FSLN, y su oposición frontal al régimen somocista. Especialmente a partir de 1977, la participación abierta de las clases populares en la lucha sandinista fue en ascenso. La ampliación del apoyo interno del FSLN se combinaba con el respaldo que obtenía de gobiernos amigos: Panamá y Costa Rica sobre todo. Fracasadas sus acciones de masas, la burguesía optó por las estrategias palaciegas: el golpe militar, la presión del embajador norteamericano. Pero ésta no podía triunfar sobre la estrategia política de masas del Frente Sandinista —una estrategia que combinaba la acción insurreccional de masas, la organización popular, la guerrilla rural, el combate militar convencional, la diplomacia internacional, y la apertura hacia todos los sectores, clases y fuerzas opuestas al somocismo a partir de un programa sin claudicaciones. La burguesía nicaragüense —clase de reciente origen, débil frente a un Estado del cual había venido beneficiándose hasta poco tiempo atrás, sin experiencia política autónoma— no podía presentarse ante los campesinos, los obreros, los estudiantes, los sin trabajo, los pobres del campo y la ciudad, es decir la mayoría del país, como una alternativa real al FSLN.

Adormecidas por la fantasía de la omnipotencia imperial norteamericana; hipotecadas a una estrategia de salones y de recámaras; acostumbradas a considerar a la política como algo exterior a su clase, susceptible sólo de presiones aisladas y esporádicas; carentes de un proyecto de alcance nacional, las clases adineradas de Nicaragua no estaban en condiciones de entender que lo que estaba en juego era mucho más que un hombre y un nombre en el gobierno. Y cuando lo entendieron, su propia subordinación al Estado somocista, que nutrió sus contradicciones con él, se encargó de restarles posibilidades de acción.

### 3. Unidad nacional y hegemonía popular

El Frente Sandinista supo unir en torno a su conducción de la lucha contra la dictadura a todas las fuerzas explotadas y

oprimidas por ella, englobando por lo tanto a las fracciones de la burguesía local que se oponían al somocismo a causa de su monopolio del poder político, el favoritismo, la corrupción, la represión generalizada, etc. La contradicción somocismo/anti-somocismo pudo expresarse y procesarse así como contradicción somocismo/sandinismo. Esta era, en primer lugar, una contradicción política. Pero era más que eso: era la forma de presentarse la articulación de la contradicción nacional y la contradicción de clase, en la medida en que el somocismo fue el modo concreto, históricamente determinado, de estructurarse y conjugarse la dominación capitalista y la dominación imperialista en Nicaragua.\* La dimensión política de esa dominación fue la coronación superestructural de ese edificio. Más aún: lo político en el somocismo fue de hecho, por su contenido, una fuerza material al servicio del desarrollo capitalista, en la medida en que la expansión del capitalismo dependiente tuvo lugar a partir de un modo específico de estructuración y desempeño del poder político.

La conducción de la lucha político-militar contra Somoza por el FSLN evitó que la activación popular resultara limitada a un esquema meramente antidictatorial, que se redujera al cambio de gobierno sin alterar el sistema social al que la dictadura servía y del cual era producto. El triunfo sobre el régimen somocista tuvo lugar en el marco del desarrollo de una clara conciencia antioligárquica y antiimperialista impulsada en el seno de las clases populares por el trabajo político del FSLN. La victoria popular significó no sólo la caída de la dictadura sino también la violenta y total destrucción del Estado capitalista dependiente tal como se configuró históricamente a partir de las intervenciones armadas norteamericanas y la estrecha alianza entre el capital monopolista y la política exterior de Estados Unidos de un lado, y la familia Somoza, sus socios y allegados, por el otro. Con su fuerte componente de particularismo, dominación oligárquica y patrimonial, el Estado somocista fue la forma histórica y efectiva que asumió en Nicaragua

\* "Carlos (Fonseca) sostuvo que Somoza era como una prenda preciosa en donde se aglutinaban todas las contradicciones de nuestro pueblo, donde se confundían un poco la liberación nacional con la liberación de la dictadura, donde se concentraban contradicciones económicas con el sector burgués de nuestro país; en síntesis dictadura y opresión de clases tenían un perfil bien definido en Somoza". Comandante H. Ruiz (1980a)

el Estado capitalista. Antagonizado por el conjunto de la sociedad —bien que a través de contradicciones de desigual profundidad y alcance—, sin base alguna de legitimidad o consenso, puro aparato de coacción, el Estado somocista se derrumbó rápidamente y de hecho se desvaneció tras la huida del dictador, el desbande de la Guardia Nacional y su disolución inmediatamente después del triunfo de las armas sandinistas.

La ubicación de la lucha contra el somocismo como una etapa de un proceso más amplio y profundo de la lucha popular, determinó que la derrota de la dictadura fuera también la derrota de los proyectos de sustitución impulsados por la burguesía y el imperialismo. La estrategia sandinista permitía entrever por lo tanto que el triunfo popular no era el fin del proceso, sino que definía para éste una nueva y más ventajosa posición a partir de la cual proseguir, en un nuevo nivel, con mayor profundidad y desde una nueva correlación de fuerzas, el desarrollo ulterior de la Revolución (H. Ortega 1981: 79-80).

Esta específica configuración de la lucha sandinista, que es el modo de manifestarse en términos político-militares la contradicción social fundamental, contribuye a delinear el perfil *democrático, popular y antiimperialista* de la etapa actual de la Revolución, al mismo tiempo que destaca las profundas diferencias de clase que separan al proceso nicaragüense de las tradicionales revoluciones democrático-burguesas. Éstas se dirigieron contra la vigencia del orden feudal, mientras que la lucha sandinista liquidó una dominación claramente capitalista —sin perjuicio del carácter comparativamente atrasado de su base material. Las revoluciones democrático-burguesas, además, apelaron a las masas populares como fuerza de maniobra para imponer un proyecto en definitiva capitalista, y por lo tanto se apoyaron en ellas hasta donde fue necesario para forzar al absolutismo a aceptar una transacción. La activación de la rebelión popular se conjugó por lo tanto con la virtualidad —y la realidad— de la represión. La lucha sandinista testimonia en cambio la conducción global del proceso de transformaciones sociales y políticas por una Vanguardia que expresa, fundamentalmente, al componente mayoritario, obrero y popular, de la lucha, en un marco de alianzas con los otros sectores de la sociedad oprimidos por la dictadura, pero de alianzas que se estructuran a partir de posiciones de fuerza ganadas por el sandinismo.



El contenido concreto y la estrategia de la lucha sandinista fueron la respuesta a una acumulación y condensación de contradicciones de diverso alcance y naturaleza: contradicciones entre las aspiraciones democráticas de la población y el desborde de favoritismo, corrupción, represión, etc., que constituían los datos cotidianos de la dictadura somocista; contradicciones entre el sentimiento patriótico y nacionalista de la población y la sumisión total de la dictadura, y de la oposición burguesa, a los Estados Unidos; contradicciones entre la efectiva vigencia de la soberanía nacional, y la entrega de las riquezas naturales y la regulación de las condiciones generales de acumulación a los dictados del capital monopolista y el mercado internacional. Y así sucesivamente. El FSLN estructuró y sintetizó esa compleja matriz de contradicciones en función de una estrategia de lucha que apuntaba a un tipo de desarticulación del somocismo que era, en sí mismo, el principio del resquebrajamiento de sus bases materiales en la esfera de la organización social de la producción. La conducción del proceso revolucionario por el FSLN supo articular estas contradicciones bajo la conducción de la contradicción de clase, de modo tal de subordinar la superación de la contradicción democrática y de la contradicción nacional al desarrollo de un proceso revolucionario que expresara la hegemonía histórica de las clases populares.

La evidencia de su derrota fue captada por la burguesía sólo a último momento. El Frente Amplio Opositor apoyó a la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN), de inspiración sandinista, recién el 24 de junio 1979, y el Consejo Superior de la Iniciativa Privada (COSIP) aún más tarde: el 27 de junio (COSEP 1979: 6, 9-10).<sup>9</sup> Este reconocimiento, cuando el régimen somocista era ya casi un cadáver, permitiría a estos sectores de la empresa privada ingresar junto a los vencedores en la etapa que se abrió el 19 de julio. Pero no como fuerza hegemónica o de conducción, sino como un elemento subordinado de un movimiento de liberación nacional cuya dirección era ejercida en nombre de las clases populares por el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

<sup>9</sup> Después del triunfo revolucionario el COSIP pasó a denominarse COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada).

La propuesta sandinista de *unidad nacional* se inscribe en el proyecto estratégico de construcción, consolidación y avance de la Revolución en torno a la hegemonía popular y a la conducción política de su Vanguardia. Esta propuesta no constituye una novedad en la trayectoria del Frente Sandinista. En un texto de 1970, Carlos Fonseca la expresaba de la siguiente manera:

Somos conscientes que el socialismo es la única perspectiva que tienen los pueblos para lograr un cambio profundo en sus condiciones de vida. Lo que no supone que excluyamos a personas que no piensan igual que nosotros, y aunque pensamos que la guía fundamental deben ser los principios del socialismo científico, estamos dispuestos a marchar juntos con personas de las más diversas creencias interesadas en el derrocamiento de la tiranía y en la liberación de nuestro país (Fonseca 1981: 219).

El Grupo de Los Doce, el Movimiento Pueblo Unido, el Frente Patriótico Nacional, y luego el Programa del Gobierno de Reconstrucción Nacional (9 de julio 1979), expresan esta propuesta en los términos de una democracia popular con pluralidad de perspectivas.

La experiencia de cinco años de Revolución triunfante muestra sin embargo las dificultades y la falta de interés de distintos sectores de la burguesía en aceptar el papel subordinado que el desenvolvimiento objetivo del proceso les ha adjudicado. En el período julio-diciembre 1979 elementos representativos de diferentes fracciones de la burguesía se incorporaron a posiciones importantes en la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y en el aparato del nuevo Estado. El ingeniero Alfonso Robelo —presidente del MDN, dirigente empresarial y gran capitalista— fue designado miembro de la JGRN juntamente con doña Violeta de Chamorro —viuda de Pedro Joaquín y con fuertes intereses económicos en el diario *La Prensa*. En el Ministerio de Planificación fue designado el economista Roberto Mayorga; en el de Agricultura el empresario Manuel J. Torres, ex presidente del COSEP; en el de Industria y Comercio Noel Rivas Gasteazoro, también importante empresario; la presidencia del Banco Central fue adjudicada a Arturo Cruz, un economista del Partido Conservador Demócrata y ex funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo; en la presidencia del Sistema Financiero Nacional



se designó al Dr. Luis Carrión Montoya, vinculado al grupo financiero BANIC —ahora confiscado; la presidencia de la Corte Suprema de Justicia fue ocupada por el Dr. Rafael Córdoba Rivas, dirigente del Partido Conservador Demócrata y de UDEL; el ex coronel Bernardino Larios, que en agosto 1978 había encabezado un frustrado golpe militar dentro de la Guardia Nacional, fue nombrado Ministro de Defensa. Asimismo, numerosos profesionales vinculados al MDN se incorporaron a cargos técnicos de importancia. Otros ministerios fueron ocupados por miembros del Grupo de Los Doce (Educación, Justicia, Relaciones Exteriores, Finanzas), por personalidades independientes o dirigentes de organizaciones políticas o de otra índole —pero a título personal—: Trabajo, Vivienda, Salud y muchos viceministerios fueron cubiertos por dirigentes o miembros de partidos y organizaciones no sandinistas.

Durante este período solamente dos miembros de la Dirección Nacional del FSLN ocuparon cargos de ministro: el Comandante de la Revolución Tomás Borge (Ministerio del Interior) y el Comandante de la Revolución Jaime Wheelock, al frente del Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria, pero tres de los cinco miembros de la JRCN señalaban la gravitación decisiva del Frente en ella: el Comandante de la Revolución Daniel Ortega, el Dr. Sergio Ramírez Mercado (del Grupo de Los Doce) y el Dr. Moisés Hassán (del MPU). Otros ministerios fueron ocupados por miembros del FSLN: Bienestar Social, Cultura, Transporte y Obras Públicas, y la Comandancia en Jefe del nuevo Ejército Popular Sandinista fue asumida por dos miembros de la Dirección Nacional del FSLN: los Comandantes de la Revolución Humberto Ortega Saavedra y Luis Carrión Cruz.<sup>100</sup>

En estos momentos iniciales de la nueva etapa revolucionaria, se aprecia en consecuencia la participación de una pluralidad de fuerzas políticas y organizaciones sociales en la institucionalidad del nuevo Estado. Elementos y representantes de la burguesía nicaragüense lograron acceder a posiciones im-

portantes en el gobierno y los aparatos del Estado. Pero es evidente que se trató de un acceso subordinado a un esquema político en el cual el FSLN expresaba el proyecto de hegemonía popular en el campo democrático y en las transformaciones sociales. Podría incluso afirmarse que la magnitud de la participación institucional de la burguesía resultaba sobredimensionada frente al papel que desempeñó en la lucha contra la dictadura; es posible en este sentido que dicho desequilibrio respondiera al interés del Frente Sandinista en reducir en lo inmediato los contratiempos que habría implicado, para el proceso de reconstrucción y para una rápida normalización de la vida del país, la falta de cuadros técnicos propios y de adecuadas vinculaciones con el mundo financiero, la necesidad de neutralizar presiones excesivas provenientes de Estados Unidos y otros países.<sup>101</sup> Pero lo fundamental de esta cuestión radica en que todo el mundo tenía claro cuál era el proyecto político que el FSLN postulaba y que la JGRN por él constituida ejecutaría como programa de gobierno —un programa en cuya elaboración los representantes de la burguesía habían tenido cierta intervención (INDE 1979: 11-13).

Este proyecto no se opone, como cuestión de principio, a la apropiación privada de medios de producción, aunque por razones de tipo político planteó y efectuó la confiscación de las propiedades de la camarilla somocista producto de medio siglo de rapiña; pero fundamenta la legitimación de esa propiedad privada en el efectivo funcionamiento de los medios de producción como tales y no como bienes de renta. Esto sin embargo implica la existencia de un Estado que supervise, a través de determinados instrumentos y canales, el desenvolvimiento de dicha función productiva. Se trata sin dudas de un aspecto normal de cualquier Estado moderno (cf. por ejemplo Agnoli 1978), pero resultaba excesivo para buena parte de las clases propietarias de Nicaragua. Por otro lado, dentro del campo popular, y también dentro del FSLN, era inevitable la existencia de consignas y ópticas cuestionadoras incluso de este tipo de subsistencia de la propiedad privada en la producción, aunque aceptaban la necesidad de coexistir con ella en la presente etapa de la revolución.

<sup>100</sup> Cf. con los análisis de Burbach y Dráimin (1980), y Gorman (1981). El trabajo de este último parte del supuesto que *Los Doce* representaban intereses de la burguesía; por este motivo uno de sus argumentos centrales se refiere a la sorprendente radicalización de varios de los miembros del grupo.

<sup>101</sup> Conversaciones mantenidas con dirigentes de la revolución así lo sugieren.

La burguesía nicaragüense, además, ingresaba a la nueva etapa *desprovista de poder militar*. Su defensa de la Guardia Nacional hasta último instante —excepción hecha de los oficiales más comprometidos con la represión y la corrupción, y los miembros de la familia Somoza— era la defensa de la incorporación a dicha etapa de su poder armado de clase. La desbandada de la Guardia tras la huida de Somoza y su posterior disolución, el enjuiciamiento y encarcelamiento de sus miembros, la creación del Ejército Popular Sandinista sobre la base de los combatientes del FSLN, la dejaba desarmada frente a un poder popular que emergía de la fuerza y la organización de las masas, pero también de las armas populares.

La burguesía no renunció empero a hacer valer su proyecto y utilizó con tal fin la capacidad de acción que le brindaban su inserción institucional en el nuevo Estado y sus relaciones internacionales. El período que transcurre entre julio 1979 y mayo 1980 enmarca una puja sorda a veces, abierta otras, pero siempre intensa, por tratar de imponer desde esas posiciones un proyecto político que la mayoría de la población había repudiado en las calles, en las trincheras y en las barricadas.

El triunfo del FSLN en esta confrontación se basó en tres cuestiones centrales. En primer lugar, la constitución y consolidación del monopolio del poder armado por el Estado revolucionario, pero de un poder armado de nuevo tipo, basado fundamentalmente en los combatientes del Frente Sandinista, y en los jóvenes que se sumaron a su lucha en distintas etapas de su desarrollo. Este nuevo poder militar se institucionalizó con la creación del Ejército Popular Sandinista, el cual encaró de inmediato el complejo proceso de convertir la multitudinaria, entusiasmada y a veces indisciplinada masa de combatientes populares en un ejército moderno.

El poder militar del Estado revolucionario es así, al mismo tiempo que el ejército nacional, el ejército de una nación gestada en la lucha antiimperialista y popular. No es un ejército partidista, sino un ejército que reconoce el contenido político —y en definitiva de clase— del proyecto de nación que la Revolución Sandinista impulsa. Todo ejército es siempre un *ejército político*, puesto que defiende y sostiene un proyecto determinado de dominación social, y por lo tanto de clase. Es un ejército político porque es el ejército de un Estado, síntesis y condensación de la dominación de una clase, por encima de

las diferenciaciones partidarias o de otro tipo que expresan con matices específicos o perspectivas particulares dicha dominación. El *apoliticismo* del ejército dice relación con estas diferenciaciones internas de la clase: las fuerzas armadas se apartan de estas contradicciones entre fracciones o grupos dominantes como condición para que su función política pueda hacerse efectiva.<sup>12</sup> Lo que diferencia a la *politicidad* del Ejército Popular Sandinista es el carácter del proyecto político —popular, revolucionario, antiimperialista— que defiende, y la explicitación de dicha politicidad. Pero, como se señaló anteriormente, en la medida que es el proyecto asumido por las masas al calor de la lucha sandinista, y que la *nación* fue configurándose en el desarrollo de esa lucha popular, revolucionaria y antiimperialista, se trata, en el sentido más pleno del concepto, de un *ejército nacional*.<sup>13</sup>

El segundo elemento que hizo posible la rápida consolidación de la conducción sandinista fue el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones de masas. Éstas habían conocido su primera fase de desarrollo en la lucha contra la dictadura, y la etapa que se abrió el 19 de julio 1979 se caracterizó por un rápido crecimiento y el mejoramiento de su organización, y por su incorporación a un conjunto amplio de tareas. Sobre la base de las distintas expresiones organizativas de los trabajadores urbanos en la lucha contra el somocismo, se constituyó la Central Sandinista de Trabajadores (CST); los Comités de Defensa Civil, creados para apoyar la insurrección, se convirtieron ahora en los Comités de Defensa Sandinista (CDS); la Asociación de Mujeres ante la Problemática Nacional (AMPRO-NAC) dio paso a la Asociación Nicaragüense de Mujeres "Luisa Amanda Espinoza" (AMNLAE); la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) existía como tal desde antes del triunfo.

El proceso de fortalecimiento y expansión de las organizaciones de masas no fue ni prolijo, ni ordenado, ni sencillo. La urgencia y complejidad de las tareas que debieron asumir exi-

<sup>12</sup> El ejército chileno en 1973, el argentino en 1976, ofrecen ejemplos de esta articulación entre la función política de las fuerzas armadas y su apoliticidad *partidaria*. Como especificara el general argentino Alcides López Aufranc: "Las Fuerzas Armadas deben estar al servicio de la soberanía nacional y del mantenimiento de la propiedad privada".

<sup>13</sup> Gorman (1981) y Burbach y Dráimin (1980) enfocan algunos aspectos de este proceso de creación de un monopolio del poder militar por la Revolución.

gían de ellas unos recursos, una experiencia y una eficiencia que no se alcanzan de la noche a la mañana. En los meses posteriores al triunfo revolucionario, la fragilidad y las limitaciones inevitables del nuevo Estado, en medio de la destrucción de la guerra, llevó a las organizaciones de trabajadores a tener que hacerse cargo de las fincas y empresas industriales abandonadas por sus propietarios; los CDS debían entregar constancias de domicilio, encargarse del abastecimiento mínimo de ciudades enteras, ejercer funciones de seguridad. Por razones de inexcusable necesidad, la gente organizada en estas estructuras pasó a encargarse de la gestión directa de un conjunto de tareas y actividades en una versión auténtica, al margen de sus limitaciones, de la democracia popular. Sin dudas hubo en esto mucha improvisación y algunos abusos, pero es así como ocurren las cosas. Con la propia experiencia la improvisación fue cediendo terreno a la organización, y ésta ayudó a poner punto final a los abusos. Más importante que estas limitaciones, por supuesto, es el hecho que esta veloz incorporación de la población a múltiples tareas de la revolución, reforzó la convicción —adquirida en la insurrección— de la eficacia política de su participación y confirmó su certidumbre respecto de la pertenencia del proceso revolucionario a las propias masas, en la medida en que actuaban organizadas; en palabras de la coordinadora de un CDS de Managua:

Aquí al principio había que hacer de todo, había mucha destrucción, y la única forma de hacerlo era entre todos, organizándonos. Al principio no fue fácil, pero ya uno tenía su experiencia de cuando la guerra, eso nos ayudó bastante.<sup>14</sup>

La tercera cuestión se refiere a la capacidad del FSLN para llevar a cabo una alianza política implícita con grupos subordinados de la burguesía —medianos propietarios y productores, técnicos y profesionales de clase media, y otros. El predominio de interpelaciones de tipo democrático y nacional, la decisión de orientar las luchas sociales manteniéndolas dentro de un cierto equilibrio básico, el manejo de la política de precios e ingresos, en suma, el énfasis en las cuestiones nacional, democrática y del desarrollo —según fueron caracterizadas en el

<sup>14</sup> Testimonio recogido por el autor, en el barrio Ducualí.

capítulo I— como *aspecto principal* de la cuestión de clase en esta etapa de la revolución, permitió al FSLN retener en el campo revolucionario a importantes fracciones de estos sectores, introduciendo una cuña en el terreno de la burguesía, reduciendo sus fuerzas y su capacidad de amenaza y de presión. La creación del Frente Patriótico de la Revolución (FPR) jugó un papel de relevancia en esto.<sup>15</sup>

Los representantes de la burguesía —el MDN y otros partidos menores, el COSEP en el terreno gremial— vivían el avance del proyecto revolucionario como violación de supuestos acuerdos originarios, como una alegada *desvirtuación del verdadero programa* de la revolución.<sup>16</sup> Éste habrá de ser hasta el día de hoy el argumento central de la oposición burguesa y la justificación de la evolución de algunos de sus componentes hacia la contrarrevolución abierta y del apoyo y disculpa a las agresiones norteamericanas.<sup>17</sup> El camino recorrido por estos grupos no fue lineal, pero es posible identificar el trayecto

<sup>15</sup> El Frente Patriótico de la Revolución fue creado el 23 de julio de 1980. Además del FSLN, lo integran el PSN, el PPSC y el PLI. Sus "Bases programáticas" plantean como propósitos y objetivos "A) Respaldo la política democrática que lleva adelante el Gobierno de Reconstrucción Nacional; B) Defender, consolidar e impulsar la Revolución Nicaragüense, a fin de asegurar las transformaciones socio-económicas con bases populares democráticas y con miras a la Independencia Nacional".

<sup>16</sup> Por ejemplo: "La reactivación industrial ha sido frenada por la incertidumbre política imperante y los problemas laborales que incluyen hasta tomas de empresas por los sindicatos (...)", "En la práctica se ha destruido la Unidad Nacional, como consecuencia de la intención del FSLN de implementar una Unidad Nacional alrededor de él, sometiendo al resto de organizaciones políticas, económicas y sociales, a sus dictados. Esto está muy lejos de la Unidad Nacional en libertad, sin sometimientos de unos a otros, que dio lugar al Programa de Gobierno y nos llevó al triunfo sobre la dictadura". "Las Fuerzas Armadas de la Nación se han convertido en las Fuerzas Armadas del Partido FSLN" (COSEP 1980: 17 y 24); cf. asimismo INDE (1981) 45-54.

<sup>17</sup> Considérese por ejemplo la intervención en una sesión del Consejo de Estado, del representante del Partido Conservador Demócrata. De acuerdo al diario *La Prensa* (22 octubre 1983) el representante del PCD dijo que "la violación a los principios establecidos en el Programa Original de Gobierno por parte del FSLN, la falta de cumplimiento a ese plan y a lo que se había comprometido el gobierno sandinista, eran una de las causas preponderantes para que la contrarrevolución esté causando inquietudes y causando actos de sabotaje (...)", "Estamos contra el guerrillerismo, contra el terrorismo y contra todo acto de violencia, pero también estamos contra actitudes del gobierno que protocolan estas situaciones" (los subrayados son míos).



de su progresivo enfrentamiento a la revolución que se inicia en el período al que se está haciendo referencia.

El 14 de noviembre 1979 el COSEP dirigió a la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional un extenso documento en el que planteaba sus agravios ante la revolución: la presencia de las organizaciones de masas en una pluralidad de aspectos de la vida nacional, y particularmente de los CDS; la falta de exacta definición del alcance del Área de Propiedad del Pueblo (APP) y de las atribuciones del Estado; la "marginación del sector privado"; la reducida operatividad del Poder Judicial. Lo que la empresa privada estaba planteando, en el fondo, era el retroceso de su concepción del mundo y de la vida —y no sólo de la vida económica—, el quiebre de sus ideas de autoridad, el lento y complicado surgimiento de un nuevo tipo de Estado, la presencia bullanguera y persistente del pueblo organizado. Todos estos aspectos y dimensiones de una sociedad en revolución, destrozada por una guerra, saqueada por la dictadura, eran vistos por la burguesía como otras tantas agresiones a su propia subsistencia.

A fines de diciembre de 1979 una drástica reorganización del Gobierno de Reconstrucción Nacional acentuó la gravitación sandinista en su seno y desplazó de sus posiciones a varios miembros de la burguesía. El Comandante de la Revolución Humberto Ortega asumió el Ministerio de Defensa desplazando el ex coronel Larios; el Comandante de la Revolución Henry Ruiz se hizo cargo del Ministerio del Planificación; el Ministerio de Agricultura se unificó con el Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria y al frente de ambos se designó al Comandante de la Revolución Jaime Wheelock; el Ministerio de Industria y Comercio se desdobló en dos carteras diferentes a cuyo frente se ubicó a miembros conocidos del FSLN; en el Sistema Financiero Nacional y en niveles inferiores del gabinete hubieron cambios similares. La participación institucional de la burguesía quedó reducida de esta manera prácticamente a la presencia del ingeniero Robelo en la JGRN, y a técnicos y profesionales hacia los cuales el Frente Sandinista venía definiendo la política de captación que ya ha sido mencionada.

Perdida la batalla del gabinete, la burguesía encaró la pelea por el control del Consejo de Estado. Este es un cuerpo colegislativo creado por el Programa de Reconstrucción del 9 de

julio de 1979. Originariamente debía estar integrado por 33 miembros de diferentes organizaciones políticas y sociales que participaron en la lucha contra la dictadura.<sup>18</sup> Las organizaciones empresarias y los partidos de la oposición presionaron para la inmediata constitución del Consejo, esperando contar en él con la mayoría necesaria para frenar las iniciativas y el avance sandinista. Se trataba sin dudas de una aspiración de deseos, aunque la composición originaria del cuerpo respondía a una correlación de fuerzas bastante distinta de la que existía a principios de 1980. Varias de las organizaciones que contaban con representación ya habían dejado de existir (por ejemplo, el MPU), y otras organizaciones, creadas con posterioridad, no figuraban en aquella: la CST, los CDS, y otros. Se trataba en general de organizaciones que testimoniaban la ampliación de la hegemonía sandinista y el FSLN estaba obviamente interesado en que ingresaran al Consejo. La posición sandinista predominó y en febrero la Junta de Gobierno emitió un decreto que amplió el organismo a 47 miembros, incorporando a varias organizaciones entre las cuales figuraban las de inspiración sandinista.<sup>19</sup> El enfrentamiento en torno a la composición del

<sup>18</sup> De acuerdo al Programa de Gobierno de Reconstrucción Nacional el Consejo de Estado se integraría "con 33 miembros en representación directa de, y designados por, las siguientes organizaciones políticas y agrupaciones socioeconómicas del país: 1) FSLN; 2) FPN (MPU, PLJ, Agrupación de Los Doce, PPSC, CTN, FO, Sindicato de Radioperiodistas); 3) FAO (PCD, PSC, MDN, MLC, PSN, CGT, CUS); 4) COSEP (INDE, Cámara de Industrias de Nicaragua —CADIN, Confederación de Cámaras de Comercio de Nicaragua, UPANIC, Cámara Nicaragüense de la Construcción, Confederación de Asociaciones Profesionales de Nicaragua; 5) Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua; 6) Asociación Nacional del Clero (ACLEN)". Cf. análisis del enfrentamiento en torno a la composición del Consejo de Estado en Black (1981), Gilbert (1983).

<sup>19</sup> El Consejo quedó integrado de la manera siguiente: FSLN (6 miembros), PLJ (1), PSN (1), PPSC (1), MDN (1), PCD (1), PSC (1), CDS (9), Juventud Sandinista "19 de Julio" (1), AMNLAE (1), CST (1), ATC (1), CGT (1), CTN (1), CAUS (1), CUS (1), FETSALUD (1), Fuerzas Armadas (1), ACLEN (1), Consejo Nacional de la Educación Superior (1), Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN) (1), Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN) (1), Asociación de Miskitos, Sumos y Ramas (MISURASATA) (1), INDE (1), CADIN (1), Confederación de Cámaras de Comercio (1), Cámara de la Construcción (1), UPANIC (1). Cf. *La Gaceta*, 22 de abril de 1980. Posteriormente la composición del Consejo se amplió para incorporar a representantes de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) y del Eje Ecueménico MEC-CELADEC (iglesias reformadas).



Consejo de Estado agudizó el deslizamiento de la Sra. Chamorro y el ingeniero Robelo hacia la oposición. Hacia fines de abril 1980 la Sra. Chamorro renunció a su cargo en la JGRN, y pocos días después hizo lo mismo Robelo, buscando crear una crisis política en la suposición que los funcionarios enrolados en el MDN tomarían el mismo camino y abandonarían el Estado dejándolo en la más completa orfandad técnica. Para entonces sin embargo la política de aproximación y alianza del FSLN con estos sectores estaba bien avanzada y, para sorpresa de Robelo, sólo un reducido grupo se sumó a su decisión. Rápidamente el FSLN completó la integración de la Junta con la incorporación de Rafael Córdoba Rivas y Arturo Cruz —ambos del Partido Conservador Demócrata— a los puestos vacantes, y se aseguró la participación del COSEP en el Consejo de Estado. Con la presidencia del Comandante de la Revolución Bayardo Arce, el cuerpo se instalaría solemnemente el 4 de mayo de ese mismo año.<sup>20</sup> Lo que quiso ser una imposición de clase, había quedado reducido a una jugada personal.

La burguesía se incorporó así, como fuerza minoritaria, al Consejo de Estado, al cual usa fundamentalmente como una tribuna de propaganda de sus propias posiciones. Al mismo tiempo derivó hacia el plano ideológico sus ataques al proyecto sandinista: se agravía de las agresiones verbales a la propiedad privada capitalista, reitera sus quejas por la actuación de las organizaciones de masas y, sobre todo, inició una rápida aproximación hacia la jerarquía de la Iglesia Católica, que a la postre habrá de convertirse en el partido político de la burguesía.<sup>21</sup> Esta estrategia sin embargo no contó con unanimidad en este campo, y en poco tiempo aparecieron las primeras evidencias de que grupos de la burguesía optaron por enfrentarse a la Revolución por la vía armada, envalentonados sin duda por el triunfo electoral de Ronald Reagan en los Estados Unidos. A mediados de noviembre de 1980 fue detectado un intento de este tipo dirigido por el vicepresidente del COSEP y presi-

dente de UPANIC —que murió en las etapas preliminares de la acción. En estos mismos días, los miembros del bloque de la oposición —COSEP, MDN, PSC, CTN, CUS, PCD— resolvieron retirarse conjuntamente del Consejo de Estado, abandonando sus bancas.

A partir de entonces y sobre todo desde inicios de 1981, con la nueva administración republicana en la Casa Blanca, el enfrentamiento de la burguesía se hará más agudo e irá de la mano con el incremento de la actividad depredadora de los ex guardias somocistas que operan desde sus bases en Honduras, y las maniobras desestabilizadoras primero —suspensión de programas de asistencia alimentaria, bloqueo de créditos en organismos financieros internacionales, etc.— y posteriormente abiertamente intervencionistas —financiamiento de la contrarrevolución, asesoramiento y asistencia técnica a las bandas de ex guardias...— de Estados Unidos. Debilitado por la fractura que de hecho había experimentado en abril de 1980, y por la resistencia de muchos de sus miembros de sumarse a la política de su máximo dirigente, el MDN será el cauce de la expresión política del descontento empresarial hasta que, en 1982, Robelo culmina su enfrentamiento cada vez más abierto a la Revolución Sandinista radicándose en el exterior para incorporarse activamente a las fuerzas contrarrevolucionarias que compiten por el apoyo de la Casa Blanca; desde entonces el MDN desaparece por completo de la escena política nacional.<sup>22</sup>

Esta situación dejó desguarnecidos a los sectores de la burguesía que aún no están dispuestos a dar ese paso extremo —unos, por no arriesgarse a la confiscación subsiguiente de todos sus bienes; otros, porque aún confían en poder torcer el trayecto del proceso revolucionario; otros más, porque sus resquemores ideológicos no les impiden aceptar los estímulos de la política económica y beneficiarse de ellos. Una vez más, la burguesía nicaragüense queda privada de expresión política propia, y debe confinar sus planteos al ámbito gremial. Una vez más, debe salir en busca del salvador auxilio externo: Es-

<sup>20</sup> Cf. Ramírez (1982) para un análisis de la crisis de mayo 1980. La permanencia de las organizaciones del COSEP en el Consejo de Estado se consiguió en respuesta a la sanción, por la JGRN, de una ley de amparo contra confiscaciones arbitrarias o improcedentes.

<sup>21</sup> Cf. E. Dreyfus (1980). La participación de la jerarquía de la Iglesia Católica en la oposición al gobierno revolucionario es analizada desde enfoques diversos en Serra *et al.* (1981), Serra (1982), Girardi (1983), etc.

<sup>22</sup> Arturo Cruz seguirá poco más tarde el mismo trayecto. Designado embajador de Nicaragua en los Estados Unidos después de la reestructuración de la JGRN en 1981, renunciará a esa posición meses más tarde, incorporándose en 1982, después de abandonar Nicaragua, a los grupos contrarrevolucionarios en Estados Unidos.

tados Unidos sin dudas, pero también Venezuela, Panamá, Costa Rica y la socialdemocracia europea. Lo mismo que antes del triunfo, deberá practicar una competencia a dos puntas. Frente a la socialdemocracia europea y los gobiernos latinoamericanos debe competir con la diplomacia de la Revolución y con la solidaridad internacional que ésta suscita. Frente a los Estados Unidos debe competir con el proyecto abiertamente contrarrevolucionario, para el cual la administración Reagan muestra una generosidad mucho mayor: si a las organizaciones empresariales de la gran burguesía y a la jerarquía de la Iglesia Católica les concede cinco escuálidos millones de dólares,<sup>22</sup> las sumas efectivamente invertidas en el proyecto contrarrevolucionario superan el centenar de millones.

En estos enfrentamientos el FSLN y el gobierno revolucionario han actuado en general con moderación, tratando de evitar las rupturas irreversibles y los puntos de no retorno. Así, en medio de las movilizaciones sindicales contra las maniobras de descapitalización emprendidas por sectores de la burguesía —cf. el capítulo V—, el *Foro de Discusión de la Problemática Nacional* (junio 1981) definió un ámbito de discusión franca de las perspectivas políticas respectivas.<sup>23</sup> Pero cuando en octubre de ese mismo año el COSEP difundió internacionalmente una declaración acusando al FSLN de llevar al país a un "nuevo genocidio" al impulsar un proyecto "marxista leninista de espaldas al pueblo", y haciéndolo responsable del descalabro total de la economía, la revolución interpretó el documento como parte de una maniobra para desestabilizarla<sup>24</sup> y, en aplicación de la ley de Estado de Emergencia, dispuso la prisión de los firmantes —al mismo tiempo que recluía en la cárcel a un grupo de dirigentes sindicales del Partido Comunista en respuesta a un documento en que se acusaba al FSLN de hacerle el juego al gobierno norteamericano e impulsar un proyecto socialdemócrata. Pero también aquí la

<sup>22</sup> *Barricada*, 25 de junio, 7 de julio y 3 de agosto, 1982.

<sup>23</sup> Creado por iniciativa del FSLN para mantener abiertos los canales de diálogo con la oposición, el Foro incorporó, del lado de las organizaciones políticas y de masas que apoyan a la revolución, a dos organizaciones políticas con las cuales existieron relaciones conflictivas en los meses inmediatos al triunfo revolucionario: el Movimiento de Acción Popular (MAP) y el Partido Comunista de Nicaragua.

<sup>24</sup> *Barricada*, 22 de octubre de 1981.

conducción revolucionaria mostró moderación: los dirigentes empresarios fueron condenados a siete meses de prisión y se beneficiaron de un indulto en febrero de 1982; los dirigentes comunistas en cambio recibieron una condena de 19 meses, pero fueron indultados en setiembre de 1982.<sup>26</sup>

El desenvolvimiento de este proceso ha conducido en los hechos a una progresiva reformulación del esquema original de la unidad nacional. A medida que la burguesía no-somocista fue diferenciándose en sus respuestas corporativas y políticas, y que elementos de la clase han ido enfrentándose al proyecto revolucionario, e inclusive incorporándose a la contrarrevolución, el componente burgués de la unidad nacional se reduce. Al mismo tiempo aumenta el predominio dentro del *sector privado* integrado al proyecto de unidad, de la pequeña y mediana propiedad: pequeño comercio, campesinado, pequeña industria, sectores técnicos y profesionales, y otros. Las secciones siguientes de este capítulo enfocan esta evolución dentro de la unidad nacional.

#### 4. La economía mixta y la gran propiedad

La guerra contra la dictadura provocó enormes pérdidas humanas y materiales, y la desarticulación completa de la economía. De acuerdo a la CEPAL (1981: 16 y ss) murieron alrededor de 35.000 personas, entre 80.000 y 110.000 resultaron heridas, unos 40.000 niños quedaron huérfanos, y un millón de personas necesitaba asistencia alimentaria urgente para sobrevivir; unas 150.000 de éstas eran refugiados. El monto de las pérdidas materiales sumaba unos u\$s 480 millones, más u\$s 1.500 millones fugados al exterior; casi 2.000 millones de dólares —vale decir el valor del PIB. Además la etapa final de la lucha coincidió con la temporada de preparación de la tierra y siembra tanto de cultivos de exportación como para el mercado interno. Los desplazamientos internos de población

<sup>26</sup> *Barricada*, 9 de setiembre de 1982; *El Nuevo Diario*, 10 de setiembre de 1982.

que huía de las ciudades en lucha y de la represión, la emigración —temporal o definitiva— de muchos capitalistas y la fuga de capitales, la desarticulación y vaciamiento del sistema financiero, el bloqueo de caminos, el contrabando de parte del hato ganadero hacia Honduras, etc., afectaron seriamente al sector agropecuario y plantearon el espectro del hambre a la joven revolución.

La reconstrucción de la economía y la infraestructura aparecían como tareas prioritarias y como condición para la adopción de las transformaciones revolucionarias.<sup>27</sup> Reconstrucción y transformación, sin embargo, no fueron encaradas como procesos separados, sino que el desarrollo de la recuperación de la economía, de la reconstrucción física, etc., se articuló con el proyecto de cambios profundos en la propia estructura económica de la sociedad. La reconstrucción no consistiría en un retorno al modo en que esa estructura funcionaba antes, sino en la recuperación del sistema productivo, de sus bases materiales, etc., al mismo tiempo que se introducían modificaciones en sus relaciones básicas y en su modo de funcionamiento.

El elemento central de esta tarea y de la política de unidad nacional que la impulsa, es el desarrollo de una *economía mixta* que conjugaba un Área de Propiedad del Pueblo (APP) y un Área Privada (AP), orientada a superar el atraso económico, romper la dependencia y "favorecer cambios en la distribución del ingreso nacional en beneficio de las mayorías populares" (JGRN 1982).

La imagen de una economía controlada por el somocismo, la gran propiedad burguesa y el imperialismo, sobre la cual crear un amplio APP que se convirtiera en el eje dinámico de una rápida recuperación, probó ser correcta sólo parcialmente. La participación del gran capital —nicaragüense y extranjero— tuvo lugar sobre todo en actividades de procesamiento, comercialización y financiamiento, y en menor escala en la producción. La creación del APP no podía sino reflejar esta situación: en 1980 representaba 41 % del producto bruto, pero daba cuenta de sólo 25 % de la producción material, mientras que en el sector servicios representaba 56 % (cf. cuadro II.17). En otras palabras, la participación directa del Estado en la eco-

<sup>27</sup> Cf. Jarquín (1980), Fitzgerald (1982b) para un recuento de las medidas iniciales de política económica.

nomía era de una magnitud similar e incluso menor que la que se registraba en otros países de América latina y Europa: México, Perú, Argentina, Francia...

La formación del APP comenzó inmediatamente después del 19 de julio. El día 20 la JGRN emitió el decreto N° 3 que ordenó la confiscación "de todos los bienes de la familia Somoza, militares y funcionarios que hubiesen abandonado el país a partir de diciembre de 1977", y el decreto 38, del mismo día, amplió dicha medida a las "personas allegadas al somocismo". Estas disposiciones y otras complementarias —como la nacionalización del sistema financiero, de la minería del oro y la plata— afectaron sobre todo al somocismo y en menor medida a capitales extranjeros. Fueron incluidos en ellas los bancos, compañías de ahorro y préstamo, las entidades financieras, las compañías de seguros, el acopio y comercio exterior de los productos tradicionales de exportación (café, algodón, azúcar, carne). Se nacionalizaron los minerales de oro y de plata propiedad de firmas extranjeras y pasó al Estado el sistema de pesca, y el de corte y procesamiento de madera. Fueron afectadas a la reforma agraria 1.2 millones de manzanas de tierra (algo más de 850.000 hectáreas), entre ellas 27.3 % de todas las fincas de más de 500 manzanas, que corresponde a casi 43 % de la tierra que estaba en manos de grandes terratenientes. Fue confiscado también el capital somocista en la industria textil, química y agroquímica, de materiales de construcción y metalmecánica, y en el transporte aéreo, marítimo y de superficie; las empresas que operaban en los dos primeros fueron estatizadas.

Esta primera etapa de nacionalizaciones y confiscaciones significó la ejecución de parte del programa planteado al respecto por el FPN a principios de 1979, y que el programa del Gobierno de Reconstrucción Nacional (9 de julio) había incorporado. El segundo momento de avance del APP se inició con el segundo aniversario del triunfo revolucionario (19 de julio 1981), cuando en el contexto de una agudización de las presiones norteamericanas, y ante la evidencia de la débil respuesta empresarial a la política económica del Estado, se declaró la confiscación de las empresas que incurrieran en procedimientos de descapitalización, la confiscación de los bienes inmuebles y muebles, títulos valores y acciones de propiedad de nicaragüenses que hicieran abandono irresponsable de los mis-

mos ausentándose del país por más de seis meses sin causa justificada; la nacionalización de la distribución de azúcar, de las exportaciones de café soluble, ron, aguardiente, concentrados y esencias de licores, y varios productos químicos y de origen agropecuario —exportaciones no tradicionales por un valor aproximado anual de u\$s 45 millones; se dispuso también la confiscación de las propiedades de quienes se incorporaran a actividades contrarrevolucionarias. Quedaron afectadas a la reforma agraria todas las fincas de más de 500 o 1000 manzanas —de acuerdo a su ubicación— abandonadas o explotadas deficientemente por sus propietarios.<sup>26</sup>

El cuadro IV.1 muestra la participación del APP en la producción de bienes y de servicios básicos. Se trata de una presencia de magnitud desigual entre sectores y dentro de cada sector. En la industria manufacturera por ejemplo, corresponde a las empresas del APP 30 % del valor bruto de producción y 33 % del valor agregado, pero en algunas ramas esta participación es mucho mayor: 67 % del VBP en la rama matanza de ganado y preparación y conservación de carne (3111)<sup>27</sup>, 49 % en fabricación de productos lácteos (3112), 40 % en fabricación y refinación de azúcar (3118), 67 % en hilados (3211), 84 % en fabricación de pinturas (3521), 100 % en cemento (3692), 72 % en industrias básicas del hierro (3710), 83 % en la fabricación de productos metálicos (3813) (INEC 1981b). En la agricultura la participación del APP es más pronunciada que en la ganadería, y dentro de la agricultura, un poco más pronunciada en la agroexportación que en la producción para el mercado interno; en este último sector, el único rubro con presencia significativa del APP es el arroz.

La imagen difundida en el exterior por la propaganda contrarrevolucionaria y por la administración Reagan —alimenta-

<sup>26</sup> Estas medidas fueron anunciadas por el Comandante de la Revolución Daniel Ortega en el acto del II Aniversario del triunfo revolucionario (cf. *Barricada*, 20 de julio de 1981). Con posterioridad a estas nuevas disposiciones varias empresas ingresaron al APP al comprobarse la vinculación de sus propietarios con las actividades contrarrevolucionarias, o por abandono injustificado del país; uno de los casos más notorios ha sido el de la embotelladora de la Coca Cola. Asimismo empresas de Alfonso Robelo y de Donald Lacayo Núñez (ex directivo del PCD) se incorporaron al APP cuando éstos se integraron a la contrarrevolución: *Barricada*, 31 de agosto de 1983.

<sup>27</sup> La cifra entre paréntesis corresponde a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU).

Cuadro IV.1  
Nicaragua: Participación del APP en la  
economía nacional, 1982  
(en porcentajes)

A) Participación en el valor de producción, por sector	
Sector	% del VBP
PIB	39.6
Agricultura	21.0
Pecuario	18.5
Forestal	34.5
Caza y pesca	76.6
Minería	100.0
Sector primario	50.3
Industria manufacturera	30.7
Construcción	92.3
Sector secundario	62.2
Transporte y comunicaciones	40.0
Agua y electricidad	100.0
Servicios básicos	70.4
Comercio	32.2
B) Participación en el volumen físico de la producción agrícola*	
Producto	%
Algodón en rama	22
Café	16
Caña de azúcar	31
Ajonjolí natural	4
Tabaco habano	100
Agroexportación	19
Maíz	6
Frijol	5
Arroz	32
Sorgo	14
Tabaco rubio	10
Mercado interno	13
Total agricultura	16

\* Año agrícola 1981-82.

Fuente: Elaboración propia de cifras de INEC, MIPLAN, MIDINRA.



da por el miedo de la gran burguesía—, de un Estado omnipotente que se apodera de la actividad privada y la estrangula, es por lo tanto falsa. La realidad demuestra que la empresa privada tiene una presencia todavía mayoritaria en casi todos los rubros de la economía, y que la acción del Estado revolucionario en este campo tiene lugar sobre todo por la vía indirecta del sistema financiero, la fijación de precios, el procesamiento agroindustrial, la comercialización, la legislación laboral y salarial. Vale decir una incidencia mediada por la eficacia de los instrumentos de política económica y financiera, por la receptividad de los productores privados, y por la capacidad inversionista del sector público frente a la retracción de la gran burguesía.

A pesar de esta participación directa relativamente modesta todavía, el APP es enfocado por el FSLN como el eje de dinamismo de la economía mixta y de las transformaciones en la estructura económica y en las relaciones entre las clases:

... nosotros estamos mirando hacia un régimen de economía mixta en que el sector estratégico popular habrá de seguir definiendo su hegemonía en términos de toda la dinámica social impuesta por la Revolución, pero también en términos de un proceso de futura acumulación económica que pondrá las posibilidades máximas de producción, del lado del Área de Propiedad del Pueblo.

(...) Aquí no se trata, pues, de coartar dentro de la estrategia del proyecto revolucionario, la participación de los sectores privados en la producción, pues la reconstrucción nacional, frente a una economía restringida y destruida precisa de urgentes elementos de reactivación; se trata de una elección histórica que el mismo proceso revolucionario ha determinado como consecuencia de la sustitución radical de todo el aparato de poder tradicional, que si bien es cierto representaba en primera instancia un modelo de dictadura militar represiva, representaba también, en términos sociales, la posibilidad de sustentar alternativas de dominio distintas a las de la dictadura, pero de la misma naturaleza de clase. Aun cuando este proyecto alternativo hubiera llegado a ser de carácter democrático-burgués (Ramírez 1980; cf. asimismo Ruiz 1980b).

Y más recientemente:

... la hegemonía del proceso de desarrollo económico la tienen las nuevas relaciones de producción creadas por la revolución.

Hegemonía que se logra con la nacionalización del comercio exterior, con la nacionalización de los recursos naturales y de los sectores industriales estratégicos, con la nacionalización de la banca. Con estas medidas hemos creado un sistema de producción y de gestión que es el predominante, hegemónico, que coexiste con formas, llamémosle capitalistas, en un grado apreciable, y formas atrasadas o precapitalistas.

(...) La tendencia nuestra es a que la propiedad estatal y cooperativa sean las hegemónicas, coexistiendo con una producción privada mediana y pequeña e incluso grande, donde las relaciones del capitalismo atrasado seguramente pasarán a ser secundarias, subordinadas (Wheelock 1983: 102).

La creación de una organización eficiente y dinámica de la producción y la circulación en el APP es un proceso largo y complejo que aún se encuentra en desarrollo, especialmente en el sector industrial. Las empresas que se incorporaron al área eran en general de una tecnología atrasada cuando no obsoleta, la maquinaria había carecido del mantenimiento adecuado, muchas de ellas estaban sobredimensionadas para el mercado nacional, y en otras la guerra había provocado deterioros y destrucción. Además, muchos técnicos abandonaron las empresas cuando éstas pasaron a integrar el sector público, por razones ideológicas o en busca de salarios más elevados o condiciones de trabajo más atractivas. Otros se quedaron, pero manteniendo muchas veces criterios autoritarios en su trato con los trabajadores y el sindicato. Por su parte, muchos de los nuevos administradores carecían de experiencia y no siempre tenían la formación adecuada; en no pocos casos tendieron a reproducir, en el seno del APP, el comportamiento de los antiguos patrones. Los trabajadores, por su lado, tendieron a un relajamiento de la disciplina laboral, sobre todo en los meses inmediatamente posteriores al triunfo; el quiebre de los criterios capitalistas de disciplina laboral, basados en la explotación de la fuerza de trabajo, no implica su inmediata sustitución por criterios de disciplina superiores —basados en el patriotismo del trabajador, en su conciencia de clase, etc. Como resultado, la productividad del trabajo en el APP era más baja y evolucionaba con un ritmo más lento que en el área privada, en los primeros años de la revolución (cf. cuadro IV.2).

Estos problemas son frecuentes, y de alguna manera normales, en cualquier proceso de creación de un sector público

## Cuadro IV.2

Nicaragua: productividad del trabajo en la industria manufacturera, por área de propiedad: 1980 y 1981

Productividad <sup>a</sup>	1980		1981		Diferencia	
	APP	Total	APP	Total	APP	Total
Miles de córdobas <sup>b</sup>	60.4	89.3	72.7	121.4	+ 20.4	+ 49.2
Índice	67.6	100.0	59.9	100.0		35.9

<sup>a</sup> Se toma como indicador de productividad la relación valor agregado/empleos.

<sup>b</sup> Precios corrientes.

Fuente: Elaboración propia sobre cifras de INEC (1980 y 1981b).

de la economía en un proceso de transformaciones socioeconómicas y en una economía tan poco desarrollada y con tantas limitaciones como la nicaragüense. Por otro lado, la falta de información sobre los niveles reales de eficiencia productiva y sobre la evolución de la productividad antes de la incorporación de las empresas respectivas al APP, hace imposible contar con criterios comparativos. El argumento reiterado por voceros y organizaciones de la empresa privada en el sentido que el APP se caracteriza por la ineficiencia productiva y el despilarrro de recursos (INDE 1981) no pudo ser acompañado hasta ahora por una base empírica consistente que permita afirmar que estas deficiencias organizativas en las firmas del APP se originan en los criterios de administración del sector, y no son una continuación de problemas preexistentes a la incorporación de las firmas al sector público de la economía.

La práctica de casi cuatro años y medio de revolución indica que no existe de parte de ésta un enfrentamiento de principio con la gran propiedad privada en la medida en que ella adopte los criterios de afectación productiva fijados por el gobierno revolucionario. La contradicción tiene lugar cuando aparecen comportamientos de ociosidad, ausentismo, abandono del país por los propietarios, o colaboración de éstos con la contrarrevolución.

La prueba inicial de la buena voluntad de la revolución hacia la gran empresa fue la suspensión de la aplicación del decreto N° 38, dispuesta el 8 de agosto de 1979 —vale decir, apenas 20 días después de haber entrado en vigencia. Ya se dijo que este decreto extendía las confiscaciones contempladas por el decreto N° 3 a los "allegados al somocismo"; la medida provocó inseguridad en la gran burguesía, a causa de las vinculaciones de intereses que muchos de sus miembros mantenían con la familia Somoza o con funcionarios de su régimen y oficiales de la Guardia Nacional. La vigencia del decreto N° 38 significaba entonces la posibilidad de expandir hasta límites insospechados el nascente sector público de la economía, afectando intereses de algunos grupos de la burguesía opuesta políticamente a la dictadura pero con vinculaciones económicas, financieras, comerciales o de otra índole con ella.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Parece haber sido el caso de varios miembros de los grupos financieros BANIC y BANAMERICA.

La reforma agraria ratificó esta posición moderada. La ley respectiva, sancionada en 1981, plantea entre sus objetivos la necesidad de

superar las formas de propiedad y explotación de la tierra rentistas, extensivas o ineficientes (y) la explotación inícua del trabajo del campesino bajo las modalidades de mediería, aparcería, colonato y formas similares; (...) fomentar la producción y la productividad, garantizar el uso más adecuado y racional de la tierra, así como la protección de los suelos y el mejor aprovechamiento de las aguas y demás recursos naturales.<sup>31</sup>

En consecuencia "garantiza la propiedad de la tierra a todos aquellos que la trabajan productiva y eficientemente" (art. 1) y afecta a la reforma agraria solamente las tierras ociosas, deficientemente explotadas o dadas en arrendamiento, de propietarios de más de 500 o 1000 manzanas (350 y 700 ha. respectivamente) según la región, y las que no son explotadas por sus propietarios sino que se encuentran dadas

en mediería, aparcería, colonato y precarismo u otras formas similares de explotación campesina, así como por cooperativas y otras formas asociativas (art. 2).

El art. 6 explicita los criterios para determinar el carácter ocioso o la explotación deficiente de la tierra.

Aunque en la redacción aprobada originalmente por el Consejo de Estado la ley no contemplaba indemnización para el caso de la tierra ociosa, privó finalmente el criterio de la Junta de Gobierno de dar indemnización también a estos propietarios, con el fin de reducir los enfrentamientos con la burguesía.<sup>32</sup>

Apuntar a estos elementales criterios de modernización, eficiencia y protección de los recursos naturales bastó para alterar profundamente la estructura de tenencia y el perfil social del campo. La gran propiedad agraria ha quedado reducida a entre 1/2 y 2/3 de su magnitud antes de la revolución; sólo subsisten 680 propietarios de más de 500 manzanas (cf. cuadro IV.3).

<sup>31</sup> Considerandos de la ley de reforma agraria. CE. MIDINRA (1982a).

<sup>32</sup> *El Nuevo Diario*, 6 de agosto de 1981.

Cuadro IV.3

Nicaragua: Tenencia de la tierra por área de propiedad, 1979 y 1983

Áreas de propiedad	Extensión			
	1979		1983	
	Miles de manzanas	%	Miles de manzanas	%
1. <i>Productores individuales</i>				
Más de 500 mz	2920.0	41	880.4	12
201 a 500 mz	980.0	14	730.0	10
51 a 200 mz	2100.0	30	2100.0	30
10 a 50 mz	910.0	13	1000.0	14
Menos de 10 mz	170.0	2	284.0	4
2. <i>Cooperativas de producción</i>	—	—	485.6	7
3. <i>APP</i>	—	—	1600.0	23
<b>TOTAL</b>	<b>7080.0</b>	<b>100</b>	<b>7080.0</b>	<b>100</b>

Fuente: MIDINRA.

El carácter *antilatifundista más que anticapitalista* de la reforma agraria sandinista surge asimismo del hecho que del total de tierra afectada hasta diciembre de 1983 (unas 421 mil manzanas), el 63 % consistía de tierras ociosas o deficientemente explotadas; otro 18 % pertenecía a propietarios que no las explotaban directamente —vale decir propietarios rentistas o que mantenían a los campesinos productores bajo formas precarias o en colonato—, y el 19 % restante provino de situaciones de abandono.

Así como la gran propiedad agraria eficientemente afectada al proceso productivo queda al margen de la reforma agraria, en el sector urbano el capital industrial que acepta los lineamientos de la política económica del gobierno revolucionario es respaldado y se le garantizan recursos financieros para un funcionamiento aceptable. Más de 70 % del valor de las exoneraciones impositivas autorizadas para importaciones ha be-

beneficiado al sector privado de la industria manufacturera, con fuerte participación de las empresas más grandes. Asimismo, el Sistema Financiero Nacional financia el 100 % de los requerimientos de capital de trabajo y de inversión del sector privado con tasas de interés negativas, en contraste con las políticas financieras del somocismo, que nunca financiaron más de 70 % de esos requerimientos, y con tasas de interés positivas o neutras en el mejor de los casos (Vilas 1982b).

En enero 1982 la Segunda Asamblea Sandinista ratificó la vigencia del proyecto de economía mixta y la necesidad de su perfeccionamiento, estimulando la convergencia de "las fuerzas económicas de carácter privado" con las que impulsa la revolución, a través del APP "y el cooperativismo".<sup>30</sup> En ejecución de esta orientación, se definió un conjunto amplio de incentivos fiscales, financieros, crediticios y cambiarios para la producción agrícola e industrial que elevaron sustancialmente el excedente apropiado por la empresa privada.<sup>31</sup> Las empresas extranjeras han recibido el mismo trato que las nacionales, y en ocasiones se han beneficiado de algunos subsidios (Nolff 1982).

Ello no obstante el comportamiento de la empresa privada no ha respondido a las expectativas depositadas en ella, salvo algunas pocas excepciones. La inversión privada ha experimentado una fuerte retracción; en el trienio 1980-82 la inversión fija privada fue en precios constantes aproximadamente una tercera parte del nivel de 1977-78 (cf. cuadro IV.4). Asimismo la estructura de la inversión cambió de manera muy marcada; en todo el período revolucionario más de 70% de la inversión fija total corrió por cuenta del sector público, aunque la evolución seguida por la participación de uno y otro sector durante estos años sugiere que aún no se ha alcanzado una proporcionalidad estable.

Este comportamiento a la baja es protagonizado fundamentalmente por los grandes productores. Según el Ministerio de Planificación

... a pesar de los incentivos fiscales y financieros que el Gobierno Revolucionario ha ofrecido, del proceso de normalización la-

<sup>30</sup> Barricada, 1º de febrero de 1982.

<sup>31</sup> Barricada, 9 de febrero y 15 de noviembre, 1982, *El Nuevo Diario*, 21 de marzo de 1982.

#### Cuadro IV.4

Nicaragua: Evolución de la inversión, 1977-1982  
(Millones de córdobas de 1980)

	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Inversión total	7008	2875	-	3499.7	4967.3	3391.7
Inversión fija	6186	3436	-	3032.2	4473.1	2893.7
a) Privada	3139	1895	726	622.2	1093.1	796.7
b) Pública	3047	1541	678	2410.0	3380.0	2097.0
Cambio de existencias	822	561	1752	467.5	494.2	487.3
Estructura porcentual de la inversión fija:						
Privada	51	55	52	21	24	27
Pública	49	45	48	79	76	73
Total	100	100	100	100	100	100

Fuente: MIPLAN y elaboración propia. Las cifras sobre inversión fija privada son estimaciones.



boral, y de la rápida expansión del mercado nacional y de los precios, se evidencia que los grandes productores privados no se han mostrado dispuestos a respaldar la reactivación con su propia inversión. Así, aunque objetivamente las ganancias se han recuperado mucho más rápidamente que los salarios, la cooperación del sector empresarial se ha limitado a levantar la producción, pero su actitud respecto de la inversión ha sido ambigua (MIPLAN 1981: 121).

Este comportamiento no puede ser reducido a una única causa; obedece a factores múltiples, aunque confluyentes. La evolución de la situación económica interna y de la crisis externa —incremento del proceso inflacionario, creciente endeudamiento externo, retraso en el tipo efectivo de cambio, entre otros aspectos— contrabalancearon el efecto estimulante de los incentivos a la empresa privada fijados durante 1980 y 1981; la retracción inversionista de estos años habría respondido a estos factores más que a una decisión de la clase de boicotear la recuperación de la economía nacional. La adopción de nuevos incentivos en febrero de 1982 indica que ésta fue la opinión prevaleciente dentro del FSLN y en el gobierno revolucionario —aunque posiblemente no fue la opinión unánime—. La anormalidad del año 1982 por los daños provocados por el huracán Alleta primero, por la prolongada sequía más tarde, por la retracción del comercio intercentroamericano a causa de la crisis económica regional y por la escalada de ataques contrarrevolucionarios desde Honduras —que afectaron particularmente zonas de agroexportación—, impiden llevar a cabo una evaluación de la gravitación de aquellos incentivos en las decisiones de la burguesía. El cuadro IV.4 sugiere sin embargo que habría existido un principio de respuesta positiva, al menos en términos globales: comparando el año 1982 con 1981 la participación privada en la inversión fija total creció, y la reducción de su valor absoluto fue proporcionalmente menor (27 %) que la experimentada en el sector público (38 %).

Al mismo tiempo es posible plantear la hipótesis de que la Revolución Sandinista está creando un sistema socioeconómico que, a pesar de contemplar un espacio amplio para la empresa privada mediana y grande, no es atractivo para el tipo de burguesía que efectivamente se desarrolló en Nicaragua. Mantie-

ne los medios de producción —con las limitaciones señaladas hace un momento— pero la política económica y financiera reduce su margen de maniobras e introduce elementos de inseguridad en sus evaluaciones de futuro. Al mismo tiempo el estímulo oficial a la organización sindical, la vigilancia del cumplimiento de la legislación laboral, el auge de la firma de convenios colectivos de trabajo, la participación sindical creciente en el desenvolvimiento de las empresas, reducen los niveles de explotación de la fuerza de trabajo y cuestionan el principio burgués de autoridad en la empresa. Las presiones y agresiones crecientes de Estados Unidos a la Nicaragua revolucionaria —una nave en la cual la burguesía quedó embarcada pero que no puede timonear— pone ante sus ojos niveles de enfrentamiento con su tradicional protector y aliado que posiblemente jamás imaginó. Por último el discurso político dominante que enfatiza el contenido clasista del proceso —o al menos de su horizonte—, el rechazo a la soberanía absoluta del propietario en la empresa, la obligación política de producir, desconciertan y asustan a una clase tradicionalmente acostumbrada a mandar y ser obedecida. La conservación de los medios de producción tiene lugar en el marco de un sistema político que enfatiza ideológicamente los valores superiores del socialismo y del *ethos* proletario.

En estas condiciones, donde la subjetividad de la clase juega un papel tan decisivo, no debería sorprender que el incremento de la producción de la empresa privada sea menor que el crecimiento de las facilidades financieras que el gobierno revolucionario le ha acordado. La evidencia disponible indica que el financiamiento entregado fue convertido en dólares y sacado del país a través del mercado libre de divisas —un mercado carente de toda regulación efectiva hasta setiembre 1981—; paulatinamente el capital productivo se desplazó hacia la esfera del comercio y la especulación; el hato ganadero se redujo rápidamente por el faenamiento de vientres; los precios de transferencia, la sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de exportaciones, permitieron la fuga ilícita de ganancias y la reducción de la base imponible respectiva; no se crean reservas de depreciación en muchas empresas, y una tendencia a la descapitalización se aprecia en muchos sectores de la empresa privada. Todo ello en el marco de un sistema financiero estatizado que adelanta al empresario la totalidad de

su capital de trabajo y reduce al mínimo el riesgo operativo.<sup>33</sup>

Estos elementos favorecen el desarrollo de un movimiento de transferencia del excedente desde el sector público de la economía hacia el sector privado, y desde los sectores productivos hacia los no productivos: un efecto radicalmente opuesto al esperado por la política económica. Es cierto que la nacionalización del sistema financiero limita estos movimientos o los hace más difíciles, pero no ha podido eliminarlos totalmente —por lo menos hasta ahora—. La nacionalización parece no haber sido suficiente para eliminar la capacidad de maniobra de la burguesía, capacidad que en definitiva emana de su condición de propietaria de medios de producción. Asimismo la inexperiencia del nuevo aparato estatal en estos primeros años, la presencia de cuadros técnicos formados profesionalmente en el marco de los enfoques teóricos y la racionalidad económica capitalista, favorecen adicionalmente el desenvolvimiento de estas tendencias.<sup>34</sup>

La retracción de la burguesía prolonga y ahonda la crisis económica que desde 1978 atraviesa el país, y confluye objetivamente en sus efectos, con la dimensión económica de las agresiones norteamericanas efectuadas por la administración Reagan a través del cierre de mercados, bloqueo de asistencia crediticia en organismos financieros internacionales, dificultades al normal abastecimiento de partes y repuestos, etc. Esta no es, ciertamente, la situación de la totalidad de la clase; existen grupos de la burguesía, e incluso de la gran burguesía, que han aceptado activamente las nuevas reglas del juego y que se han incorporado a los planes de expansión de la producción (MIDINRA 1982b; 25-26). Pero son grupos reducidos y poco representativos en la tonalidad de apatía generalizada.

La gran propiedad ha quedado en los hechos en medio de un campo de fuerzas crecientemente polarizado. De un lado, el proyecto revolucionario, con sus organizaciones de masas, su Ejército Popular Sandinista, su discurso clasista, su apertura hacia los países socialistas y los movimientos de liberación nacional, su unidad nacional con hegemonía popular, que le

plantea demandas y desafíos que hasta el momento no ha sabido o podido satisfacer. Desprecia las garantías jurídicas e institucionales que el nuevo orden le ofrece y se agravia por la falta de un *Estado de Derecho*; se asusta ante el desarrollo del APP por su propia retracción capitalista y reclama por el *apetito confiscatorio* y la intención de *destruir la empresa privada*; la organización de la gente para la defensa, la producción, la protección de la salud, la educación popular, motivan sus apelaciones a una *paz social* estable y su indignación por el fomento del odio de clases.<sup>35</sup>

Por el otro lado, la contrarrevolución, es decir el retorno de los asesinos, los ladrones, la hez de la sociedad del pasado: los veteranos de la Guardia Nacional refugiados en Honduras, apoyados y entrenados por el ejército norteamericano y las dictaduras del Cono Sur, financiados por el presupuesto federal de los Estados Unidos. Una opción que posiblemente es excesiva todavía para la subjetividad demoburguesa de buena parte de la mediana y gran empresa, pero a la cual la aproxima *objetivamente* su conducta en la economía.<sup>36</sup>

En todo caso este comportamiento de la burguesía cuestiona la legitimación de su reproducción en la etapa revolucionaria de reconstrucción de la economía, y su aceptación efectiva al esquema sandinista de unidad nacional: una y otro chocan contra su exigua colaboración en la recuperación de la producción, ya que en la óptica del FSLN es la capacidad productiva de la gran empresa privada la base de su convocatoria a la unidad nacional.<sup>37</sup> Y al mismo tiempo coloca al gobierno revo-

<sup>33</sup> Cf. INDE (1981) 52-53, 68-69; también Herdocia (1982). Sin embargo en varias ocasiones la Corte Suprema de Justicia ordenó la restitución de propiedades confiscadas sin causa legal: cf. *La Prensa*, 8 de julio y 8 de setiembre de 1982; *El Nuevo Diario*, 25 de octubre de 1982.

<sup>34</sup> Para mitigar estas dudas e indecisiones, parte del discurso político de la contrarrevolución trata de diferenciarse de los ex Guardias intentando presentarse como una "tercera vía", más razonable y civilizada, que la de los veteranos somocistas. Este parece ser el papel del Sr. Arturo Cruz (cf. por ejemplo *The New York Times*, June 28, 1983) y de algunos intelectuales y académicos *free lance*.

<sup>35</sup> Por ejemplo: "... pensemos en la economía, pensemos que es necesario salir del subdesarrollo, de la miseria, acabar de restañar las heridas de la guerra, reconstruir nuestra economía, y para eso requerimos de esa inapreciable labor infatigable del obrero de la ciudad, del trabajo de intermediación del comerciante honesto y también del trabajo del industrial, ya sea éste pequeño o mediano, e inclusive, aunque fuese grande. Lo mismo en el caso de la agri-

<sup>36</sup> Este tema es retomado en el capítulo VII.

<sup>37</sup> Cabe destacar en este sentido que muchos funcionarios que participaron en la definición de la política económica en los primeros tiempos, fueron abandonando el Estado, la revolución, y el país, en años recientes.

lucionario en una situación compleja. Lo ubica, en efecto, bajo el impacto de una crisis alimentada por la recesión de la burguesía, sin poder recurrir empero —por el carácter popular de su base social y del proyecto de sociedad que impulsa— a la convencional "tecnología" burguesa de tratamiento de la crisis —eliminación de subsidios al consumo, reducción del empleo laboral, liberación de los precios, etc.— que favorecen la elevación de la explotación popular y la recuperación de la tasa de ganancia; y también sin poder apelar a criterios más drásticos respecto de la mediana y gran burguesía, en aras de la vigencia del principio de economía mixta, de la conservación de alianzas amplias en el plano internacional, y por las propias limitaciones presentes del Área de Propiedad del Pueblo.

Los grupos dirigentes y las organizaciones corporativas de la gran burguesía y la mediana empresa conocen esta situación y, hasta donde pueden, la explotan. Combinan la capacidad de decisión económica que aún mantienen —simplemente operando sobre las variables económicas sobre las que todavía conservan capacidad de control— con la presión política a través de sus aliados externos y la jerarquía eclesiástica, apostando a que las dificultades que la revolución atraviesa obliguen a ésta a modificar radicalmente su estrategia política y su proyecto económico. La revolución por su lado sabe de las dudas e inhibiciones de la empresa privada, de sus diferenciaciones internas y de sus miedos, y las aprovecha: combina las denuncias, movilizaciones y acciones directas de las organizaciones de masas con la concesión de estímulos económicos, el discurso clasista con la política financiera, dando siempre una nueva oportunidad, difiriendo, en aras de la unidad nacional, el momento de la ruptura.

---

cultura, porque nosotros necesitamos desarrollar nuestras fuerzas productivas. No nos llamemos a engaño, porque aquí es necesario que un pequeño país, que un país débil en lo militar, que tiene una geografía incrustada en el centro de los continentes de América, haga una Revolución profunda y ejemplar, en medio de los asedios más criminales y que lo tiene que hacer con la unidad de todo su pueblo, y con el trabajo de todo su pueblo". Discurso del Comandante de la Revolución Jaime Wheelock: *Barricada*, 20 de noviembre de 1980.

## 5. La economía mixta y la pequeña y mediana propiedad

La pequeña y mediana propiedad han demostrado más entusiasmo y mejor capacidad de respuesta a la nueva etapa, y aparecen tendencialmente como el tipo principal de propiedad privada que habrá de desarrollarse en el marco de la economía mixta. Desde el principio de la lucha revolucionaria las demandas del campesino —la falta de tierra o la mala calidad de la poca que tenía, el despojo por los terratenientes y el Estado somocista, la falta de asistencia técnica y crediticia, las condiciones miserables de vida...— encontraron eco e impulso en el sandinismo. El campesinado constituyó uno de los pilares del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional que, bajo la conducción de Augusto C. Sandino, derrotó en el comienzo de la década del '30 a la invasión norteamericana y forzó su salida del país. Treinta años después el campesinado fue el primer ámbito de trabajo político del FSLN, el *mar* en el que los combatientes sandinistas se movían como un pez: el campesinado dio al FSLN sus primeros colaboradores, el abastecimiento, el espacio y las condiciones necesarias para su consolidación y crecimiento. El desenvolvimiento de la estrategia insurreccional y la organización de los trabajadores urbanos abrieron la convocatoria del Frente Sandinista hacia sectores de la pequeña propiedad urbana —artesano, pequeño comercio, transportistas, etc.— cuya participación activa en la insurrección fue discutida en el capítulo III.

La etapa actual de la revolución refleja los rasgos predominantes de la amplia base popular sobre la cual el FSLN triunfó frente a la dictadura somocista y al bloque opositor de la burguesía. Se advierte sin embargo un desarrollo desigual entre la política revolucionaria hacia la pequeña y mediana propiedad rural, y hacia la pequeña y mediana propiedad urbana.

En el campo, la reforma agraria da respuesta a las demandas de tierra, créditos, insumos, técnica, precios, etc., de los campesinos y medianos productores, articulando un amplio sector de pequeña producción individual y cooperativa, con grandes unidades de producción estatal y con la mediana y gran burguesía agraria. De acuerdo a un informe del Minis-



terio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA),

...el sector agropecuario estará configurado sobre cuatro sectores socio-económicos: a) el APP, que deberá representar entre el 20 y el 25 por ciento de las tierras agropecuarias del país, concentrándose en los eslabones agroindustriales y la producción directa más intensiva en capital y tecnología; b) el sector cooperativo, que deberá representar alrededor del 40 % del área agropecuaria; c) el sector campesino individual, que seguirá contando con el apoyo económico de la Revolución, buscando su evolución gradual hacia formas asociativas de producción; d) el sector empresarial privado, sostén de la economía mixta y la unidad nacional (MIDINRA 1982b: 18).<sup>10</sup>

El desarrollo de la reforma agraria reconoce hasta el momento dos etapas. La primera, desde el triunfo revolucionario hasta su segundo aniversario (19 de julio 1981); la segunda, a partir de éste. La etapa que transcurrió entre 1979 y 1981 configura lo que un dirigente de la revolución ha denominado "fase antisomocista" de la reforma agraria (Wheelock 1983: 86). A través de los decretos 3 y 38 de la JRCN, el Estado revolucionario recuperó las tierras del somocismo, que sus miembros habían obtenido a través del despojo de los campesinos, la coacción, el fraude, la extorsión, etc. A su vez los decretos 230 y 263 (5 y 31 de enero de 1980 respectivamente) redujeron el precio de los arrendamientos de las tierras destinadas al cultivo de algodón y de granos básicos; los topes se fijaron en 300 y 100 córdobas por manzana respectivamente; en el algodón se dispuso que en los nuevos contratos de arriendo tendrían preferencia como arrendatarios los pequeños agricultores asociados en cooperativas, los medianos agricultores que siembran hasta 200 manzanas y los que sembraron en el ciclo agrícola 79-80; en granos básicos, a los agricultores asociados en cooperativas "o en unidades de producción", y los pequeños agricultores. Estas disposiciones significaron un fuerte golpe contra la renta terrateniente, uno de los tradicionales problemas de la pequeña y mediana producción rural (cf. *supra* capítulo II).

<sup>10</sup> Cf. en el mismo sentido declaraciones del Comandante J. Wheelock, ministro del MIDINRA, en ATC (1979: 38-39), *Barricada* 25 de abril y 20 de junio de 1982; *El Nuevo Diario*, 15 de agosto de 1983.

Al mismo tiempo se trató de normalizar la situación relativamente confusa en que se encontraba la cuestión de la tenencia en parte de las tierras que habían sido confiscadas. Muchas fincas habían sido ocupadas por campesinos y trabajadores agrícolas durante la insurrección; en varios casos se habían establecido formas rudimentarias de administración por los propios ocupantes, aunque la falta de experiencia y las condiciones imperantes dificultaron el desarrollo de una verdadera gestión económica. Asimismo muchas fincas habían sido abandonadas por sus propietarios a causa de la inseguridad que cundió en la gran burguesía en las postrimerías de la dictadura y por el avance de la guerra de liberación. Muchos de estos terratenientes habían participado de la oposición a Somoza y no quedaron incluidos en los decretos de confiscación. Sin embargo éste resultó ser un argumento extravagante para los trabajadores que habían ocupado las tierras ante el abandono de sus propietarios, y se resistían a restituirlas cuando éstos regresaban a reclamarlas.

Por su lado, el desmantelamiento del aparato del Estado en los últimos meses de la dictadura, la falta de registros, la inexperiencia de los nuevos cuadros, la superposición de tareas y necesidades, determinaron que buena parte de los esfuerzos de esta etapa se destinara a dotar de una mínima organización y eficiencia al APP y a atacar las cuestiones más urgentes del sector —la renta terrateniente, la estabilidad de los arrendatarios, la dotación de crédito a los productores, etc.— y a alcanzar una mínima centralización de las decisiones de política para el sector —decisiones que, en los primeros meses, corrían por cuenta tanto del Estado como de las organizaciones de masas, nucleamientos espontáneos de campesinos u obreros agrícolas, autoridades regionales o locales del FSLN o del Estado, etc.<sup>11</sup>

La segunda etapa de la reforma agraria comienza en julio 1981, con el anuncio de la ley respectiva y, poco después, de la ley de cooperativas agropecuarias. La elaboración de la ley de reforma agraria había sido anunciada un año antes con motivo de la celebración del primer aniversario de la revolución, pero la elaboración del proyecto se extendió durante un año. En ese lapso tuvieron lugar intensas discusiones acerca del carácter

<sup>11</sup> Cf. Kaimowitz y Thorne (1982).



que la reforma debería tener —¿antilatifundista? ¿anticapitalista? ¿campesinista? ¿proletarista?...—, el tipo de organización de la producción que impulsaría —¿fincas estatales? ¿cooperativas? ¿pequeñas fincas individuales?—, el pago o no de indemnización a los propietarios afectados, etc. Asimismo se trató de no producir un instrumento legal que alarmara a los sectores de la burguesía incorporados al proceso revolucionario en el marco de la unidad nacional y el esquema de economía mixta. Privó en consecuencia el criterio de encarar como prioritaria la cuestión del latifundio y, especialmente, de la tierra ociosa, abandonada o deficientemente explotada, apuntando a dar estabilidad al pequeño y mediano productor, impulsando un proceso de cooperativización voluntaria, y articulando los cuatro tipos de propiedad agraria ya señalados.

Hasta diciembre de 1983 la entrega de tierras de la reforma agraria alcanzaba a unas 421.000 manzanas (unas 295.000 hectáreas). La meta de esta segunda fase consiste en la adjudicación de dos millones de manzanas;<sup>42</sup> de mantenerse el ritmo de entrega actual, se alcanzaría la meta en 1986.

La producción cooperativa ha recibido un impulso muy grande. 83 % de la tierra fue adjudicada a cooperativas y solamente 17 % a agricultores individuales; se beneficiaron así unas 15.000 familias campesinas, de las cuales más de 13.000 (alrededor de 87 %) asociadas en cooperativas. Casi inexistentes antes del triunfo revolucionario, a fines de 1982 se contaban unas 3.200 cooperativas, con más de 70.000 asociados.<sup>43</sup> No obstante representan todavía sólo 56 % de los pequeños productores, manteniéndose un amplio sector de éstos al margen de este tipo de organización. La incorporación a una cooperativa es voluntaria, pero la ley trata de crear las condiciones para que la decisión sea adoptada por el campesino. Se trata sin embargo de no violentar la decisión y el nivel de desarrollo ideológico real de éste, confiando en que los resultados superiores de la producción asociativa constituyen la mejor propaganda de sus beneficios.

En algunas regiones el estímulo a la producción cooperativa tuvo que hacerse cargo no sólo de la preferencia de los cam-

<sup>42</sup> Declaraciones del Comandante Wheelock en *Barricada*, 28 de junio de 1982.

<sup>43</sup> Declaraciones del viceministro de la Reforma Agraria en *El Nuevo Diario*, 26 de diciembre de 1982.

pesinos por la producción individual, sino también de la actividad desarrollada por la organización empresarial FUNDE. Sobre todo en los departamentos de Matagalpa y Jinotega, FUNDE comenzó a promover después del triunfo revolucionario la organización cooperativa de los pequeños agricultores, en el marco de la política de la burguesía de atraer hacia sus posiciones no-sandinistas a sectores amplios de la pequeña y mediana producción rural. La escogencia de estos departamentos parece haberse debido a la mayor concentración en ellos de campesinos medios y ricos, por diferencia a la región del Pacífico, donde el predominio del campesinado pobre es muy marcado.

La confrontación tuvo lugar no tanto en torno a dos tipos diferentes de organización cooperativa, sino alrededor de dos proyectos políticos diferentes. El reclutamiento cooperativo de FUNDE se llevaba a cabo en función de un discurso político que enfatizaba el perfil del campesino como propietario, apelando a las virtudes y a la superioridad de la iniciativa privada; presentaba a la organización cooperativa como un capítulo de una verdadera democracia orientada hacia la celebración de elecciones y opuesta al *colectivismo totalitario*; una parte importante de las actividades culturales de FUNDE en estas zonas consistía en el auspicio de visitas y conferencias por miembros de la jerarquía eclesiástica, funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Nicaragua, directivos de COSEP, dirigentes de la oposición, etc. (cf. INDE 1980, 1982). Claramente este enfoque de la organización cooperativa marcaba un contraste muy fuerte con el tipo de cooperativismo promovido por la reforma agraria. Si aquél es impulsado para aproximar al pequeño productor a la propiedad privada, éste trata de enfatizar en cambio los elementos de producción colectiva. Resalta por lo tanto la importancia de la colaboración en el marco del proceso revolucionario, sin reducirlo al aspecto técnico-productivo; al contrario, el movimiento cooperativo promovido por la reforma agraria busca asimismo incorporar a los campesinos asociados al conjunto de tareas de la revolución: la participación en la educación popular de adultos, la integración a las Milicias Populares Sandinistas, la participación en las Jornadas Populares de Salud, etcétera.

El proyecto cooperativo de FUNDE fue visto así por el campo revolucionario como eminentemente desmovilizador y

en el fondo contrarrevolucionario; durante 1982 se registraron denuncias acerca de la colaboración que directivos de estas cooperativas prestarían a las bandas contrarrevolucionarias que operaban en la región. Aunque las directivas de FUNDE, INDE y COSEP han rechazado estos cargos, existe evidencia de que efectivamente varias de estas organizaciones han servido como estructuras de apoyo para esas bandas; y de los u\$s 5.1 millones que el gobierno norteamericano ofreció a la jerarquía eclesiástica y a la empresa privada, 1.4 millones estaban destinados precisamente a FUNDE.<sup>44</sup> En general la política de la revolución en el manejo de esta cuestión ha tratado de diferenciar la participación de las directivas y de los campesinos en actividades contrarrevolucionarias, de la situación de la membrecía de base y en general de los campesinos pobres y medios. Pero la propia Dirección Nacional del FSLN ha reconocido que se han cometido errores y abusos, confiscaciones injustificadas y presiones excesivas, que en algunos casos han retraído el apoyo de estos sectores al gobierno revolucionario (cf. *Barricada*, 5/12/83).

Existen dos formas fundamentales de organización cooperativa en el marco de la reforma agraria: las Cooperativas Agrícolas Sandinistas (CAS) y las Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS); ambas son el producto de un proceso previo de búsqueda y experimentación que conoció formas y resultados variados —colectivos de trabajo, cooperativas “de surco muerto”, etc. Actualmente dos tercios de las cooperativas son del tipo CCS, y un tercio del tipo CAS; aquellas socializan la recepción del crédito, la asistencia técnica y demás servicios, pero la propiedad de la tierra sigue siendo individual; las segundas en cambio constituyen una forma más avanzada de asociación, ya que la propiedad de la tierra es del colectivo.

El desarrollo desigual de uno y otro tipo responde en general al mayor o menor peso regional de las diferentes fracciones del campesinado. En la región del Pacífico, con mayor concentración de campesinos pobres, se halla el mayor número de CAS; mientras en el interior predominan las CCS, debido a la fuerte presencia de campesinos medios y ricos. En general las CAS constituyen organismos relativamente pequeños; se resienten todavía de cierta inestabilidad interna a causa

<sup>44</sup> Cf. por ejemplo *Barricada*, 3 de mayo y 3 de agosto, 1982.

de las dificultades iniciales de la organización colectiva del trabajo; su actividad productiva está orientada predominantemente hacia cultivos anuales. El 79 % de la tierra asignada al campesinado ha correspondido a las CAS. En contraste, las CCS son asociaciones de mayor número de miembros —entre 25 y 30 como promedio— debido a que su objetivo es la recepción de crédito y otros servicios, lo cual no implica mayores niveles de organización. Su orientación principal va hacia los cultivos anuales, aunque con un componente importante de cultivos permanentes y ganadería.

Desde mediados de 1983 un nuevo tipo de cooperativas empezó a ser desarrollado en algunas regiones del país: las Cooperativas de Producción y Defensa. En las regiones del norte más expuestas a los ataques del ejército de Honduras y a las incursiones de los ex guardias somocistas desde territorio hondureño, estas cooperativas tienen como doble objetivo garantizar la defensa de la zona y asegurar la continuidad de la producción. Muchos de sus integrantes son campesinos individuales que se han agrupado por necesidades de autodefensa; otros, milicianos que regresan a sus casas con la experiencia colectiva de la guerra, el agrupamiento en escuadras, la disciplina del entrenamiento. En uno y otro caso

seguir produciendo en forma individual era exponerse al secuestro, al asesinato, a la violación de su familia, a la destrucción de sus cosechas, siendo así que muchos campesinos comenzaron a desplazarse en grupo, a asentarse en grupo, a defenderse en grupo y a producir en grupo.<sup>45</sup>

Este tipo de cooperativa se está desarrollando sobre todo en las regiones I (departamentos de Nueva Segovia, Matriz y Estelí), VI (Matagalpa y Jinotega) y la Zona Especial III (norte del departamento de Zelaya). La reforma agraria entrega las tierras, la asistencia técnica, etc., y el EPS el armamento y demás pertrechos para la defensa. La naturaleza especial de estas cooperativas y las condiciones difíciles en que debe desenvolverse su actividad ha llevado a flexibilizar los criterios de adjudicación de tierras; una proporción alta de la superficie entregada consiste de tierras que previamente pertenecían al

<sup>45</sup> Cf. “El campesino frente a la agresión”, *Barricada*, 6 de junio de 1983.

APP y se encontraban en explotación en Unidades de Producción Estatal (UPE) es decir, fincas estatales.<sup>46</sup>

Por supuesto, una evaluación del funcionamiento de estas cooperativas es todavía prematura, pero su simple existencia pone de relieve la capacidad de la Revolución Sandinista para responder a los desafíos de las condiciones cambiantes en que debe desenvolverse. Por el momento, la síntesis de la experiencia queda a cargo de uno de sus beneficiarios:

Todos venimos de donde la tierra es una pesadilla, y hay que clavar clavos para meter la semilla en el surco; ahora tenemos estas tierras lindas... y también estos fusiles.<sup>47</sup>

La dotación de tierras al campesinado y los trabajadores sin tierra ha sido acompañada por una amplia distribución de crédito. Si se compara 1980 con 1978 el número de campesinos habilitados creció 327 %, con una superficie 440 % más extensa y un monto de crédito 739 % mayor (UNAG/ATC/CIERA 1982: 30). Las cooperativas han desempeñado un papel importante en esta ampliación del crédito; 70 % de los 57.000 nuevos clientes del Banco Nacional de Desarrollo es miembro de cooperativas. En 1978 la pequeña producción controlaba sólo 4 % del crédito agrícola total, y en 1981 participaba con 23 %. Sin embargo, algunos estudios del MIDINRA sugieren que los campesinos individuales han recibido más crédito que los cooperados, y que las CCS han recibido más que las CAS.

En el primer año de la revolución el crédito al campesinado se entregó a manos llenas y sin mayor atención a la capacidad productiva y de retorno del receptor; el criterio determinante fue la histórica demanda de financiamiento; la necesidad campesina, antes que la capacidad de gestión. El resultado fue que la producción experimentó un aumento menor que el del crédito. Una proporción alta de los agricultores destinó el dinero a la satisfacción inmediata de necesidades de consumo largamente sofocadas; otros, por falta de asesoramiento, o de condiciones empresariales mínimas, no estuvieron en condiciones de darle el destino original. Por otro lado, la disponibilidad de

dinero parece haber incidido fuertemente en la retracción del campesinado pobre en las cosechas de la agroexportación. Unida a otros elementos de presión sobre el mercado de trabajo, la disponibilidad de dinero significó para estos trabajadores semiproletarios contar por anticipado con el ingreso que en años anteriores debieron obtener como asalariados en los cortes de café y algodón, sobre todo. Esta parece haber sido una de las causas principales de la falta de mano de obra que se experimentó en la agroexportación el año agrícola 1980-81.

Estos factores llevaron a restringir el crédito en 1981, sobre todo el destinado al campesinado que produce individualmente; el crédito total redujo su monto respecto de 1980 en 27 %, pero el crédito rural (es decir, a pequeños agricultores) se restringió en 43 % (MIDINRA 1982b: 24). Al mismo tiempo se reforzó el estímulo a la incorporación a formas asociativas de producción, y se mejoró la supervisión del uso del crédito, por el sistema financiero. De todas maneras, esta verdadera inundación crediticia a productores que independientemente de su necesidad de financiamiento no estaban en condiciones de manejarlo adecuadamente —por su falta de experiencia, por la mala calidad de sus tierras, por la falta de tecnología productiva apropiada, por condiciones naturales o de mercado adversas, etc.—, creó problemas de endeudamiento serios en amplios sectores del campesinado, que determinaron que en 1983 se dispusiera el saneamiento de la deuda campesina y una condonación parcial de la misma. Alrededor de 40.000 campesinos se beneficiaron de esta decisión, por un monto de 266 millones de córdobas (u\$s 26.6 millones al cambio oficial), pero también aquí se dio mayor atención a la situación de los campesinos cooperativizados que a los productores individuales, y dentro de aquéllos, los asociados en CAS resultaron más beneficiados que los miembros de CCS.<sup>48</sup>

El proceso de desarrollo económico de la pequeña y mediana propiedad agraria ha ido de la mano con el impulso a su organización como clase. Originalmente el campesino estuvo incorporado a la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), la organización de los trabajadores agrícolas. Pero pronto la

<sup>46</sup> *Barricada*, 3 y 6 de junio, 1983.

<sup>47</sup> Declaraciones del presidente de una Cooperativa de Producción y Defensa a *Barricada*, 3 de junio de 1983.

<sup>48</sup> *Barricada*, 4 y 20 de julio de 1983; *El Nuevo Diario* 27 de julio de 1983; *La Prensa*, 29 de julio de 1983.



experiencia demostró que la convivencia de dos clases diferentes dentro de una misma organización era muy difícil dada la diversidad de intereses y perspectivas, por más que se tratara de dos fuerzas de la revolución. La conducción de la ATC expresaba fundamentalmente a su componente obrero; las demandas históricas del campesinado por tierra eran diferentes de las demandas obreras por salario; dentro de la reforma agraria, el proletariado agrícola estaba interesado fundamentalmente en la cuestión de las fincas estatales, mientras que los agricultores ponían más atención en la cuestión de las cooperativas y en el destino de la parcela individual.

Esta carencia inicial de una organización revolucionaria para el campesinado y la mediana producción agraria contrastaba con la existencia, en el campo de la burguesía, de UPANIC —el nucleamiento de la gran burguesía agraria creado por el COSEP a principios de 1979 para captarse el apoyo del campesinado—. Por lo menos como hipótesis, UPANIC aparecía en principio como mucho más próxima a las reivindicaciones del campesinado sobre la base de la unificación corporativa de grandes y pequeños productores en función de su común condición de *agricultores*, que una organización de obreros —aunque se tratara de obreros agrícolas—. Parece razonable pensar que el reconocimiento de la existencia de diferenciaciones estructurales dentro del campo popular, y la percepción de esa competencia entre el campo de la revolución y el campo de la burguesía *por los mismos sectores sociales* —una dimensión no siempre advertida de la unidad nacional— confluyeron para estimular la creación de una organización específica para los pequeños y medianos productores agropecuarios: la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG).

La UNAG se constituyó en abril de 1981 después de un amplio proceso de discusiones en numerosas asambleas en todos los departamentos del país; a partir de esta discusión juntamente con la creación de la organización se aprobó un *plan de lucha* que recogió y sistematizó las demandas del campesinado y la mediana producción rural: financiamiento, asistencia técnica, comercialización, caminos, servicios y abastecimiento, productividad del trabajo, participación en las instituciones estatales; curiosamente, *no se incluye la reivindicación de más tierra* (UNAG 1982: 3 y sigs.). Rápidamente UNAG se convertiría en una de las organizaciones populares más diná-

micas y de mayor capacidad de movilización en apoyo a la revolución.

La respuesta de la pequeña propiedad rural a los estímulos que le dirige la revolución ha sido una ampliación de su participación en la producción, por contraste con la apatía e incluso retracción de la mayoría de la gran burguesía agraria. En el cuadro IV.5 se muestra el elevado peso de esta fracción en la producción agropecuaria nacional, y su tendencia a aumentar incluso en tradicionales cultivos de exportación como algodón y café.<sup>10</sup>

En el cuadro IV.6 se advierte el crecimiento de la participación de la pequeña producción individual y cooperativa en el cultivo de algodón. Incluso en los años en que la superficie

Cuadro IV.5

Nicaragua: Participación de la pequeña propiedad en la producción agraria nacional (en %)

Rubro	Año agrícola	
	1980-81	1982-83
Maíz	87	84
Frijol	81	92
Sorgo industrial	12	12
Sorgo millón	77	77
Arroz	13	20
Hortalizas	90	95
Café	32	40
Algodón	9	15
Ajonjolí	64	80
Ganadería	69	69

Fuente: UNAG.

<sup>10</sup> Debe advertirse que las cifras del cuadro IV.5 difieren de las del cuadro II.14. Ello podría deberse a que los criterios para definir qué se entiende por *pequeña producción* en uno y otro caso, no son homogéneos, o bien significar que el aumento registrado en los años recientes es en realidad una tendencia hacia el retorno a niveles precedentes (hipótesis que no consideramos válida).



sembrada total se redujo, el campesinado más que triplicó en términos absolutos su superficie, en un comportamiento que contrasta nítidamente con la retracción creciente de la gran burguesía. Asimismo la pequeña producción ha puesto en evidencia en el período posterior a 1979 niveles de eficiencia productiva, en este cultivo, superiores a los de la gran propiedad.<sup>50</sup>

**Cuadro IV.6**  
**Nicaragua: Evolución del área sembrada de algodón**  
**por sector de propiedad, 1980/81 - 1983/84**

	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84
Miles de manzanas				
Pequeña producción individual y cooperativa	12.5	15.2	19.1	41.4
Grandes productores	99.4	92.1	77.2	77.6
APP	22.8	25.4	32.9	47.2
<i>Total</i>	<i>134.7</i>	<i>132.7</i>	<i>129.2</i>	<i>166.2</i>
Números índices (1980/81 = 100)				
Pequeña producción individual y cooperativa	100	122	153	331
Grandes productores	100	93	78	78
APP	100	111	144	207
<i>Total</i>	<i>100</i>	<i>98</i>	<i>96</i>	<i>123</i>
Estructura porcentual				
Pequeña producción individual y cooperativa	9	12	15	25
Grandes productores	74	69	60	47
APP	17	19	25	28
<i>Total</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

Fuente: MIDINRA, Banco Nacional de Desarrollo y elaboración propia.

<sup>50</sup> Cf. un análisis de los rendimientos en *Barricada*, 4 de mayo de 1982.

La integración de la pequeña y mediana propiedad rural a la etapa actual de la revolución no se reduce empero a la dimensión de la producción. El campesinado pequeño y medio ha demostrado una decidida incorporación a la defensa, a la educación popular de adultos, a las jornadas populares de salud, y en general a las tareas que reclaman su concurso. No sólo en el discurso político, sino en la materialidad irrefutable de los hechos cotidianos, el campesinado es sin duda alguna una de las fuerzas motrices, básicas, de la Revolución Sandinista.

El estímulo que ésta le brinda, el énfasis que pone en su desarrollo, plantean una aguda contraposición entre la propiedad privada de medios de producción basada en la explotación del trabajo ajeno, y la propiedad personal o asociativa basada en el trabajo del propio productor. Es ésta una contraposición engendrada por la realidad misma, pero que el procesamiento ideológico de ella por los grandes propietarios trata de opacar, para unir en un mismo rótulo a los pequeños productores directos y a la gran burguesía, y enfrentar a aquéllos, tras la conducción de ésta, a la revolución —manteniendo al mismo tiempo las relaciones de dominación que ejercen sobre ellos. A la inversa, la Revolución Sandinista enfatiza las contradicciones objetivas que existen en el interior de la propiedad privada de medios de producción y consolida la unidad de las clases fundamentales del campo popular. Como lo plantea la propia UNAG:

Entendemos la Unidad Nacional como la Unión de todos los productores de la riqueza del país que estén dispuestos a reconstruir nuestra Patria: (...) La Unidad con los trabajadores del campo y la ciudad, con los técnicos, los profesionales, los estudiantes, los pequeños y medianos comerciantes que trabajan por el desarrollo de nuestro país, unos levantando cosechas, otros fabricando herramientas, ropa, zapatos, en las fábricas o talleres, otros ayudando a mejorar nuestro nivel técnico, cultural y nuestras condiciones de vida, porque nos necesitamos los unos a los otros y porque todos hermanados haremos realidad la reconstrucción de nuestra Nicaragua.<sup>51</sup>

<sup>51</sup> Punto 2 de la Declaración de Principios aprobada por la Asamblea Nacional Constitutiva de los Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios de Nicaragua, Managua, 25-26 de abril de 1981.

El amplio y rápido avance de la organización campesina, su integración decidida a las tareas de la revolución, contrastan con la situación que se advierte en el ámbito de la pequeña propiedad urbana. Los esfuerzos de la revolución por dotar a este sector de principios de organización son aún modestos y se dirigen principalmente a la pequeña producción: artesanado, pequeña industria, producción domiciliaria. A través de incentivos crediticios, cambiarios, impositivos, se trata de inducir a estos productores a incorporarse a alguna forma de asociación: cooperativas de producción, cooperativas de trabajo, de servicios, etc. El avance ha sido lento, pero real. Hasta mayo 1983 existían unos 4.600 talleres organizados en 77 cooperativas de servicios y precooperativas, y 50 cooperativas de producción. Se han constituido asimismo 15 colectivos estatales de producción; en éstos, los medios de producción son propiedad social de todo el pueblo, administrados por el Estado, los trabajadores del colectivo y las organizaciones de masas.<sup>32</sup> El agravamiento de la crisis externa y la creciente escasez de divisas han afectado seriamente a buena parte de la pequeña producción, dependiente en gran medida de abastecimientos externos. La respuesta de la autoridad económica ha sido garantizar un mínimo de disponibilidad de divisas para las importaciones imprescindibles. Para una gran parte de la producción artesanal de calzado, vestido, muebles, sin embargo, la crisis ha planteado tensiones difíciles de superar.

El tratamiento del pequeño comercio se ha llevado a cabo de manera indirecta. A través de las organizaciones de masas —sobre todo los CDS y AMNLAE— se ha buscado garantizar el efectivo cumplimiento del control de precios y el abastecimiento adecuado de la población, complementado con la creación de una red de tiendas populares de abastecimiento a cargo del Ministerio de Comercio Interior. El objetivo de la presente etapa consiste fundamentalmente en supervisar la evolución del sector, neutralizar posibles efectos negativos sobre el abastecimiento y los ingresos populares, garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, eliminar el mercado negro de divisas. En este último aspecto, las nuevas disposiciones cambiarias vigentes desde mayo 1983 contemplan la entre-

ga de montos mensuales de divisas, al cambio oficial, al pequeño comercio de importación, en la medida en que éste actúe asimismo como comercio de exportación.

Medidas de estímulo a la organización cooperativa se han adoptado asimismo en el sector del transporte liviano, urbano e interurbano —pequeños transportistas de carga, propietarios de taxis, etcétera.

La revolución no se ha planteado la nacionalización de la pequeña producción y el pequeño comercio. La experiencia de otras revoluciones señala que una medida de este tipo es de una enorme complejidad; en el caso específico de Nicaragua, la fuerte dependencia del consumo popular hacia esos sectores, arriesgaría a tener que hacer frente a una profunda desarticulación del mercado urbano hasta que criterios superiores de producción y circulación fueran desarrollados (cf. Wheelock 1983: 101-102). Además, es evidente que el APP no se encuentra todavía en condiciones de ampliar sus actividades hacia este sector, más allá de lo avanzado hasta el momento en materia de comercialización —establecimiento de tiendas populares, nacionalización de los supermercados propiedad de allegados al somocismo.

<sup>32</sup> Cf. Ministerio de Bienestar Social (1981); decreto 382 del 9 de abril de 1980 (*La Gaceta*, 29 de abril de 1980); *Barricada*, 17 de octubre de 1983.

## CAPÍTULO V

### La clase obrera en la revolución popular

#### 1. Introducción

La unidad nacional que la Revolución Popular Sandinista reconoce como uno de sus principios básicos implica la conjugación de intereses contradictorios en función de la realización de tareas y la superación de contradicciones que aparecen como más urgentes: la reconstrucción de la economía (la cuestión del desarrollo), el logro de la autodeterminación soberana y la defensa ante las agresiones del imperialismo (la cuestión nacional). No es un proyecto neutro en términos de clase; la unidad nacional es cohesionada y conducida por un proyecto popular, que se enfrenta a un proyecto de hegemonía burguesa que propone modos distintos de tratamiento de las cuestiones que resultan prioritarias en la etapa actual.

La hegemonía popular en la unidad nacional significa que ésta se apoya fundamentalmente en las clases populares e impulsa en primer lugar los intereses y las demandas del campo popular. Sin embargo ya se ha visto que el *pueblo* no es algo homogéneo; engloba una diversidad de grupos, fracciones, sectores, unificados por la explotación y opresión y por su lucha contra el poder dictatorial. En el capítulo II se señaló el fuerte peso que tienen en la estructura social de Nicaragua los sectores de la pequeña producción y la pequeña propiedad, sobre todo en el ámbito urbano; el asalariado no es tan reduci-

do como a veces se ha pensado, pero de todos modos su magnitud contrasta con el peso de estos sectores populares no proletarizados. A su turno en el capítulo III se vio la capacidad del FSLN para sintetizar esa diversidad y potenciar su lucha contra el régimen somocista. Finalmente, en el capítulo IV se prestó atención al tratamiento que el campesinado y otros grupos de la pequeña propiedad reciben en la etapa actual de la Revolución Popular Sandinista, su incorporación a las tareas a las que ésta convoca, etcétera.

Ahora bien: ¿qué papel desempeña la clase obrera en este proceso? ¿Cómo conjuga sus fuerzas con las de los demás componentes del campo revolucionario? ¿Qué demandas plantea? ¿Cómo articula sus intereses en el marco de la unidad nacional? La clase obrera es considerada, junto con el campesinado, la fuerza motriz de la Revolución Popular Sandinista; sólo ella, junto a los campesinos, "llegará hasta el final": ¿qué significa esto en la etapa actual de la revolución, y en una sociedad donde el proceso de proletarianización de la fuerza de trabajo ha sido tan desigual y limitado?

Este capítulo trata de dar respuesta a estos interrogantes. En primer lugar se presta atención al crecimiento de la organización sindical luego del triunfo revolucionario: el aumento de la afiliación sindical, el crecimiento de la tasa de sindicalización, las formas organizativas predominantes. Después, se trata el papel de las organizaciones sindicales en la etapa actual de la revolución, las tareas que ellas asumen, y el desarrollo de contradicciones dentro del campo popular en torno a estas cuestiones; en particular se presta atención al modo en que las demandas reivindicativas se articulan a las posibilidades —y necesidades— de la reconstrucción.

Luego se analizan las experiencias de participación obrera en la gestión de las empresas, las estructuras que con tal efecto se han generado, las tensiones que se han originado tanto respecto de la burguesía como con relación a los técnicos y administradores del APP, los alcances y limitaciones experimentados hasta el momento. El apartado 5 enfoca la cuestión de la participación obrera en el marco de la lucha de clases dentro de la unidad nacional y el tipo de relación que toma cuerpo en estas condiciones entre el movimiento obrero y el Estado revolucionario. Finalmente el capítulo discute los alcances de la democratización de la economía que la participación obrera

promueve, ligándola al complejo problema de la disciplina laboral en un proceso de transformaciones revolucionarias, y su impacto sobre la productividad del trabajo.

## 2. Organización sindical...

Los rasgos estructurales de la economía nicaragüense se conjugaron con las características represivas de la dictadura somocista para dar paso a un movimiento sindical poco desarrollado, débil y de escasa magnitud (G. Gutiérrez, 1978, Guevara y Pérez Bermúdez, 1981; C. Rivas, 1983). De acuerdo a cifras del Ministerio del Trabajo, en julio de 1979 existían solamente 138 sindicatos, con un total de 27.020 trabajadores afiliados. Esto equivaldría a una tasa de sindicalización de alrededor de 11-12 % de la población asalariada, bastante más que el 6-7 % que se estima convencionalmente.<sup>1</sup> No obstante muchos de estos sindicatos tenían una existencia puramente formal, sin haber efectuado actividades por varios años.

Desde entonces el crecimiento de la sindicalización obrera ha sido muy rápido. Entre agosto de 1979 y diciembre de 1982 se registraron en el Ministerio del Trabajo casi 1.200 nuevos sindicatos, con alrededor de 90.000 trabajadores afiliados. La forma predominante de organización es el sindicato por empresa, con 72 % de los nuevos sindicatos y de los trabajadores afiliados.

La mitad de las nuevas organizaciones se encuentra en el sector agropecuario, y poco más de 20 % en el sector industrial, con porcentajes similares de los afiliados. En conjunto, dan cuenta de más de 2/3 de las nuevas organizaciones y de los trabajadores afiliados, pero la secuencia del movimiento de sindicalización no fue similar en uno y otro sector. El año y medio posterior al triunfo revolucionario fue claramente el pe-

<sup>1</sup> La estimación de 6 % corresponde a *Barricada*, 16 de marzo de 1980; la cifra es reproducida sin cuestionamiento por Pérez-Stable (1982). La estimación de 7 % fue hecha al autor en una entrevista con Ronald Membreño, del Ejecutivo Nacional de la CST el 12 de mayo de 1981. El texto que sigue se basa en cifras publicadas por la Oficina de Estadística e Informática Sociolaboral del Ministerio del Trabajo.



riodo de la sindicalización industrial, con casi 40 % de las nuevas organizaciones y de los trabajadores frente a sólo 8.5 % y 11.4 % de sindicatos y trabajadores en el sector agropecuario. Al contrario, en 1981 el 79 % de los nuevos sindicatos y 73 % de los trabajadores correspondió a este sector —y sólo 6 % y 10 % respectivamente a la industria. El mayor peso de la sindicalización rural estaría expresando el déficit organizativo de este sector antes del triunfo de la revolución, y el impacto reforzador de la tendencia a la organización sindical generado por las intensas movilizaciones de trabajadores agrícolas contra la descapitalización, y de la legislación agraria —ley de reforma agraria, creación de las empresas de la reforma agraria, etc.— sancionada en el curso de ese año.

El predominio del sindicato por empresa tendió a acentuarse durante todo el período posterior a 1979, llegando en 1982 a representar 80 % de los sindicatos y 70 % de los trabajadores, frente a 59 % y 64 % respectivamente entre agosto de 1979 y diciembre de 1980. Esta evolución se complementa con la reducción del tamaño medio del sindicato, que disminuye 33 % entre 1979 y 1982: de 87 trabajadores promedio por sindicato, a 58 trabajadores promedio. El cuadro V.1 muestra que se trata de una reducción que abarca al conjunto de nuevos sindicatos, independientemente del tipo de organización que adopten.

Cuadro V.1

Tamaño medio de los sindicatos nuevos  
(Trabajadores por sindicato)

Período	Tipo de sindicato				Gremial
	Total	Empresa	Varias empresas	Oficios varios	
Agosto 1979 a diciembre					
1980	87	94	84	60	76
1981	70	69	88	39	45
1982	58	62	38	*	43

\* En este año no se registró ningún nuevo sindicato de este tipo.  
Fuente: Elaboración propia de cifras del Ministerio del Trabajo.

El auge de la sindicalización obrera ha sido acompañado así de una marcada reducción del tamaño de las nuevas organizaciones. Esta disminución se ha experimentado sobre todo en los sectores agropecuario y de la construcción. En el primero el tamaño medio de los sindicatos nuevos se redujo en casi 62 % entre 1979 y 1982 (de un promedio de 117 trabajadores por organización a un promedio de 45), y en la construcción en 18 % (de 92 a 75 trabajadores), mientras en la industria tuvo lugar un aumento acumulado de 19 % (de 87 obreros promedio en 1979-80 a 116 en 1981 y 100 en 1982).

No existen elementos suficientes para explicar esta evolución. Una hipótesis en tal sentido podría ser que la reducción del tamaño medio de las organizaciones a medida que la sindicalización avanza refleja la incorporación a dicho proceso de unidades económicas de tamaño sucesivamente menor. Las movilizaciones y presiones por la constitución de sindicatos empiezan primero en empresas de mayor concentración obrera, para irradiarse posteriormente hacia empresas de tamaño menor. Es evidente sin embargo que la hipótesis es válida para la situación del sector agropecuario pero no explica el proceso inverso en el sector manufacturero, y en todo caso valdría para un solo tipo de organización —el sindicato por empresa. Sea como fuere, las principales centrales sindicales y el FSLN han venido impulsando desde 1981 la creación de sindicatos por rama de actividad, con el fin de revertir esta tendencia a un crecimiento de la afiliación sindical al mismo tiempo que a una atomización organizativa, y apuntando a la constitución de una central sindical única.<sup>2</sup> Esta contratendencia se encuentra particularmente avanzada en la agroindustria del azúcar y en la del aceite, en la producción avícola, en la industria textil y en la de productos farmacéuticos, y ha producido su primer resultado exitoso en la industria de la construcción.

Casi 90 % de los nuevos sindicatos y de los trabajadores respectivos está afiliado a la Central Sandinista de Trabajadores (CST) y a la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC),

<sup>2</sup> "Discutiremos en esta II Asamblea sobre los sindicatos por ramas como paso previo en la lucha por la Central Única. También prevemos poder avanzar en la unidad ganando a todos los sectores para la Central Única de Trabajadores, y derrotando las corrientes pro-burguesas". Documento base de la II Asamblea por la Unidad de los Trabajadores (Managua, 4-5 julio 1981), punto 3.7.

ambas de filiación sandinista. La participación de una y otra refleja el movimiento intersectorial del proceso de sindicalización en la etapa posterior a 1979. En 1979-80 el 75 % de las nuevas organizaciones estaba afiliado a la CST, coincidiendo con el auge de la sindicalización urbano-industrial. En cambio en 1981 y 1982 —años de rápido crecimiento de la sindicalización rural— 76 % y 72 % respectivamente estaban afiliados a la ATC, y sólo 17 % y 20 % a la CST en uno y otro año.

Solamente 14 % de los nuevos sindicatos y de la respectiva fuerza de trabajo se halla afiliada a las restantes centrales sindicales.<sup>3</sup> Esta situación testimonia el carácter *político* del proceso de desarrollo del sindicalismo obrero, en cuanto el espacio para dicho desarrollo aparece claramente como un producto del proceso revolucionario mismo.

Por el momento no es posible determinar con exactitud el impacto de este rápido proceso de ampliación de la organización de los trabajadores sobre la tasa de sindicalización. Los registros de las centrales sindicales y de los propios sindicatos difieren frecuentemente de la información que posee el Ministerio del Trabajo;<sup>4</sup> por su parte las estimaciones del volumen de trabajadores asalariados varían grandemente según las fuentes y los criterios metodológicos empleados. Sin desconocer la velocidad y la masividad del proceso de sindicalización obrera que se ha desenvuelto en los últimos cuatro años, es innegable sin embargo que las cifras que se manejan corrientemente se encuentran sobredimensionadas y no tienen una fuente estadística confiable.

Según Pérez-Stable (1982)

Hacia julio de 1980, de un total de 457 sindicatos urbanos, 369 estaban afiliados a la CST. Esto significaba que más de

<sup>3</sup> Estas son: Central General del Trabajo (independiente) (CGTI), creada en 1963 y ligada al PSN; Central de Acción y Unidad Sindical (CAUS), formada en 1973 y vinculada al PC de N; Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN), socialcristiana, creada en 1972 (aunque desde 1962 existía su antecedente, el Movimiento Sindical Autónomo de Nicaragua —MOSAN); Confederación de Unificación Sindical (CUS) creada en 1972; Frente Obrero (vinculado al Movimiento de Acción Popular —MAP).

<sup>4</sup> Por ejemplo, de acuerdo al Ministerio del Trabajo la CTN cuenta con 40 sindicatos y 3.511 afiliados (junio 1982); pero de acuerdo a los directivos de la central, la afiliación llegaría a 65.000 trabajadores. En la actualidad la CTN contaría con sólo 19 organizaciones. *Barricada*, 6 de junio de 1983.

200.000 trabajadores urbanos pertenecían a sindicatos sandinistas.

Más de 300.000 trabajadores urbanos y rurales pertenecían a sindicatos sandinistas.

De ser ciertas, estas cifras significarían una tasa de sindicalización urbana de 74 %, de 77 % para la PEA asalariada rural (*a pesar de que fue recién en 1981 que adquirió verdadera significación la sindicalización en el campo*), y de 75 % para la PEA asalariada total. Y ello, tomando en consideración únicamente los sindicatos sandinistas.

De acuerdo a informaciones periodísticas, la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) contaba a mediados de 1981 con 100.000 afiliados,<sup>5</sup> pero recientemente la cifra más razonable sería alrededor de 43.000.<sup>6</sup> Esta no cubre sin embargo a la totalidad de los trabajadores rurales, ya que en la agroindustria del azúcar, por ejemplo, los obreros agrícolas están afiliados en el mismo sindicato que los trabajadores del ingenio respectivo.<sup>7</sup>

Las cifras tan elevadas de las estimaciones usuales contrastan con el panorama que surge de los registros del Ministerio del Trabajo. Sumando a los 27.020 trabajadores pertenecientes a los sindicatos existentes antes del 19 de julio de 1979, los 89.016 afiliados a los sindicatos inscritos con posterioridad, se alcanza un total de 116.036 trabajadores sindicalizados, equivalente a 30-35 % de la PEA asalariada total. Es posible sin embargo que a su turno esta cifra dé una visión que subestima la realidad. Los cómputos del Ministerio del Trabajo, por razones de índole legal, solamente consideran *sindicato* a la organización que ha dado cumplimiento a todos los requisitos estipulados por la legislación respectiva; dejan de lado por lo tanto las expresiones organizativas que por motivos diversos —tramitaciones pendientes, transcurso de los plazos legales, etc.— aún no han alcanzado ese nivel, pero que de todos modos reflejan la voluntad organizativa de los trabajadores. Por otra parte, los sindicatos no informan al Ministerio las modificacio-

<sup>5</sup> *El Nuevo Diario*, 20 de junio de 1981.

<sup>6</sup> Entrevista del autor con Denis Chavarría, del Ejecutivo Nacional de la ATC el 20 de setiembre de 1983.

<sup>7</sup> En conjunto la industria azucarera ocupa alrededor de 18.000 trabajadores. Los sindicatos respectivos están afiliados actualmente a la CST, luego de fuertes luchas con la CTN, CAUS y el Frente Obrero.

nes que ocurren en su volumen de afiliación, circunstancia que impide efectuar un seguimiento preciso de la magnitud efectiva de las organizaciones.

Tomando en cuenta todas estas circunstancias, nuestras propias investigaciones nos permiten estimar la cifra global de afiliación sindical, a mediados de 1983, en 145.000 trabajadores, equivalente a 41-43 % de la PEA asalariada total.

Pero es evidente que, independientemente de la cifra exacta que en definitiva se determine, en los últimos cuatro años la organización sindical ha adquirido una magnitud y un impulso sin parangón en la historia de la clase obrera nicaragüense. El eco que las movilizaciones en tal sentido han alcanzado en el Estado revolucionario y en el FSLN, y el impulso que éstos han acordado a aquéllas, constituyen el factor determinante para este crecimiento vertiginoso en una economía tan atrasada y tan desigualmente desarrollada como la de Nicaragua.

### 3. ...de nuevo tipo

La etapa que se abrió el 19 de julio de 1979 no sólo se caracteriza por el crecimiento cuantitativo de las organizaciones sindicales, sino asimismo por un cambio marcado en la concepción del sindicato y de las tareas que éste debe desempeñar en el proceso revolucionario. Este cambio en el enfoque político del sindicato —*político* en el sentido que lo enfoca desde la perspectiva de la constitución de un nuevo orden social— tuvo lugar en medio de intensas luchas dentro del movimiento obrero y del campo revolucionario, y forman parte del proceso de consolidación de la hegemonía sandinista en ese terreno.

En la óptica del FSLN el sindicato no es concebido únicamente como una organización reivindicativa, sino que articula esta actividad con el avance del proceso revolucionario en todos los frentes, y entrena a los trabajadores en formas progresivamente más complejas de participación.<sup>8</sup> En particular el

<sup>8</sup> Existe al respecto una constante a lo largo de los últimos cuatro años. Cf. por ejemplo el documento de la Comisión Intersindical publicado en *Barricada*, 14 de abril de 1980; Comandante de la Revolución Luis Carrión (1981); las declaraciones del Comandante de la Revolución Víctor Tirado en *Barricada*, 21 de setiembre de 1983.

FSLN demandaba al movimiento sindical, inmediatamente después del derrocamiento de la dictadura, una activa contribución en la recuperación económica del país. En la perspectiva del Frente esto implicaba tanto una atenta vigilancia del comportamiento empresarial de la burguesía, sus técnicos y administradores, como el fortalecimiento de la *disciplina laboral* y la subordinación de las demandas salariales al desenvolvimiento de la reconstrucción.

Este enfoque de las cosas chocó con las grandes expectativas de rápidas mejoras salariales que la gente se había hecho y creó cierta desorientación inicial. El FSLN planteaba que el estado de la economía tras la guerra, la desarticulación y destrucción del aparato productivo, no permitían satisfacer de manera inmediata y total las aspiraciones salariales y laborales de los trabajadores, con medidas de tipo monetario. La producción había caído agudamente, los mecanismos de circulación estaban fracturados, y en estas condiciones una rápida ampliación de la masa salarial reforzaría el proceso inflacionario, de por sí muy elevado por efecto del conflicto.<sup>9</sup> Es posible que en la mente de muchos revolucionarios nicaragüenses estuviera presente el trágico final de la Unidad Popular chilena, donde un proceso inflacionario incontrolable, combinado con la recesión productiva, abonó el deterioro de gobierno popular y apresuró su caída.

La política económica impulsada por el Estado revolucionario tendió a responder a las demandas populares por la vía de los subsidios al consumo y de la expansión de los servicios sociales —lo que en esta época se denominó *salario social*— más que por el incremento del salario monetario (MIPLAN 1980). Esta estrategia generó algunos conflictos dentro del movimiento obrero y en el terreno político general. En el fondo, el modo en que la contradicción entre reivindicacionismo y reconstrucción económica se expresaba era una forma de manifestarse, dentro del campo revolucionario, la contradicción clase/nación, y el modo en que ésta era procesada por las fuerzas en juego reflejaba su posición respecto de la etapa presente de la revolución. Desde la perspectiva sandinista el reivindicacionismo por encima de ciertos niveles mínimos atentaba con-

<sup>9</sup> En 1979 el PIB se redujo en casi 25 % respecto del año anterior, y el índice de precios al consumidor creció 70.3 %.



tra la capacidad de acumulación de la economía y la recuperación de las inversiones, creaba inseguridad en los grupos de la burguesía incorporados al proceso y obstaculizaba la creación de las bases materiales del proyecto popular. Desde una perspectiva diferente, el énfasis en las demandas reivindicativas era enfocado como una manera de expresarse el poder obrero en esa etapa, orientando parte del excedente hacia la clase trabajadora, sin mayores dilaciones.

Este encadenamiento y explicitación de cuestiones y niveles se vio fortalecido por la estrecha vinculación existente entre las organizaciones sindicales y las fuerzas políticas. El fuerte énfasis de organizaciones como la CAUS y el Frente Obrero en las cuestiones reivindicativas inmediatas obedecía tanto a una política de rápida captación de bases obreras, como a su caracterización de la etapa recién abierta. Ambas organizaciones reconocían al FSLN su condición de vanguardia de la lucha antidictatorial, pero le negaban el carácter de vanguardia de la clase obrera y de las transformaciones revolucionarias. Al contrario, insistían en las vinculaciones de algunos sectores del FSLN con fracciones de la burguesía, e interpretaban la presencia inicial de algunos elementos de la burguesía en el Gobierno de Reconstrucción como una prueba del carácter burgués del mismo. En consecuencia, las demandas sandinistas de morigerar los planteos reivindicativos no podían tener otro efecto que consolidar las ganancias del capital y la presencia política de la burguesía; en cuanto al sector público, la situación era la misma: el Estado se comportaba como un nuevo patrón, y por lo tanto no tenía sentido hacer diferencia entre el APP y el sector privado. Lo que para el FSLN era "reconstrucción nacional" se interpretaba por la CAUS, el Frente Obrero, el Partido Comunista y el Movimiento de Acción Popular, como promoción de los intereses de clase de la burguesía; la disciplina laboral era visualizada como incremento de la explotación de los trabajadores. La respuesta de estas organizaciones a la línea del FSLN combinó fuertes ataques a la CST y la ATC por lo que consideraban falta de combatividad y traición de sus bases, con planteos reivindicativos extremos (Villagra 1980; M. Ortega 1983).<sup>10</sup>

<sup>10</sup> En el caso de la CAUS, algunas demandas llegaron a exigir 100 % de aumento salarial.

En el caso de la CTN y la CUS, la promoción de este reivindicacionismo extremo era simplemente la continuación de una línea de trabajo gremial que reduce la función del sindicato al logro de intereses categoriales, aunque confluía con la estrategia del FO y la CAUS en el sentido de minar las bases obreras que el FSLN había construido al calor de la lucha revolucionaria —una lucha en la cual aquéllas y éstas habían participado de manera secundaria y más bien hacia el final. En este proceso de agudización de las contradicciones en el campo popular, la CGTi aparecía asumiendo una posición menos beligerante respecto de la línea del FSLN; sin perjuicio de posiciones divergentes respecto de cuestiones específicas, definió una aproximación a la CST, con quien constituyó un organismo de coordinación —la Comisión Nacional Intersindical (CNI).

De esta manera los meses finales de 1979 y el comienzo de 1980 presenciaron una elevación de las tensiones políticas en el movimiento obrero. Paros, tomas de establecimientos fabriles y de fincas, movilizaciones, huelgas, expresaban estas luchas por el control político de las organizaciones sindicales, en el contexto de un rápido crecimiento de éstas. En estas condiciones, cada participante puso en tensión todas sus fuerzas y empleó todos sus recursos: el FSLN en consecuencia empleó su prestigio conquistado en la lucha contra la dictadura, su amplio arraigo en las masas, y también el poder del Estado revolucionario.

De hecho, en estos momentos iniciales de esta etapa la posición del FSLN aparecía desde el punto de vista orgánico, menos consolidada en el terreno proletario que la de otras organizaciones con menor participación en la guerra de liberación. El trabajo político del FSLN en la clase obrera se había emprendido más tardíamente que en el campesinado, el estudiantado, las masas pobres de las ciudades y presentaba desniveles con los avances alcanzados en estos sectores. En los primeros meses posteriores al triunfo revolucionario la presencia política sandinista en el movimiento obrero tenía lugar fundamentalmente en los trabajadores agrícolas de la agroexportación, y era menos sólida en la economía urbana. Aquí, la posición del Frente parece haberse consolidado a partir de la incorporación a sus filas de la fracción que se escindió del PSN en 1977 para incorporarse a la lucha revolucionaria. Esta fu-



sión, que tuvo lugar pocos meses después del triunfo, aportó a la CST un grupo de dirigentes sindicales experimentados, y las bases respectivas.

El FSLN combinó, en el desarrollo de estas contradicciones, la lucha ideológica con el efecto de la política económica y el recurso al aparato estatal. Esto le permitió ganarse progresivamente las bases de aquellas organizaciones y no pocos de sus cuadros, al mismo tiempo que neutralizar o desarticular sus grupos dirigentes. Cuando a principios de 1980 las contradicciones se hicieron insalvables, el encarcelamiento temporal de líderes del Frente Obrero y del PC de N., la clausura del diario *Pueblo* (del Frente Obrero) y del periódico comunista *Avance*, se llevaron a cabo juntamente con la ampliación del espacio de la CST en las bases obreras de aquellas organizaciones.

Este proceso estaba estrechamente ligado al desarrollo de las contradicciones entre el FSLN y la burguesía que había logrado incorporarse a esta etapa, y de cuyo comportamiento inversionista se esperaba un fuerte impulso a la reactivación económica. A fines de diciembre de 1979 los miembros de este sector que desempeñaban cargos altos en el Gobierno Revolucionario fueron desplazados en aras de una mayor cohesión sandinista del Estado revolucionario. Sólo el ingeniero Robelo mantuvo temporalmente su posición en la JGRN (además de la Sra. Chamorro), y el Frente actuó para aislarlo de la burguesía y neutralizar las presiones provenientes de Washington. En esta estrategia, el mantenimiento de las reivindicaciones obreras dentro de ciertos límites, el fortalecimiento de la disciplina laboral, etc., constituían elementos esenciales para no alarmar excesivamente a los empresarios privados.

La óptica del FSLN hacia la cuestión obrera aparece así como la resultante de la relación de fuerzas entre la Revolución y la burguesía, de las limitaciones impuestas por el aparato productivo, y de las tensiones que surgían del ámbito internacional, todo ello en el marco de un proceso que define a la alianza obrero-campesina como su base fundamental y apunta hacia profundas transformaciones sociales.

El enfoque de la cuestión por el FSLN implicaba plantear que, en la etapa abierta con el triunfo revolucionario, el *poder popular* ya no se reducía al *poder sindical*, sino que abarcaba todos los ámbitos de la construcción revolucionaria y, en parti-

cular, del Estado revolucionario. La autonomía reivindicativa de las organizaciones sindicales está subordinada por lo tanto a los intereses estratégicos del proyecto revolucionario global. Pero ello no implica negar la legitimidad del activismo sindical ni de las reivindicaciones que, dentro de aquel enmarcamiento, se promueven. Representativos de la posición del FSLN sobre este tema en esta época, son el documento presentado por la Comisión Nacional Intersindical en la Asamblea por la Unidad Sindical el 13 de abril de 1980, y el discurso del Comandante de la Revolución Carlos Núñez el día 20 del mismo mes.

El documento de la CNI plantea que los sindicatos deben enmarcarse dentro de dos líneas generales de la Revolución Popular Sandinista:

- a) Trabajar arduamente por lograr que esta Revolución se solidifique, se consolide, sienta sus bases, se establezca y estar dispuestos en todo momento a defender la Revolución desde el punto de vista político, económico o militar;
- b) Ponerse a la cabeza de las demandas más sentidas de los trabajadores, hacerlas suyas, canalizarlas y esforzarse para que esas demandas sean resueltas y se materialicen en hechos prácticos por la Revolución (CNI 1980).

Estos planteamientos de la Comisión expresan la necesidad de alcanzar un punto de equilibrio —no exento empero de contradicciones— entre las demandas categoriales inmediatas y el proyecto político de largo alcance.

En general los trabajadores aceptaron las restricciones iniciales que emergían de la precaria situación de la economía. El caso del sindicato "Armando Jiménez" del complejo lácteo La Perfecta es ilustrativo de una realidad más amplia. Para contribuir a la recuperación de la empresa, los trabajadores decidieron percibir durante cierto tiempo medio salario; durante ese mismo lapso los vendedores dejaron de percibir las comisiones respectivas; se impulsaron jornadas de trabajo voluntario; abstención de reclamar mejores condiciones laborales, se promovieron gestiones ante organismos estatales para conseguir materiales de producción y financiamiento.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> *Barricada*, 2 de julio de 1981.

En algunos casos este énfasis en la recuperación económica de las empresas —no sólo del APP sino también privadas— llevó a algunas organizaciones sindicales sandinistas a descuidar la labor reivindicativa y a generar un espacio que fue aprovechado por las centrales sindicales que competían con la CST por la conducción del movimiento obrero. Al mismo tiempo el sacrificio de los obreros contrastaba con la actitud de muchos empresarios, que no hacían esfuerzo alguno por reiniciar el proceso productivo, al mismo tiempo que rechazaban las peticiones reivindicativas en nombre de la mala situación económica general.

El discurso del Comandante Núñez apunta a estos aspectos de la cuestión, al resaltar la legitimidad de los planteamientos reivindicativos:

Nosotros queríamos generar la conciencia dentro de las organizaciones de masas, que si bien era cierto, debíamos de trabajar porque el proyecto político revolucionario se preservara, debían de ser también instrumentos que fueran capaces de expresar con autonomía las demandas de los sectores sociales que representaban, así tuvieran que recurrir desde los medios más usuales hasta los medios más inusuales (C. Núñez 1980c: 16).

Al mismo tiempo critica a quienes pretendían postergar para un futuro incierto la satisfacción de las demandas populares:

...no era suficiente ni fácil decir que el país quedó en ruinas; efectivamente, no implementaba una línea a nivel de este Estado que recién estaba naciendo, que permitiera tomar en cuenta y recibir los reclamos, las críticas, las exigencias o las demandas de las masas (id. loc. cit.).

La Dirección Nacional del FSLN plantea así la existencia de una autonomía relativa entre el Estado y las organizaciones de masas:

...¿deben las organizaciones de masas recurrir a su propia fuerza, expresión y movilización, cuando sus peticiones no son escuchadas, cuando las puertas se cierran por todos lados, sin encontrar respuesta en ninguna parte? Nosotros creemos que sí (id., 18).

...las organizaciones de masas deben recoger y hacer suyas las demandas de sus miembros, de sus sectores sociales, y luchar por que éstas se materialicen a través de los mecanismos nuevos que la Revolución ha instituido. Pero cuando estas vías se cierran, cuando se golpea y nadie oye, cuando se recurre y son infuncionales, ya bien sea por el burocratismo, ya bien sea por métodos liberales, ya bien sea porque no se toman en cuenta los problemas de las masas, etc., nuestras organizaciones deben pasar a otras formas de persuasión política.

Significa que las organizaciones de masas, enmarcándose en la línea general de la Revolución, tienen el derecho suficiente de recurrir cuando estos organismos se cierran, desde la crítica interna, la crítica pública, la utilización de todos los medios de comunicación hasta la movilización para exigir las medidas necesarias capaces de garantizar que sus planteamientos sean escuchados (id., 21).

El plan de lucha impulsado por la CST en febrero de 1980 puede ser considerado una ejemplificación práctica de la lucha sindical enmarcada en esta política. Los puntos básicos de dicho plan contemplan el aumento del salario mínimo para los trabajadores con remuneraciones más bajas; la revisión de la tabla salarial; la reforma del Código de Trabajo (sancionado en tiempos de Somoza García); mejora del salario social; impulso a la participación de los trabajadores en la gestión administrativa de las empresas, a través de los Consejos de Producción. Asimismo, la CST promovió la creación de comités de salud ocupacional que vigilaran las condiciones de trabajo y seguridad en las empresas, y la sistemática denuncia de los propietarios y administradores que incurrieran en prácticas de descapitalización o de alguna manera no contribuyeran a la recuperación del aparato productivo o a la normalización de los canales de distribución y abastecimiento.

Sin embargo se advertía fácilmente que para muchas dirigencias sindicales afiliadas a la CST la reivindicación de la autonomía de las organizaciones de masas planteada por el FSLN resultaba una cuestión difícil y ponía a sus organizaciones en inferioridad de condiciones frente a las otras centrales. El Frente asimismo enfrentó tempranamente algunas tendencias al burocratismo que se detectaron en algunos aspectos de la práctica de ciertas dirigencias sindicales. En un documento autocrítico difundido a través del periódico *Barricada* (5 de

octubre de 1980) se advertía que la falta de cuadros con experiencia suficiente en el trabajo sindical corría el riesgo de separar a las dirigencias de sus bases; otras veces los dirigentes, en caso de un conflicto laboral, no daban un adecuado respaldo,

creándose de esta forma las condiciones para que otras centrales capitalicen las reivindicaciones justas de los trabajadores.

En el APP esta situación fue más conflictiva que en el sector privado. El impulso a la organización sindical se conjugaba en aquella con la desaparición del viejo patrón y su reemplazo por administradores que se presentaban como la representación del Estado popular. Las expectativas de solución inmediata de los problemas laborales fueron por lo tanto más fuertes. La investigación del CIERA sobre la minería en el departamento de Zelaya es ilustrativa al respecto. Después de declarada la nacionalización de las minas y de su explotación se creó una corporación encargada de la administración de la actividad (CONDEMINAH); la inexperiencia de sus funcionarios y de los dirigentes sindicales, la falta de claridad acerca del papel del sindicato en la nueva situación, la adopción de decisiones sin consulta previa con las bases, la reducida representación de los trabajadores con menor salario en la directiva del sindicato, crearon desorientación en la mayoría de los trabajadores, retracción respecto del sindicato, apatía, frustración (CIERA 1981: 200-208).

Hacia fines de 1980 el FSLN comienza a poner énfasis en la necesidad de que las reivindicaciones sindicales se impulsen sin que ello implique la interrupción del proceso productivo, o en todo caso dando a los paros y huelgas el carácter de medida de último recurso:

... los conflictos laborales deben resolverse sin paralizar la producción, porque es evidente que ahora las huelgas no sólo dañan a la economía en general, sino también a los trabajadores en particular. Alrededor de estos puntos debemos hacer una aclaración: las restricciones salariales y los derechos a huelga deben verse como medidas adoptadas libre, voluntaria, conscientemente por los propios trabajadores debido a la situación

que vive el país. Se trata de defender la economía asumiendo conscientemente los sacrificios y los esfuerzos que ello implica.<sup>12</sup>

Se trata de una limitación respecto de la posición planteada en abril de ese mismo año, aunque todavía se apela a la persuasión y a la receptividad de las masas respecto de las orientaciones de política. Esta reorientación tuvo lugar en el contexto de un proceso de aproximación de las distintas centrales sindicales, orientado hacia la unidad del movimiento obrero. Para entonces era evidente para el FSLN que las organizaciones representativas de la gran burguesía, y particularmente el COSEP, habían pasado a la oposición abierta:

El COSEP se está convirtiendo cada vez más en una camarilla de elementos que le quieren provocar problemas al proceso revolucionario y a la Unidad Nacional, que se han convertido prácticamente en una camarilla de politiqueros que están tratando, en todo caso, de provocar situaciones, haciéndonos ver a nosotros que representan a todo el sector privado, y queremos decirles que nosotros hemos estado en comunicación con el sector privado. Con el pequeño, con el mediano, e inclusive, con el grande, y tal vez, hasta con los más grandes, y no hemos podido encontrar en ninguna de estas conversaciones, que han sido muchas, una actitud tan imprudente, una actitud verdaderamente tan irreflexiva e irresponsable como la que están teniendo estos señores del COSEP.<sup>13</sup>

Es evidente que, como se señaló en el capítulo IV, el triunfo electoral de Ronald Reagan estimuló a algunos elementos de la burguesía a involucrarse en actividades contrarrevolucionarias abiertas. Al mismo tiempo que trataba de generar fisuras y promover diferenciaciones políticas en el seno de esa clase, el FSLN impulsaba el proceso de unidad del movimiento obrero. De este proceso habría de emerger la Coordinadora Sindical de Nicaragua (CSN), integrada por la CST y la ATC juntamente con la CAUS, CGTi, FO, CUS, Federación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD), la Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN) y ANDEN, el sindicato de maestros. Sola-

<sup>12</sup> Discurso del Comandante Víctor Tirado en la inauguración de la I Asamblea por la Unidad de los Trabajadores. Managua, 15 de noviembre de 1980.

<sup>13</sup> Discurso del Comandante Jaime Wheelock el 19 de noviembre de 1980 en la Plaza de la Revolución: *Barricada*, 20 de noviembre de 1980.

mente la CTN, ligada al Partido Socialcristiano, quedó —por decisión propia— fuera de la Coordinadora, aunque poco después la CUS saldría de ella.<sup>14</sup>

La CSN representó así el primer fruto de un movimiento de amplia concertación sindical en torno a una perspectiva clasista. En punto a la relación entre reivindicación y reconstrucción, la plataforma de la Coordinadora adoptó explícitamente la línea del FSLN:

Todo conflicto o problema laboral debe procurar, en primer lugar, resolverse sin recurrir al paro laboral. Esto no quiere decir, ni mucho menos, la renuncia al derecho de huelga, sino lo que queremos es afirmar que la huelga debe ser el último recurso para los trabajadores; que deben agotarse todas las instancias para llegar a ella, ya que todo paro menoscaba la producción y entorpece el cumplimiento de los planes y programas del Gobierno de Reconstrucción Nacional y el proyecto estratégico de nuestra Revolución Popular Sandinista.<sup>15</sup>

El Plan de Lucha de la CSN, del cual lo anterior forma parte, fue un intento considerablemente elaborado de conjugar las posiciones de las centrales sindicales minoritarias con la estrategia del FSLN. Sus objetivos incluían el apoyo, fortalecimiento y defensa de la revolución; el aumento de la producción y la productividad y el cumplimiento de las metas de la reconstrucción nacional; el impulso a una mayor participación de los trabajadores en las Milicias Populares Sandinistas; elaboración de una nueva escala salarial "acorde con la situación económica del país"; elevación del salario real; mejorar las condiciones generales de trabajo y en especial en materia de higiene y seguridad ocupacional; oponerse a "las posiciones no consecuentes" de aumentos salariales indiscriminados que son "obstáculos para el proceso de la reconstrucción económica del país"; reforma del Código del Trabajo; lucha contra el burocratismo, los abusos de poder, negligencia y despilfarro en las empresas del APP; evitar la fuga de capitales y el daño en la producción de las empresas privadas; estimular las iniciativas de los trabajadores; organizar el trabajo voluntario; elevar la educación política y la formación técnica de los trabajadores;

<sup>14</sup> *Barricada*, 3 de diciembre de 1980.

<sup>15</sup> *Los Trabajadores*, 16 de julio de 1981.

fortalecer la disciplina laboral tanto en el APP como en el sector privado, promover la promulgación de una reforma agraria "democrática, antifeudal, antioligárquica y antiimperialista".

La hegemonía sandinista en el terreno sindical y, en general, en el campo revolucionario, se expresó en la conducción del conjunto del movimiento obrero y de las luchas sindicales por la CST y la ATC. El período que se inicia a fines de 1980 está signado por intensas movilizaciones de masas contra los partidos opositores y, sobre todo, contra las maniobras de descapitalización, vaciamiento de empresas y similares, impulsadas sobre todo por la ATC y la CST. La constitución de la CSN implica en este sentido tanto un paso importante en el proceso de unificación del movimiento obrero como el reconocimiento explícito de la conducción que ejercen en ese proceso las organizaciones sindicales sandinistas.

El Plan de Lucha de la CSN mantiene, de alguna manera, la existencia de una cierta autonomía reivindicativa de las organizaciones obreras, y aunque relega la huelga y otras medidas de acción directa al papel de últimos recursos de las reivindicaciones, reconoce explícitamente, en tales condiciones, la legitimidad de las mismas. Sin embargo el desarrollo de la crisis económica, agravada por la retracción productiva de la burguesía, las agresiones económicas y militares externas, y los inevitables desajustes de la transformación social, llevarían a un mayor acotamiento del activismo reivindicativo por parte del Estado, al par que las organizaciones sindicales incrementaban sus definiciones clasistas.

El Documento de Base de la II Asamblea por la Unidad de los Trabajadores plantea en este sentido

La independencia de clase del proletariado a la luz de la doctrina revolucionaria; (...) la práctica consecuente del internacionalismo proletario; el papel hegemónico de la clase obrera en nuestro proceso revolucionario; la unidad del movimiento obrero, de todos los trabajadores y del pueblo bajo las banderas de la lucha por el socialismo científico; la unidad del movimiento sindical en una Central Única de Trabajadores alrededor de los principios fundamentales y tareas históricas de la clase obrera. (...) sostener categóricamente la alianza revolucionaria de la clase obrera con los campesinos pobres como las fuerzas motrices de la Revolución; el papel determinante que juegan las masas populares en todas las transformaciones políticas, econó-



micas y sociales de nuestro país; (...) la unidad de las fuerzas revolucionarias en torno a la teoría de la Revolución Proletaria. (...) sostener y desarrollar la alianza verdaderamente democrática y antiimperialista de nuestro pueblo para la defensa de la Soberanía Nacional y el desarrollo económico y social de Nicaragua.<sup>16</sup>

Estos principios servirán de guía

en el camino de la lucha por la democratización profunda del país, por la liberación definitiva del yugo neocolonialista del imperialismo norteamericano y por apuntalar los pasos hacia la victoria del socialismo en Nicaragua.

El documento plantea asimismo que

las contradicciones sociales en nuestro país se han exacerbado a tal grado que no es posible tenderle un velo a los antagonismos entre las clases.

En virtud de este enfoque —clasista, unitario, antiimperialista—, la CSN reclama un mayor desarrollo de la participación obrera en la gestión económica global y en el desenvolvimiento directo de cada empresa; el efectivo control político del Estado sobre los capitalistas; el fortalecimiento del movimiento sindical y el rechazo de la conciliación de clases; la adopción de una política salarial global sobre la base de la elevación de la producción y la productividad y la elaboración de una normación general, juntamente con aumentos que le hagan frente al alza del costo de la vida; creación de los sindicatos por rama de actividad; incorporación a las milicias y fortalecimiento de la defensa en todos los ámbitos; confiscación inmediata de los empresarios que incurran en prácticas de descapitalización.

Es interesante advertir que todo el documento tiene como interlocutor explícito o implícito de sus planteamientos, al gobierno de la revolución. Este receptó de manera balanceada estos reclamos. La política contra la descapitalización, la fuga de capitales, etc. fue fortalecida considerablemente; diversas medidas se adoptaron para evitar represalias patronales contra

<sup>16</sup> *Ibid.*

los trabajadores integrados a las milicias; se estimuló el desarrollo de sindicatos por ramas; el Ministerio del Trabajo impulsó la progresiva institucionalización de la participación obrera en la gestión de las empresas a través de los convenios colectivos de trabajo. Pero no hubo aumento de los salarios como política general sino más bien como producto de la capacidad de negociación de cada organización sindical, y la Ley de Estado de Emergencia Económica y Social (10 de setiembre de 1981) penó con prisión de uno a tres años a

(...) f) Los que inciten, ayuden o participen en la incitación o continuación de una huelga, paro, o toma de centros de trabajo; g) Los que promuevan o participen en invasiones o tomas de tierras en contravención a lo dispuesto en la Ley de Reforma Agraria.

El agravamiento de la crisis económica fue enfrentado por el FSLN a través de un fortalecimiento del control del Estado revolucionario respecto de las clases antagónicas de la sociedad. Parecía evidente para el Frente que la estrategia de exhortaciones en el sentido de una mayor disciplina laboral por parte de los trabajadores no había surtido los efectos esperados:

... como factor coyuntural que ha tenido una incidencia muy grave y muy importante en esta crisis tenemos que mencionar la indisciplina laboral. En estos dos años de revolución, por tiempo perdido de los trabajadores el país ha perdido 150.000.000 de dólares, como resultado de huelgas, paros y distintas formas de interrupción al trabajo. En una palabra, como resultado de una generalizada indisciplina laboral. 150.000.000 de dólares equivalen al 30 % del total de nuestras exportaciones. Es una cifra demasiado pesada para nuestro país (Comandante de la Revolución Luis Carrión: 1981, pág. 20).

Finalmente en diciembre de 1981 el Consejo de Estado modificó los artículos respectivos del Código del Trabajo, suspendiendo la vigencia del derecho a la huelga.

La reformulación del papel y las tareas del movimiento sindical de acuerdo a las necesidades y posibilidades de la etapa actual de la revolución ha conjugado así la persuasión con el control. La profundización de la crisis económica, la correla-

ción de fuerzas entre la revolución por un lado y la burguesía por el otro y, sobre todo, las presiones y agresiones del gobierno norteamericano, han enmarcado el peso mayor o menor que cada uno de esos elementos ha adquirido en cada coyuntura. En los casos en que se recurrió al control —e incluso a elementos de represión— los destinatarios fueron los cuadros directivos de las organizaciones afectadas, insistiéndose en el trabajo político, la persuasión, la propaganda, en la relación con las bases de dichas organizaciones.

#### 4. La participación obrera en la gestión económica

Inmediatamente después de concluida la guerra de liberación, se hizo evidente que el reinicio de la actividad productiva y en general la recuperación de la economía estaban directamente ligadas a la participación activa de los trabajadores en tal sentido. Una parte importante del parque industrial y de las empresas agropecuarias estaba destruida o seriamente dañada; en algunas regiones la insurrección había coincidido con el inicio del ciclo agrícola y muchas labores no pudieron ser emprendidas; una gran cantidad de fincas y empresas había sido abandonada por sus propietarios, muchos de los cuales salieron de Nicaragua. En estas condiciones, los trabajadores se abocaron a la urgente tarea de preservar los medios de producción existentes, reparar en la medida de lo posible el equipo rescatable, tomar posesión de las empresas abandonadas, asesorar a los técnicos y administradores sin experiencia de la recién creada APP, o conseguir que la burguesía pusiera en marcha sus empresas paralizadas y reiniciara un proceso de inversiones. Sobre todo en el campo, estas iniciativas de los trabajadores asumieron un tono fuertemente insurreccional, denotando la voluntad de la clase por asumir el control efectivo de los medios de producción que habían tomado entre sus manos.

En la sección anterior se ha visto que la participación en la gestión económica global y en la administración de las empresas es una de las demandas permanentes del movimiento sindical y, en particular, de las centrales sandinistas. Esto obedece

a la convicción de que no basta la estatización de la economía para asegurar la transformación de una gestión vertical y autoritaria en una gestión democrática y participativa, y que

es necesario pero no suficiente el cambio de las formas de propiedad para garantizar cambios más profundos en la transformación de la estructura económica social; para ello es necesaria la participación activa de los trabajadores en la vida política, ideológica y por supuesto económica de la sociedad (M. Castillo 1983: 2).

El concepto de participación obrera, como eje de la construcción de una democracia popular y de la lucha antiimperialista, ha experimentado una progresiva explicitación que aún se encuentra en marcha. La Asamblea por la Unidad Sindical (abril 1980) convocada por la CNI planteó la participación de los trabajadores como un proceso en dos niveles o dimensiones: la participación en la producción y la participación en las transformaciones del Estado. La primera fue caracterizada como elevación de la producción y la productividad; incorporación al trabajo voluntario; vigilancia de las instalaciones físicas y la maquinaria de los centros de trabajo para evitar sabotajes; vigilancia sobre las operaciones de las empresas para prevenir su descapitalización; luchar por el cumplimiento de la legislación laboral y las medidas de seguridad industrial e higiene ocupacional; fortalecer el APP; evitar la paralización de la producción;

Conocer los problemas de la Revolución, conocer los problemas de los trabajadores, conocer sus sentimientos y sus reclamos, conocer sus recomendaciones y observaciones en cuanto a la producción para garantizar que los dirigentes y las bases puedan con efectividad contribuir a consolidar la economía nacional.<sup>17</sup>

Es decir, la participación aparecía aquí, en lo que se refiere al proceso productivo, como una función de vigilancia sobre los propietarios de las empresas y como incorporación a tareas en sí mismas productivas, antes —o en vez— que como incidencia efectiva de los trabajadores en las decisiones economi-

<sup>17</sup> *Barricada*, 14 de abril de 1980.

cas de los establecimientos productivos. Por su parte, la participación sindical en las transformaciones del Estado era caracterizada como la elección de representantes

verdaderamente idóneos, capaces de cumplir la misión de transmitir a los organismos estatales las necesidades, los puntos de vista, recomendaciones o la crítica de los trabajadores;

seguir la implementación del Plan de Reactivación Económica; combatir el burocratismo, el derroche, la malversación, la ineficiencia, etc.; promover la capacitación técnica de los trabajadores y su educación política; lograr la supresión de las relaciones obrero-patronales en el APP; informar al Estado sobre prácticas de descapitalización o violación de la legislación laboral.

La participación de los trabajadores surge por lo tanto fundamentalmente como efectivo cumplimiento de las metas de producción, como vigilancia política, como colaboración con los órganos del Estado en la supervisión del comportamiento empresarial de la burguesía y de los administradores del APP. No implica todavía la incorporación de los trabajadores a la elaboración de las decisiones básicas para la marcha de las empresas —inversiones, metas de producción, costos, organización del proceso de trabajo...—, pero tampoco se confina a los límites de cada empresa, ni reduce el papel del sindicato al de mera polea de transmisión de información hacia los órganos del Estado y hacia las bases. El sindicato es esto, pero también es más que esto; se le asigna una función de *vigilancia revolucionaria* sobre el proceso productivo, un papel de progresiva transformación del carácter de las relaciones de producción y del proceso de trabajo en el APP —lucha contra el burocratismo, eliminación de los criterios patronales de disciplina laboral, etc.—, y de elevación del nivel técnico-cultural y político-ideológico de los trabajadores —en una sociedad que acaba de salir del analfabetismo—. La participación de los trabajadores aparece por lo tanto como un proceso que se orienta al conjunto de la economía y del Estado, y no solamente a una o algunas unidades específicas de producción. Es asimismo una participación más política que técnico-económica o, si se prefiere, más de tipo *macropolítico* —vale decir vinculada al proyecto de transformación global de la sociedad— que de tipo *micropolítico* —metas de producción de la empresa, costos, etcétera.

Sobre la base de una experiencia de más de un año, y en un contexto de agudización de la crisis económica, la II Asamblea por la Unidad de los Trabajadores (julio 1981) resaltó la vinculación de la participación con el avance del proceso de recuperación económica. En el Documento de base ya mencionado, la participación en la gestión económica abarca tanto la planificación global de la economía nacional como la gestión directa de las empresas, en el APP y en el área privada. La participación

tiene que ver con la planificación o programación de la producción, con el control obrero sobre la marcha normal de las empresas y con los compromisos contraídos por los propios trabajadores y las administraciones, a fin de elevar la producción en base a metas bien definidas, y en base a la organización científica del trabajo que eleve la productividad del trabajo y evite el derroche de recursos y de tiempo.

El movimiento sindical debe mantenerse vigilante

para que los representantes sindicales que participen en organismos de gestión económica, siempre lleven el criterio del sindicato, y no el criterio personal, y que siempre informen a su Junta Directiva y a su Asamblea, para que la participación sea lo más democrática y representativa, y se eviten problemas de corrupción.

En el área privada la participación

debe fortalecer al movimiento sindical y rechazar la conciliación de clases.

La participación se plantea así como una dimensión del proceso de progresiva autonomía de clase del movimiento obrero —cuestión que es explícitamente señalada en el Documento base— y de democratización de la práctica sindical. Es evidente que la CSN busca aquí una nítida diferenciación de su enfoque de la participación sindical, respecto de los planteamientos efectuados por algunos sindicatos opositores e incluso por ciertos sectores de la empresa privada. En los momentos iniciales de la etapa actual de la revolución, unos y otros vieron en las propuestas de co-gestión, participación en los beneficios, etc., la posibilidad de abrir un espacio político

para la captación de las bases sindicales del FSLN, en momentos en que las organizaciones obreras sandinistas estaban aún en la búsqueda de su propio perfil de lucha. Hacia el primer aniversario del triunfo revolucionario, un grupo de industriales de la ciudad de Granada vinculados al Partido Conservador, tomó la iniciativa de implantar en sus empresas un sistema de participación de los trabajadores en las ganancias. El proyecto fue denunciado por las organizaciones sindicales del FSLN como diversionista;<sup>18</sup> según los sindicatos sandinistas, estos mismos empresarios se habían negado a pagar el aumento de salario dispuesto por la JGRN el 1º de mayo anterior, y boicoteaban las reuniones sindicales convocadas por las organizaciones sandinistas. Los sindicatos sandinistas denunciaron asimismo el asesoramiento que funcionarios de la embajada norteamericana habrían brindado para este proyecto.<sup>19</sup> Las centrales sindicales minoritarias, especialmente la CTN, se mostraron entusiasmadas con este tipo de estrategia. Exactamente el 19 de julio de 1980, la CTN publicó en el opositor diario *La Prensa* un extenso *Manifiesto* donde abogaba por un sindicalismo independiente y clasista, y por el establecimiento de la "propiedad social de los trabajadores".<sup>20</sup>

Parece innegable que estos proyectos tuvieron un horizonte que iba más allá de un tipo de participación distinto al postulado por la Coordinadora Sindical y las organizaciones sandinistas. En realidad es otro tipo de sindicalismo, y otro tipo de sociedad, el que subyace en estas frustradas iniciativas. Se trataba más bien de generar, en torno a ellas, un proyecto político alternativo menos irritativo para la burguesía. Aunque desde el punto de vista técnico y reivindicativo aparecía ofreciendo a los trabajadores mucho más que la concepción sandinista de la participación obrera, el enfoque de estas iniciativas opositoras confinaba a las organizaciones sindicales a una posición subordinada en un sistema diseñado a la medida de la patronal. En este sentido, el *clasismo* que invocaban reducía la *clase al sindicato* y a su capacidad para alcanzar algunas porciones del pastel que se cocinaba siempre en el horno del capital.

<sup>18</sup> *Barricada*, 11 de julio de 1980.

<sup>19</sup> *La Prensa*, 2 de julio de 1980.

<sup>20</sup> Cf. también *La Prensa*, 7 de junio de 1981.

La experiencia sandinista de participación obrera en la gestión económica se ha desenvuelto así en medio de tensiones y contradicciones. El trayecto recorrido desde julio de 1979 es rico en enseñanzas. Ellas no pueden ser consideradas definitivas sin embargo; al contrario, se trata de un período de experimentación y búsqueda, donde los logros son tan aleccionadores como los errores.

La participación en la gestión de las empresas, que comenzó como un conjunto de acciones inicialmente espontáneas de los trabajadores en las postrimerías de la etapa insurreccional, fue institucionalizada paulatinamente, y las orientaciones del Estado a través de las normas reglamentarias y la presencia de sus técnicos y administradores fueron acotando poco a poco la diversidad de formas, criterios y métodos nacidos del entusiasmo —y el desorden— inicial. En la actualidad la institucionalización de la participación sindical se desarrolla por la vía de los convenios colectivos de trabajo, que tomaron gran auge desde el triunfo revolucionario; a partir de 1981 la ley de creación de las Empresas de la Reforma Agraria contempla disposiciones relativas a la participación de los trabajadores agrícolas.

Los cuadros V.2 y V.3 presentan un panorama general de la distribución de los convenios colectivos que incluyen cláusulas sobre participación, por área de propiedad, sector de actividad y central sindical a la que pertenecen los sindicatos respectivos.

De un total de 718 convenios colectivos en otras tantas empresas, 422 (59 %) incorporan cláusulas relativas a la participación sindical en la gestión administrativa. En el APP la proporción de convenios con este tipo de cláusulas es ligeramente mayor que en el área privada: 61 % (122 sobre 199) y 58 % (300 sobre 519) respectivamente. La central sindical más activa en esto es la CST, con casi 75 % de los convenios.

Las cláusulas referidas a la participación sindical abarcan diferentes modalidades y niveles de intervención, en áreas diversas de la empresa: disciplina laboral, administración de la fuerza de trabajo, evaluación del desenvolvimiento del proceso productivo, capacitación de la fuerza de trabajo, etc. En general los sindicatos han alcanzado participación en la elaboración del reglamento interno de la empresa, control sobre la contratación de personal nuevo y del régimen de promociones, traslados y despidos; acceso a información y capacidad de



Cuadro V.2

Convenios colectivos con cláusulas sobre participación,  
por sector de actividad y área de propiedad

Sector de actividad	Área de propiedad		Total
	APP	Área privada	
Agropecuaria y minería	16	45	61
Industria, agroindustria y construcción	73	144	217
Comercio	10	53	63
Servicios	23	54	77
Otros y n.e.	—	4	4
<b>Total</b>	<b>122</b>	<b>300</b>	<b>422</b>

Fuente: Elaboración propia de cifras del Ministerio del Trabajo.

Cuadro V.3

Convenios colectivos con cláusulas sobre participación,  
por sector de actividad y central sindical

Sector de actividad	Centrales sindicales						s.e.	Total
	CST	ATC	CGTi	CAUS	CTN	CUS		
Agropecuaria y minería	14	39	2	1	4	—	1	61
Industria, agroindustria y construcción	163	—	10	19	13	8	4	217
Comercio	45	—	—	4	9	4	1	63
Servicios	64	—	2	—	4	6	1	77
Otros y n.e.	3	—	—	—	1	—	—	4
<b>Total</b>	<b>289</b>	<b>39</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>422</b>

Fuente: Elaboración propia de cifras del Ministerio del Trabajo.

consulta en materia de costos y metas; recursos para la capacitación técnica y profesional de sus afiliados (permisos, becas, subsidios y similares).

En lo que toca a la vigilancia del proceso productivo y a la participación en la marcha general de la empresa, la experiencia nicaragüense ha pasado por diferentes fases en un proceso de búsqueda aún no concluido. El primer intento por generalizar una forma participativa, luego de la etapa inicial de espontaneidad insurreccional, estuvo constituido por las *Asambleas de Reactivación Económica* (ARE). Estas asambleas se integraban con el personal de la empresa, la Junta Directiva del sindicato, la dirección de la empresa, y eventualmente el ministro o viceministro correspondiente; en algunas empresas de especial importancia por razones determinadas, participaron asimismo algún miembro de la JGRN, o representantes del FSLN.

Las ARE tuvieron lugar a lo largo de 1980. La discusión que se dio en ellas versaba tanto sobre cuestiones referidas al proceso productivo de la empresa como a la problemática general de la economía del país, y a la articulación entre ésta y aquellas —abastecimiento de materias primas y otros insumos, escasez o falta de repuestos, disponibilidad de divisas, etc. La organización de las ARE buscaba romper con la tradición que ligaba a los trabajadores exclusivamente al ámbito inmediato de trabajo, y abrir su interés y su participación hacia horizontes más amplios. En este sentido apuntaban hacia varios objetivos: conocimiento del plan de producción de la empresa por los trabajadores de todas las secciones o departamentos; profundización de las tareas del Programa de Reactivación Económica que conciernen a los trabajadores; revisión de la marcha del proceso productivo en función del plan; evaluación de dicho plan por sectores, brigadas, secciones, etc.; detección de los problemas existentes; mantenimiento de los medios de trabajo; uso racional de los recursos disponibles; propuestas para el mejoramiento de la productividad; organización de estímulos a los trabajadores; extensión de las ARE al nivel de las ramas de producción.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Cf. una evaluación de la experiencia en *Nueva Economía* 8 (suplemento de *Barricada*, 29 de diciembre de 1980).

El desarrollo de las ARE significó un amplio proceso de difusión del Programa de Reactivación Económica y del plan de producción de la empresa, de discusión de ambos por los trabajadores, de identificación de la coherencia o desfases entre uno y otro, etc. Las ARE trataron, y en cierta medida consiguieron, que los trabajadores se preocuparan por conocer no sólo la problemática de su centro, sino que se ligaran a los problemas generales de la producción en la rama y en el nivel nacional.

Los resultados de las asambleas dependieron del modo y la concepción con que fueron impulsadas. Las mejores ARE en términos de participación obrera, niveles de discusión y similares, fueron las que surgieron a partir del trabajo político del sindicato con sus bases, en cuya virtud fueron las propias bases las que plantearon, a veces con beligerancia, la necesidad de conocer y avanzar hacia cuestiones hasta entonces vedadas a ellas. La existencia de un sindicato fuerte, sólidamente implantado en sus bases, demostró ser la condición para el desarrollo de un proceso realmente participativo. Al contrario, cuando las ARE fueron organizadas verticalmente desde la administración hacia las bases, los resultados fueron deficientes y no dejaron en los trabajadores interés por continuar el proceso hacia formas superiores.

La práctica de las ARE dio lugar a enfrentamientos intensos entre los trabajadores y la administración de las empresas, por la resistencia de muchos directivos a posibilitar el acceso del sindicato a la información sobre el funcionamiento de la empresa, la reproducción en el APP de los criterios de relación obrero-patronal del área privada, la mala administración de los recursos, etc. Asimismo, reveló que, con los niveles culturales y técnicos prevalecientes aún en la clase obrera, la organización de la participación debía darse a partir del ámbito inmediato de los trabajadores de acuerdo a la división técnica del trabajo: la sección o departamento. En general las mejores asambleas fueron las que arrancaron de estos ámbitos; ellas permitieron a los trabajadores mejores niveles de discusión por su mejor conocimiento de los temas; asimismo en este nivel el grado de preparación de las ARE había sido mucho más cuidadoso que en el nivel de la empresa como un todo; por último, los trabajadores estaban mucho más familiarizados con los problemas de su departamento o sección, que con los de

secciones donde no trabajaban; por lo tanto su participación se limitaba generalmente a las cuestiones directamente relacionadas con su ámbito inmediato de trabajo.

Las ARE permitieron que los trabajadores advirtieran que la administración de la empresa no era algo misterioso o lejano, y que comprendieran la importancia del trabajo organizado para alcanzar los objetivos fijados en el campo respectivo por el Estado revolucionario. Pero al mismo tiempo plantearon la necesidad de dar algún tipo de continuidad a la experiencia, en vez de limitarla a uno o dos momentos del ciclo productivo anual. Surgieron de este modo las *Asambleas de Producción Permanentes*, una forma organizativa que mantenía en constante evaluación a las diversas secciones de la empresa en torno al cumplimiento de las metas fijadas en la ARE. Estas asambleas funcionaron positivamente en materia de producción, pero volvían a alejar a los trabajadores del marco de la administración, y a separar el terreno de la dirección del terreno de la producción.

Por otro lado, muchas veces se hizo evidente que las expectativas de los trabajadores en materia de niveles de participación y eficacia de la misma, chocaban con la reticencia de muchos administradores, que veían en la participación un cercenamiento de su autoridad. Esto generó fuertes tensiones entre los trabajadores —que planteaban como reivindicación compartir funciones en la administración— y la dirección de la empresa. La respuesta inicial a esta situación fue la incorporación de algunos miembros de la Junta Directiva del sindicato a la administración de la empresa; el sindicato comenzó a funcionar entonces como correa de transmisión entre los trabajadores y la dirección. Esta modalidad permitió mejorar el desempeño del proceso productivo en algunos centros, pero al mismo tiempo dio nacimiento a un proceso de burocratización en las directivas sindicales y, consiguientemente, de deserción de sus miembros. A poco andar este proceso desembocó en alguno de estos dos finales: o bien la dirección sindical, tratando de solucionar los problemas productivos, se desligaba progresivamente de sus bases y asumía completamente la perspectiva de la administración, o bien, como forma de mantener su representatividad, la directiva sindical abandonaba la administración y pasaba a asumir una actitud beligerante contra la misma, agravando los problemas que había tratado de solucionar.

Los alcances y limitaciones de las ARE aconsejaron buscar otras formas de participación, a partir del ámbito inmediato de trabajo —la sección o el departamento—. Se constituyeron así los *Consejos de Producción*. En general, luego de prolongadas discusiones, cada sección de la empresa elige un representante, no ya basado forzosamente en criterios de nivel político sino por ser el más representativo como trabajador productivo: el trabajador vanguardia. Este conjunto de trabajadores de todos los sectores o departamentos del centro, más los representantes de la administración por sección, se integra constituyendo el *Consejo de Producción* de la empresa.<sup>22</sup>

Los Consejos de Producción discuten las metas productivas de la empresa, las dificultades para su cumplimiento emanadas de problemas técnicos o de la repercusión de la situación económica nacional, la manera de hacerles frente; se elabora el reglamento interno de la empresa; se definen medidas para mejorar las condiciones generales de trabajo y la seguridad ocupacional, etc. Inicialmente hubo que hacer frente a cierta apatía de los trabajadores para integrarse a estas experiencias. El trabajo político del sindicato fue fundamental para superar esta actitud. En TEXNICA por ejemplo (una empresa textil del APP), el sindicato de la empresa, afiliado a la CST, organizó círculos de reunión semanal para informar a los trabajadores sobre la marcha de la empresa, sobre la capacidad de inserción que hacía posible la incorporación a los Consejos, etc., tratando de motivarlos a una participación activa. En el Ingenio Benjamín Zeledón, también del APP, el sindicato organizó reuniones semanales con el personal de cada sección, con la misma finalidad. Los resultados fueron en general exitosos; se consiguió que los representantes asistieran al Consejo, y los restantes miembros de la sección comenzaron a exigir que se les rindiera cuenta de lo tratado en las reuniones.

La experiencia de los consejos permitió a los trabajadores ir tomando a su cargo cuestiones que hasta entonces eran privativas de la dirección de la empresa, como la disciplina labo-

ral. Se crearon al efecto en cada empresa los *Comités de Disciplina*, encargados de erradicar las actitudes de los obreros y los técnicos que perjudicaran la marcha de la producción y la elevación de la productividad: ausentismo, negligencias, derroche de recursos, etc. El Comité está constituido por representantes de los propios trabajadores; en vez de reprimir o multar, actúa por persuasión y a través de la discusión política con cada trabajador acerca del significado de sus faltas, sus causas, su impacto en la marcha de la empresa y en la moral de trabajo de sus compañeros, todo ello en el contexto del proceso revolucionario. Si a pesar de estas reuniones la indisciplina continúa, los trabajadores del Comité pasan a considerarla un intento deliberado de colocarse al margen de los intereses de la clase y recién entonces se aplica la sanción.

En general esta modalidad de participación se desarrolló más en las empresas cuyos sindicatos se hallan afiliados a la CST; más en las empresas del APP que en el sector privado —donde aún hoy se cuentan muy pocos casos—, y, dentro del APP, más en el sector urbano-industrial que en el agropecuario.

La dispersión de la fuerza del trabajo rural, la estacionalidad de parte del empleo, el bajo desarrollo de las fuerzas productivas materiales, la confrontación de criterios disímiles en torno a esta cuestión, han creado limitaciones al desarrollo de la participación de los trabajadores en este sector. Sin embargo se cuenta aquí con un primer intento de reglamentación de la misma, por contraste con el sector urbano industrial. La ley de creación de las Empresas de Reforma Agraria (ERA) y su reglamentación, establecen que cada ERA tendrá un *Consejo Consultivo* del que participará un representante de los trabajadores. Compete al Consejo, entre otras cuestiones, revisar y avalar los planes técnico-económicos y/o presupuestos anuales de la empresa que prepara el director de la misma, y revisar y avalar los cambios que se introduzcan en ellos. Debe decirse sin embargo, que pese a su nombre el Consejo no es una mera instancia de consulta, sino que tiene facultades de decisión.

Además del representante de los trabajadores —generalmente un activista de la ATC—, el Consejo se integra con el Director de la ERA, que lo preside, y los funcionarios de la empresa que él estime necesarios. Esta composición da a la representación obrera un carácter minoritario; en la práctica

<sup>22</sup> Se trata de una descripción general que admite diversas variantes. En el Ingenio San Antonio el Consejo se integró con 2 representantes de la administración, 2 de la Junta Directiva del Sindicato y 2 del Ministerio del Trabajo; cf. *Barricada*, 9 de febrero de 1981. En algunas empresas el Consejo recibió diferentes nombres: Consejo Técnico-Administrativo, Comité de Empresa, etcétera.

sin embargo las decisiones no se toman por votación sino por consenso, y esto se ha traducido en la posibilidad de que la opinión de los trabajadores tenga un peso mayor que el que se deriva de su presencia numérica. Sin embargo muy pocas ERA cuentan aún con su Consejo Consultivo, y la experiencia recogida hasta el momento demuestra que éste no es el nivel donde la participación de los obreros se ha desenvuelto con más intensidad. En realidad la práctica de la participación de los trabajadores del campo ha tendido a desenvolverse por sus propios canales (M. Ortega 1983); en esto han influido varios factores.

En primer lugar, cada ERA se compone de varias *Unidades de Producción Estatal* (UPE), equivalentes a lo que en una empresa industrial sería el departamento o sección. La UPE esta constituida por una finca o establecimiento que fue confiscado, y junto con otras UPE constituye la ERA. Este fue el ámbito donde se dio la participación de los trabajadores del campo en los momentos iniciales, con gran intensidad y una fuerte capacidad de control; originalmente las fincas así administradas se denominaron *Comunas Agrarias Sandinistas*, adoptando su denominación actual posteriormente y en el marco del proceso de institucionalización y de creciente presencia directa del Estado, que se ha mencionado anteriormente. La creación de los Consejos Consultivos restó atribuciones a las UPE, y alejó del ámbito de actividad directa de los trabajadores, las decisiones respecto de la evolución de su unidad. Por ejemplo, el plan técnico-económico no viene desagregado por UPE, y resulta complejo para los trabajadores opinar sobre cuestiones que involucren a decenas de UPEs, de las que muchas veces sólo tienen una idea muy rudimentaria —por la distancia, falta de comunicación, etc. Pero al mismo tiempo, es la UPE el nivel donde más intensa suele ser la participación de los trabajadores, ya que no sólo trabajan en ella, sino que la unidad es también su centro de abastecimiento, y muchos viven en ella, o cerca de ella; vale decir que hay una contradicción, o al menos un desfase, entre los niveles de participación definidos por el instrumento legal, y las formas reales en que la participación se desenvuelve.

Esto ha llevado a dotar a las UPE de su propio consejo consultivo, si bien por el momento solamente 20 % de ellas

cuentan con dicho cuerpo.<sup>21</sup> Para hacer frente a la dispersión de las UPEs de una misma empresa, algunas ERA han emprendido la creación de *complejos de producción* que agrupan a varias UPEs. Los complejos son una instancia intermedia entre la UPE y la dirección de la empresa, y permiten encarar algunos problemas que exceden el nivel de una unidad de producción determinada: abastecimiento de los trabajadores, combustible, y otros.

Estas formas de participación se han desarrollado casi exclusivamente en el APP. En el último tiempo la ATC ha venido organizando *Consejos Zonales de Trabajadores*, formados por delegaciones de trabajadores tanto del APP como del sector privado, con el fin de discutir problemas que afectan a toda una zona, independientemente del régimen de propiedad de las fincas. Los consejos organizan asimismo jornadas de trabajo voluntario de obreros de fincas privadas en unidades de producción del APP en casos de emergencia (inundaciones, necesidad de levantar rápidamente una cosecha, etc.), o con motivo de fechas de significación política. En general estas experiencias han suscitado gran interés y buena participación entre los trabajadores.

Recientemente la ATC ha comenzado a impulsar asambleas generales en las empresas, con carácter informativo, pero en las que los trabajadores discuten abiertamente las cuestiones planteadas. Se convocan sobre todo para escuchar el informe del director de la ERA sobre las metas y la evolución de la producción, el desarrollo de proyectos específicos, las perspectivas que se plantean, etc. En la agroindustria del azúcar, por ejemplo, se realizan antes del inicio de la zafra; las primeras se efectuaron en 1982, y se han reiterado en el año actual.

Tanto la ATC como la CST están impulsando actualmente proyectos pilotos de participación, en grupos de empresas seleccionadas, para evaluar en el curso de un año las experiencias a través de un seguimiento sistemático. En el sector agropecuario, el MIDINRA, con la participación de la ATC, seleccionó 10 ERA por su grado de desarrollo: compactación de sus UPEs, rentabilidad, organización sindical, con el fin de desarrollar con carácter experimental un modelo de gestión. La

<sup>21</sup> *Barricada*, 11 de julio de 1983.



ATC asumió la tarea de asegurar la organización de los sindicatos por empresa, ya que hasta el momento la organización sindical existe solamente en el nivel de cada UPE. De esta manera se busca establecer la correspondencia entre la organización de cada ERA y la del sindicato. En el sector industrial el proyecto piloto abarca a ocho empresas del APP y es impulsado por la CST, con el apoyo de la Corporación Industrial del Pueblo (COIP). El carácter experimental de ambos proyectos, y el poco tiempo transcurrido desde su inicio, no permiten formular un juicio respecto de sus alcances y de su impacto tanto sobre los niveles de participación efectiva de los trabajadores, de su capacidad para incorporar a las decisiones de la empresa las iniciativas de las bases, como su incidencia en la evolución del proceso productivo de las empresas.<sup>21</sup>

La incorporación de los trabajadores a la gestión de las empresas en que trabajan es solamente una de las facetas de la participación obrera en la gestión de la economía. El proceso de constitución del Estado revolucionario contempla asimismo la participación de las organizaciones sindicales en diferentes instancias y dimensiones de su estructura, y en el diseño de las políticas respectivas. En materia de política económica, la CST y la ATC participan en varias instancias de elaboración y ejecución de políticas, en general con carácter consultivo: Comisión de Empleo y Nivel de Vida, las comisiones sobre higiene y seguridad ocupacional, las comisiones consultivas de política agropecuaria (incluye algodón, café, ganadería, arroz, banano, azúcar, granos básicos); la ATC integra el Comité Nacional del Programa Alimentario Nacional y el Consejo Nacional de la Reforma Agraria; la Coordinadora Sindical participa con el Ministerio de Trabajo en la elaboración y ejecución del plan de empleos de emergencia. Tanto la ATC y la CST, como la CGTi, la CAUS, la CTN y la CUS tienen representación en el Consejo de Estado.

El alcance y la eficacia de la participación sindical en estos niveles es desigual. La receptividad que sus iniciativas encuentran es mayor en algunos ámbitos del Estado que en otros. No todos los funcionarios están dispuestos a aceptar la discusión con los representantes de las organizaciones, ni siempre se plantean las condiciones más propicias para que la discusión

tenga lugar —disponibilidad de información con antelación suficiente para analizarla detenidamente, disparidad de criterios entre las reparticiones del Estado, etc. Otras veces el paternalismo de algunos organismos o funcionarios lleva a que las representaciones sindicales pierdan beligerancia, o bien el planteamiento técnico en términos innecesariamente complicados dificulta una efectiva participación de los delegados de los trabajadores.

## 5. Participación obrera, lucha de clases y el Estado revolucionario

La participación obrera no es una dádiva del Estado revolucionario a los trabajadores, sino un derecho que éstos se han ganado con su lucha, y que hacen valer. Esto no se refiere solamente al apoyo prestado por los trabajadores a la lucha del FSLN contra el somocismo, o a su carácter de clase explotada, sino al efectivo desenvolvimiento de la participación en la etapa presente de la revolución. La incorporación de los trabajadores organizados a la gestión económica tuvo que ser peleada por los sindicatos y las centrales sindicales frente a los empresarios privados, y también frente a algunos administradores del APP y funcionarios del Estado.

En esta lucha las organizaciones sindicales del FSLN han constituido generalmente la vanguardia. A través de movilizaciones, crítica interna, crítica pública, denuncias, etc., han ampliado progresivamente el espacio para la participación de los trabajadores. Naturalmente, la mayor resistencia surgió de la empresa privada. En un capitalismo como el que se desarrolló en Nicaragua las demandas de participación adquirieron, rápidamente, desde la perspectiva de la burguesía, un carácter abiertamente *subversivo*. La participación en la gestión administrativa de las empresas, el desarrollo del movimiento sindical, el eco que las demandas de los trabajadores alcanzaron en el aparato estatal, significaron la fractura del principio burgués de autoridad en la empresa, del mismo modo que la revolución lo había quebrado en el ámbito de la sociedad global. Esto fue particularmente visible en el sector

<sup>21</sup> Cf. sobre esto Vilas (1983), y *Barricada*, 29 de junio de 1982.

rural. Si los convenios colectivos de trabajo trastocaron las relaciones obrero-patronales en la economía urbana, en el campo significaron una verdadera conmoción. Los sindicatos de los trabajadores de las haciendas consiguieron por esta vía la sanción de reglamentos internos y la participación en su redacción, la administración del reclutamiento y despido de la fuerza de trabajo, etcétera.

Pero también en el sector público y en el APP existieron resistencias —bien que menos intensas. A fines de 1980 por ejemplo, la Coordinadora Sindical dirigió una fuerte crítica a los técnicos del Ministerio de Planificación que no tomaron en cuenta las opiniones de los trabajadores en la elaboración del Plan de Reactivación Económica de 1981, a pesar de que un grupo de sindicatos había solicitado reunirse con los funcionarios.<sup>25</sup> Otras veces las críticas se refieren a la falta de firmeza de algunos organismos del Estado ante los obstáculos que los empresarios privados ponen a la participación sindical o a la efectiva vigencia de sus derechos. Así, la ATC reclamó una acción más enérgica del Ministerio del Trabajo frente a los empresarios que violan la legislación laboral, infringen los convenios colectivos, y obstaculizan el ejercicio de la participación sindical. La ATC denunció la pasividad de algunos funcionarios ante el sistemático incumplimiento patronal de la obligación de permitir el acceso del sindicato a la contabilidad de las empresas. De acuerdo a la ATC

Hay casos de inspectores que si nosotros no le ponemos el transporte ellos no van a hacer una inspección. Hace falta que los inspectores se vinculen más al trabajo del campo y de los obreros agrícolas, que conozcan mejor los centros de trabajo, que se organicen mejor para que garanticen el cumplimiento de la legislación laboral.<sup>26</sup>

Es fácil advertir que el tipo de participación impulsada por la ATC y la CST cuestiona el principio burgués de autoridad más incisivamente que las estrategias tradicionales de participación en los beneficios de las empresas, o la incorporación minoritaria de los trabajadores al accionariado del capital. De

<sup>25</sup> *Barricada*, 10 de diciembre de 1980.

<sup>26</sup> *Barricada*, 27 de julio de 1983.

ahí el apoyo que sectores de la burguesía han prestado a este tipo de iniciativas, y la estrecha alianza desarrollada con las centrales sindicales que las promueven.

Pero también en el APP la participación de los trabajadores ha debido enfrentarse a directivos y administradores que tienden a reproducir el esquema de relaciones obrero-patronales de la empresa privada: comportamiento autoritario, renuencia a la discusión con los trabajadores, y similares. En estos casos la actitud de las organizaciones sindicales ha sido tan beligerante como en el sector privado. Por ejemplo, los trabajadores de la empresa Plywood —una empresa maderera del APP— aprovecharon una visita del Comandante de la Revolución Víctor Tirado para plantearle, en una improvisada asamblea, las críticas a la administración: violación del convenio colectivo, desconocimiento de atribuciones sindicales, falta de apoyo a los obreros innovadores, confusión ideológica, fijación de premios y comisiones elevados para el personal gerencial, etc.<sup>27</sup> En otra ocasión los trabajadores de las empresas del complejo plástico de la COIP denunciaron los gastos excesivos en combustible y reparaciones para vehículos propios efectuados por uno de los administradores, y el descontrol en la materia prima.<sup>28</sup> A principios de 1983 los trabajadores de la Fábrica de Hilados y Tejidos Nicarao —también de la COIP— cuestionaron en una asamblea la gestión administrativa del gerente de la empresa, responsabilizándolo de resultados contables negativos.<sup>29</sup> Y así en muchos casos más. En general las demandas y críticas de los trabajadores encuentran receptividad en la dirección de la COIP. Un caso ilustrativo es el de PLASTINIC, la principal empresa de productos de plástico del APP. En agosto de 1982 más de 350 trabajadores y la directiva sindical plantearon a la JGRN una serie de problemas suscitados en la empresa: inadecuado mantenimiento de la planta, insuficiente existencia de repuestos, poco estímulo a los innovadores, excesivas comisiones sobre producción para el jefe de producción, y sobre ventas para tres vendedores, boicot del administrador al movimiento sindical y obstaculización a la participación de los trabajadores en la gestión administrativa, entre

<sup>27</sup> *Barricada*, 9 de julio de 1982.

<sup>28</sup> *Barricada*, 24 de julio de 1982.

<sup>29</sup> *Barricada*, 16 de febrero de 1983.

otros. En octubre se llegó a un acuerdo entre la COIP y el sindicato, en cuya virtud se cambiaría al administrador de la empresa. El cambio sin embargo no se hizo efectivo y el sindicato y los trabajadores reiniciaron sus presiones, aunque sin detener la producción. Después de nuevas movilizaciones, a fines de enero de 1983 consiguieron que el administrador fuera destituido. Lo mismo que en otras ocasiones, todo el proceso recibió una amplia cobertura periodística por *Barricada*, el diario oficial del FSLN.<sup>30</sup>

En consecuencia, el triunfo sandinista del 19 de julio de 1979 no ha eliminado la lucha sindical, sino que la ha dotado de una receptividad amplia en el Estado revolucionario, en función del proyecto global que la revolución impulsa.

Por el momento la participación obrera parece más un atributo del sindicato que de los trabajadores mismos. Esto es particularmente notorio en las instancias de participación en las instituciones del Estado: comisiones de política, consejos, etc.; los representantes sindicales son designados directamente por las centrales, sin participación de las bases. En las empresas en cambio los miembros de la directiva sindical son elegidos en asamblea de los trabajadores, y lo mismo ocurre en general con los delegados a los comités.

En muchos casos sin embargo se nota todavía un desfase entre el nivel de participación y en general de preocupación de los cuadros sindicales y las bases. La carga de atraso cultural, autoritarismo, recibida de la larga dictadura, no ha sido liquidada totalmente; el analfabetismo ha dejado resabios que aún no han podido ser eliminados; todo esto influye para reducir los niveles efectivos de involucramiento de los trabajadores en la gestión. Un elemento que no siempre se tiene en cuenta es que la participación requiere ciertas calificaciones mínimas, y la dedicación de tiempo y esfuerzo; es una tarea adicional al trabajo remunerado, y demanda por lo tanto entrenamiento y, sobre todo, el desarrollo de una firme convicción política. Todavía hoy una parte importante de la actividad sindical consiste en motivar a las bases para incorporarse activamente a la práctica de la participación: asistir a las asambleas, participar en las discusiones, exigir informes de sus delegados, fiscalizar la marcha del proceso productivo en su propia sección o departa-

<sup>30</sup> *Barricada*, 2 de setiembre de 1982, 26 y 27 de enero de 1983.

mento, y similares. Por ejemplo, durante la Asamblea de Producción celebrada por 600 obreros de la empresa Oscar Benavides (una empresa de la reforma agraria), los representantes de la ATC instaron a los trabajadores a adoptar posturas más beligerantes en la gestión administrativa, a elevar su participación en las instancias respectivas y en la defensa armada de la empresa:

Démonos cuenta de una vez por todas que estas empresas son de nosotros; por lo tanto, todos tenemos la obligación de conocer y dirigir las mismas, así como defenderlas.<sup>31</sup>

Las organizaciones sindicales desempeñan en consecuencia una función de promoción de la participación y de capacitación de las bases para aumentar su incorporación a las instancias de participación. La tarea no es sencilla, porque muchas veces la dirección sindical no es ajena a muchas de las limitaciones señaladas respecto de los trabajadores: faltan cuadros experimentados, necesidad de hacer frente a una multiplicidad de tareas, los niveles de formación no son siempre los mejores, etc.<sup>32</sup>

Estos elementos crean las condiciones para que se desarrolle en algunos sectores del Estado y de la administración de las empresas del APP, y en algunas directivas sindicales, una práctica paternalista y de liderazgo por sustitución. O bien las instancias de participación se obvian para no recargar de tareas a los trabajadores o a sus organizaciones, o porque los funcionarios tendrían mejor conocimiento técnico de las cosas, o bien la lentitud de la respuesta sindical por las razones que se han señalado conduce a que al final las decisiones sean adoptadas de arriba hacia abajo, y la participación de los representantes de los trabajadores actúe simplemente como un aval de dichas decisiones.

Una cuestión que surge siempre que se plantea la participación obrera —pero que abarca asimismo otros terrenos— es el tipo de relaciones que se desenvuelven entre el Estado y las organizaciones sindicales, y en particular el tipo y grado de autonomía que los sindicatos pueden tener respecto de un Es-

<sup>31</sup> *Barricada*, 7 de setiembre de 1983.

<sup>32</sup> Cf. por ejemplo *Barricada*, 1º de octubre de 1982.

tado cuyas bases sociales fundamentales son las masas trabajadoras, y que se define, por esto y por el proyecto que asume, como un Estado popular.

En secciones anteriores de este capítulo se ha señalado que, en general, la posición del FSLN, de sus propias centrales sindicales y de las instancias unitarias que promueve, consiste en adjudicar a los sindicatos el papel de instancias de transmisión entre los trabajadores y la administración de las empresas. Algunos observadores han efectuado críticas de las manifestaciones iniciales de este enfoque, señalando que en la práctica conduciría a reducir a la organización sindical a un mero instrumento sin autonomía real, y en definitiva a su conversión en meros aparatos del Estado.<sup>32</sup>

Es innegable que en algunos segmentos del Estado e incluso del FSLN, tendencias y experiencias de este tipo han existido y existen; ellas han sido denunciadas por la Dirección Nacional del FSLN en oportunidades reiteradas.<sup>33</sup> Sin embargo, nuestra impresión es que la práctica de cuatro años de organización sindical demuestra la efectiva existencia de una autonomía respecto del Estado, y que la adhesión a un proyecto político común refuerza dicha autonomía —aunque el margen efectivo de ella es el producto de la capacidad de acción, de iniciativa, y de la representatividad de los dirigentes, y de la combatividad de las bases. Esto no implica afirmar empero que no existen tensiones y contradicciones entre las organizaciones sindicales y algunos ámbitos del gobierno y de la administración estatal, o que no se detecten superposiciones o confusiones de niveles. No sólo el movimiento obrero carece de cuadros suficientes y experimentados y de tradición en este tipo de problemas; las mismas limitaciones existen en el Estado y en ciertos niveles del FSLN.<sup>34</sup> Por otra parte, no es su-

<sup>32</sup> Por ejemplo H. Weber (1981), cap. 6; van Eeuwen (1982).

<sup>33</sup> Por ejemplo: "Nos encontramos nosotros conque a veces se quiere usar a las masas como apaga-fuegos cuando hay conflictos, y como instrumentos estáticos cuando no los hay" (Comandante C. Núñez: 1980c, pág. 16); cf. asimismo el discurso del Comandante de la Revolución Tomás Borge en ocasión del II Aniversario del 19 de Julio (*Barricada*, 20 de julio de 1981).

<sup>34</sup> Una cuestión frecuente es la circulación de cuadros entre las organizaciones de masas, el Estado y el FSLN. Por ejemplo Iván García, primer Secretario General de la CST, fue posteriormente responsable nacional de las Milicias Populares Sandinistas; Natán Sevilla, experimentado dirigente sindical de los maestros, pasó del viceministerio de Bienestar Social al Departa-

ficiente señalar el carácter de canal de transmisión de las organizaciones sindicales respecto del Estado; es necesario determinar cuál es el significado real, en la etapa actual del proceso revolucionario, de esa caracterización.

Las intensas movilizaciones obreras que se desarrollaron durante el primer semestre de 1981 respecto de la descapitalización y vaciamiento de empresas por sectores de la burguesía, ofrece una buena oportunidad para dar a las reflexiones sobre el tema un referente objetivo. En marzo de 1980 la JGRN sancionó un decreto que trataba de poner freno a ciertas prácticas empresariales de descapitalización, desinversión, exportación clandestina de activos, falta de atención al proceso productivo, que dificultaban adicionalmente la recuperación de la economía nacional. La medida se adoptó como resultado de movilizaciones sindicales y de la preocupación del FSLN por poner en marcha rápidamente el aparato productivo. La evaluación del Programa Económico 1980 reveló que en general la empresa privada no había respondido a las expectativas depositadas en ella, y que juntamente con el endurecimiento del bloque opositor, incrementaba el recurso a maniobras de descapitalización.

Desde inicios de 1981 las denuncias de la CST y la ATC fueron subiendo de nivel, y se organizaron movilizaciones, ocupaciones y tomas de fábricas y de tierras, demandándose la modificación del decreto de marzo 1980 y la confiscación de los empresarios que incurren en esas prácticas. Las movilizaciones obreras encontraron eco en la Dirección Nacional del FSLN; en junio el Comandante de la Revolución Jaime Wheelock denunció algunos casos notorios de descapitalización y fuga de divisas, agregando que

... la actitud antipatria de algunos sectores de la empresa privada nicaragüense está poniendo en peligro la supervivencia de ese tipo (mixto) de economía. Si aquí vamos a tener una economía que robe y descapitalice, preferimos cerrar por completo ese tipo de economía.<sup>35</sup>

mento de Relaciones Internacionales del FSLN; posteriormente fue destacado a la CST y a fines de 1981 fue designado, por asamblea de asociados, Secretario General de ANDEN. Varios ejemplos más podrían agregarse a éstos.

<sup>35</sup> *El Nuevo Diario*, 13 de junio de 1981.



Días más tarde, en la clausura de una asamblea de trabajadores, el Comandante de la Revolución Bayardo Arce denunció que el comportamiento descapitalizador de muchos empresarios obedecía a una

programación del imperialismo para desestabilizar la Revolución.<sup>37</sup>

Es decir, la Dirección Nacional el FSLN tomaba las demandas y movilizaciones obreras y las proyectaba en un nuevo nivel: ya no se trataba solamente de atentar contra las metas de la programación económica (primer nivel de la cuestión) sino que se estaba en presencia de maniobras impulsadas o inspiradas por el imperialismo y que, en consecuencia, cuestionaban la legitimidad del esquema de economía mixta en cuya virtud se aceptaba la permanencia de la burguesía en la nueva etapa (segundo nivel).

La respuesta de las organizaciones obreras no se hizo esperar. Las movilizaciones se incrementaron, las tomas de tierras, ocupaciones de empresas, gestión directa de la producción por los propios obreros se hicieron más amplias; a la CST y la ATC se sumaron la UNAG, los CDS, AMNLAE, las organizaciones de la juventud, de los estudiantes, con la consigna de inmediata confiscación contra la descapitalización. Se organizaron marchas multitudinarias hacia la sede de la JGRN con esa demanda; las cuatro organizaciones sindicales del FSLN —ATC, CST, FETSALUD y ANDEN— agregaron además la demanda de que se expulsara de sus funciones a los técnicos y administradores del APP que derrocharan los recursos de las empresas o fueran negligentes en su gestión.<sup>38</sup> Todas las organizaciones populares de los departamentos de Matagalpa y Jinotega enviaron a la JGRN y al Consejo de Estado una *Carta de la Justicia* reclamando la confiscación de los terratenientes que descapitalizaban;<sup>39</sup> en Granada ocurrió algo similar;<sup>40</sup> largas listas con el nombre de las empresas y haciendas donde se habían registrado prácticas de descapitalización y abandono

<sup>37</sup> *Barricada*, 16 de junio de 1981.

<sup>38</sup> *Barricada*, 25 de junio de 1981.

<sup>39</sup> *Barricada*, 27 de junio de 1981.

<sup>40</sup> *Barricada*, 9 de julio de 1981.

fueron dadas a publicidad por la ATC y por sindicatos afiliados a la CST, que en la mayoría de los casos procedieron a tomar las empresas;<sup>41</sup> en una declaración conjunta la ATC y la CST plantearon que la disyuntiva real era "control obrero o descapitalización";<sup>42</sup> el Ministerio de Justicia se hizo eco de las reclamaciones populares y denunció que en reuniones de empresarios nicaragüenses con organizaciones empresariales de Centroamérica y América Latina, se habían discutido estrategias comunes para facilitar los procedimientos de descapitalización;<sup>43</sup> la ATC del departamento algodonero de León lanzó un plan de lucha exigiendo la confiscación inmediata de quienes descapitalizaran o no pusieran en producción sus tierras, agregando que

los trabajadores tomarán la iniciativa para hacerlas producir.<sup>44</sup>

La II Asamblea por la Unidad de los Trabajadores reclamó por su parte que, ante la denuncia de un acto de descapitalización, la empresa fuera intervenida inmediatamente mientras durara la investigación.<sup>45</sup>

El Secretario General de la CST, Lucio Jiménez, en una asamblea de trabajadores convocada bajo la consigna "Contra la descapitalización, exigimos confiscación", planteó:

Los trabajadores no podíamos seguir a la defensiva (...); debíamos pasar de manera inmediata a la ofensiva, en una lucha clara, no contra cualquier elemento o contra uno o dos administradores de la burguesía o contra uno o dos patrones, sino pasar a la lucha inmediata y golpear contundentemente a la burguesía como clase.<sup>46</sup>

Poco después denunciaba la benevolencia con que algunos funcionarios estatales encaraban el problema:

<sup>41</sup> Por ejemplo, *Barricada*, 20, 26 y 19 de junio de 1981; 1º y 2 de julio de 1981.

<sup>42</sup> *Barricada*, 26 de junio de 1981.

<sup>43</sup> *Barricada*, 22 de junio y 2 de julio de 1981.

<sup>44</sup> *Barricada*, 2 de julio de 1981.

<sup>45</sup> *Los Trabajadores*, 16 de julio de 1981.

<sup>46</sup> *Barricada*, 2 de julio de 1981.

Hay organismos del Estado que parecieran ser cómplices de la descapitalización, porque dan plazos a los empresarios para inventar libros financieros.<sup>47</sup>

Esta elevación rápida del nivel y los alcances políticos de las movilizaciones sindicales alarmaron a la burguesía, que denunció la existencia de una campaña del FSLN contra la empresa privada y el proyecto de economía mixta.<sup>48</sup> Pero en determinado momento apareció un desfase entre esta evolución del activismo popular y el propio Estado: el Ministerio del Trabajo emitió a fines de julio de 1981 un comunicado prohibiendo los paros, huelgas, tomas de tierras y de empresas con motivo de denuncias de descapitalización; el comunicado no contemplaba ninguna sanción para los infractores,<sup>49</sup> pero la CST declaró públicamente su desacuerdo con el mismo.<sup>50</sup> Sin embargo un comunicado de la JGRN respaldó "categóricamente" la posición del Ministerio del Trabajo.<sup>51</sup>

Para entonces el clima de agitación laboral y política se había visto reforzado por el anuncio de la próxima sanción de una nueva ley contra la descapitalización, que incorporaba varios de los reclamos y sugerencias de las organizaciones obreras, y de la pronta sanción de la ley de Reforma Agraria. En agosto el Consejo de Estado aprobó finalmente la nueva ley; pero ésta, además de incorporar las iniciativas de las organizaciones populares —confiscación, medidas preventivas, etc.— dispuso en su artículo 4 la prohibición de realizar

cualquier acción tendiente a modificar por las vías de hecho las relaciones de producción en las empresas.<sup>52</sup>

Aunque el texto de la ley es enunciativo y no contempla sanción por no cumplimiento, suscitó la abierta oposición, du-

<sup>47</sup> *Barricada*, 16 de julio de 1981.

<sup>48</sup> *La Prensa*, 27 y 28 de junio, y 1<sup>o</sup> de julio, 1981.

<sup>49</sup> *El Nuevo Diario*, 27 de julio de 1981. El comunicado estaba firmado por el entonces viceministro, Lic. Edgar Macías, en esa época presidente del Partido Popular Social Cristiano. Posteriormente Macías habría de entrar en contradicción con la revolución; alejado del viceministerio por decisión de la JGRN, sería separado más tarde de la presidencia del PPSC, abandonando finalmente el país.

<sup>50</sup> *Barricada*, 27 y 31 de julio de 1981.

<sup>51</sup> *Barricada*, 28 de julio de 1981.

<sup>52</sup> *La Gaceta*, 199 (3 de octubre de 1981).

rante los debates en el Consejo, de todos los representantes de organizaciones sindicales incluidos los representantes de la CST y la ATC, aunque fue apoyado en cambio por los representantes del FSLN.<sup>53</sup> Con la vigencia de la ley las denuncias sobre prácticas de descapitalización no han cesado, pero en general se han desenvuelto con niveles de movilización de menor intensidad, y sin el recurso a medidas de acción directa.<sup>54</sup>

Hemos dedicado tanto espacio a este caso porque pensamos que él ilustra con claridad la manera en que las movilizaciones obreras en torno a una cuestión de gran importancia para el avance de la revolución, se articulan con las orientaciones de conjunto de la vanguardia revolucionaria. De reivindicaciones específicas sobre puntos concretos, dirigidas contra sectores delimitados de la burguesía, se pasa a la articulación de esas reivindicaciones a una perspectiva política más amplia, a un mismo tiempo antiimperialista y clasista. En determinado momento las movilizaciones obreras incorporan al conjunto de las organizaciones populares, y agudizan las contradicciones de clase fundamentales. Estas contradicciones involucran también a sectores técnicos y profesionales con solidaridades ideológicas hacia las fracciones descapitalizadoras de la burguesía. Asimismo, la ampliación y profundización de las movilizaciones populares pone en tensión el proyecto de economía mixta y por lo tanto de alianza con algunos sectores de la burguesía impulsado por el FSLN. En este momento, el Estado interviene para acotar el activismo obrero y popular al mismo tiempo que institucionaliza lo fundamental de sus reivindicaciones, a partir de una nueva correlación de fuerzas que testimonia el avance político-ideológico de las clases populares en el proyecto de la revolución.

Otros casos podrían plantearse en el mismo sentido,<sup>55</sup> pero creemos que con lo señalado es suficiente para advertir que

<sup>53</sup> *El Nuevo Diario*, 31 de julio de 1981.

<sup>54</sup> Cf. por ejemplo, *El Nuevo Diario*, 26 de agosto de 1982, *Barricada*, 11 de julio y 9 de setiembre de 1982, y 15 de setiembre de 1983.

<sup>55</sup> Por ejemplo la reciente polémica suscitada entre ANDEN y el Ministerio de Educación en torno a la calidad de la educación y el rendimiento escolar. Tanto el Secretario General de ANDEN como el Ministro de Educación son miembros del FSLN, lo cual no obstó a la franqueza de la polémica ni a la amplia publicidad que se le acordó (cf. *El Nuevo Diario*, 4 y 5 de agosto de 1983, *Barricada*, 4, 5 y 6 de agosto de 1983). Posteriormente, AMNLAE

la realidad es demasiado fluida y compleja, y los participantes en ella demasiado activos, como para formular conclusiones tajantes y definitivas. En todo caso parece tendencioso afirmar, a partir de los datos que brinda esa compleja y dinámica realidad, la existencia de una posición autoritaria que adormecería la capacidad de crítica y autonomía de las organizaciones sindicales (cf. por ejemplo H. Weber 1981). Como señalamos anteriormente, si alguna evidencia es posible extraer del desarrollo de la Revolución Popular Sandinista, ella consiste precisamente en que los avances y la consolidación de dicho proceso se basan en la capacidad de movilización y de lucha organizada de sus clases fundamentales, y en la dinámica articulación dialéctica —por lo tanto, que no excluye la existencia de contradicciones— entre esas clases y una organización política que se ratifica a diario como su vanguardia, como resultado precisamente del desenvolvimiento de dicha relación.

Las contradicciones que se generan obedecen a dos factores básicos que han sido ya señalados pero en los cuales conviene insistir brevemente. Por un lado, la vigencia de un proyecto de unidad nacional y economía mixta con hegemonía popular, en el cual la vanguardia política debe garantizar que el dinamismo de las fuerzas hegemónicas no ponga en peligro las alianzas en que el proyecto se apoya; en concreto, que el activismo y la autonomía de las clases populares no alarme demasiado a una clase tan propensa a alarmarse como la burguesía nicaragüense, pero de la cual el proyecto revolucionario espera aún un comportamiento inversionista adecuado. En estas condiciones, la posición del gobierno revolucionario e incluso del FSLN, respecto de las demandas y las movilizaciones obreras y populares, estará siempre fuertemente condicionada por la coyuntura y por la evolución de la economía. Por otro lado, este proceso, que siempre es complejo y cargado de

crítico fuertemente y de manera pública, el proyecto de ley que establece el Servicio Militar Patriótico preparado por el Ministerio de Defensa —cuyo titular es el Comandante de la Revolución Humberto Ortega. AMNLAE objetó que el proyecto limitara la incorporación al servicio activo a los hombres. Después de movilizaciones y debates consiguió que el texto aprobado por el Consejo de Estado contemplara la incorporación de mujeres al servicio activo, aunque con carácter voluntario. Estos y otros ejemplos señalan la efectiva existencia de autonomía entre las organizaciones de masas y el Estado, y la práctica de la crítica.

tensiones, resulta mucho más complicado y difícil en una sociedad como Nicaragua, sin tradición democrática, con poca experiencia previa en organización sindical; con una clase obrera que hasta hace menos de cuatro años era analfabeta en su gran mayoría, y con una economía dominada y deformada como pocas. Más aún, una sociedad que, porque impulsa un proceso revolucionario, debe hacerle frente en esas condiciones tan precarias a las agresiones económicas, a la propaganda tendenciosa, a los ataques militares de la contrarrevolución, y a las amenazas de invasión por el imperialismo norteamericano.

Así las cosas, se comprende que hoy, para la dirección revolucionaria,

Gestión obrera es velar porque la producción en medio de las agresiones no se detenga, es ahorrar materia prima y hacer buen uso de los recursos.<sup>36</sup>

## 6. Democratización de la producción y disciplina obrera

El desarrollo de la participación obrera en la gestión económica ha significado una democratización del proceso productivo en amplias áreas de la economía. La participación obrera, en sus diferentes modalidades, introdujo fracturas profundas en el principio de autoridad tradicional. No se trata de un quiebre total, y tampoco tiene similar alcance en todos los ámbitos en que ella se desenvuelve; pero ha implicado un cuestionamiento efectivo a los patrones prevalecientes de dirección de las empresas. En los casos en que los directivos o administradores han ofrecido resistencia, ésta, lejos de inhibir la iniciativa sindical, ha determinado un incremento en las movilizaciones, y el recurso político a la intervención del FSLN.

Este cuestionamiento se produce antes que otros criterios superiores de autoridad reemplacen a los que se rechazan. Lo

<sup>36</sup> Comandante de la Revolución Víctor Tirado, en *Barricada*, 23 de octubre de 1983.

que generalmente se denomina *indisciplina laboral* se refiere a este vacío temporal, propio de todo proceso revolucionario, durante el cual los viejos criterios de autoridad se desvanecen, y aún no surgen criterios nuevos. Por lo tanto, más que como una prueba de indisciplina obrera, deberían ser pensados como una manifestación de la lucha obrera por transformar las relaciones de producción vigentes.

No es ocioso recordar que el concepto de *disciplina laboral* no es socialmente neutro. Cada sistema de producción, y en general cada tipo de sociedad, tiene sus propios criterios de disciplina en el trabajo. En el capitalismo la disciplina se basa en la explotación de los trabajadores, en la desorganización de la fuerza de trabajo, en la existencia —sobre todo en el capitalismo dependiente— de elevados niveles de desempleo y subempleo. Los altos niveles de eficiencia y productividad que el capitalismo ostenta se basan en esos elementos: el férreo control de la mano de obra mediante prácticas policíacas dentro y fuera de la empresa; la represión o la manipulación patronal de las organizaciones sindicales; la posibilidad de sustituir a los trabajadores *indisciplinados* por la existencia de una masa de gente sin trabajo. Es así que lo que desde la óptica del capital es "eficiencia productiva" y "disciplina laboral", desde la perspectiva de los trabajadores resulta ser explotación y represión.

Cuando, como resultado de una revolución, la sociedad se transforma y los trabajadores y el pueblo en general surgen como la base y los protagonistas del nuevo poder, la organización social de la producción se transforma y cambian también, por lo tanto, los criterios de eficiencia y disciplina laboral. La imagen burguesa de la disciplina como sumisión obrera, como capacidad de explotar a los trabajadores, es desplazada —a veces violentamente— por criterios de disciplina basados en el protagonismo político-sindical del proletariado, en su responsabilidad clasista, en su patriotismo.

Se trata de un proceso difícil y lleno de contradicciones. Es inevitable que en los primeros momentos de las transformaciones revolucionarias, la euforia popular y el entusiasmo de los trabajadores provoquen desatención al rendimiento del proceso de trabajo. La voluntad de eliminar todo vestigio de presencia de la vieja clase dominante hace que a veces eso se logre a costa del mantenimiento de los medios de producción

que acaban de ser apropiados; otras veces da la impresión de que hay algo así como un querer cobrarse a título personal las cuentas pendientes de toda una vida de explotación, injusticia, subordinación. Se trata de fenómenos que se observan en los momentos iniciales de toda revolución social; reacciones normales frente al viejo orden de explotación y miseria. En el fondo, testimonian a su manera la voluntad de las masas de liquidar un orden social injusto y hacer realidad su propia emancipación. Además, los reclamos de mayor productividad y eficiencia son formulados sobre todo por la burguesía; es comprensible entonces que algunos sectores de la clase obrera consideren al principio que, en el marco del proceso revolucionario, la preocupación por la disciplina laboral y la productividad del trabajo son "resabios burgueses" que los auténticos revolucionarios deben superar.

Por lo tanto ya es un lugar común señalar la caída de la productividad del trabajo después del triunfo de una revolución, y la Revolución Sandinista no ha sido una excepción. No obstante se trata, en este caso, de afirmaciones generales apoyadas por observaciones dispersas y anécdotas generalmente cargadas de un aroma antiobrero. Hasta el momento nadie ha aportado información sistemática sobre esta cuestión, y las consideraciones genéricas, o las ilustraciones, se refieren todas a los momentos iniciales de la revolución —fines de 1979, comienzos de 1980 (Foladori 1982; Colburn 1983). La situación posterior ha merecido apreciaciones contradictorias por parte de diferentes ámbitos del gobierno revolucionario.<sup>37</sup>

La información disponible indica, empero, que la productividad del trabajo se ha recuperado con posterioridad al triunfo de la revolución. En efecto: una investigación exploratoria del Ministerio del Trabajo sobre la evolución de la productividad física del trabajo en la industria manufacturera indica que tras la caída de los niveles de productividad durante 1978 y la primera mitad de 1979, durante el segundo semestre de 1979 y todo 1980 se experimentó una rápida recuperación (CETRA 1982). El cuadro V.4 muestra, sin embargo, que el aumento de la productividad posterior a julio 1979 tuvo lugar en los es-

<sup>37</sup> Compárese por ejemplo las declaraciones de sentido opuesto en *Barrienda*, 8 de noviembre de 1982, y *El Nuevo Diario*, 9 de febrero de 1983.



Cuadro V.4

Evolución de la productividad física del trabajo en la industria manufacturera, por tamaño de empresa  
(En números índice)<sup>a</sup>

Período	Empresas grandes <sup>b</sup>		Empresas chicas <sup>c</sup>		Total	
	Índice	Variación (en %)	Índice	Variación (en %)	Índice	Variación (en %)
2º semestre 1977	100.0	—	100.0	—	100.0	—
1º semestre 1978	99.8	- 0.2	98.4	- 1.6	96.9	- 3.1
2º semestre 1978	86.5	- 13.2	97.5	- 0.9	88.7	- 8.4
1º semestre 1979	67.4	- 22.1	69.0	- 29.2	69.7	- 21.4
2º semestre 1979	87.0	+ 29.0	59.1	- 14.2	85.5	+ 22.6
1º semestre 1980	108.3	+ 24.5	61.9	+ 5.1	102.2	+ 19.5
2º semestre 1980	103.3	- 4.6	66.9	+ 8.1	98.3	- 3.8
1º semestre 1981	106.9	+ 3.5	61.0	- 8.8	100.3	+ 2.0
Promedio		+ 2.4		- 5.9		+ 1.0

<sup>a</sup> Base: 2º semestre 1977 = 100.

<sup>b</sup> Empresas con un volumen de empleo productivo de más de 50 trabajadores.

<sup>c</sup> Empresas con un volumen de empleo productivo de hasta 50 trabajadores.

Fuente: Tomado de CETRA (1982).

tablecimientos grandes, mientras que en los chicos la caída no ha cesado.<sup>38</sup>

Estos resultados concuerdan con los que surgen del análisis de las encuestas industriales; en el cuadro V.5 se aprecia el fuerte crecimiento de la productividad del trabajo en la industria manufacturera en el período 1979-81.

En el capítulo anterior se vio sin embargo que este crecimiento no fue uniforme en toda la industria. En los primeros años después del triunfo la productividad del trabajo fue más baja y evolucionó más lentamente en las empresas del APP que en el sector privado (cf. cuadro IV.2).

Aunque no se dispone de información sobre la situación en el campo después de los desajustes iniciales, la evidencia pre-

Cuadro V.5

Nicaragua: Evolución de la productividad del empleo industrial, 1979-1981

Años	(1) Empleo*	(2) Valor agregado**	(3) Productividad* (2:1)
1979	33.446	1.843,4	55.117
1980	45.040	3.941,8	87.518
1981	47.472	4.836,7	101.886
<i>Tasas de crecimiento (%)</i>			
1980/79	34,7	113,8	58,8
1981/80	5,4	22,7	16,4
1981/79	41,9	162,3	84,8

\* Personas ocupadas.

\*\* Millones de córdobas de 1980.

\* Córdobas de 1980.

Fuente: Elaboración propia de cifras de INEC (1979, 1980, 1981b).

<sup>38</sup> De acuerdo al CETRA, la recuperación de la productividad del trabajo se explicaría por la reactivación de la economía a partir del segundo semestre de 1979, fundamentalmente como efecto del papel dinamizador del sector público.

sentada aquí obliga a tener cautela en lo que toca a la relación entre transformaciones sociales, disciplina laboral y productividad del trabajo. Además, el aumento de la productividad registrado por el estudio del Ministerio del Trabajo y por las encuestas del INEC, tuvo lugar en condiciones que es importante recapitular, aunque sea en forma breve. *En primer lugar*, un rápido y amplio desarrollo de la organización sindical de los trabajadores; *segundo*, intensas movilizaciones laborales y políticas; *tercero*, cambios profundos en el régimen de propiedad de las empresas, en el personal directivo y en los criterios de administración; *cuarto*, una crisis económica que entorpece el funcionamiento normal de las empresas (falta de insumos, repuestos, reducción de las exportaciones); *quinto*, condiciones tecnológicas constantes; *sexto*, un proceso inflacionario relativamente acelerado que provoca el deterioro del salario real.<sup>29</sup>

El hecho que en estas condiciones la productividad haya crecido, sugiere que la asociación frecuente entre transformaciones sociales e indisciplina laboral carece de fundamentación, por lo menos en lo que toca a la Revolución Sandinista. Asimismo, demuestra que la preocupación de las organizaciones sindicales por la elevación de la eficiencia del proceso de trabajo no se queda en las meras palabras, y testimonia la responsabilidad de clase y el compromiso político de los trabajadores con la revolución.

<sup>29</sup> El aumento del índice de precios al consumidor entre 1979 y 1981 fue de casi 60 %. Este tema será retomado en el capítulo VII.

## CAPÍTULO VI

### Democracia popular y lucha ideológica: el caso de la educación

#### 1. Introducción

En el proceso de formación del Estado capitalista, el concepto de *ciudadano*, como sujeto político de ese Estado, se construyó a partir de la propiedad de medios de producción. En una época en que la ideología burguesa no recurría a los circunloquios, Adam Smith fue particularmente claro:

En la medida en que el Estado ha sido instituido para la defensa de la propiedad, ha sido instituido en realidad para la defensa del rico contra el pobre, de los que tienen alguna propiedad contra los que no la tienen.<sup>1</sup>

Por lo tanto sólo los propietarios tienen derecho a participar en política:

¿Qué derecho razonable pueden tener los que carecen de propiedad, para legislar sobre la propiedad de otros? ¿Qué mo-

<sup>1</sup> "Civil government, so far as it is instituted for the security of property, is in reality instituted for the defense of the rich against the poor, or of those who have some property against those who have none at all". A. Smith (1776), II, 236.

tivo o interés común existe entre estas dos categorías de habitantes?<sup>2</sup>

Estas transcripciones de representantes lúcidos de una clase en ascenso son apenas formulaciones concisas del pensamiento democrático burgués predominante en la época (cf. Wittmer 1943; Williamson 1960). Su contraste con la realidad de las democracias capitalistas del siglo XX demuestra que lo que hoy se conoce como *democracia burguesa* (sufragio universal, derecho a la libre asociación, jornada laboral reducida, etc.) es más el producto de la lucha de los trabajadores por obtener el reconocimiento de sus derechos políticos y sociales, que la aplicación de la concepción clasista originaria (Therborn 1977, y *supra*, capítulo I).

Estas luchas, empero, tuvieron como resultado, y a veces también como objetivo, la participación en un sistema político que en definitiva respondía a, y expresaba, intereses de clase que les eran ajenos. Se incorporaban a la participación política reproduciendo su condición de clases subalternas. Hubo así, por lo tanto, ciudadanos *de primera* y ciudadanos *de segunda*.

¿Cuál es la situación que se presenta en un proceso revolucionario de construcción de un Estado *democrático-popular*? ¿Cuál será el sujeto político de este proceso, el perfil real del *ciudadano* de este nuevo Estado? La Revolución Popular Sandinista ofrece una respuesta a estos interrogantes. No es la única respuesta posible, pero es una respuesta remarcable por su originalidad, y por el cúmulo de dificultades y de agresiones en medio de las cuales tiene que desenvolverse.

En el capítulo anterior se enfocó una dimensión importante de este proceso: la democratización de las relaciones de producción a través del desarrollo de la participación obrera en la gestión económica. En éste, se presta atención a la incorporación de las organizaciones de masas a la definición y ejecución de la política educativa de la revolución.

La escogencia de la educación como objeto central de la discusión de este capítulo obedece a varias razones. La educa-

ción es una parte o región de la dimensión político-ideológica de una formación social, a un mismo tiempo *producto* de la lucha de clases y *ámbito* de la misma. Esto significa que la educación presenta contradicciones que le son propias a la par que actúa como una instancia de procesamiento —o de condensación, según los casos— de contradicciones que pertenecen a otros ámbitos de la sociedad. Esta capacidad para procesar contradicciones generadas fuera de su propio ámbito es una de las características de la educación en la Revolución Popular Sandinista que más posibilidades ofrece para el análisis sociopolítico; la intensidad que el debate en torno a las transformaciones educativas ha adquirido en Nicaragua no se explica si no se advierte que se trata de una confrontación de proyectos políticos distintos, y no simplemente de discrepancias técnico-pedagógicas. Finalmente, se ha escogido a la educación porque es uno de los aspectos más conocidos de la Revolución Sandinista, situación que nos permite reducir considerablemente la parte descriptiva de la exposición.

## 2. Democracia popular y Nueva Educación

El desarrollo de la Nueva Educación presenta un caso revelador de las proyecciones de la participación popular en la concepción sandinista de la construcción de una democracia.

Inmediatamente después del triunfo sobre la dictadura, el FSLN se dispuso a encarar audaces transformaciones en el campo educativo, incorporando a él a las clases populares. La Cruzada Nacional de Alfabetización (CNA) redujo la tasa nacional de analfabetismo de 50.4 % a 12.9 % en sólo cinco meses, alfabetizando a medio millón de adultos. Paralelamente se llevó a cabo una fuerte expansión de la matrícula escolar; entre 1978 y 1983 la matrícula total se duplicó, pero en algunos niveles particularmente abandonados por la dictadura —educación de adultos sobre todo, y también educación pre-escolar y especial— el salto fue espectacular (cf. el cuadro VI.1). El crecimiento tan rápido de la matrícula en todos los niveles ha repercutido en las tasas de escolaridad; los niveles actuales distan aún de los ideales, pero el avance ha sido muy rápido, sobre

<sup>2</sup> "Society was instituted for the protection of property; quarrels about property would naturally give rise to it. What reasonable claim can they have, who have no property of their own, to legislate on the property of others? What common motive and common interest is there between these two prescriptions of inhabitants?" Th. Cooper (1829), pág. 363.

Cuadro VI.1

Nicaragua: Evolución de la matrícula escolar, 1978-1983  
(en miles)

Educación	1978	1979/ 1980	1980/ 1981	1982	1983 <sup>a</sup>
Pre-escolar	9.0	18.2	30.5	38.5	61.4
Primaria	369.6	431.1	503.5	534.9	579.2
Media	98.8	110.7	139.7	139.9	161.6
Superior	23.7	29.1	34.7	33.8	39.7
Especial	.3	—	1.4	1.5	1.8
De adultos	—	—	167.8 <sup>b</sup>	148.3	161.3 <sup>c</sup>
Totales	501.6	589.3	877.7	897.2	1005.3

<sup>a</sup> Cifras programadas.

<sup>b</sup> Segundo semestre.

<sup>c</sup> Preliminar para el primer semestre.

Fuente: MED (1983).

todo en la educación primaria: de 65 % en 1978 a 80 % en 1980. Coincidentemente el presupuesto de gastos del sector educativo, que en 1978 representaba sólo 1.4 % del PIB, subió a 3.4 % en 1980 y a 5 % en 1983, representando este año 11.5 % del presupuesto de gastos del Gobierno de Reconstrucción Nacional (MED 1983b: 147).

Las cifras anteriores son reveladoras por su magnitud y por el corto tiempo que tomó su crecimiento, aunque informan solamente de una parte de la Nueva Educación nicaragüense. La ampliación de la matrícula ha sido acelerada y masiva; pero tan importante como esto es que el sistema educativo en el que dicha ampliación tuvo lugar es un sistema considerablemente diferente al que existía antes del triunfo revolucionario. La apertura del sistema educativo no ha consistido en distribuir "más de lo mismo", sino en poner a disposición del pueblo, y a través de la participación activa del pueblo, "más de otra cosa".

En efecto: los cambios que el sistema educativo ha experimentado en los últimos cuatro años son tan relevantes como el

incremento cuantitativo de la población incorporada a él. Más aún, ese incremento no habría sido posible sin aquellas transformaciones. No se aumenta de un año a otro la matrícula total en casi 300,000 personas, ni se alfabetiza en sólo cinco meses a casi medio millón de adultos en un país con graves problemas de integración física, si el propio sistema educativo no encara de manera decidida y muy rápida modificaciones profundas.

En primer lugar, esa transformación es un capítulo de un proceso más amplio de profundas transformaciones revolucionarias. La participación efectiva y organizada de las clases populares no es posible en medio de la ignorancia. El oscurantismo y el atraso cultural fueron la dimensión ideológica de una sociedad cuya reproducción se basaba en la explotación social y en la opresión política de las masas, y que encontraba en aquéllos, elementos adicionales de consolidación. La educación existente en el régimen somocista fue una de las formas que asumió, en el terreno ideológico, ese modo de reproducción de la sociedad capitalista dependiente. La Revolución Popular Sandinista, que reconoce en el campesinado, en la clase obrera y en las masas trabajadoras del campo y la ciudad, a sus fuerzas motrices, no podía sino asumir como una de las más urgentes prioridades la liberación de las masas populares respecto de la ignorancia. Para que ello fuera posible fue necesario liquidar a la dictadura; pero la eliminación de la dictadura por las armas sandinistas no podría consolidarse sin la emancipación del pueblo del atraso cultural.

La educación en la Revolución Sandinista no es entonces un mecanismo de reproducción: no lo es *ya*, ni lo es *todavía*. *Ya no es* un mecanismo de reproducción de la sociedad capitalista dependiente, sino al contrario una dimensión del proceso de liberación de las grandes mayorías populares de las condiciones materiales e ideológicas en que se reproducían como clases explotadas y oprimidas. Y *no es todavía* un mecanismo de reproducción, en la medida en que la nueva sociedad forma parte aún del horizonte de la construcción revolucionaria, y dentro mismo del proceso de construcción queda mucho aún por ser destruido y eliminado.

El desarrollo de la Nueva Educación, concebida e impulsada como un ámbito y un medio de emancipación de las clases populares, de la ignorancia y del atraso, y de ayudarlas a avanzar en la comprensión del mundo para transformarlo, se pre-



senta en consecuencia como un espacio de enfrentamiento y conflicto entre las fuerzas motrices de la revolución y los viejos portadores de un orden social en retroceso.

El encuadramiento de la Nueva Educación en un proceso revolucionario marca un contraste agudo con otras experiencias de reforma educativa en América Latina. En éstas la adhesión guardada en definitiva hacia la configuración capitalista dependiente de la estructura económica y sociopolítica —sin perjuicio de las modificaciones y modernizaciones que le fueron introducidas—, desplazó hacia el terreno educativo, y en general ideológico, las demandas populares de transformaciones sociales, limitándolas a la reducida capacidad de respuesta y de autonomía de unas reformas educativas sin correlato ni apoyo en la base material de la sociedad ni en la correlación de fuerzas predominante en el campo político-estatal. Las reformas educativas aparecen así, en el marco de estos procesos de modernización, más como un proyecto de las fracciones reformistas del bloque dominante, de presentar una alternativa no disruptiva a las tensiones generadas por la insatisfacción y las luchas populares, que como expresión de un proyecto alternativo de clase. O, por lo menos, como un cuadro de tensiones entre estos dos proyectos antitéticos donde la mediación de un Estado que es en definitiva producto y expresión de las clases dominantes —en un bloque de fuerzas a lo sumo hegemonizado por sus fracciones modernizantes y reformistas— garantiza la subordinación final —dinámica si se quiere, o transformista; pero no por ello menos real— a un esquema de poder que se reproduce sobre la base del mantenimiento de las clases populares como clases económicamente explotadas y políticamente subordinadas.

En *segundo lugar*, el paso acelerado de una educación de élites a una educación de masas, de una educación para la reproducción de un orden social injusto y opresor a una educación para la creación de un orden social liberador, es un salto cualitativo no sólo por los objetivos opuestos sino por las condiciones organizativas, metodológicas, etc., que deben ser satisfechas por el conjunto de la sociedad para que el nuevo horizonte pueda ser alcanzado. Debe destacarse, en este sentido, la importancia que ha tenido la participación de las organizaciones de masas en las transformaciones educativas.

En el esquema pedagógico tradicional el proceso educativo

se compone, básicamente, de dos agentes: el maestro —de hecho, un aparato del Estado— y el alumno. Podrá discutirse el tipo de relación que se desenvuelve entre ellos —unidireccional-vertical, bidireccional-horizontal, pasiva, participativa...—, pero ellos dos son los participantes privilegiados de la relación educativa. A lo sumo se acepta la presencia, en el ámbito de la educación básica, de los padres del alumno. Empero, aparte de ser más simbólica que efectiva, se reduce fundamentalmente a cuestiones disciplinarias y obedece en definitiva a la concepción del hijo-alumno como propiedad privada de sus padres, y a la propia incapacidad del *educando* —por su edad, su "rebeldía", su escaso desarrollo, su "inmadurez"...— para adoptar cierto tipo de decisiones: estudiar mucho y *portarse bien*. Es innegable que en algunas ocasiones se ha planteado asimismo la cuestión de la relación entre el ámbito predominante de la educación —la escuela— y la *comunidad*, pero la mayor parte de las veces ésta tiende a aparecer como una referencia *externa* al proceso educativo y en un papel eminentemente pasivo.

La Nueva Educación está rompiendo con este esquema al abrir paso a la participación de las organizaciones populares, tanto en la educación no formal como en la educación formal. Este involucramiento de las organizaciones de masas tiene lugar en la etapa de la ejecución de la política educativa y en la implementación efectiva del proceso educativo, como en la *definición* de la política. No se trata simplemente de democratizar los tramos finales del proceso educativo, ni de paliar con la participación del pueblo en la fase ejecutiva las limitaciones de recursos, sino de llevar progresivamente la totalidad del proceso educativo al seno de las clases populares. La dualidad Estado definidor de la política educativa/población ejecutora de la política educativa, si bien entraña un avance respecto de la concepción tradicional, no expresa sin embargo con propiedad la realidad de la Nicaragua revolucionaria. Ya que aquí es el pueblo, enrolado en sus propias organizaciones, quien orienta las definiciones y las modalidades fundamentales del proceso educativo.

La *comunidad*, como entidad abstracta y externa al proceso educativo, deja paso al *pueblo* como entidad concreta que diseña la nueva educación a partir de sus condiciones materiales de vida y de su participación efectiva en el proceso revolucio-

nario. La delegación de la ejecución de algunos aspectos de la política educativa para salirle al paso a la falta de suficientes recursos disponibles por el Estado, o a las quejas de los sectores directamente involucrados, es superada por la apertura de todos los tramos y dimensiones del proceso educativo a la participación masiva y organizada del conjunto de las clases populares. Al igual que en otros ámbitos del proceso revolucionario, la educación va experimentando un cierto movimiento que podríamos llamar de socialización, a medida que las organizaciones de masas van asumiendo una participación efectiva en sus diferentes aspectos. La sociedad toda deviene el sujeto activo del proceso educativo, y en la medida que se trata de un proceso educativo orientado por las propias clases populares, la educación se convierte progresivamente en un gigantesco proceso de auto-educación.

Tal vez el mejor testimonio de esta participación creciente de las masas en un proceso educativo de nuevo tipo, lo constituyen la Cruzada Nacional de Alfabetización y la Educación Popular de Adultos. De un total aproximado de 80.000 alfabetizadores, solamente unos 7.000 eran maestros de profesión; el resto consistía de estudiantes de segunda enseñanza y universitarios (unos 55.000), empleados públicos, amas de casa de barrios populares, obreros, etc.<sup>3</sup> En el caso de la Educación Popular de Adultos el panorama es similar: del total de 17.000 maestros populares que había a mediados de 1981, 70 % era analfabeta antes del 19 de julio de 1979. Vale decir que de cada 10 maestros populares, 7 son *recién alfabetizados*, y por lo tanto pertenecen a los sectores más explotados y oprimidos de la sociedad. Otra característica del maestro popular consiste en que sus tareas como docente no las desarrolla de manera profesional y al margen de las demás dimensiones de su vida cotidiana, sino integradas a ella.<sup>4</sup> En el mismo sentido, señalamos que al finalizar el primer semestre de 1981, de un total

<sup>3</sup> CE MED/DEI (1981); Miller (1982).

<sup>4</sup> "Los maestros populares son las clases que emergen y a través de su educación (que es autoeducación) se adueñan de la realidad y la transforman. Es por el origen de clase del maestro popular y por las características y naturaleza de su práctica educativa al interior de los Colectivos de Educación Popular, que cualquier contenido educativo que no tenga nada que ver con sus prácticas sociales cotidianas, es abortado, desechado y tirado al lugar de las cosas estériles e inútiles" (Castilla Urbina 1982a: 246-247).

de 14.175 Colectivos de Educación Popular (CEP) en funcionamiento, más de 84 % se situaba en las zonas rurales, donde asimismo se encontraba 81 % de la matrícula de la Educación Popular de Adultos.

Parece claro que un proceso educativo impulsado por las propias masas es un proceso de nuevo tipo. No sólo porque cambia la figura del maestro profesional por un maestro popular que es, él mismo, parte de la realidad en la que opera esta nueva educación, o porque el proceso educativo se lleva a cabo al margen de la tradicional institución escolar. Si no porque para que esto sea posible, es necesario llevar a cabo transformaciones no menos importantes en los métodos, los contenidos y los ámbitos físicos de la enseñanza. Para que las masas vivan como propio el proceso educativo, el corte entre éste y las modalidades concretas de la vida cotidiana —su inserción en las actividades de la producción, la defensa, el debate político-ideológico, etc.— debe ser superado. No se trata solamente de la cuestión escolar: *no por desescolarizada una educación deviene automáticamente educación popular*. Se trata de diseñar un sistema donde las clases populares sean el sujeto activo y directo del proceso educativo. La experiencia de Nicaragua, con sus alcances y limitaciones, demuestra que esto sólo es posible en el marco de un proceso revolucionario impulsado por las propias clases populares.

### 3. La Consulta Nacional de Educación

A principios de 1981 el Ministerio de Educación dirigió a todas las organizaciones de masas, partidos políticos, asociaciones de padres de familia, organismos sindicales, entidades empresariales, etc., una amplia consulta sobre los fines y objetivos de la Nueva Educación, sobre las formas educativas que deberían impulsarse, sus contenidos, las características que deberían asumir *el hombre nuevo* y *la sociedad nueva*. En medio de una intensa lucha ideológica y del rechazo de las organizaciones de la burguesía y los ataques contrarrevolucionarios, algo más de 50.000 personas, integradas a 30 organiza-

ciones de masas, partidos políticos incorporados a la revolución, sindicatos y otras organizaciones revolucionarias, democráticas, progresistas, participaron en todo el territorio nacional, durante dos semanas, en una intensa discusión colectiva sobre dichas cuestiones.<sup>3</sup>

La Consulta Nacional representó una extraordinaria experiencia de autoeducación para las organizaciones participantes. Para la gran mayoría de ellas se trató de la primera vez que tuvieron la posibilidad de discutir libremente sobre cuestiones tradicionalmente consideradas de naturaleza "técnica" y ajenas por lo tanto a la opinión de los sectores mayoritarios de la población. La riqueza de la información que se recogió, la fundamentación de las críticas, recomendaciones, demandas, caracterizaciones, etc., demuestran el carácter prejuicioso de aquellas consideraciones tradicionales y señala que, cuando existen condiciones propicias, no hay cuestiones que no puedan ser tratadas desde cierta perspectiva y en cierto nivel, por quienes carecen de las capacidades formales. En este sentido

<sup>3</sup> Cada organización, partido, asociación, etc., organizó a sus miembros en grupos de 10 personas. La discusión tuvo como guía un cuestionario de 55 preguntas, en su gran mayoría abiertas. Las respuestas no eran individuales sino colectivas. Un coordinador designado por el grupo redactó las conclusiones del debate para cada pregunta. En cada organización los grupos de discusión funcionaron a nivel municipal, aunque hubo participantes como la Cámara Nicaragüense de la Construcción, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, y otras, que por carecer de estructuras municipales respondieron directamente a través de sus instancias directivas. Cada organización efectuó un seminario de coordinadores de grupos municipales, para elaborar la *síntesis municipal* de cada organización, a partir de los documentos preparados por cada grupo. El mismo trabajo se hizo con las síntesis municipales de cada organización dentro de cada departamento (la *síntesis departamental*). Finalmente, cada organización elaboró su propio documento de *síntesis nacional*. Pero para reseñar la mayor riqueza posible de la información de base, la elaboración del análisis y el informe por el MED se llevó a cabo sobre la base de las síntesis municipales para cada organización. Es importante señalar que el proceso de la Consulta dentro de cada organización —la formación de los grupos, su representatividad, el carácter amplio de las discusiones, etc.— fue dejado a la entera responsabilidad de las respectivas organizaciones.

Los CDS son la organización que más participantes aportó a la Consulta: 49.8 %, y la que mayor cobertura geográfica alcanzó: 106 municipios. En conjunto las seis organizaciones del FSLN contribuyeron con 74.7 % de los participantes. Pero esto no sesgó los resultados, ya que en el análisis final las 30 organizaciones recibieron la misma ponderación, independientemente del peso de su participación poblacional o geográfica efectiva.

el desarrollo de la Consulta puede ser considerado un capítulo singularmente importante del proceso de democratización sustantiva de la sociedad nicaragüense, y como testimonio y producto de la esencia popular de dicho proceso.

Una proporción importante de las respuestas —sobre todo en lo referido a las demandas planteadas por los participantes de la Consulta, a la identificación de los obstáculos existentes para que las recomendaciones formuladas por los participantes se efectivicen, a la evaluación de las medidas educativas impulsadas por la revolución, y a la caracterización de las formas educativas a que recurren las organizaciones involucradas—, dice relación con el papel que desempeñan, o deberían desempeñar, las organizaciones de masas en el proceso educativo. Los participantes en la Consulta demandan mayor participación de las organizaciones en las tareas de la Nueva Educación, critican sus deficiencias operativas o la renuencia de algunos cuadros a participar más decididamente, reclaman la consolidación de las organizaciones, sugieren medios educativos y modalidades de acción que involucren directamente a estas organizaciones, etcétera.

Surge de estas respuestas la imagen de un proceso educativo en el cual las organizaciones populares tienen un amplio campo de acción; un proceso cuyo desarrollo y consolidación aparecen estrechamente ligados a la participación organizada del pueblo. Estas respuestas no son ajenas a la rica experiencia recogida por la CNA y por la misma participación en la Consulta Nacional: en uno y otro caso los resultados obtenidos se deben de manera sustancial al involucramiento dinámico, creativo y sistemático de las organizaciones de masas. Frente a la concepción tradicional de la relación educativa (maestro/alumno, o a lo sumo maestro/alumno/padres), separada además de toda determinación concreta derivada de la sociedad real, se define aquí un nuevo proceso educativo en el que las organizaciones del pueblo asumen un rol protagónico y nutren de contenido real a los protagonistas concretos de la Nueva Educación.

Este protagonismo del pueblo organizado en la educación, es en realidad un aspecto de una realidad social más amplia en la cual el pueblo en lucha aparece como su elemento central y permanente. Esto se advierte claramente en la caracterización mayoritaria de los tres principios básicos de la revolución. La



*democracia popular* es conceptualizada sobre todo como participación organizada del pueblo en el gobierno y en las tareas de la revolución; como construcción y práctica del poder popular.<sup>4</sup> El *nacionalismo* es visto como defensa de la soberanía nacional y del interés de las mayorías, y como derecho a la autodeterminación de los pueblos. El *antiimperialismo* fue caracterizado mayoritariamente como rechazo de toda dominación externa, como lucha contra el neocolonialismo, como solidaridad entre los pueblos que luchan por su liberación.

Las recomendaciones mayoritarias sobre diversos aspectos del proceso educativo demuestran similar orientación y énfasis en la participación popular y en la vinculación efectiva de la educación con la realidad de las clases populares y las tareas de la revolución. La gente reclama, sin dudas, más escuelas (técnicas, agrícolas, industriales, rurales, urbanas), más centros pre-escolares y de educación de adultos. Pero con similar énfasis demanda la actualización y reestructuración de los programas de estudio de acuerdo a la realidad nacional y local y a las necesidades del proceso revolucionario, incorporando los valores de la cultura popular. Los métodos y formas de enseñanza deberían incorporar de manera sistemática la participación conjunta de los maestros y los alumnos, la vinculación de la teoría con la práctica y del estudio con el trabajo, y desarrollar la capacidad creadora e investigadora de los estudiantes y su visión científica del mundo.

Como se señala en las conclusiones del *Informe Preliminar* del Ministerio de Educación:

En síntesis, las organizaciones que participaron en la Consulta Nacional demandan, en su mayoría, una nueva educación adaptada a la realidad nacional y al proceso revolucionario, con recursos materiales, económicos y financieros suficientes, y recursos humanos capacitados en pedagogía y esclarecidos política e ideológicamente. Una nueva educación que vincule el estudio con el trabajo y la teoría con la práctica. Abierta a las nuevas corrientes del pensamiento y que estimule la creatividad y el espíritu científico de los educadores y los estudiantes. Que innove en sus métodos, medios y formas, y se vincule a las organizaciones del pueblo.

<sup>4</sup> Solamente una organización (la Cámara Nicaragüense de la Construcción), única organización empresaria que aceptó la invitación a participar, mencionó a las elecciones como atributo de la democracia. Cf. MED (1981).

Una educación, en fin, que acompañe e impulse al proceso revolucionario; que elimine el egoísmo, el individualismo y el oportunismo, y contribuya a formar al hombre nuevo y a la nueva sociedad (MED 1980: 139).

#### 4. Dos proyectos antagónicos

Es evidente que el desarrollo de todas estas transformaciones no puede llevarse a cabo sin tensiones ni contradicciones.

En *primer lugar*, la contradicción entre la Nueva Educación, liberadora y productora en su propio ámbito de una sociedad de nuevo tipo, y la educación elitista, reproductora del viejo orden social, que aún perdura como la única forma posible de educación, en algunos sectores de la sociedad. El antagonismo entre la revolución y la contrarrevolución se procesa también en el ámbito educativo. No podía ser de otro modo, cuando el sistema educativo fue uno de los recintos donde se abroquelaba el poder de clase de la burguesía, y cuando la Nueva Educación no puede implantarse de manera automática, instantánea y simultánea en todos sus aspectos. Tanto más en una etapa de la revolución caracterizada por la unidad nacional de clases opuestas y basada en una economía mixta; que acepta, por lo tanto, la subsistencia de algunos sectores de las viejas clases dominantes. El acotamiento de sus bases materiales de reproducción —la regulación y fiscalización de la actividad económica por la nacionalización del sistema financiero y del comercio exterior, el desarrollo del APP, el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, la efectiva vigencia de la legislación laboral, el control de cambios...—, la consolidación y desarrollo de las organizaciones de masas, el progresivo fortalecimiento del Estado revolucionario, define a estas fracciones como clases subordinadas. Pero ello no significa que sean clases pasivas y que acepten con resignación una revolución cuyas fuerzas motrices son las clases populares, y que se asienta sobre la fuerza organizada del pueblo en armas. Si algo tienen en claro estos grupos de la burguesía, es que ésta *no es su revolución*.



A través del diario *La Prensa*, de las radioemisoras que permanecen en propiedad privada, de su presencia en algunos ámbitos de la educación privada, y de su articulación con sectores de la jerarquía de la Iglesia Católica, la burguesía ha tratado de dificultar el avance de la Nueva Educación, bien que con resultados exiguos.

La manipulación de los sentimientos religiosos fuertemente arraigados en grandes sectores del pueblo, y de la imagen burguesa del proceso educativo, trató de ser implementada como ariete contra los progresos de la revolución en este campo. Sobre todo en el período que va de noviembre 1980 hasta marzo-abril 1981, la educación se convirtió en uno de los ámbitos donde más intensamente se presentó la lucha ideológica de clases.<sup>7</sup> Pero el carácter burdo de la campaña de la burguesía, su retroceso como clase en todos los frentes, y el intenso y efectivo involucramiento de las masas en las tareas de la revolución —y no solamente en las tareas de la Nueva Educación— quitaron viabilidad a las maniobras de las viejas clases dominantes y las llevaron rápidamente al fracaso.

La estrategia de lucha ideológica de la burguesía, para tener éxito, depende de que sus mensajes y sus imágenes calen en el grueso de la población y la movilicen contra el Estado revolucionario. Con tal fin se manejan a través de un doble proceso de *reducción* y de *articulación*. El primero, apelando al *público* —en sí mismo, un concepto de factura burguesa— en su carácter de *padres* y de *cristianos*. El segundo, a través de la articulación de esa imagen del *padre cristiano* de conformidad con las resonancias más autoritarias de la ideología burguesa. Como resultado de este doble proceso de reducción/articulación, la Nueva Educación fue caracterizada como un proyecto de corte *totalitario* y *ateo* encaminado a resquebrajar la familia, minar la autoridad de los padres, y negar las creencias religiosas del pueblo:

...la participación de la sociedad civil y del Estado en asuntos de educación debe estar subordinada a los principios y valores

<sup>7</sup> Como se señaló en el capítulo IV, este período se caracterizó por un recrudescimiento general de la lucha de clases. En el ámbito educativo es el período de reinserción en el sistema formal, de los estudiantes que participaron en la Cruzada Nacional de Alfabetización, y de lanzamiento de la Consulta Nacional de Educación.

de los padres, pues sólo complementa la tarea de la familia. ...se da por establecido que vamos hacia una "democracia popular"; cualquier persona medianamente ilustrada conoce que ése es el nombre con que se disfrazan las dictaduras marxistas-leninistas del mundo (UPAFEC 1981).

Educación es acabar de dar forma —formar— al hombre que Dios comenzó. (...) Educación no es terminar obras de los hombres. Educación es terminar la obra de Dios. (...) Educación es terminar de dar al hombre las formas que Dios ha concebido. El modelo a seguir es el plan de Dios sobre los hombres. Traiciona a Dios quien forma a los niños y a los jóvenes con modelos que no son los de Dios. El hombre que hay que terminar en los niños y jóvenes que nos encomiendan, no es un hombre concebido por tal o cual filósofo, no es el hombre pensado por Rousseau, Freud, Marx o por Lenin, sino el hombre de Dios.

Y, porque somos (los padres) los encargados, somos los que debemos disponer todo lo relacionado con la educación de nuestros hijos. La responsabilidad es nuestra, no de otros. Nadie tiene derecho a meterse a disponer por nosotros cómo debe ser la educación de nuestros hijos.

¿Y cuál es la aportación fundamental del Estado en la educación? ¿Meterse a disponer todo lo relativo a educación de forma que los padres ya no tengan nada que disponer? ¿Meterse a educar directamente por medio de escuelas controladas por el Estado? El capitán del equipo de fútbol no es para sacar del campo a los otros diez jugadores y quedarse él jugando solo. El capitán del equipo es para coordinar el juego de los otros y tratar de asegurar que cada uno juegue bien la posición que le corresponde. El Estado no es para sacar a los padres del campo de la educación. La obligación del Estado es exactamente la contraria: asegurar que los padres tengan el papel que les corresponde, asegurar que los padres puedan de hecho educar bien a sus hijos; asegurar que los padres puedan de hecho decidir con absoluta libertad sobre la educación de sus hijos. Los verdaderos ministerios de educación deberían ser ministerios al servicio de las familias. Así serían si se respetase el plan de Dios.

(...) Pidámosle a Dios que algún día tengamos un orden así en Nicaragua. Sería la Nicaragua de Dios (Zavala Cuadra 1982).

Aun en Centroamérica, resulta poco frecuente encontrarse con una burguesía como la nicaragüense, a quien todavía a fines del siglo XX es necesario demostrarle que la educación universal, laica y gratuita, *no es* un engendro del comunismo.

Pero al adoptar este enfoque, la burguesía demostró ser, una vez más, víctima de sus propios prejuicios, y se condenó al fracaso. Porque el padre en el que la burguesía nicaragüense piensa es un padre/propietario de sus hijos, proyección doméstica de la imagen burguesa de la autoridad en la empresa y en el Estado, y la familia el ámbito donde ese padre/propietario/empresario ejerce los atributos de su autoridad. Y el cristiano que la burguesía tiene en mente es el ser aislado, ligado a través de una fe individual y pasiva a un Dios severo y dictatorial, autor de un orden social estático como reflejo y testimonio del carácter inmutable del orden celestial.\*

Solamente la ceguera histórica y el carácter decadente de sus intereses de clase pueden ayudar a explicar la fe y la esperanza —ya que no la caridad— que la burguesía y sus representantes intelectuales pusieron en esos símbolos. El padre/propietario y el cristiano/místico/pasivo no podían tener significado para las clases populares de una sociedad como la nicaragüense, donde por lo menos desde 1977 las jóvenes generaciones se incorporaron masivamente a la lucha del FSLN, donde su participación en la insurrección significó el abandono durante meses de sus hogares —de unos hogares muy diferentes a los de la imagen burguesa, según se vio en el capítulo III—, y donde muchas veces fue la práctica política de los hijos la que politizó e hizo madurar cívicamente a los padres. Una sociedad que después del triunfo contra la dictadura vio nuevamente a sus jóvenes subir la montaña y mezclarse con el campesinado, con la clase obrera, con el semiproletariado, para alfabetizar a las masas, conviviendo con ellas y aprendiendo de ellas el rostro brutal del hambre, la miseria, la muerte temprana, la vida ruin. Una sociedad donde los padres hallaron en la rápida y a veces violenta maduración de sus hijos los motivos y los medios para la propia maduración y para el más legítimo orgullo. Una sociedad en la cual la enorme mayoría de las clases populares conoció la educación porque hubo una revolución.

Y al mismo tiempo una revolución en la que los cristianos participan activamente, en un cristianismo cuestionador y

\* Cf. sobre esto O. Silva (1982). Es importante señalar que en su viaje a Centroamérica a principios de 1983, el Papa Juan Pablo II escogió a Nicaragua para pronunciar su discurso sobre la educación: IEPALA (1983: 291-295).

orientado hacia las masas, que aportó a la lucha sandinista militantes, héroes y mártires (Molina 1981; Cabestrero 1983). Una revolución que garantiza el ejercicio de la fe cristiana y que proclama

que se puede ser creyente y a la vez revolucionario consecuente y que no hay contradicción insalvable entre ambas cosas (...). Dentro del FSLN militan muchos cristianos y mientras existan revolucionarios cristianos en Nicaragua, habrán cristianos dentro del Frente Sandinista (FSLN 1980b).\*

Esta contradicción se desarrolla enmarcada en un contexto de explicitación del núcleo de politicidad de todo proyecto educativo, vale decir de su articulación a un proyecto de organización y conducción de la sociedad, y por lo tanto en definitiva a una óptica de clase. En una sociedad capitalista estable, ese núcleo constitutivo de politicidad aparece enmascarado como apoliticidad, es decir como única modalidad posible de organización y conducción política y, en consecuencia, como orden normal, natural, obvio de las cosas. Los intereses contingentes y particulares de la burguesía se elevan así al rango de constantes inmutables de una historia a su turno diluida en la naturaleza. Lo político, como forma específica de dirección clasista de la sociedad, se vive como ideología: permea todas las instancias, dimensiones y estructuras de la vida social, individual y colectiva, informa lo cotidiano como síntesis de múltiples determinaciones, y por eso mismo se vive *sin sentirse* e incluso *sin saberse*. Los contenidos que el sistema educativo transmite —para no hablar de sus métodos— se articulan sobre una estructura de conceptos, imágenes, ilustraciones y aplicaciones que son producto de una organización capitalista de la vida social y que sólo tienen sentido en ella.

La agudización de la lucha político-ideológica de clases en la etapa abierta con el triunfo revolucionario, y el avance del proceso posterior, imponen una explicitación del contenido, la dimensión y los alcances políticos de todos los ámbitos de la sociedad y entre ellos, no podía ser de otro modo, la educación. La identificación de un orden social dado con los intereses de

\* La vigencia de este documento fue ratificada dos años después por otro comunicado del FSLN: *Barricada*, 19 de agosto de 1982.

una clase, y la reducción de la nación a la medida de una clase dominante constitutivamente ligada al imperialismo, son cuestionadas por las masas y por el Estado revolucionario, por la práctica de la revolución y por el nuevo discurso político que le es concomitante. La *de-construcción* del discurso político burgués, la explicitación de sus aherrojamientos de clase, priva a éste de su poder como ideología y lo desenmascara como mentira. En la medida que lo hace notorio, le quita convicción.

Resulta claro por lo tanto que la contradicción entre la vieja educación capitalista y la Nueva Educación de la revolución *no es* una contradicción entre un proyecto educativo apolítico y otro que está politizado —como plantean las viejas clases dominantes. La contradicción realmente existente es en términos del *tipo de enfoque político* que está presente en uno y otro proyecto educativo. La Nueva Educación no introduce "la política" donde antes no la había, sino que reemplaza una perspectiva político-axiológica, expresión de un orden político injusto, represivo y sumiso a la dominación foránea, por un enfoque que es producto de un orden político revolucionario, democrático, popular y antiimperialista, apoyado en una amplia e intensa participación organizada de las masas. Un rasgo distintivo de la Nueva Educación nicaragüense es, sí, la *explicitación de sus elementos de politicidad* —por oposición a la educación burguesa que vende su producto sin anunciarlo. Como se señaló hace un momento, ello es resultado del modo en que se desenvuelve la lucha social en Nicaragua hoy, y de la naturaleza misma de dicha lucha cuando tiene lugar en el terreno ideológico. Vocablos tales como democracia, patriotismo, participación, soberanía... no tienen en sí mismos un contenido político prefijado al margen de las fuerzas que protagonizan la dinámica política de la sociedad. Al contrario, dicho contenido es generado por el modo en que esos vocablos se articulan en el discurso de las fuerzas en conflicto (cf. por ejemplo Laclau 1977).

Desde esta perspectiva, el conflicto de clases es un conflicto por la determinación política del significado de los conceptos. Hay así una caracterización burguesa del concepto *patria* y hay también una articulación *popular-revolucionaria* del mismo; hay una articulación burguesa de la nación, y hay una articulación popular-revolucionaria de ella; y así en todos los casos. El sistema educativo deviene, en consecuencia, uno de

los escenarios privilegiados de la lucha ideológica de las clases y del enfrentamiento de sus proyectos políticos.

## 5. Las tensiones internas

En *segundo lugar*, están las tensiones y los conflictos dentro de la Nueva Educación. Es decir, referidas a su alcance efectivo, a sus modalidades de avance, a los desniveles de muchas de sus transformaciones, etc. No son cuestiones que pongan en tela de juicio la existencia y el desarrollo del proceso, pero sí las modalidades concretas de su desenvolvimiento.

Para comenzar, la tensión entre la educación no formal y la educación formal. Los éxitos más espectaculares de la Nueva Educación se hallan en el ámbito no formal: la Cruzada Nacional de Alfabetización, la Educación Popular de Adultos. Pero después de casi tres años de desarrollo de la educación popular, se presenta la cuestión compleja de la articulación y confluencia del sistema formal y el sistema no formal. Tarea difícil, ya que uno y otro se desarrollaron casi sin puntos de contacto efectivo, con sus propios métodos y contenidos, sus propios ámbitos de reclutamiento de estudiantes y de maestros. Incluso, con sus respectivos y diferentes símbolos y perfiles ideológicos: la alfabetización y la educación popular de adultos como prolongaciones de la lucha insurreccional; la educación formal como prolongación, en un nuevo contexto, de la tradicional educación escolar.

Sin embargo el hecho que las transformaciones en el ámbito de la educación formal hayan sido más lentas o menos espectaculares no quiere decir que no hayan existido. Sin dudas, las modificaciones son aquí más difíciles que en el terreno de la educación no formal. No nos referimos a las cuestiones técnicas, sino a un problema político-ideológico. El campo de la educación no formal como educación popular masiva de adultos, es un terreno creado por la propia práctica política de la revolución, en un ámbito donde el FSLN se consolidó como Vanguardia desde hace tiempo. Otra cosa ocurre en el ámbito de la educación formal, tradicional coto de las viejas clases do-



minantes y de amplios sectores de la pequeña burguesía que veían en ella un mecanismo de movilidad social. Cuatro años de revolución no bastan para eliminar por completo esos resabios ideológicos. Más aún: de alguna manera la lucha por la Nueva Educación en este ámbito formal expresa la dinámica de esta pequeña burguesía "educada" y educadora por mantener su propia posición en la sociedad revolucionaria.<sup>10</sup> Del mismo modo que la reducción de la *educación popular* al ámbito de la *educación no formal y de adultos*, y la consiguiente "crítica" o rechazo en abstracto y genérico a la educación escolar, es también en buena medida producto del radicalismo de las clases medias, más que de una reflexión objetiva sobre la realidad.

Estrechamente ligado con esto se presenta la cuestión de la formación de los recursos humanos para la Nueva Educación, y la capacitación de los recursos ya formados, aunque en un contexto político y desde un enfoque académico y pedagógico muy distintos. Todavía se advierte una separación bastante marcada entre la dimensión académico-pedagógica de la formación/capacitación, y su dimensión político-ideológica. Los mayores esfuerzos parecen orientados sobre todo a la primera de estas dimensiones, reforzándose la imagen de externalidad de lo político respecto de lo pedagógico, absolutizándose en el nuevo marco de la revolución la imagen desarrollista de la *calidad educativa* como algo al margen, e incluso en contradicción, con el desarrollo político-ideológico de los cuadros educativos.

Esta separación entre lo "propiamente educativo" (lo pedagógico) y lo político, es en definitiva una pervivencia de las viejas concepciones de la educación como algo técnico y al margen de la lucha de clases. La situación no puede ser más contrastante en una sociedad en revolución, politizada en todos sus ámbitos y niveles, y donde el conflicto político-ideológico ha adquirido una intensidad notable. En estas condiciones, el nivel de desarrollo político-ideológico de la población estudiantil es generalmente mucho más avanzado y más sólido que el de sus maestros, generándose una contradicción que

<sup>10</sup> Cf. la polémica entre ANDEN y el Ministerio de Educación en torno a la calidad de la enseñanza, mencionada en el capítulo anterior (nota 55). También Castilla Urbina (1982b y 1983).

repercute inmediatamente en la calidad del desempeño "técnico" del propio profesor. Su práctica pedagógica se convierte en algo rutinario, tedioso, sin articulación efectiva con la vida real; el rendimiento del estudiante baja, aumenta el ausentismo, se generalizan las manifestaciones convencionales de "indisciplina" estudiantil.<sup>11</sup>

El avance de la revolución no sólo ha introducido transformaciones dentro del ámbito de la educación, sino que asimismo ha alterado los límites convencionales del sistema educativo. En su concepción tradicional, lo educativo, reducido a lo pedagógico, se circunscribe al ámbito institucional de la escuela. Se presenta por lo tanto separado del ámbito de la producción ("lo económico"), de la reproducción ("lo familiar") y de las prácticas políticas. La revolución ha roto esta compartimentación ficticia y ha convertido en educativas a todas las dimensiones de la práctica social. No es solamente la cuestión de la educación no-formal y el rápido desarrollo que, ya se ha visto, ella adquirió con la revolución. Nos referimos a que de hecho todas las tareas de la revolución se transforman en tareas de formación, de capacitación y de entrenamiento de las masas populares. Las sucesivas Jornadas Populares de Salud, las tareas de desarrollo comunal y de saneamiento ambiental, la reconstrucción física de zonas afectadas por desastres naturales, el trabajo voluntario en la agricultura, la defensa... han determinado el entrenamiento y capacitación de decenas de miles de personas y configuran un gigantesco, permanente y polifacético proceso de aprendizaje al que el pueblo nicaragüense se ha incorporado entusiasta y masivamente (cf. por ejemplo MINSA 1982; Donahue 1983).

Ya no es la escuela, ni siquiera los CEPs, el ámbito físico de la Nueva Educación, sino la sociedad toda, la revolución en todos sus aspectos. En pocos ámbitos de la transformación educativa, como en éste, se advierte de una manera tan clara y acuciante la necesidad de formar cuadros educativos de nuevo tipo, y de desarrollo de métodos y técnicas de enseñanza-

<sup>11</sup> La cuestión es tanto más importante, cuanto que la participación en la CNA provocó un proceso de radicalización política en los estudiantes que actuaron como alfabetizadores —sobre todo en los brigadistas, que alfabetizaron en el campo y la montaña (Flora, McFadden y Warner 1983), aumentando el desfase con sus maestros.



aprendizaje adecuadas a esta práctica educativa. Es el barrio, la fábrica, el mercado, el algodón, el lugar donde el proceso educativo se desenvuelve, a medida que las propias prácticas productivas o reproductivas de esos ámbitos se desarrollan. El carácter teórico-práctico del proceso de enseñanza-aprendizaje cambia también de contenido y de modalidades de desarrollo. Ya no se trata de dos momentos diferenciados en su contenido y en su ambientación espacial —el momento del *saber* teórico, ambientado en la escuela, la universidad, etc., y el momento de la *aplicación*, situado en la fábrica, la calle, el campo. Se está ahora en presencia —o, más bien, tiende a estarse en presencia— de una unidad dialéctica emplazada en un único ambiente, donde la teoría se desentraña de la práctica, y donde la práctica es descodificada teóricamente. La nueva pedagogía se convierte en una dimensión de la producción, la defensa, la reconstrucción, del mismo modo y al mismo tiempo que las relaciones de producción, las tareas de la reconstrucción y la práctica de la defensa se transforman en ámbitos de reflexión pedagógica y de maduración política.

Las tensiones que esta progresiva reconfiguración de "lo educativo" genera sobre el sistema de formación y capacitación de recursos humanos son enormes. El brigadista de salud, el promotor social, el maestro popular, surgidos de la propia comunidad y permaneciendo en ella, en contacto estrecho e ininterrumpido con los participantes del nuevo proceso educativo, son algunas de las respuestas que la revolución está generando en el proceso de búsqueda colectiva de nuevos cuadros para la democratización y la transformación de la educación.

El desarrollo de estas transformaciones ha estado ligado de manera muy estrecha, ya se ha señalado, a la participación directa, innovadora y crítica de las organizaciones de masas. No es posible desconocer, sin embargo, las tensiones y presiones que ello ha significado para esas organizaciones, ni la existencia de diferentes caracterizaciones de cómo debe llevarse a cabo su participación en las tareas de la Nueva Educación.

En cuanto a lo primero, las tareas de las transformaciones educativas se han sumado al conjunto de actividades que las organizaciones de masas vienen desempeñando en el proceso revolucionario. Si bien el saldo es positivo, también es cierto

que el conjunto de estas tareas define presiones intensas sobre la capacidad de acción y sobre los recursos de las organizaciones. Sobre todo cuando la vida de ellas es relativamente reciente —con excepción del sindicato de los maestros— y el desarrollo de sus cuadros dista todavía de ser completo.

No por temporales estas limitaciones dejan de ser objetivas. Frecuentemente ellas se hacen notar en cierta tendencia a delegar en los cuadros técnicos del Estado las tareas y actividades que, a su turno, la administración estatal espera de las organizaciones. Sea por exceso de trabajo, por problemas operativos internos, o por un desarrollo insuficiente de algunos cuadros en comparación con el carácter urgente de las tareas que deben encararse, el hecho es que a veces la participación de las organizaciones de masas es meramente formal, reduciéndose a convalidar con su prestigio político y su autoridad moral las orientaciones impulsadas por la administración. En esto influye decisivamente el hecho que, para la mayoría de las organizaciones de masas, la participación en la definición y la gestión de la política educativa significa penetrar en un terreno con el que es necesario familiarizarse. La experiencia recogida hasta ahora demuestra que éste no es un proceso fácil, pero que las organizaciones de masas avanzan abriéndose paso entre las complejidades técnicas y los vericuetos administrativos. Por otro lado, debe reconocerse que éste es también un proceso nuevo para los propios técnicos y administradores; también para ellos el trayecto entre la simpatía por una activa participación popular, y su práctica efectiva, requiere de un aprendizaje largo y difícil.

A veces, algunas instituciones del Estado favorecen estas limitaciones. El peligro del burocratismo ha sido denunciado de manera reiterada y vehemente por la Dirección Nacional del FSLN, y por las propias organizaciones de masas; pero en algunos ámbitos del Estado el burocratismo tiende a ser identificado con —y reducido a— la lentitud en los trámites, el papeleo, las demoras injustificadas, antes que con la separación de los aparatos del Estado respecto de sus bases sociales. Lo primero es una cuestión administrativa; lo segundo es un problema político. Otras veces se advierte en el Estado una falta de continuidad en las respuestas a los esfuerzos que se demandan y se reciben de las organizaciones, o bien la inversión de recursos escasos por las organizaciones no tiene corre-

lato en el seguimiento que el Estado les presta, o en la información que debería suplirles.

En realidad esta cuestión se ubica dentro de la problemática más amplia y compleja de la relación entre el Estado revolucionario y las organizaciones de masas que fue planteada en el capítulo anterior, y sobre la cual volveremos en el próximo.

## CAPÍTULO VII

### Una sociedad en revolución

#### 1. Introducción

El presente capítulo retoma la discusión planteada al principio del libro sobre las cuatro cuestiones básicas de un proceso de revolución social y liberación nacional a partir de los resultados de la exposición que hemos efectuado en los capítulos anteriores: las características del capitalismo agroexportador que se desarrolló en Nicaragua a influjos de la dominación imperialista; su estructura de clases y el perfil social real de las bases populares de la revolución; la estrategia de unidad nacional y economía mixta; las modalidades de participación popular y su relacionamiento con el nuevo Estado; las alianzas y tensiones sobre las cuales la revolución se apoya.

Ahora estos temas son retomados como *problemáticas*; vale decir como dimensiones del proceso revolucionario que reclaman de éste tratamiento y resolución; cuestiones susceptibles de enfoques y soluciones variadas —abiertas por lo tanto a la búsqueda y la confrontación—, donde los lineamientos estratégicos del proyecto histórico de la revolución se articulan con los datos de la coyuntura, con los rasgos concretos de una sociedad integrada de manera propia a un sistema internacional con características específicas.

En primer lugar se discute la problemática del desarrollo de la economía y la articulación entre acumulación y distribu-

ción (sección 2). Se señalan los esfuerzos de la revolución por impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas y generar una capacidad de dirección del conjunto de la economía; la exposición enfoca asimismo los condicionamientos que derivan del tipo de articulación de la economía nacional en el mercado externo, y el desplazamiento progresivo de las confrontaciones sociales del ámbito de la producción a la esfera de la circulación.

Luego la sección 3 plantea la problemática de la articulación pueblo/clase en la unidad nacional: cuál es, en la etapa actual de la Revolución Sandinista, la clase o fracción que da homogeneidad al *pueblo*, orienta el desenvolvimiento de las relaciones sociales y la dinámica de la economía, y hegemoniza la conducción del proceso; se presta atención en particular a la cuestión de la alianza obrero-campesina. La sección 4 por su parte expone la concepción sandinista de la democracia como participación de la población en todos los ámbitos de la sociedad, y el modo en que ella se verifica en las condiciones presentes del proceso revolucionario. Por último, se plantea la problemática de la soberanía nacional en un espacio cargado de tensiones políticas, presiones económicas y agresiones militares.

Cada uno de estos aspectos no es independiente de los otros ni puede tratarse al margen de los demás. Nuestra exposición intenta poner de relieve el modo en que ellas se conjugan en la etapa actual de la Revolución Sandinista.

## 2. Acumulación y distribución

La Revolución Sandinista triunfó en medio de grandes desajustes económicos provocados por la destrucción de la guerra y la fuga de capitales, y de una crisis regional agravada desde entonces (Torres Rivas 1982). No obstante, la capacidad de recuperación de la economía bajo la conducción revolucionaria ha sido notable y destaca en el panorama recesivo del istmo. El cuadro VII.1 presenta las tasas anuales de crecimiento del PIB global y por habitante. Entre 1980 y 1982 Nicaragua fue el país que tuvo el crecimiento anual promedio más alto

Cuadro VII.1

### América Central: Crecimiento del PIB y del PIB por habitante 1979-1982 (en %)

Países	Crecimiento anual del PIB				Crecimiento anual del PIB p/habitante			
	1979	1980	1981	1982*	1979	1980	1981	1982*
Nicaragua	- 25,1	10,1	8,9	- 1,0	6,2	27,9	6,4	5,4
Costa Rica	4,9	0,6	- 3,6	- 6,0	- 3,0	2,5	- 1,7	- 5,9
El Salvador	- 1,5	- 9,6	- 9,5	- 4,5	- 7,9	- 4,3	- 12,2	- 12,1
Guatemala	4,7	3,5	1,0	- 3,5	0,3	1,6	0,4	- 1,9
Honduras	6,6	2,5	- 0,4	- 1,5	0,2	2,9	- 1,0	- 3,8
								- 4,7
								- 3,2

\* Cifras preliminares.  
Fuente: CEPAL.

—en realidad, el único que experimentó crecimiento, dado el estancamiento virtual de Guatemala y Honduras—, y el único cuyo PIB por habitante creció en el período. En esto influyó sin duda la cooperación internacional, pero el factor determinante ha sido la capacidad del joven Estado para orientar el desenvolvimiento de la economía, la responsabilidad con que asumió los compromisos financieros internacionales —incluidos casi todos los contraídos por la dictadura—<sup>1</sup> y la confianza que supo despertar en Europa, Canadá y América Latina.

Esto merece ser destacado, porque una de las necesidades más urgentes de toda revolución triunfante consiste en generar una capacidad de conducción de la economía nacional y, en particular, de control del mercado. Esto es particularmente importante en una economía mixta orientada hacia transformaciones sociales de gran alcance. En esta situación, y cuando la presencia directa del sector público no es mayoritaria, el mercado es todavía el ámbito de vigencia del poder de la burguesía, mientras que el APP representa, al menos como posibilidad teórica al principio (Ramírez 1980) la hegemonía del proyecto popular. La relación Estado/mercado expresa por lo tanto la confrontación, en torno a la conducción de la economía, de dos proyectos de clase.

Esta capacidad de conducción se refiere tanto a las condiciones internas de producción y circulación y al manejo de sus variables fundamentales, como al perfil y el funcionamiento del sector externo. El tipo de capitalismo que se desarrolló en Nicaragua se caracterizó por una fuerte dependencia respecto del mercado internacional y del financiamiento externo; durante la década de 1970 Nicaragua fue un país que vivió prácticamente *al fiado*. La sumisión política de la dictadura hacia los Estados Unidos era la garantía que avalaba, en definitiva, el endeudamiento creciente. Esto se acabó con el triunfo revolucionario: terminada la sumisión política, se fueron los dólares. Además, los términos del intercambio mantuvieron el signo negativo que observaban desde 1978; el desbarajuste general de la economía por los efectos de la guerra, la retracción económica de la burguesía, el impacto de los cambios en el

<sup>1</sup> Las únicas obligaciones que no se reconocieron fueron las derivadas de la compra de armamento y en general con finalidad represiva.

## Cuadro VII.2

Nicaragua: Evolución del sector externo 1980-82  
(u\$s millones)

	1980	1981	1982
Exportaciones f.o.b.	532	500	430
Importaciones c.i.f.	953	897	675
Balanza comercial	- 421	- 397	- 245
Saldo de la cuenta corriente	- 448	- 571	- 395
Términos del intercambio <sup>a</sup>	- 4 %	- 13 %	- 4 %
Saldo de la deuda externa <sup>b</sup>	1579	2163	2410

<sup>a</sup> Variación respecto del año anterior.

<sup>b</sup> Fuente: *Pensamiento Propio* 4 (mayo 1983).

Fuente: CEPAL.

régimen de propiedad de grandes empresas, la recesión regional, redujeron las exportaciones (cf. cuadro VII. 2).

En los primeros años se contó con el auxilio financiero externo; aproximadamente 1.600 millones de dólares en financiamiento y cerca de 260 millones en concepto de donaciones, ingresaron a Nicaragua. Pero a pesar de los términos "blandos" de aquél, el endeudamiento externo ha crecido con un ritmo promedio anual de 24 % entre 1980 y 1982. Como resultado, el servicio de la deuda externa, que representaba algo menos de 16 % de las exportaciones en 1980, subió a 43 % en 1981 y a 57 % en 1982, pudiendo alcanzar en 1983 entre 70 y 90 % de las exportaciones.

Es indudable que las tasas efectivas de crecimiento del producto resultaron más modestas que las programadas originalmente,<sup>2</sup> pero ello se debió a un sobredimensionamiento de

<sup>2</sup> El PIB debía crecer 22 % en 1980 y 18.5 % en 1981, garantizando una plena recuperación en no más de dos años. Las tasas efectivas fueron buenas, aunque menores a las programadas, y el sobredimensionamiento de las metas hizo que los resultados fueran recibidos con cierta desazón; estas metas opti-



las metas, a su turno producto de una visión exagerada de la presencia económica del somocismo en el sector productivo; el APP, como eje dinámico de la acumulación, demostró tener una magnitud menor que la imaginada por muchos técnicos y planificadores (MIDINRA 1982b: 7). De todos modos cuatro años después del triunfo revolucionario la economía nicaragüense dista todavía de alcanzar los niveles de actividad de 1977, con excepción del sector agropecuario. Como se indica en el cuadro VII.3, los únicos rubros donde la producción es aún inferior al año base son los que poseen una presencia mayor de la gran propiedad agraria —y en el caso del banano, extranjera. Esto ratifica lo señalado varias veces en el capítulo IV sobre la retracción inversionista de la gran burguesía.<sup>3</sup>

En efecto: la desaceleración del crecimiento económico desde mediados/fines de 1981 y la caída de 1982 no se deben únicamente al comportamiento de las variables exógenas, sino asimismo a factores internos. En el cuadro IV.6, donde se presentó la evolución de la participación de los distintos tipos de propiedad (pequeña propiedad individual y cooperativa, grandes propietarios, APP) en el cultivo de algodón, se pudo observar la reducción de la superficie sembrada por la gran burguesía. A pesar de los estímulos cambiarios y de precios que se le acordaron en enero 1982, en el ciclo 1982/83 la gran burguesía algodonera sembró una superficie 16 % menor que antes de los estímulos —a los que sin embargo se acogió—, manteniendo ese mismo nivel en el ciclo actual; el comportamiento de la gran burguesía cafetalera y ganadera no fue distinto. Vale decir que no obstante la transferencia de excedente en su favor, no existió de parte de la gran producción para el mercado externo una respuesta adecuada a la racionalidad de la acumulación social. Las exportaciones de Nicaragua fueron menores en 1982 que en 1981 (cf. cuadro VII.2); en la medida en que esos grupos dan cuenta todavía de una proporción alta de

mistas en exceso parecen haber estado presentes asimismo en la renegociación de la deuda externa, y han sido utilizadas por los grupos opositores y la propaganda contrarrevolucionaria para crear una imagen de descalabro económico y de incompetencia administrativa de la revolución.

<sup>3</sup> Tomando como base = 100 el año 1977, el nivel de actividad de la industria manufacturera era 79 en 1982, y 72 para el PIB global.

### Cuadro VII.3

#### Nicaragua: Evolución de la producción agropecuaria, 1977-1982

(Volumen físico de la producción: 1977 = 100)

Productos	1977	1980	1981	1982
<i>1. Productos de exportación</i>				
Algodón oro	100	62	53	55
Café oro	100	103	109	112
Caña de azúcar	100	98	119	106
Ajonjolí	100	161	128	176
Tabaco	100	135	107	101
Bananos	100	94	104	73
Vacunos	100	88	49	70
<i>2. Productos de consumo interno</i>				
Maíz	100	101	110	104
Frijol	100	70	145	119
Arroz	100	134	189	182
Sorgo	100	209	210	111
Porcinos	100	99	110	158
Pollos	100	162	180	268
Huevos	100	194	239	348
Leche	100	47	62	67

Fuente: MIDINRA (1983).

la producción agropecuaria para la exportación, su responsabilidad en estos resultados está fuera de duda.

Otro elemento que ha incidido para disminuir los ingresos por exportaciones es la persistencia en la sobrevaluación del córdoba respecto del dólar, a pesar de las medidas cambiarias adoptadas a partir de setiembre de 1981 (Medal 1982).<sup>4</sup> Por su

<sup>4</sup> Hasta setiembre de 1981 existieron dos tipos de cambio: el tipo oficial (US\$ 1 = 10 córdobas) y un tipo libre, operado por el sector privado, tolerado por el gobierno. A partir de setiembre se fijó un tipo de cambio "libre" de C\$ 28 por dólar, pero el sector cambiario privado fue drásticamente reducido.

lado, en las empresas del APP la desorganización de muchos establecimientos; su obsolescencia, y la falta de técnicos capacitados para asumir la administración, retardaron asimismo la recuperación de su actividad (Nolff 1982).

Tradicionalmente los análisis del capitalismo en Nicaragua y de su dependencia externa han enfatizado el perfil definitivamente agroexportador; la especialización internacional es considerada la causa principal de la subordinación al imperialismo y del atraso y la desarticulación general de la economía. En realidad éste es un enfoque que está presente en todos los países del Tercer Mundo; de ahí que en los primeros tiempos del triunfo revolucionario se entable una discusión acerca de la pervivencia del esquema agroexportador y de la conveniencia, necesidad y posibilidad de sustituirlo por otra manera de relación con el mercado internacional, o incluso de reorientar todo el proceso de acumulación centrándolo en el mercado interno. Hay incluso a veces una tendencia a identificar revolución con industria, y agricultura con reacción; el enfoque simplista de la problemática de la alianza obrero-campesina, que mencionamos en la sección próxima, apunta también en este sentido.

Nicaragua no ha sido ajena a este debate, pero aquí ha carecido de la intensidad, la prolongación —y ciertos desvaríos— que conoció en otros procesos. Parece haber prevalecido rápidamente la convicción que, más que en la agroexportación en sí misma, las raíces del atraso, la desarticulación de la economía, la dependencia externa hay que buscarlas en el modo en que el sector agroexportador se organizó, en el tipo de relaciones de producción y circulación que lo caracterizaban, y en la forma en que se vinculaba con el resto de la economía local y con el mercado internacional. En otras palabras, no tanto en la producción de valores de uso, sino en el modo en que éstos se

y de hecho prácticamente desapareció; el nuevo tipo de cambio pasó a ser administrado por el sistema bancario. El anterior tipo de cambio libre pasó a operar desde ese momento como un dólar "negro". En la actualidad existen cuatro tipos de cambio: además de la paridad primitiva (de vigencia muy reducida) y del dólar comercial a C\$ 28 (pero sólo para las operaciones autorizadas por el gobierno, y por montos relativamente limitados), existe un tipo implícito de cambio de alrededor de C\$ 16 a C\$ 18 para las exportaciones promovidas; y el del mercado libre "negro", sometido a las presiones de la demanda y la oferta, la especulación, y la evolución de las tensiones políticas internacionales. Se trata, sin embargo, de un mercado implícitamente tolerado, en los hechos, por el Banco Central.

convierten en valores de cambio. En consecuencia la política de la revolución se ha encaminado a eliminar el atraso productivo del sector, a integrarlo con el procesamiento agroindustrial, y a buscar una reinserción más ventajosa en la división internacional del trabajo a través de la diversificación del comercio internacional, de la incorporación de tecnología, etc. Al mismo tiempo se impulsa un vigoroso programa de inversiones en el conjunto del sector agropecuario. Adjudicando a 1978 el valor base 100, el coeficiente de inversión agropecuaria alcanzó un nivel 274 en 1981, y de 400 en 1982; se trata de un esfuerzo inversionista sin parangón en Centroamérica y posiblemente en el resto de América Latina. En Costa Rica por ejemplo, el coeficiente de inversión agropecuaria se redujo de 100 a 27 entre 1978 y 1982, y en Guatemala cayó de 100 a 43 en el mismo lapso.<sup>3</sup>

Se está en presencia por lo tanto de un proceso de relativamente rápida expansión de las fuerzas productivas materiales, sobre todo en el sector agropecuario. Pero, como hemos señalado en varios lugares de nuestro estudio, este proceso es producto, fundamentalmente, del esfuerzo inversionista público, que contrasta con la pasividad de la gran burguesía.

Un aspecto de la problemática de la acumulación en un proceso revolucionario se refiere al balance que se trata de establecer entre ésta y la distribución, y más exactamente con la capacidad de la economía para satisfacer rápidamente las demandas de mejores condiciones de vida de la gente, que constituyen una dimensión fundamental de las motivaciones que la impulsan a sumarse a un proceso revolucionario. La experiencia señala, empero, que esto no ha sido posible. Todas las revoluciones sociales han debido hacerse cargo de los platos rotos de las viejas clases dominantes, con economías en profundas crisis o completamente deshechas; en tales situaciones el mejoramiento general de las condiciones de vida de la población por encima de ciertos niveles básicos debió postergarse hasta que las transformaciones en la estructura económica estuvieran considerablemente avanzadas (Morawetz 1980). Además, las agresiones imperialistas y contrarrevolucionarias que todas estas revoluciones debieron enfrentar, forzaron a reorientar buena parte de los esfuerzos hacia la defensa, re-

<sup>3</sup> Cf. *Barricada*, 9 de mayo de 1983.

trasando aún más la atención del bienestar popular. Por estas razones, una revolución no puede prometer a las masas la inmediata solución de sus problemas sociales; pero asegura la posibilidad para todo el pueblo de construir las condiciones para que aquella sea posible. Esto demuestra, una vez más, que el carácter de vanguardia de una clase o fracción en un proceso revolucionario depende del proyecto histórico que la revolución impulsa, más que de los beneficios inmediatos que ella genera.

En un primer momento la Revolución Sandinista trató de dar respuesta a las necesidades más urgentes de la población, particularmente de las víctimas de la guerra y de la destrucción que ella implicó. Se creó el Ministerio de Bienestar Social para canalizar los fondos externos dirigidos al sector y para ejecutar un amplio y multifacético programa de asistencia social. Al mismo tiempo se fijaron niveles mínimos en las remuneraciones de los trabajadores y la demanda históricamente postergada de las clases populares fue —parcialmente— satisfecha por la vía de los ingresos extrasalariales, antes que a través de medidas monetarias. La expansión general de la actividad económica hizo posible una rápida expansión del consumo básico, que creció casi 30 % entre 1979 y 1980 (cf. cuadro VII.4) y recuperó en valores reales el nivel de 1977. Pero a partir de 1981 la desaceleración del crecimiento, las mayores restricciones externas, el peso financiero de las medidas adoptadas y su gravitación en el déficit fiscal y en el endeudamiento externo —y el impacto de esto sobre el proceso inflacionario— forzaron una reorientación del gasto social y una reducción de su monto. Entre 1981 y 1982 el gasto social por habitante se redujo en algo más de 9 % en valores reales, y pasó a orientarse fundamentalmente hacia la educación básica y la atención primaria en salud.<sup>6</sup> En estos rubros, los logros alcanzados por la política social de la Revolución Sandinista han sido particularmente notables: reducción drástica de la mortalidad infantil, eliminación de enfermedades endémicas como malaria y dengue, prevención total de la poliomielitis, erradicación casi total del sarampión, etc. (MINSA 1982), aparte de lo señalado en el capítulo VI en materia educativa.

<sup>6</sup> Cf. los lineamientos para el futuro inmediato en JGRN (1983).

#### Cuadro VII.4

Nicaragua: Evolución del consumo 1977-1982  
(C\$ de 1980, Base 1980 = 100)

	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Consumo total	109.7	109.1	82.5	100	94.6	90.6
— público	62.7	76.6	84.3	100	109.8	130.4
— privado	120.7	116.7	82.0	100	91.4	81.4
— básico	98.3	94.3	70.1	100	103.0	98.1
— no básico	154.5	150.5	100.1	100	73.1	56.1
<i>Composición (en %)</i>						
Consumo total	100	100	100	100	100	100
— público	11	13	19	19	22	27
— privado	89	87	81	81	78	73
— privado	100	100	100	100	100	100
a) básico	49	49	51	60	53	73
b) no básico	51	51	49	40	47	27

Fuente: INEC.

El cuadro VII.4 muestra la evolución seguida por el consumo en los períodos inmediatamente anterior y posterior al triunfo revolucionario. En un marco general de contracción, el consumo público ha tenido un comportamiento mucho más dinámico que el consumo privado, aunque éste sigue siendo el componente mayoritario del rubro. Dentro del consumo privado el consumo básico ha mantenido su nivel histórico real, mientras el consumo no básico de 1982 representa casi la mitad del de 1980 y un tercio del de 1977. En la medida en que tipos diferentes de consumo dicen relación con distintos grupos sociales, estas cifras sugieren la hipótesis de un rápido deterioro del consumo de los sectores de mayores niveles de ingreso —burguesía, clases medias— y un precario mantenimiento de los niveles de consumo tradicionales de las clases populares.

Sin embargo la situación es más compleja, ya que la problemática de la acumulación y la distribución está directamente ligada a la de la inflación; más aún, ésta constituye uno de los modos en que aquélla se expresa.

Estimaciones confiables indican que entre 1980 y julio 1983 el índice general de precios al consumidor creció algo más de 90 %, y casi 120 % en el rubro "alimentos, bebidas y tabaco"; existen indicios asimismo que durante la primera mitad de 1983 el aumento de precios respecto de igual período de 1982 fue un tercio más alto para los grupos de ingresos inferiores a C\$ 2.000 por mes (alrededor de 53 % de la población activa urbana), que para los ingresos superiores. Ello habría provocado una creciente polarización de los ingresos reales, sobre todo en el ámbito urbano; de acuerdo a una investigación sobre el ingreso familiar en Managua, el aumento de las diferencias habría sido entre 7 % y 20 % de acuerdo a la medida de polarización empleada (CETRA 1983b).

Estas cifras llaman la atención sobre la eficacia de las políticas de defensa del nivel de vida de las clases populares; los subsidios al consumo de alimentos básicos apuntan en principio a rubros cuyo peso es proporcionalmente mayor en el consumo de las familias de ingresos más reducidos. Constantes otros factores, el impacto del aumento del costo de vida debería ser en consecuencia mayor en los tramos superiores que en los inferiores, pero los datos informan que las cosas no han sido así hasta el momento.

Es probable que la cuestión tenga que ver, entre otros aspectos, con las distintas fuentes de abastecimiento de los diferentes tramos de ingreso. Sin perjuicio de la red creciente de tiendas populares dependientes del Ministerio de Comercio Interior (MICOIN),<sup>7</sup> la parte mayor del consumo de las familias se lleva a cabo a través de compras en mercados y pequeños comercios, donde los sobrepuestos suelen ser muy altos. Una investigación sobre la distribución y consumo de alimentos en familias de ingreso mensual entre C\$ 1.000 y C\$ 5.000 en la ciudad de Managua señala que sólo en cuatro productos básicos, de una lista de veinte, las tiendas populares son el centro de abastecimiento más frecuente de estos grupos, mientras las *pulperías* y pequeños comercios similares figuran primeros en once rubros, y los mercados y vendedores ambulantes en los restantes cinco. Las tiendas populares aparecen como segunda opción sólo en dos productos entre 19 (CIERA 1983b: 36; CETRA 1983b). La dificultad de ejercer un adecuado control administrativo de precios en este enjambre de pequeñas unidades de distribución,<sup>8</sup> la escasa eficacia demostrada hasta el momento por las organizaciones de masas en estos aspectos y la necesidad del pequeño comercio de compensar el reducido volumen de operaciones con elevados márgenes de utilidad por producto vendido, se traducen junto con otros elementos en alzas de precios al margen de los controles reglamentarios que afectan sobre todo a los consumidores de menores ingresos y a los de ingresos fijos (salarios principalmente), que componen la mayoría de la demanda de estos canales de distribución. De acuerdo a una investigación de MICOIN, las diferencias entre los precios oficiales y los precios de mercado pueden ser considerables en algunos productos de la canasta de consumo básico: 99 % en el caso del maíz, 62 % en los fri-

<sup>7</sup> La red de tiendas populares de abastecimiento pasó de 331 establecimientos antes del triunfo a casi 3.000 en 1982: CIERA (1983a), pág. 10.

<sup>8</sup> Solamente en Managua existen más de 37.000 puestos detallistas en los mercados y barrios (CIERA 1983a: 10). En 1982 los "comerciantes y vendedores" representaban 16,2 % de la población ocupada de Managua; 69 % de ellos eran trabajadores por cuenta propia. En el sector informal, que da cuenta de 90 % de los ocupados en esta actividad, los trabajadores por cuenta propia constituyen casi 76 % de la población ocupada y 98,8 % del total de trabajadores por cuenta propia en la categoría "comerciantes y vendedores". Elaboración de cifras de INEC (1982).



joles, 12 % en arroz, 16 % en carne de res, 25 % en la carne de pollo, 23 % en el aceite vegetal, etc.<sup>9</sup>

El resultado de todo esto es una disminución sensible de los ingresos familiares reales. El costo de la canasta básica de alimentos se calculaba en 1980 en C\$ 2.000; en 1981 había aumentado a C\$ 2.600, y a C\$ 3.300 en 1982; esto significa que este último año casi 40 % de las familias de Managua sólo pudieron alcanzar a satisfacer parcialmente sus necesidades básicas de alimentación.<sup>10</sup> Una investigación exploratoria reciente de la ATC señala que la situación del abastecimiento de los obreros agrícolas sería peor que la del resto de la población. Los trabajadores del campo gastan menos en alimentos y otros bienes básicos, según esta investigación, que los obreros de la ciudad por ejemplo, pero ello no se debería a que la canasta básica sea más barata en el campo, o más reducida por los distintos hábitos alimenticios, sino directamente porque los trabajadores agrícolas no tienen acceso físico ni monetario a buena parte de los productos básicos.

Los sectores no asalariados, particularmente en el sector informal, están en mejores condiciones de hacerle frente en lo inmediato a la inflación y de beneficiarse de ella, en la medida que perciben ingresos a través de los precios, y el control de éstos es hasta ahora poco efectivo. Al contrario los trabajadores asalariados, con ingresos fijos, experimentan de lleno el peso creciente del alza de precios. Además, ya se señaló en el capítulo V que el crecimiento de la productividad física del trabajo que tuvo lugar en el sector industrial durante los dos primeros años posteriores al triunfo revolucionario, fue de la mano con el deterioro del salario real. En estas condiciones es fácil advertir una transferencia de excedentes de los asalariados hacia

los no asalariados, y de los trabajadores productivos hacia los no productivos (CETRA 1983a). Sin perjuicio de los avances experimentados por la organización de la clase obrera, estos elementos señalan que hasta el momento son los sectores vinculados al pequeño y mediano comercio quienes mejor se encuentran en la economía urbana, para apropiarse de los beneficios monetarios del funcionamiento objetivo del mercado.

Para estos sectores, con toda la diversidad interna de situaciones que engloban, la tozuda inercia de la realidad socioeconómica recibida del pasado ha sido más fuerte hasta ahora que muchas de las políticas diseñadas por la revolución para modificarla. Con el mismo entusiasmo que hace cuatro años se integraron a la insurrección, hoy participan de las alzas de precios "por la libre" y se suman con ardor a las prácticas de especulación, contrabando menudo, tráfico de divisas. No parece haber para ellos una contradicción particularmente sensible entre la adhesión ideológica a la revolución, e incluso la participación en algunas de sus tareas, y la evasión fiscal, el cobro de sobrepuestos, el acaparamiento de productos básicos. Algunas fracciones de este complejo y polifacético espectro urbano siguen deambulando en una difusa franja entre la legalidad y el delito, más próxima a la picaresca que a la anomia. Pero una franja que se nutre de amplios contingentes de la población activa —incluyendo a camadas del proletariado—, que canaliza masas importantes de capital dinero y se apropia de buena parte de ellas, y que a través de esta redistribución de excedentes en perjuicio de asalariados y trabajadores productivos tiene capacidad para disminuir el impacto de ciertas políticas de la revolución —abastecimiento, precios e ingresos— simplemente operando sobre los mecanismos del mercado.

Es indudable que el pequeño comercio, los servicios personales, etc., aseguran la existencia y distribución de bienes y servicios de acceso generalizado aunque no figuren incluidos en la canasta básica de consumo: artículos de uso y consumo durable, reparaciones, etc. Pero también es cierto que lo hacen al precio de reforzar las tensiones inflacionarias, distorsionar el mercado, e introducir desigualdades notorias en el abastecimiento de las distintas clases y grupos sociales, reproduciendo y ahondando las preexistentes, y constituyendo un fuerte sector de acumulación al margen del Estado y sus instrumentos de política. Hasta el momento sin embargo el trata-

<sup>9</sup> Cf. MICOIN (1983). De acuerdo a una investigación periodística, a fines de enero de 1983 el sobrepuesto de un conjunto de hortalizas y frutas vendidas por bulioneros oscilaba entre 54 % y 300 % respecto de los precios vigentes en los supermercados de la Corporación Comercial del Pueblo (CORCOP). *El Nuevo Diario* (suplemento *Defensa del Consumidor*) 26 de enero de 1983. Cf. asimismo las denuncias sobre la intermediación y la especulación con las telas, en *Barricada*, 28 de diciembre de 1982, 4 de enero y 30 de agosto de 1983.

<sup>10</sup> Cf. CETRA (1983b). La canasta básica comprende los alimentos necesarios para que una familia de seis personas adquiera la dosis básica de calorías, etc., por mes.

miento de este problema por la revolución se ha llevado a cabo a través de intervenciones indirectas y del control de las organizaciones de masas —especialmente los CDS y AMNLAE—; no figura en los proyectos del gobierno revolucionario la nacionalización del sector (Wheelock 1983, 101:102) ni un sustancial redimensionamiento.

El auge creciente de este sector de intermediación no agota sin embargo los factores que dinamizan las tensiones inflacionarias, aunque ilustra con claridad la capacidad de ciertos grupos para apropiarse, en la esfera de la circulación, de masas de excedente que son generadas en ámbitos en los cuales no tienen injerencia directa. Algunos aspectos de la política financiera del Estado han sido señalados asimismo como generadores de presiones inflacionarias en detrimento de los grupos de menores ingresos, especialmente de los asalariados. Un estudio del Ministerio del Trabajo planteó, en este orden de ideas, que los incentivos cambiarios y tributarios al sector agroexportador implicarían un deterioro adicional de 14 % en los salarios mínimos en 1982. En el mismo sentido, los incrementos de precios agrícolas a los productores para la cosecha de exportación del ciclo 1983/84, cuando ésta ya está siendo levantada, implican un crecimiento de la producción de dinero sin un correlato en la producción material que habrá de incrementar rápidamente el déficit fiscal, de por sí elevado: 12.4 % del PBI en 1980, 13.2 % en 1981, 21 % en 1982. (J. L. Meda 1982).

La estructura tributaria prevaleciente favorece la mayor presión sobre los sectores de menores ingresos; casi tres cuartas partes de la recaudación tributaria provienen de impuestos indirectos (MIPLAN 1981: 139; Meda 1982), manteniéndose una situación similar a la anterior al triunfo de la revolución. Finalmente, el tipo concreto de articulación que tiene lugar entre el sector informal y el sector formal —especialmente con la comercialización mayorista y con la producción de insumos y productos finales en el APP—, las limitaciones de los canales oficiales de distribución, su menor flexibilidad comparada con el funcionamiento de los canales privados e informales, favorecen el desarrollo de una transferencia de excedentes del APP al sector privado que beneficia fundamentalmente al capital comercial grande y mediano (Vargas 1981). La existencia de control de precios en el APP y de libertad absoluta de precios en

el sector privado, actúa como un subsidio estatal al capital que opera en la intermediación comercial.

Un efecto de estas pugnas por la apropiación del excedente es el rápido crecimiento del circulante y de la velocidad de rotación del dinero. El primero aumentó 23 % entre 1980 y 1982 (en precios de 1980), y la segunda más de 16 %.<sup>11</sup> La desaceleración de la producción, la subordinación política de la burguesía, y la vigencia de una estrategia de coexistencia de clases sin conciliación social, favorecen el desplazamiento de la lucha de clases hacia la esfera de la circulación.

En estas condiciones la situación de las organizaciones sindicales que apoyan al proceso revolucionario es particularmente difícil. Las limitaciones de la política antiinflacionaria no pueden contener el deterioro del salario real; las distorsiones en el abastecimiento y la necesidad de mantener vigente el esquema de economía mixta llevan a que un aumento masivo de salarios refuerce las tensiones inflacionarias —no tanto por los mayores costos laborales, como por falta de una elasticidad correlativa por el lado de la oferta. La respuesta de las organizaciones ha sido en consecuencia, el ejercicio de presiones sectoriales y parciales sobre las administraciones empresarias en el caso del APP, y sobre las patronales en el sector privado: incorporando demandas específicas en los convenios colectivos, promoviendo acuerdos de nivelación salarial, etc. Cuando el sindicato es suficientemente fuerte, o se encuentra con la anuencia de su contraparte, esto ha permitido compensar el alza del costo de vida y mantener las condiciones generales de trabajo. Pero al mismo tiempo esto implica un deterioro de la capacidad de convocatoria y de presión de las centrales sindicales —que depende de su aptitud para presentar un frente unido de sindicatos afiliados—, y la aparición en algunos sectores de la economía de lo que un dirigente obrero denominó *anarquía sindical*.<sup>12</sup>

Esta *anarquía* puede ser interpretada como una prueba de indisciplina laboral o de impaciencia reivindicacionista; pero también puede ser considerada una resultante de la política de

<sup>11</sup> Elaboración de cifras de INEC (1983). Deflactor: índice de precios implícitos del producto.

<sup>12</sup> Cf. por ejemplo las declaraciones del Secretario General de la CST en *Barricada*, 6 de julio y 12 de agosto de 1983.

contención salarial seguida hasta el momento por el gobierno revolucionario, en agudo contraste con la política de estímulos a la burguesía agroexportadora y de tolerancia hacia los sectores de intermediación. La llamada *anarquía sindical* sería, desde esta perspectiva, una de las respuestas del movimiento obrero a una situación económica crecientemente gravosa. Otra respuesta, que se analiza en la sección próxima de este capítulo, es el paulatino pasaje de fuerza de trabajo desde las ocupaciones productivas asalariadas hacia la producción mercantil simple, la pequeña intermediación y, en general, el llamado sector informal.

Por último, la problemática de la acumulación y la distribución plantea la interrogante acerca del destino que los grupos y fracciones que se apropian de esta masa de excedente en la esfera de la circulación, asignan al mismo. Hasta setiembre de 1981 fue evidente que la existencia de un mercado libre de divisas permitió la salida del país de una parte importante de él. Pero la cuestión es menos sencilla a partir de las medidas cambiarias que se adoptaron entonces, y que se reforzaron en mayo de 1983. El mercado negro de divisas no ha desaparecido; la experiencia de otras revoluciones muestra lo difícil que resulta llegar a controlarlo y reducirlo paulatinamente, no ya a eliminarlo de un tajo; sobre todo cuando, como parece ser el caso de Nicaragua, la moneda nacional se encuentra sobrevaluada. Todo indica que una parte del excedente es canalizado hacia el exterior por esta vía: ya para radicarlo fuera, ya para alimentar importaciones de bienes no prioritarios para los cuales el Banco Central no concede divisas al tipo oficial de cambio, o bien para importar por encima de los montos autorizados al cambio oficial. Asimismo, el propio capital comercial local estaría reciclando el excedente generado en otros tramos y niveles del mismo. Las inversiones que el APP está efectuando en el sector —hotelería, turismo, comercialización de productos diferenciados, etc.— sugieren que el Estado revolucionario está dispuesto a recuperar al menos parte de ese excedente en el terreno mismo en que él circula, para reorientarlo hacia fines productivos.

### 3. Pueblo, clase, nación

El proyecto de unidad nacional impulsado por la Revolución Popular Sandinista se apoya en un conjunto de alianzas que no excluyen la existencia de contradicciones entre las fuerzas convergentes. En la práctica se presenta como un sistema complejo de *coexistencia de clases sin conciliación de clases*, en la medida que es un sistema que expresa en definitiva la hegemonía del campo popular y la subordinación política de la burguesía.

El polo dinámico de la alianza aparece caracterizado en términos de *pueblo* más que de *clase*. Engloba por lo tanto a la clase obrera y al campesinado, como a los pobres de la ciudad y del campo, los pequeños y medianos propietarios, el artesano, los pobladores de los barrios precarios, el estudiantado, sectores técnicos y profesionales, pequeña burguesía asalariada. En síntesis, todas las clases, grupos y fracciones que con su compromiso efectivo impulsan la consolidación y el avance del proceso revolucionario.

Se trata de una caracterización político-ideológica que tiene un referente de clase, pero que no se agota en la clase. El eje articulador del campo popular es un eje político, más que económico estructural. Abarca a sectores que no se constituyen como sujetos de acción social por su inserción en las relaciones de producción, pero cuyas prácticas se articulan en una perspectiva histórica que es en definitiva de clase, y que las sobredetermina: las reivindicaciones de las mujeres, el movimiento estudiantil, la incorporación a la defensa nacional, etc. Al ser una caracterización política, permite la incorporación de grupos y fracciones que, sin perjuicio de su inserción diferente —en términos de clase— en el plano de la producción y la circulación, se integran a las tareas de la revolución o las apoyan. Del mismo modo se puede colocar fuera de esta caracterización de pueblo a elementos u organizaciones que se enfrentan al proceso revolucionario no obstante su situación estructural: el caso de las organizaciones sindicales incorporadas al bloque de la oposición burguesa, por ejemplo.

El *pueblo* es por lo tanto una fuerza sociológicamente heterogénea y contradictoria, unificada políticamente por la dinámica de la revolución. La existencia de esas contradicciones



no se desconoce, pero su desarrollo es subordinado y trata de ser orientado en función de las metas a que tiende la unidad nacional: recuperación económica, defensa nacional:

Las contradicciones que provocan, son contradicciones menos importantes que las soluciones que aportan en la lucha contra el enemigo común. Las contradicciones internas a nivel de las clases sociales, son menos importantes que los logros materiales que obtenemos en la reconstrucción de las bases de la economía nacional (J. Wheelock 1981: 68-69).

En este marco, las clases trabajadoras han experimentado un rápido desarrollo. En el campo la reforma agraria da respuesta a las demandas de tierra, crédito, técnica, insumos, de los campesinos y medianos productores, articulando al sector de la pequeña propiedad individual y cooperativa con grandes empresas agropecuarias estatales y con la mediana y el remanente de la gran burguesía rural. La configuración actual de la estructura agraria muestra el rápido retroceso de la gran burguesía, el fortalecimiento de la mediana producción, y el avance de los pequeños productores y del APP. La integración a las Milicias Populares Sandinistas, a los Colectivos de Educación Popular, a las organizaciones de masas, testimonian el compromiso activo del campesinado con la Revolución. Las condiciones de vida y de trabajo del proletariado agrícola han mejorado sensiblemente a través de la garantía de los salarios mínimos, la extensión de los servicios básicos, la seguridad social y los ingresos no monetarios —salud, educación, subsidios al consumo, atención a los hijos, mejoras en el sistema de abastecimiento, etc. En las ciudades, las condiciones de trabajo y la organización del proletariado industrial y de los asalariados en general, han experimentado mejoras notorias; el Estado y las organizaciones sindicales velan por el cumplimiento efectivo de la legislación laboral, y la generalización del sistema de convenios colectivos ha permitido la incorporación de una amplia gama de beneficios —capacitación, transporte, alimentación, deportes. El nivel general de empleo ha aumentado, pero al mismo tiempo la repercusión interna de la crisis regional, junto con otros factores, está introduciendo modificaciones importantes en la composición del proletariado y en su magnitud como clase.

Una cuestión central en esta problemática de la construcción de la hegemonía dentro del campo popular es la alianza obrero-campesina. A veces se ha tendido a verla mecánicamente como la subordinación económica y política del campesinado al proletariado, y el impulso político a un proceso de colectivización y proletarianización de aquéllos: creación de grandes fincas estatales, eliminación de las formas familiares de producción rural, etc. En este enfoque el papel de los campesinos consistiría en generar volúmenes crecientes de excedentes para alimentar a la clase obrera —fundamentalmente clase obrera urbana— y liberar márgenes cada vez mayores para la inversión productiva.

Este enfoque simplista se apoya en una interpretación errónea del esquema de relaciones entre el "departamento I" (producción de medios de producción) y el "departamento II" (producción de medios de consumo) en economías como la nicaragüense. El primero es visto como urbano y proletario, y el segundo como eminentemente agrario, campesino y, en el fondo, precapitalista. Y asimismo, una generalización trivial de las referencias al conservatismo del campesino parcelario francés en el *Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte* (Marx 1852): el razonamiento plantearía que, si las cosas son así con el campesino francés del siglo XIX (pequeñoburgués, conservador, reaccionario), por lo tanto también el campesino centroamericano del siglo XX debe ser pequeñoburgués, conservador y reaccionario.

La cuestión, por supuesto, es bastante más compleja; no sólo porque el "temperamento conservador" del campesino es un encasillamiento gratuito que no hace justicia ni a Marx ni a los campesinos (cf. por ejemplo Vanden 1982), sino porque el esquema de relaciones entre el "departamento I" y el "departamento II", y entre la ciudad y el campo, presentan características propias en el capitalismo dependiente de Nicaragua, que fueron analizadas en el capítulo II. Allí pudo verse que la estructura agraria presentaba una diferenciación marcada entre la agricultura de exportación y la de granos básicos para el mercado interno. Las mejores tierras, el progreso técnico y las condiciones modernas de explotación se concentraron en aquélla; como consecuencia la producción para el consumo local —y por lo tanto para la reproducción de la fuerza de trabajo— se mantuvo en un profundo atraso, y el abastecimiento



local dependió siempre en gran medida de las importaciones. Merced a su capacidad generadora de divisas, la agroexportación fue la fuente de financiamiento para la importación de insumos materiales, bienes de consumo final y para el pago del endeudamiento externo. En consecuencia no sólo la producción de medios de consumo está fundamentalmente fuera de la ciudad, sino también la producción para la exportación. Además, sólo una proporción relativamente reducida de la población activa urbana está proletarizada, y dos tercios de la población activa urbana se encontraba fuera de los sectores productivos.<sup>43</sup> Finalmente, el modo en que el capitalismo agroindustrial se desarrolló impulsó un proceso de proletarianización de la fuerza de trabajo más amplio en el campo que en la ciudad. En consecuencia la representación tradicional de la alianza obrero-campesina como un proceso urbano-rural, adquiere en Nicaragua una fisonomía predominantemente rural-rural.

Esta manera de funcionar la economía nicaragüense, enraizada como está en las bases estructurales de la sociedad, no puede ser modificada sin una intervención decisiva del Estado que genere la fuerza extraeconómica que impulse la transformación de las relaciones dominantes de producción y circulación, estimule el desarrollo de las fuerzas productivas, y diseñe nuevos procesos de trabajo. Pero éste no es un proceso ni breve, ni fácil, ni carente de contradicciones.

El impulso dado en la etapa presente al campesinado contrasta con la atención que se presta a las reivindicaciones del movimiento obrero. La entrega de tierras, créditos, insumos; la condonación de la deuda agraria, la reducción de los impuestos, destacan frente a la aguda caída del salario real. Este no es sin embargo un problema que coloque de un lado a los obreros de la ciudad y del otro a los campesinos, sino que diferencia a éstos respecto del conjunto de la clase obrera, rural tanto como urbana.

El cuadro VII.5 muestra la evolución de los precios reales a los productores de maíz y de frijol (típicos cultivos campesinos), y del salario real en los cortes de algodón y de café. Aun-

<sup>43</sup> En realidad ésta no es una peculiaridad de Nicaragua. En Costa Rica (1973) el 72 % de la PEA urbana se hallaba en sectores no productivos, en El Salvador (1975) el 68 %, en Guatemala (1973) el 63 %, y en Honduras (1974) el 64 %.

Cuadro VII.5

Nicaragua: Precios y salarios en la agricultura, 1979-83

	Año agrícola			
	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83
<b>A. Precio del maíz al productor</b>				
1. C\$ corrientes <sup>a</sup>	60	80	100	130
2. C\$ de 1980 <sup>b</sup>	89.45	80	77.5	78
3. C\$ 1980 (Índice)	111.8	100	96.8	97.5
<b>B. Precio del frijol al productor</b>				
4. C\$ corrientes <sup>a</sup>	180	220	320	350
5. C\$ de 1980 <sup>b</sup>	268.3	220	248	210.1
6. C\$ 1980 (Índice)	121.9	100	112.7	95.5
<b>C. Salario mínimo en el corte de algodón</b>				
7. C\$ corrientes <sup>a</sup>	20	29	30	35 <sup>c</sup>
8. C\$ de 1980 <sup>b</sup>	30	29	23.2	21
9. C\$ 1980 (Índice)	102.7	100	80.2	72.4
<b>D. Salario mínimo en el corte de café</b>				
10. C\$ corrientes <sup>d</sup>	3.0	3.85	4.0	4.0
11. C\$ de 1980 <sup>b</sup>	4.5	3.85	3.1	2.4
12. C\$ 1980 (Índice)	116.9	100	80.5	62.3
<b>Relaciones</b>				
3 : 9	108.8	100	120.7	134.6
3 : 12	95.6	100	120.2	156.5
6 : 9	118.6	100	140.5	131.9
6 : 12	104.3	100	140.4	153.3

<sup>a</sup> Por quintal. <sup>b</sup> Deflactor: índice de precios al consumidor en el rubro "alimentos, bebidas y tabaco". <sup>c</sup> Sin comida. <sup>d</sup> Por "medio".

Fuente: Elaboración propia de cifras del Ministerio del Trabajo, Ministerio de Comercio Interior, e INEC.

que el deflactor que se ha empleado no es el más apropiado,<sup>14</sup> es evidente que los ingresos del productor se han mantenido, mientras los del obrero agrícola se han deteriorado mucho. La parte inferior del cuadro presenta la relación entre el ingreso de los campesinos y el ingreso de los obreros agrícolas. Siempre con base en 1980-81, en el año agrícola 1982-83 los ingresos mínimos garantizados a los campesinos son casi un tercio más altos que los salarios de los cortadores de algodón, y más de 50 % más altos que los de los cortadores de café.

Además de ser un incentivo para la producción, la política de precios y salarios agrícolas ha actuado objetivamente para retener en su finca a los campesinos pobres que antes vendían su fuerza de trabajo en los cortes de la agroexportación. La reforma agraria, más la caída del salario real en los cortes, definen desestímulos a la salarización estacional de esta fuerza de trabajo. La hipótesis subyacente a esta política parece ser que el incentivo vía precios, tierras, etc., de la producción de granos básicos habrá de incrementar la oferta respectiva mejorando el abastecimiento de la clase obrera y reduciendo, constantes otros factores, su costo de reproducción. Este es, por supuesto, un objetivo de mediano plazo; entretanto, la política de subsidios al consumo de productos básicos, y la extensión de las redes estatales de comercialización, agregadas al mejoramiento general de las condiciones de trabajo, tratan de compensar la caída del salario real o de reducir su impacto.<sup>15</sup> Es posible afirmar, asimismo, que esta política de salarios agrícolas reduce los costos laborales en la agroexportación y, combinada con los incentivos cambiarios concedidos a partir de febrero de 1982, genera un incremento del excedente apropiado por los grandes productores.<sup>16</sup>

El cuadro VII.6 indica que una caída de magnitud similar a la de los salarios en el campo tuvo lugar en los salarios urbanos.

<sup>14</sup> La canasta básica sobre la cual se calcula el índice de precios recoge información exclusivamente del área urbana. Todo indica que en Nicaragua el perfil del gasto de las familias es distinto en las áreas rurales, pero recién a principios de 1984 podrá contarse con datos sistemáticos y confiables.

<sup>15</sup> Sobre la comercialización de productos básicos en el campo, cf. Ruben (1983).

<sup>16</sup> El salario mínimo de los trabajadores en el sector agropecuario se redujo en términos reales 40 % entre 1980 y 1983.

## Cuadro VII.6

Nicaragua: Evolución del salario real urbano 1977-83

Salario	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
<b>A. C\$ de 1980 *</b>							
Salario promedio	2829	2752	2370	2011	1859	1782	1628
Salario mínimo industrial	1276	1293	1103	973	879	725	586
<b>B. Índices</b>							
1. Salario promedio	140.5	136.8	80.9	117.8	100	92.4	88.5
2. Mínimo industrial	131.0	132.8	60.1	113.3	100	90.3	74.4
1 : 2	107.2	103.0	134.6	104.0	100	102.3	118.9

\* Deflactor: Índice de precios al consumidor.

Fuente: Elaboración propia de cifras del INSSBI e INEC.

y sobre todo en el mínimo industrial. El alza de los precios al consumidor y la política de contención del salario nominal, se tradujeron en los resultados del cuadro. El salario promedio se deterioró 20 % desde 1980, pero el salario mínimo se redujo el doble: 40 %.

En años recientes se estaría desarrollando un movimiento de fuerza de trabajo hacia el sector no asalariado y hacia el asalariado no productivo, cuyo efecto sería la reducción del proletariado productivo. El cuadro VII.7 señala que en sólo un año el proletariado urbano se redujo entre 5 mil y 9 mil personas, de acuerdo a la forma en que se defina la categoría.

En las ciudades es notorio el crecimiento del sector no asalariado y, sobre todo, del sector informal. Si en 1980 el Ministerio de Planificación lo estimaba en más de un tercio de la fuerza de trabajo no agropecuaria (MIPLAN 1981: 93), a me-

Cuadro VII.7

Nicaragua: Evolución del proletariado urbano, 1981-82

PEA	1981		1982		Diferencia (%)
	Miles	%	Miles	%	
Total	422.0	100.0	454.2	100.0	+ 7.6
Obreros y jornaleros	146.6	34.7	141.5	31.1	- 3.5
Empleados	125.0	29.6	139.3	30.7	+ 11.4
Resto (Patrones, trabajadores por cuenta propia, trabajadores familiares no remunerados, otros n.e.)	150.4	35.7	173.4	38.2	+ 15.3
Obreros no agrícolas, conductores de máquinas y vehículos de transporte y trabajadores asimilados	159.0	37.7	150.6	33.0	- 5.6

Fuente: INEC 1981c, 1982.

diados de 1982 representaba alrededor del 43 %.<sup>17</sup> Existe evidencia que los asalariados productivos cuyo centro de trabajo reducen su nivel de actividad o cierran por efecto de la crisis externa —falta de divisas, carencia de insumos importados, reducción de las exportaciones— prefieren pasar al pequeño comercio, actividades artesanales, reparaciones y similares, más que aceptar los empleos productivos de emergencia.<sup>18</sup> No se trata solamente de una cuestión ideológica, más proclive a la "independencia" del autoempleo que a la disciplina del trabajo industrial, o de un rechazo al carácter duro de las tareas de construcción y agrícolas que se ponen a su disposición, sino asimismo a la existencia de niveles de ingreso mucho mayores en el sector de empleo informal.<sup>19</sup> A su vez, la existencia de un amplio y creciente sector informal genera un efecto de reducción de las presiones obreras por aumentos salariales, en la medida en que aparece como una alternativa más rentable —al menos en el corto plazo— por contraste con un sector de empleo formal en el cual los salarios reales se deterioran rápidamente por la inflación. A su vez los sectores no productivos que a fines de la década de 1970 representaban casi dos terceras partes de la PEA no agropecuaria, han seguido creciendo en los años recientes (MIPLAN 1981: 86).

Frente a esta situación, cabe preguntarse cuál puede llegar a ser el perfil futuro de la clase obrera urbana, de proseguir este movimiento intersectorial de fuerza de trabajo hacia las actividades no asalariadas y, sobre todo, hacia el llamado sector informal. Y, al mismo tiempo, cuál es la capacidad de absorción por este sector, de las sucesivas camadas de fuerza de

<sup>17</sup> Estimación a partir de datos de INEC (1982).

<sup>18</sup> El programa de empleos de emergencia se creó a fines de 1982 para hacer frente a la caída del empleo industrial como efecto de la reducción del nivel de actividad. Administrado por el Ministerio del Trabajo y la Coordinadora Sindical, garantiza puestos de trabajo en la agricultura y la construcción para los trabajadores desplazados, pagándose el salario mínimo industrial. Solamente un reducido número de trabajadores optó por el programa.

<sup>19</sup> Cf. las declaraciones del Ministro del Trabajo y del Secretario General de la CST en *Barricada* 1º de diciembre de 1982. De acuerdo a estimaciones preliminares del autor, sobre la base de una muestra no sistemática efectuada en noviembre de 1982 en dos barrios de Managua, el ingreso mensual del pequeño comercio de comidas y bebidas (gaseosas y jugos naturales) puede llegar a ser entre tres y cuatro veces más alto que el salario mínimo en la industria.

trabajo que se desplazan hacia él, y sobre todo, cuáles pueden ser sus límites.

En estas condiciones, la óptica *proletaria* a que nos hemos referido en el capítulo III, que engloba al conjunto de las masas trabajadoras y populares bajo el rótulo proletario, ha cedido paso a la identificación de diferenciaciones y contradicciones en el seno del campo popular. La Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), que agrupaba al principio tanto a los obreros agrícolas como al campesinado, a partir de abril de 1981 pasó a organizar únicamente a los primeros, creándose la UNAG como organización específica del campesinado y la mediana producción agropecuaria. En el ámbito no agropecuario la pequeña y mediana producción no cuentan con una organización similar, ni para impulsar sus demandas ni para articularlas a las políticas del Estado revolucionario.

Por último, el ardor reivindicativo del campesinado, y la atención y difusión que él recibe, contrastan con la mesura del movimiento obrero para plantear sus demandas fundamentales: empleo, salario, abastecimiento.<sup>20</sup>

La etapa actual de la revolución presenta sin dudas una mayor capacidad del campesinado para incorporar sus reivindicaciones a la dirección política del proceso, que la del movimiento obrero. Nuestra hipótesis es que ello se debe, constantes otros factores, a la vigencia del esquema de economía mixta. Mientras los incentivos económicos al campesinado tienden a incidir directamente en el nivel de la producción, y la nacionalización de los mecanismos de comercialización determina que el excedente se distribuya entre el productor directo y el Estado como expresión del proyecto popular, otra cosa ocurre en la industria y la agroindustria. Aquí el impacto de los estímulos económicos a los productores directos resulta mediado por el comportamiento a la baja de la burguesía, que aún controla la mayor proporción del producto; el excedente generado por los trabajadores aporta por lo tanto, en una proporción significativa, a las arcas del capital —poco interesado en la reactivación de la economía. En una etapa en que esta reactivación

<sup>20</sup> Compárese por ejemplo el espacio dedicado por *Barricada* a la demanda de condonación de la deuda bancaria de los campesinos, con el que se asigna a la cuestión salarial; asimismo, la abismal diferencia que existe en los niveles de movilización de las organizaciones respectivas en torno a una y otra reivindicación.

aparece como una meta prioritaria, el "retorno" de los incentivos económicos al productor directo parece más seguro en el campesinado que en el proletariado; al mismo tiempo que la necesidad de mantener la estrategia de unidad nacional no permite eliminar la mediación del capital. En este sentido el impulso a la participación obrera en la gestión de la economía se orienta a introducir la vigilancia revolucionaria de los trabajadores sobre los mecanismos de la economía empresarial que, bajo el control de la burguesía o de administraciones ineficientes, retardan o impiden la conversión de aquellos estímulos, y del esfuerzo de los trabajadores, en mayor producción.

Pensamos sin embargo que la distribución de costos y beneficios inmediatos no basta para identificar la existencia de una hegemonía campesina en la etapa actual de la revolución. Primero, porque hegemonía es *conducción*: una cuestión política que en principio tiene poco que ver con la porción de excedente que se apropia quien la ejerce. Segundo, porque todavía la Revolución Sandinista se encuentra en un período en el cual sus fuerzas motrices están en la búsqueda de una correlación relativamente definida —no necesariamente permanente, o estable— dentro del campo popular. Por lo tanto, por las tareas que asume y por el marco nacional e internacional en que las impulsa, la conducción política de la revolución por el FSLN expresa, en esta etapa, la *hegemonía del conjunto del pueblo* en la unidad nacional —con relativa independencia de la distribución dentro del pueblo, de los beneficios inmediatos de la política económica.

La distribución desigual de beneficios y estímulos económicos a la burguesía agroexportadora y el campesinado, y a la clase obrera, no es una cuestión que se inscribe únicamente en el ámbito de la economía. Las fracciones de la burguesía que aún permanecen en el país, controlando posiciones importantes en la producción de exportables y, por lo tanto, en la generación de divisas, constituyen un grupo estratégico tanto para la revolución como para la contrarrevolución. A través de la concesión de incentivos económicos y, en general, de la transferencia de excedentes por los mecanismos que hemos analizado el gobierno revolucionario busca contrabalancear las interpelaciones ideológicas de la contrarrevolución y el imperialismo. La creación de un clima económico atractivo y confiable y el progresivo relajamiento del estado de emergencia dicen re-



lación con el interés político de la revolución en mantener dentro del campo nacional-democrático a estos elementos, aunque sea como opositores internos, disputándoselos a los grupos contrarrevolucionarios. Se trataría, sobre todo, de consolidar la unidad nacional con el espectro más amplio posible de fuerzas sociales, incluyendo en consecuencia a estas fracciones *no-contrarrevolucionarias* de la burguesía. La masa de excedentes transferida hacia ellos por las políticas de estímulo sería, desde esta perspectiva, el *precio* pagado para mantener la vigencia de la política de unidad nacional. Hemos señalado ya, sin embargo, que la distribución de la carga de ese precio dentro del campo nacional se lleva a cabo de manera desigual.

En estas condiciones la burguesía se encuentra colocada en medio de solicitaciones de signo opuesto, respaldada en su posición frente a la revolución por varios gobiernos de la región en nombre de una democracia *pluralista*. Hasta el momento su respuesta ha consistido en la estrategia de presión que tan buenos resultados le dio en el pasado. Toma los estímulos que se le ofrecen, ocupa el espacio que se le brinda en la institucionalidad del nuevo Estado, exige nuevas concesiones, pero prolonga su comportamiento económico a la zaga, refuerza sus vinculaciones internacionales, confía en que la continuación de la crisis internacional obligue al FSLN a una flexibilidad siempre mayor y, en el fondo, sigue convencida que "antes" se estaba mejor.

La capacidad de la revolución para conseguir que la burguesía compatibilice la posición política de subordinación que se le quiere imponer, con la función que se espera de ella en la esfera de la producción, sigue siendo por el momento una hipótesis abierta a la discusión. Entretanto el financiamiento de esa hipótesis por la contención de los ingresos asalariados, el déficit fiscal y el proceso inflacionario, plantean la existencia de tensiones crecientes entre la estrategia de desarrollo basada en la economía mixta y el tipo de unidad nacional en que se enmarca, por un lado, y la caracterización de la clase obrera como una de las fuerzas motrices de la revolución. No se trata ya de la cuestión de la hegemonía dentro del campo popular, a la que nos referimos hace un momento, sino al problema, que toda revolución de liberación nacional enfrenta, de la articulación de la contradicción fundamental, de clase, con la contradicción nacional.

Hasta el momento el FSLN ha optado por una estrategia de enfrentamiento a la crisis externa y a las crecientes presiones internacionales, basada en el tensionamiento del nivel de compromiso político-ideológico de las masas e intensas movilizaciones, combinadas con la concesión de beneficios económicos a la burguesía y la apelación a la capacidad de aguante de los trabajadores en aras del proyecto histórico de la revolución y la necesidad de su supervivencia. Esta estrategia ha contado durante toda su vigencia con la aceptación de las organizaciones de masas, pero al mismo tiempo ha permitido reproducir y ampliar, dentro del campo de la nación, la gravitación de estas fracciones del capital y eventualmente su capacidad para imponer en algunos ámbitos del Estado, su propia óptica en el manejo de los instrumentos de la política económica.

En todo caso parece evidente que las preocupaciones por enfatizar el carácter en última instancia de clase del proyecto de unidad nacional, la caracterización del APP como eje estratégico y dinámico de la estrategia de desarrollo, las reecriminaciones públicas por la exigua respuesta de la burguesía a los estímulos que se le dirigen —temas que constituían una parte importante y recurrente del discurso político revolucionario dominante en los primeros años después del triunfo (cf. *supra*, capítulos IV.4 y V.5)—, han cedido paso ante las renovadas agresiones externas al énfasis en el tema *nacional* más que en sus proyecciones de clase, y al interés por negociar con las fracciones *no-contrarrevolucionarias* de la burguesía, ganar tiempo, privilegiar el corto plazo y el seguimiento de la coyuntura.

#### 4. La concepción sandinista de la democracia

La lucha del FSLN contra la dictadura somocista se caracterizó por elevados niveles de participación popular. Los dos últimos años fueron de una verdadera lucha de masas; la insurrección popular fue la fructificación de un largo proceso de incorporación de amplios sectores de la población a la lucha

revolucionaria. Numerosas organizaciones fueron impulsadas para canalizar y potenciar la integración del pueblo. La formación del MPU en 1978 expresó la primera formulación orgánica de la hegemonía sandinista en la unidad popular; posteriormente la constitución del FPN proyectó esa hegemonía al conjunto de fuerzas democráticas y antiimperialistas.

La participación popular constituyó el eje central de dos décadas de lucha sandinista, y es hoy el elemento esencial de la concepción sandinista de la democracia:

Para el Frente Sandinista la democracia no se mide únicamente en el terreno político y no se reduce solamente a la participación del pueblo en las elecciones. Democracia (...) significa participación del pueblo en los asuntos políticos, económicos, sociales y culturales. Mientras más tome parte el pueblo en esa materia será más democrático. (...) La democracia se inicia en el orden económico, cuando las desigualdades sociales principian a debilitarse, cuando los trabajadores, los campesinos, mejoran sus niveles de vida. (...)

Una vez logrados estos objetivos, de inmediato se extiende a otros terrenos: se amplía al campo del gobierno; cuando el pueblo influye sobre su gobierno, cuando el pueblo determina a su gobierno, le guste a quien le guste.

(...) en una fase más avanzada, democracia significa participación de los trabajadores en la dirección de las fábricas, haciendas, cooperativas y centros culturales. En síntesis, democracia es intervención de las masas en todos los aspectos de la vida social (FSLN 1980a).

Se trata de un concepto más complejo que el de *democracia electoral*. No rechaza las elecciones, pero no reduce éstas al *sufragio*. La consigna "El pueblo ya hizo su elección" lanzada por el FSLN a principios de 1980 expresó por un lado el compromiso de las mayorías populares con una lucha y con un proyecto de transformación de la sociedad, rubricado con enormes sacrificios. Y, al mismo tiempo, el enjuiciamiento de la práctica electoral existente hasta 1979, que funcionó para transar las contradicciones internas a la clase dominante sobre la base de la permanencia del régimen somocista.<sup>21</sup>

Democracia es así, para el FSLN.

<sup>21</sup> En este sentido fue una típica democracia burguesa, en el sentido clásico de procesamiento y resolución de contradicciones entre propietarios.

...aquella en que:

- el régimen económico asegura a hombres y mujeres sus necesidades básicas de alimento, trabajo, vivienda, educación y salud;
- las instituciones gubernamentales están vertebradas para acortar la distancia y hacer fluida la comunicación entre el aparato de poder y las mayorías populares;
- el gobierno hace descansar la defensa del Poder Popular sobre todo el pueblo en armas;
- se cuenta con la participación popular organizada para la realización de los planes económicos, políticos y sociales;
- existe la voluntad política, la legislación y los mecanismos para electivizar y garantizar los derechos políticos, sociales, culturales de las mayorías;
- el poder está detentado por las masas trabajadoras, cuyo sello es netamente popular (C. Núñez 1983).

La práctica de cuatro años de transformaciones revolucionarias testimonia el desarrollo de este proceso en los diferentes ámbitos y dimensiones de la sociedad. Algunos aspectos son más notorios que otros: unos están más avanzados; otros experimentan mayores dificultades. Pero en su conjunto contribuyen a diseñar un esfuerzo de participación organizada del pueblo en el proceso de transformación de la realidad social, en el mejoramiento de sus condiciones de vida, y en la construcción de un nuevo orden político.

Las Milicias Populares Sandinistas hacen posible la integración voluntaria de estudiantes, campesinos pobres, trabajadores del campo y la ciudad, profesionales y técnicos, a la defensa de la revolución; una parte muy importante del enfrentamiento a las fuerzas contrarrevolucionarias, y la defensa de los centros de producción, corre por cuenta de las MPS. Las Jornadas Populares de Salud incorporan a la gente a la producción de condiciones de higiene y salud ambiental, erradicación de enfermedades endémicas, prevención de epidemias, etc. La progresiva institucionalización del Estado revolucionario se desenvuelve contemplando una amplia participación de las organizaciones populares en numerosos niveles y estructuras: el Consejo de Estado, el Consejo Nacional de la Reforma Agraria, el Consejo Popular Nacional de Salud, los Tribunales Populares Antisomocistas, la Jefatura de Defensa, el Consejo Nacional Asesor de Educación, además de las instancias indicadas

en el capítulo V. Ámbitos de la sociedad usualmente considerados de índole *técnica* y en consecuencia reservados para los especialistas, se abren a la intervención directa de la población a través de las organizaciones de masas.

La práctica de la democracia sandinista plantea cuestiones generales de teoría política que, aunque exceden los alcances de este libro, queremos por lo menos apuntar.

El sujeto político de la democracia popular sandinista no es ya el *ciudadano* tal como lo conceptualiza la teoría política liberal-burguesa. En esta concepción el *ciudadano* es el *individuo aislado* —correlato institucional del productor/propietario *libre*— en ejercicio y defensa de una especie de microsoberanía política frente a un Estado respecto del cual reafirma su individualidad. En la Revolución Sandinista en cambio, lo que convierte al *individuo en ciudadano* es la ruptura de ese aislamiento recíproco, la integración voluntaria en las organizaciones de masas, ya que la *práctica* de sus nuevos derechos políticos, sociales, económicos, culturales, tiene vigencia en la medida en que esa integración se lleva a cabo.

¿Significa esto una *mediatización* de las inquietudes, las iniciativas, los intereses de la gente, por estas nuevas estructuras? En el fondo, la crítica a las organizaciones de masas desde la posición de las organizaciones de la burguesía —COSEP, INDE, y otras— ha versado sobre este punto (cf. por ejemplo INDE 1981). Para esta perspectiva, las organizaciones de masas son formas de manipulación del ánimo colaborador de la gente, e instrumentos que coartan la libertad y la independencia de criterio de los habitantes. En especial, estas críticas se han centrado sobre los CDS, cuya participación abarca numerosos ámbitos y actividades —defensa, abastecimiento, sanidad ambiental, etcétera.

Sin perjuicio de los desajustes, errores, e incluso arbitrariedades en que a veces se incurrió,<sup>22</sup> y en las inevitables limitaciones derivadas de la falta de experiencia y la escasez de

<sup>22</sup> Cf. sin embargo en *Enrío* 17 (noviembre 1982) la carta del Comandante de la Revolución Bayardo Arce, Coordinador de la Comisión Política de la Dirección Nacional del FSLN, a los coordinadores de CDS, llamándoles la atención sobre la necesidad de poner fin, rápidamente, a algunas extralimitaciones en que algunos CDS estaban incurriendo. Cf. asimismo las declaraciones de un miembro del Ejecutivo Nacional de los CDS en *El Nuevo Diario*, 16 de enero de 1983.

recursos, el enfoque de las organizaciones de masas como mediatización de una relación que debería ser directa revela la presencia de los elementos de la ideología democrática burguesa que señalamos más arriba. Pero la relación Estado/organizaciones de masas/población puede ser pensada también de una manera distinta, en la cual las organizaciones aparecen como la instancia que viabiliza el desarrollo de la participación popular en los nuevos ámbitos que se abren para ella.

En este sentido es posible diferenciar dos dimensiones de la cuestión. Por un lado, los derechos tradicionales de la persona: éstos son reconocidos a cada individuo y su ejercicio es asimismo personal; no reconoce más limitaciones que las que se derivan de situaciones excepcionales, previstas en todo tipo de sistema político: estado de guerra o agresiones externas, emergencia interna, etc. No es ocioso recordar que estos derechos, aunque enunciados en todos los textos constitucionales y legales, nunca tuvieron vigencia para la masa del pueblo durante la historia prerrevolucionaria de Nicaragua. Y, por otro lado, están los *nuevos derechos*, reconocidos también al conjunto de la población pero que tienen, objetivamente, un referente de clase —en cuanto son producto del triunfo popular revolucionario—, y *cuyo ejercicio*, por la propia naturaleza de esos derechos, requiere la integración de sus titulares a estructuras colectivas. En la medida en que el Estado popular se construye fundamentalmente a través del ejercicio de estos nuevos derechos *de práctica colectiva*, el individuo se transforma en ciudadano al integrarse a las estructuras que hacen posible esas prácticas.

Por el momento la vigencia efectiva de la democracia sandinista está más desarrollada en la esfera socioeconómica que en el ámbito jurídico-institucional. La caracterización de la democracia popular hecha por el FSLN —como participación popular que comienza en el ámbito económico-social y progresivamente avanza al terreno político-institucional— expresa el estado actual del desarrollo de este proceso. Y al mismo tiempo señala la necesidad de la revolución de poner a la sociedad política, y a las clases populares, en condiciones de ejercer efectivamente la práctica de la democracia. Simultáneamente, este proceso colectivo de crear las condiciones para una más plena vigencia de la democracia es, en sí mismo, una dimensión de ésta y, más en general, del proceso de constitución del

poder popular. Esto afecta los intereses de las viejas clases dominantes —tanto materialmente como simbólicamente, aunque de manera desigual, ya se ha visto, en uno y otro aspecto—, y alimenta su enfrentamiento a esta concepción de la democracia.

Con el triunfo de la revolución la cuestión de la democracia cambia de contenido, ya no se trata de liquidar el poder de la dictadura, del asalto al Estado opresor, sino de construir un nuevo poder político, de contenido popular.

La estrategia sandinista de lucha contra la dictadura tuvo siempre como horizonte la realización de profundas transformaciones sociales, pero una y otra etapa de la lucha involucró distintos alineamientos de fuerzas, diferentes alianzas y antagonismos. La lucha contra la dictadura concitó el entusiasmo y el consenso de prácticamente toda la sociedad civil, pero a medida que la transformación de la sociedad y la constitución de un nuevo poder avanzan, las bases de legitimidad de la revolución se reformulan; se retrae el apoyo de aquellos sectores sociales que, tras la victoria sobre la dictadura, advierten que la revolución no se desarrolla en beneficio de sus intereses; al tiempo que sectores que no tuvieron una participación decisiva en la lucha antidictatorial —por el modo en que ésta se desarrolló, por los métodos utilizados, etc.— pueden pasar a desempeñar un papel de gran importancia en la etapa de las transformaciones sociales.

El tratamiento a la oposición es una de las cuestiones que más debate ha merecido en los análisis de la Revolución Sandinista, aunque en general los enfoques han tendido a reducir la oposición a la que emana de la burguesía no incorporada —o desincorporada— al proceso, cuando además de ésta existió, en los momentos iniciales, lo que podríamos llamar una oposición de izquierda. Si para aquélla todo avanza revolucionario es excesivo, para ésta siempre era demasiado exiguo.

La experiencia de estos cuatro años muestra el progresivo desplazamiento de la oposición burguesa hacia las filas de la contrarrevolución; a pesar del diálogo que continuamente el FSLN trata de mantener con ella, de los incentivos definidos a su actividad económica —a costa, ya se ha visto, de postergar la satisfacción de demandas populares—, y del cuidado observado por diferenciar la oposición propiamente tal, de la contrarrevolución, el desenvolvimiento del proceso revolucionario,

y en particular el discurso político de la revolución, no pueden impedir ese desplazamiento. La posición de principio de la revolución al respecto es conocida:

que se limite a explotar sus medios de producción y que utilice estos medios para sobrevivir, no como instrumentos de poder, de imposición (Wheelock 1983: 35).

Hasta el momento, sin embargo, la burguesía ha demostrado estar poco dispuesta, o ser poco apta, para afrontar esta demanda. Pero al mismo tiempo los controles estatales sobre su actividad, y el monopolio efectivo del poder político por el campo revolucionario, orientan su estrategia opositora hacia el terreno de la ideología —aparte de lo que se ha visto acerca de las pugnas en la esfera de la circulación. La religión, la educación, la cuestión de las garantías civiles y los derechos políticos convencionales, devienen ámbitos privilegiados de la confrontación de clase.<sup>21</sup>

La vigencia internacional de la ideología liberal-burguesa ha llevado a centrar la discusión sobre el carácter democrático o autoritario del poder político que la Revolución Sandinista está construyendo en temas como la realización de elecciones, la política de medios de comunicación, y similares. Lo erróneo —en el mejor de los casos— de esta discusión no son los temas sobre los que versa, sino la manera cómo los enfoca. El debate sobre las elecciones se ha llevado a cabo, tanto por la burguesía como por sus aliados y amigos internacionales, al margen de una consideración seria sobre las condiciones concretas en que Nicaragua está llevando a cabo su revolución. No hay, en toda la historia del país, un precedente que pueda servir como punto de referencia, y la experiencia previa, al contrario, abona la desconfianza, o el desprecio, de amplios sectores de la población, por este tipo de procedimientos. Algo que los observadores externos no parecen —o tal vez no pueden— percibir, es el hecho evidente para cualquiera que observe de cerca las cosas, que las elecciones no constituyen una preocupación, o una cuestión que atraiga la atención, de la mayoría de la gente. Ya se vio además en el capítulo anterior, que solamente

<sup>21</sup> Cf., para un panorama detallado sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, Ministerio de Justicia (1983).



una de las organizaciones participantes en la Consulta Nacional de Educación —una organización de empresarios de la construcción— señaló a las elecciones como un atributo de la democracia. Otros son los temas que atraen la atención de la gente: el abastecimiento, la carestía de la vida, la defensa, la participación en las organizaciones de masas. Estos temas que concitan activamente la atención popular, tampoco son analizados por quienes reclaman la realización de elecciones, en lo que toca a su gravitación sobre la posibilidad de llevarlas a cabo: ¿son los ataques militares desde Honduras, el financiamiento millonario a la contrarrevolución, el bloqueo a la asistencia financiera de organismos internacionales, la destrucción de caminos, puentes, depósitos de combustible, el secuestro de campesinos, la masacre de pueblos enteros, el ambiente más propicio para llevar a cabo una campaña electoral? ¿Qué candidato, como no sea un militante revolucionario, se atrevería a aventurarse en los territorios fronterizos con Honduras?

Por último, es muy difícil evitar que, aunque sea producto de preocupaciones honestas, la inquietud por las elecciones sea vista por mucha gente como una reivindicación contrarrevolucionaria, o al menos de enfrentamiento a la revolución. En los hechos los únicos que reclaman elecciones son los grupos opositores, porque ven en éstas la posibilidad de acceder a un poder que les es esquivo. Independientemente del asidero que esta hipótesis tenga en la realidad, ello basta que mucha gente vea en estos reclamos la "punta" de una posición reaccionaria.

Las presiones opositoras en torno a la cuestión electoral tienen sin dudas un objetivo que va más allá de las elecciones mismas. El FSLN se comprometió, en agosto de 1980, a convocar a elecciones en 1985, y desde mediados de 1982 el gobierno revolucionario se halla adoptando diversas medidas en ese sentido. La insistencia de los partidos de la oposición, del gobierno norteamericano, y de otros elementos del exterior sólo se explica, en consecuencia, como maniobras para poner en duda la honestidad política de la Revolución Sandinista y para presentar la convocatoria electoral como el resultado de sus propias presiones, antes que como el cumplimiento voluntario de un compromiso de la revolución.

La oposición "de izquierda" que existió en los momentos iniciales del triunfo revolucionario no pudo subsistir a las con-

frontaciones que se desarrollaron en ese período y que hemos considerado en el capítulo V. En la actualidad las organizaciones políticas y sindicales que ocupan este sector del espectro ideológico acompañan al FSLN en el avance de la revolución, reconocen su condición de organización de vanguardia, participan de la institucionalidad revolucionaria y de las instancias de acción política y sindical unitaria. En éstas, son las portavoces del clasismo obrero y de los más altos niveles de reivindicacionismo gremial, al mismo tiempo que aceptan las prioridades y estrategias definidas por el FSLN para el proceso político global.<sup>21</sup> El cuestionamiento de la línea política del FSLN, los intentos de disputar su hegemonía en el campo revolucionario, han desaparecido de sus documentos y de sus pronunciamientos públicos. Pero al mismo tiempo que suscriben la impronta que el FSLN impone al proceso, mantienen explícitamente la insistencia en reivindicaciones muy sentidas por las masas trabajadoras —en primer lugar, la reivindicación del salario— y en la necesidad de incrementar la presión política y económica sobre la gran burguesía, cuestiones que virtualmente han desaparecido de los pronunciamientos de las organizaciones sindicales sandinistas desde mediados de 1981, en aras de la estrategia de unidad nacional en la presente coyuntura internacional.

La problemática de la constitución de un poder democrático popular no se reduce sin embargo a la cuestión de la oposición política. Ya se señaló que el proceso de construcción de una democracia popular es también el proceso de constitución de un *sujeto político* distinto del de las democracias liberal-burguesas. Si éste se constituía en su enfrentamiento al Estado, el sujeto político de una democracia popular se constituye en el efectivo ejercicio de la participación y la organización que la revolución pone a su alcance y de las que depende su propio avance. Desde esta perspectiva, el tema crucial es el de las relaciones entre el Estado revolucionario y las organizaciones de masas que hacen posible el ejercicio de la participación

<sup>21</sup> Cf. por ejemplo el reportaje al representante del Frente Obrero en la Coordinadora Sindical de Nicaragua, en *Prensa Proletaria*, 6 (octubre 1983); y el comunicado del Frente Obrero sobre la cuestión salarial en *Prensa Proletaria* 5 (septiembre 1983); asimismo el reportaje al Secretario General y al Subsecretario General de la CAUS, en *Amanecer* 65 (octubre 1983).

del pueblo. En particular: ¿cuál es el carácter de esa participación? ¿Se está en presencia, realmente, de una progresiva *desestatización* de la política social de la revolución —en el sentido de un mayor ámbito de participación autónoma de las organizaciones de masas—, o bien la participación de las organizaciones de masas debe ser caracterizada como una paulatina *conversión de ellas en aparatos* del Estado popular? ¿La participación de las organizaciones de masas es una participación política o bien obedece a criterios de tipo *técnico* u *operativo* —la falta de recursos suficientes como resultado del desbarajuste y del saqueo somocista, y de las agresiones operadas desde el exterior?

Tratándose de una revolución que recién comienza, donde no sólo las organizaciones de masas sino también el propio Estado revolucionario, se encuentran en proceso de constitución, de búsqueda de sus propios perfiles, la matriz de sus relaciones recíprocas también se encuentra todavía en proceso. Es imposible por lo tanto, a esta altura temprana del desarrollo de estas búsquedas, ofrecer una respuesta definitiva. Pero creemos que la exposición efectuada a lo largo del libro permite señalar algunos elementos.

Parece fuera de toda duda que los resultados alcanzados tan rápidamente en materia educativa, sanitaria, de defensa, no habrían sido posibles sin la participación de la gente a través de las organizaciones de masas, dadas las limitaciones de recursos, las dificultades espaciales, etc. Pero esta participación no fue simplemente técnica, ni se limitó al plano de lo meramente operativo. Es, en el sentido más completo del término, una participación *política*, en la medida en que implica en sí misma un proyecto de organización y de conducción de la comunidad nacional; en definitiva, un proyecto de clase. El Estado apoya, asesora, dota de recursos materiales hasta donde es posible, pero no suplanta ni, mucho menos, subordina. Por otro lado, dentro del propio Estado se han creado ámbitos e instancias institucionales de participación —mencionadas en otros lugares de la exposición— donde las organizaciones de masas plantean sus puntos de vista y discuten sus posiciones respecto de las cuestiones de política que se definen en ellas. Como generalmente las decisiones se toman por consenso, la inferioridad numérica de las organizaciones no significa necesariamente falta de gravitación real.

La Consulta Nacional de Educación presenta sin dudas un caso particularmente claro del modo en que las proposiciones de las organizaciones son receptadas por el Estado y convertidas en políticas; los fines y objetivos de la nueva educación nicaragüense adoptados el 1º de marzo de 1983 por la JCRN, reproducen casi textualmente las recomendaciones mayoritarias de los participantes en la Consulta (cf. MED 1983b). Existen otros casos similares aunque tal vez menos notorios: la incorporación de la mujer al servicio militar, el proyecto de ley de vivienda, la legislación sobre la familia, la ley de partidos políticos, la ley sobre descapitalización, son, entre otros, testimonios de la capacidad efectiva de determinación de objetivos y líneas de política por las organizaciones; de crítica y de consenso respecto de ámbitos e instancias estatales.<sup>21</sup>

Además, puesto que se trata, como ya se dijo, de un Estado que está en proceso de constitución, hablar de *desestatización* puede resultar prematuro, en cuanto las actividades a que se hace referencia nunca antes habían pertenecido al ámbito del Estado. La revolución las crea, directamente, como ámbitos de la participación popular.

Finalmente, la discusión de las relaciones entre las organizaciones de masas y el Estado en la Revolución Sandinista debería tomar como punto de partida la circunstancia que, tanto aquéllas como éste, son el producto —aunque se trate de un producto en formación— de un mismo y único proyecto político revolucionario; circunstancia que, sin embargo, no siempre es tomada en consideración en las discusiones académicas sobre el tema (cf. H. Weber 1981; Petras 1981). Esto no significa desconocer que se trata de enfoques y problemas que están en debate, y que el *cientismo*, el *tecnocratismo*, y las concepciones *aparataistas* forman parte de la dinámica interna de toda revolución social, especialmente cuando ella se desenvuelve en una sociedad sin tradición en materia de organizaciones ni en lo relativo a la participación, y sobre todo cuando debe hacer frente a agresiones armadas y presiones externas de intensidad creciente. En estas condiciones el tiempo, los ensayos, los errores que implica un amplio proceso de participación y

<sup>21</sup> Véanse por ejemplo las críticas de los CDS a diferentes aspectos de la gestión del gobierno, en *Barricada*, 8 de setiembre de 1982 y 24 de enero de 1983; *El Nuevo Diario*, 16 de febrero de 1983.

descentralización en un sistema político y económico que recién se está estructurando, dejan lugar a veces a los criterios de eficiencia y ejecutividad, favoreciendo una articulación más estrecha de las organizaciones de masas al Estado revolucionario.

El proceso de construcción de una democracia popular tiene lugar en Nicaragua en un marco totalmente diferente al que rodea los intentos de las clases populares de otros países del continente por articular sus perspectivas en el sistema político imperante en ellos. En estos países las luchas populares por la democracia tienen lugar en el ámbito de un Estado preexistente y, por lo tanto, con una pertenencia de clase ya definida. En Nicaragua en cambio el proyecto democrático de las masas va de la mano con el proceso de constitución de un Estado revolucionario y popular y, más aún, de introducción de profundas modificaciones a la estructura socioeconómica. Implica por lo tanto *crear* un Estado nuevo y no solamente imponer un carácter distinto a un Estado ya existente. El Estado somocista, forma de expresión en Nicaragua del Estado capitalista dependiente, se reducía en definitiva al poder coactivo de la Guardia Nacional, la derrota de ésta por las armas sandinistas significó el derrumbe del Estado.

La Revolución Sandinista debe hacerse cargo de la creación del Estado no sólo como Estado de un proyecto político popular y antiimperialista, sino en el sentido más elemental de un Estado *moderno*: desde un ejército nacional hasta un servicio eficiente de comunicaciones; desde un poder judicial hasta un sistema educativo; desde la institucionalización de la ciudadanía hasta la ordenación del tránsito urbano; desde la integración física del territorio hasta la creación de una burocracia medianamente eficiente...

Sería ingenuo suponer que el proceso de desarrollo de la democracia en la Nicaragua revolucionaria se lleva a cabo sin contratiempos ni dificultades, o que éstas se deben únicamente a las presiones del imperialismo. Hemos señalado en varias oportunidades la falta de tradición democrática, de instituciones políticas, de vigencia del derecho, etc., en el país; todo esto se traduce en falta de experiencia. Sería incorrecto también, por lo tanto, centrarse exclusivamente en las limitaciones temporales de la democracia sandinista, o poner un peso excesivo en los errores que a veces se cometen. No se trata,

por supuesto, de cerrar los ojos a la realidad o de adoptar una posición de benevolencia paternalista: los errores de los revolucionarios son más nocivos para el proceso revolucionario, que los ataques de sus enemigos. Pero la *denuncia* de los errores desde afuera del proceso revolucionario es irrelevante para su enmienda. Se trata entonces, en una obra de este tipo, de *comprender* las limitaciones objetivas y subjetivas de un proceso democrático popular en una sociedad como la nicaragüense, en medio de las presiones a que se encuentra sometida, y sin una práctica democrática previa que sirva siquiera como referente.

Una tentación muy frecuente de los observadores de la Revolución Sandinista consiste en juzgar los avances de la democracia popular en Nicaragua estableciendo comparaciones con otras sociedades de la región (¿Venezuela? ¿Costa Rica?) o con un modelo ideal de democracia popular (cf. H. Weber 1981). Sin embargo se omite la circunstancia que ninguna de estas sociedades-modelo tiene una historia de atraso, agresiones, saqueos, como Nicaragua. En ninguna de ellas el analfabetismo aprisionaba hasta hace apenas tres años a más de la mitad de su población adulta. Tampoco se incorporan estos elementos al diseño implícito de los modelos teóricos de lo que *debería ser una verdadera democracia revolucionaria*...

Naturalmente, no es a los observadores a quienes nos tiene que satisfacer la democracia sandinista, sino al pueblo de Nicaragua. La experiencia de cuatro años demuestra, fuera de toda duda, el compromiso activo del pueblo de Nicaragua y su disposición a pelear y a morir por su revolución.

## 5. La lucha por la sobrevivencia

La tarea estratégica de la etapa presente es, para el FSLN, la ruptura de la dependencia externa:

Nosotros hemos definido la lucha Sandinista como una lucha de carácter antiimperialista, antioligárquica, antidictatorial. Para nosotros el enemigo fundamental ha sido el imperialismo norteamericano y el enemigo principal la dictadura. Ya eliminamos el principal, pero todavía no nos hemos librado del ene-

migo fundamental, que es la dominación imperialista. Romper esa dependencia es ahora la tarea estratégica de la Revolución (B. Arce 1980): 10).

Se ha visto en el capítulo II que Nicaragua no contó con grandes inversiones extranjeras directas; la subordinación económica al imperialismo tuvo lugar más por la vía del sector financiero y la comercialización internacional, que en materia de producción directa. Y, con todo, la presencia imperialista fue siempre más marcada en términos políticos, militares y diplomáticos que en materia económica. En consecuencia la etapa que se abre con el triunfo revolucionario no presenta un proceso de amplias nacionalizaciones como fue, por ejemplo el caso de la revolución cubana (Valdez Paz 1980). Excepción hecha de los intereses financieros y de las minas de oro y plata, el APP se constituyó fundamentalmente sobre las propiedades recuperadas del somocismo.

Con el fin de evitar situaciones de confrontación como las que han debido encarar otros procesos revolucionarios, la Revolución Sandinista adoptó una política tanto respecto de las firmas extranjeras nacionalizadas<sup>26</sup> y de las que han permanecido en el país. El retiro de la Standard Fruit en 1982 se debió a una decisión unilateral de la empresa y en violación a convenios firmados previamente con el gobierno de Nicaragua.<sup>27</sup> En el sector industrial las empresas extranjeras han gozado de facilidades fiscales similares a las nacionales y en ciertos casos han recibido subsidios (Nolff 1982). En general se ha tendido a efectuar algunos sacrificios fiscales si ello podía evitar enfrentamientos de tipo político en áreas claves de la economía, o bien entregar argumentos propagandísticos a la política de la Administración Reagan contra la revolución.

De esta manera, sin grandes estruendos pero con firmeza, la Revolución Sandinista ha emprendido pasos que conduzcan a dotar a la economía nacional de una inserción más favorable en la división internacional del trabajo y a liberarla de la subordinación en que se hallaba respecto de los Estados Unidos. Se trata ciertamente de un proceso largo y lleno de dificultades.

<sup>26</sup> Cf. en *La Prensa*, 10 de diciembre de 1982, el acuerdo de compensación con una de las empresas mineras nacionalizadas.

<sup>27</sup> Cf. *Barricada*, 27 de octubre de 1982.

## Cuadro VII.8

Nicaragua: Cambios en el origen y el destino del comercio exterior, 1978-82

Países y regiones	Importaciones				Exportaciones			
	1978		1982		1978		1982	
	u\$s millones	%	u\$s millones	%	u\$s millones	%	u\$s millones	%
Estados Unidos	186.1	31	147.4	19	150.8	23	96.5	24
Resto del mundo capitalista	146.3	25	172.8	22	245.8	38	175.9	43
Industria industrializado	3.6	1	89.1	11	1.1	0	31.3	7
Países socialistas (CAME)	257.9	43	306.2	47	248.4	39	104.1	26
Países del Tercer Mundo	593.9	100	775.5	100	646.1	100	407.8	100
Total								

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior.



El cuadro VII.8 muestra la diversificación del comercio exterior entre 1978 y 1982. Estados Unidos sigue siendo el principal comprador y vendedor de Nicaragua, aunque su importancia proporcional se ha reducido. Las relaciones comerciales con los países socialistas se expandieron rápidamente, sobre todo en materia de importaciones, pero Nicaragua dista mucho todavía de tener con ellos una vinculación comparable en términos relativos a la que mantienen por ejemplo Argentina y Brasil con la Unión Soviética (Sizonenko 1981; J. A. López 1983). Los países industriales desarrollados (Canadá, Europa y Japón) han incrementado su participación en las ventas externas, mientras que el comercio con el Tercer Mundo muestra un comportamiento de sentido opuesto en cada rubro. El crecimiento de las importaciones obedece fundamentalmente al aumento de la factura petrolera, mientras que la caída de las exportaciones expresa básicamente la retracción económica generalizada de la economía centroamericana, destino principal de las exportaciones de Nicaragua.

El origen de los préstamos y donaciones recibidos entre 1979 y 1981 revela similar diversificación (cf. cuadro VII.9).

Estas cifras demuestran el carácter infundado de las preocupaciones acerca de un supuesto desplazamiento de la economía nicaragüense hacia la "órbita soviética". Sin dudas las

relaciones comerciales y financieras se han incrementado, pero también es cierto que Nicaragua carecía de todo tipo de vinculación o intercambio con las economías socialistas; naturalmente, si la comparación se efectúa con esta situación previa, el cambio es muy grande; pero si la comparación es con otras economías del continente —Venezuela, México, Argentina, Colombia, Brasil...— la apertura del comercio exterior y la cooperación técnica de Nicaragua adquiere una magnitud relativamente reducida, incluso para las dimensiones de su economía.

Al mismo tiempo, la diversificación del comercio internacional no ha podido eliminar todavía las fuertes vinculaciones con el mercado norteamericano y esto plantea condiciones de vulnerabilidad para la economía nicaragüense. Durante estos cuatro años el gobierno norteamericano se ha aprovechado de esta situación para reforzar sus presiones sobre la revolución, bloqueando el abastecimiento de partes y repuestos, dificultando la tramitación de los pedidos, poniendo trabas en el transporte. En 1983 la administración del presidente Reagan decidió de manera sorpresiva eliminar la cuota azucarera de Nicaragua en el mercado norteamericano, y poco después clausuró las oficinas comerciales y consulados de Nicaragua en territorio norteamericano con excepción de una sola, en represalia por el descubrimiento en Managua de la participación de diplomáticos norteamericanos en actividades de espionaje y en la preparación de atentados contra dirigentes de la revolución.

Estas presiones comerciales se han sumado al bloqueo de fondos en organismos financieros internacionales y a la suspensión de programas de asistencia crediticia y alimentaria aprobados por administraciones anteriores. Aunque muchas de estas decisiones fueron adoptadas en las postrimerías de la presidencia de J. Carter, el ingreso de Ronald Reagan a la Casa Blanca implicó un endurecimiento muy rápido de la posición norteamericana frente a la Revolución Sandinista, y el paso a acciones directas e indirectas de desestabilización.

En febrero 1981 Estados Unidos suspendió el desembolso de 15 millones de dólares que formaban parte de un préstamo de 75 millones negociado durante la administración Carter. Al mes siguiente suspendió un préstamo de \$ 10 millones para la compra de trigo bajo el programa PL-480. En abril de 1981 el gobierno norteamericano anunció la suspensión indefinida de

Cuadro VII.9

Origen de los préstamos y donaciones  
a Nicaragua, 1979-81  
(en %)

Bloques de países	Préstamos bilaterales	Préstamos multilaterales	Donaciones	Total
1. Países del Tercer Mundo				
Mundo	44	71	49	49
2. Países capitalistas desarrollados	28	29	26	32
3. Países socialistas	28	0	25	19
4. Totales	100	100	100	100

Fuente: JBCN (1982: 13).

toda la ayuda bilateral futura pretextando un supuesto tráfico de armas de Nicaragua a El Salvador; se suspendió entonces un préstamo de \$ 11.4 millones para programas de desarrollo rural, educación y salud. Durante el primer año de la revolución se redujeron a \$ 40.000 los \$ 9 millones de crédito que el EXIMBANK concedió a Somoza en su último año. Dicho banco suspendió las garantías para financiar importaciones de Nicaragua, decisión que afectó sobre todo el abastecimiento de repuestos. En diciembre de 1981 el representante de Estados Unidos en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) vetó un proyecto de \$ 500.000 para el desarrollo de cooperativas rurales. A partir de febrero de 1982 las presiones norteamericanas en el Banco Mundial llevaron a este organismo a tomar una acción unilateral contra Nicaragua, que conlleva la suspensión del programa de préstamos y la exigencia de un programa de estabilización económica, rechazado por el gobierno de Nicaragua.<sup>28</sup>

Solamente durante el año fiscal 1982-83 el gobierno norteamericano gastó casi 50 millones de dólares en asistencia encubierta a los grupos contrarrevolucionarios.<sup>29</sup> Nutridos contingentes de ex guardias somocistas fueron entrenados en territorio norteamericano, y posteriormente en territorio hondureño con asesoramiento, equipo y financiamiento norteamericano; el presidente de Estados Unidos y los miembros de su gabinete no escatiman elogios hacia las tropas contrarrevolucionarias que a diario penetran territorio nicaragüense desde santuarios ubicados en Honduras y Costa Rica. La participación de oficiales del ejército norteamericano en el entrenamiento y apoyo de estas actividades ha sido verificada en oportunidades reiteradas y denunciada por la delegación de Nicaragua ante el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la OEA, y en otros foros internacionales.

El impacto de esta actividad contrarrevolucionaria auspiciada abiertamente por el gobierno norteamericano sobre la

economía de Nicaragua ha sido muy grande. Solamente en un año (de mayo 1982 a mayo 1983), una estimación incompleta de la JGRN cifra las pérdidas económicas en 612 millones de dólares entre destrucción de equipos, daños a la producción y lucro cesante.<sup>30</sup> Recientemente ataques a depósitos de combustible han forzado a adoptar un plan de restricción en el consumo de hidrocarburos. Más de mil personas han sido asesinadas, secuestradas o heridas por las fuerzas de tarea contrarrevolucionarias provenientes de Honduras y en menor medida, de Costa Rica; 380 de los asesinados fueron campesinos—sobre todo, beneficiarios de la reforma agraria—, y otros 218 campesinos fueron llevados secuestrados a territorio hondureño. Más de 32.000 personas debieron ser reubicadas en nuevos asentamientos a salvo de los ataques de artillería desde Honduras, y de las depredaciones de los ex guardias somocistas.

Parece evidente que en estas condiciones el desarrollo de la producción y el desenvolvimiento de la vida general de cualquier país, dista mucho de ser *normal*. Sin agotar todavía las tareas y los desafíos de la reconstrucción nacional, Nicaragua debe enfrentarse ahora a los ataques militares, las presiones financieras y comerciales, y la campaña propagandística de los Estados Unidos y la contrarrevolución. Sin poder dar respuesta plena todavía a las demandas y necesidades de la población trabajadora, la revolución debe destinar esfuerzos crecientes a la defensa, simplemente como una cuestión de sobrevivencia.

Las acusaciones formuladas a veces a la Revolución Sandinista de estar derivando hacia un acelerado *militarismo* no se detienen a considerar las condiciones efectivas creadas por los ataques, amenazas y agresiones externas, a un país atrasado, vulnerable económicamente, que trata de dar los primeros pasos para desarrollar sus fuerzas productivas, democratizar todos los ámbitos de la vida social y hacer efectiva la soberanía nacional.<sup>31</sup> Un enfoque abstracto de esto, al margen de los

<sup>28</sup> Cf. las declaraciones del Comandante Henry Ruiz, Ministro de Planificación, en *El Nuevo Diario*, 3 de diciembre de 1982, también *Barricada*, 23 de mayo de 1983.

<sup>29</sup> Según analistas del Congreso norteamericano, citados por *The Wall Street Journal*, *ajud Barricada*, 30 de agosto de 1983.

<sup>30</sup> El concepto de lucro cesante se refiere en este cómputo solamente a las exportaciones de madera y de oro que no pudieron efectuarse a causa de los ataques desde territorio hondureño o de las depredaciones de las fuerzas de tarea contrarrevolucionarias.

<sup>31</sup> La transcripción siguiente, de un economista nicaragüense radicado fuera del país, ilustra bien este enfoque abstracto y superficial, pero *potencialmente orientado*, de la cuestión: "Hay en Centroamérica por lo menos dos

hechos concretos, que reclama por la incorporación de la gente a las milicias o por la tecnificación del Ejército Popular Sandinista silenciando la existencia de una guerra de agresión contra Nicaragua desde hace más de un año, se ubica objetivamente en la perspectiva política del gobierno norteamericano y de los grupos contrarrevolucionarios.<sup>22</sup> El desarme de la revolución no implica otra cosa que la entrega impune del pueblo de Nicaragua al revanchismo y la saña de sus peores enemigos.

Una vez más, como en tiempos de José Dolores Estrada, de Benjamín Zeledón, de Augusto Sandino, Nicaragua debe hacer frente a las agresiones de los Estados Unidos. La lucha presente de la Revolución Sandinista entronca en las más claras tradiciones antiimperialistas del pueblo nicaragüense y testimonia la continuidad de su lucha por la vigencia plena de su soberanía y la afirmación de su identidad nacional.

casos relevantes de militarismo como concepción globalizante de la dirección y control de la sociedad. Guatemala y El Salvador, por un lado, y Nicaragua, por el otro. Los dos modelos se han desarrollado de diversa manera, pero comparten rasgos comunes. En Guatemala y El Salvador, en distinto grado, los militares han avanzado de su papel de intermediarios entre los grupos de poder, al de elementos definitivamente indispensables para el poder y control absolutos de la sociedad civil, superando, desde luego, su función parcialmente administrativa o dirigente en los asuntos del Estado. En Nicaragua, por otra parte, los comandantes son los únicos que tienen poder de decisión en la política, la diplomacia, la economía, las universidades, así como en la casi totalidad de los medios de comunicación. Se podría decir que ser militar en Centroamérica, hoy en día, es suficiente para lograr capacidad en cualquier área del conocimiento. Un militar puede ser agro, lo mismo para dirigir un campo de prisioneros, que un Banco Central o un Ministerio de Cultura. Lo que importa es ser militar confiable y tener la visión del poder a largo plazo" (D. Castillo, 1983, 17-18).

<sup>22</sup> Además, este tipo de enfoques olvida que el principio de la *nación en armas* formó parte de las más viejas tradiciones militares de occidente: hasta la aparición de las doctrinas pentagónicas de la seguridad nacional y las tropas de élite, aisladas del pueblo para reprimirlo mejor. En el caso específico de Nicaragua, el principio de la incorporación del pueblo a la defensa como parte del proceso de constitución de la *ciudadanía*, fue enunciado por el propio general Sandino al referirse al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional: "No somos militares, somos ciudadanos armados" (apud Ramírez, 1981).

## CONSIDERACIONES FINALES

El proceso de transformaciones revolucionarias de la sociedad nicaragüense recién se inicia. No es posible por lo tanto extraer conclusiones definitivas, que correrían el peligro de dar una imagen estática de algo que está en vertiginoso movimiento, o de "cerrar" un proceso que se encuentra "abierto"; sobre todo cuando la configuración de la coyuntura internacional gravita de manera tan pesada en el momento actual de la Revolución Sandinista. La exposición que sigue, por lo tanto, se presenta como una breve recapitulación del análisis precedente.

1. Nicaragua experimentó en las últimas tres décadas un rápido desarrollo capitalista, sobre todo en la agroexportación. A diferencia de lo que ocurrió en otros países del istmo, donde el capital extranjero asumió un papel muy importante, el capitalismo agrario nicaragüense se caracterizó por la presencia decisiva de una mediana burguesía rural local, aunque subordinada en la esfera de la comercialización, el financiamiento y el procesamiento agroindustrial, al gran capital local y extranjero, y al Estado somocista. La proletarianización de la fuerza de trabajo fue más amplia en el campo que en la ciudad. En aquel, la estructura de clases presenta una masa de obreros agrícolas y de campesinos minifundistas semiproletarios, sobre todo en la región del Pacífico, articulada con un campesino medio ubicado principalmente en el interior del país, sometidos unos y otros a la explotación de un bloque dominante de terratenientes rentistas y gran burguesía agroindustrial. El capital industrial desarrollado en la década de 1960 en el marco del Merca-

do Común Centroamericano no alteró fundamentalmente el patrón de desarrollo prevaleciente ni el modo de inserción de la economía en el mercado internacional: el proceso de proletarianización de la mano de obra urbana que impulsó, fue mayor en términos de empobrecimiento y ruina del artesanado y otros trabajadores no asalariados, que de generación de empleo industrial.

2. La lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional reprodujo en su propio nivel el movimiento de la estructura. Se inició en las montañas del interior, apoyándose fundamentalmente en el campesinado pobre y medio, continuó en el proletariado agrícola y los campesinos semiproletarizados del Pacífico, y culminó en las ciudades, donde dirigió su convocatoria revolucionaria hacia el estudiantado, los obreros industriales, las masas trabajadoras y de pequeña burguesía en el sentido más amplio. Las bases sociales históricas del FSLN son sin dudas campesinas, pero el sujeto social de la insurrección popular con que culminaron dos décadas de lucha sandinista presentó un perfil predominantemente urbano, y más popular en sentido amplio que proletario en su acepción estricta. En este proceso, la burguesía opositora a Somoza actuó más bien a la zaga, tratando de definir una alternativa a la estrategia revolucionaria del FSLN, y de obtener con tal fin el apoyo político de los Estados Unidos.

3. Las transformaciones económicas emprendidas a partir del triunfo del 19 de Julio presentan un carácter más *antioligárquico que anticapitalista*. La creación del Área de Propiedad del Pueblo ha tenido lugar a expensas de las propiedades confiscadas al somocismo: obedece a la ejecución de un imperativo de recuperación del patrimonio nacional usurpado por la dictadura, antes que a su orientación *estatista*. La reforma agraria garantiza la gran propiedad que sea explotada eficientemente —con criterios de eficiencia que no son excesivamente rígidos— y afecta exclusivamente a las tierras ociosas, abandonadas, mal explotadas, o en las cuales se explotaba el trabajo campesino a través de la renta monetaria, en trabajo o en especie. La orientación de la reforma agraria es eminentemente campesinista, privilegiando formas cooperativas de producción, pero aceptando el mantenimiento de la propiedad individual —pequeña, mediana, grande. Los agravios de la burguesía nicaragüense se explican por lo tanto más que por la

amenaza que la revolución plantea a sus bases de acumulación, por el imperativo de modernizarse y asumir una función efectivamente productiva que el proceso les formula. Los rasgos subjetivos de la clase —su primitivismo ideológico, la presencia en su seno de elementos típicamente oligárquicos, el antiohrrerismo de su óptica económica, su profunda alienación cultural, su carencia de expresiones políticas propias, su dependencia respecto de las miras, opiniones y perspectivas del gobierno norteamericano...— asumen en estas condiciones un papel muy importante para marginar a la clase de un proceso que, en principio, no cuestiona sus bases materiales: es decir, en la medida en que las emplee como capital, no como fuente de renta. La práctica simbólica de la revolución —el contenido del discurso político dominante, el nivel de enfrentamiento de clase implícito en las consignas, las resonancias marxistas del lenguaje revolucionario— resulta así más agresiva que la práctica económica. La respuesta de la burguesía ilustra en este sentido acerca de las limitaciones del reduccionismo economista en el estudio de los procesos de transformación social y señala la relevancia de lo político-ideológico en la caracterización de dichos procesos.

4. La atención acordada a la satisfacción de las demandas del campesinado —tierra, financiamiento, precios, asistencia técnica, infraestructura— y el alto grado de movilización y de organización del mismo, contrastan con el comportamiento menos agresivo del asalariado y, sobre todo, del proletariado urbano. El periodo posterior al triunfo revolucionario se caracteriza por un crecimiento rápido de la organización sindical tanto en el campo como en la ciudad, el mejoramiento de las condiciones de trabajo, y el desarrollo de formas variadas de participación de los trabajadores en la administración de las empresas. Pero al mismo tiempo la posición de ingresos de la clase obrera ha sufrido un deterioro a pesar de los subsidios y otras medidas de política destinadas a compensar, o reducir, el efecto de la caída del salario real. Las organizaciones sindicales —sobre todo las organizaciones sandinistas, que son las mayoritarias— parecen estar todavía en la búsqueda de su propio perfil y, en particular, de un tipo de relacionamiento con el Estado que compatibilice los resultados de la gestión socioeconómica presente con el proyecto histórico de la revolución —que define al proletariado como una de sus fuerzas motrices.



5. La liquidación del Estado somocista ha dado paso a un proceso de constitución de un Estado de nuevo tipo, revolucionario y popular. La participación organizada de las masas en todos los ámbitos de la sociedad —la defensa, la salud pública, la educación, el bienestar social, las condiciones de trabajo, el cuidado del medio ambiente, la legislación, la administración de justicia, — es el elemento central de ese proceso. Una intensa movilización popular testimonia la adhesión activa de la gente a las tareas de la transformación de la sociedad. El armamento del pueblo y el entrenamiento militar voluntario en las Milicias Populares Sandinistas comprueban de manera irrefutable la legitimidad del proceso revolucionario. La creación de un Estado popular y, más en general, de un sistema político, no es tarea sencilla. Nicaragua carece de tradiciones en tal sentido; el Estado somocista fue el instrumento de una camarilla palaciega que terminó aislándose incluso del conjunto de la burguesía. La política, como práctica de la conducción de la sociedad y, por lo tanto, de generación de hegemonía y consenso activo, estuvo ausente casi por completo de la dominación ejercida por el régimen somocista; fue, en todo caso, atributo reducido a sus relaciones con otras fracciones del capital, y ello en la medida que no entorpeciera las ansias de enriquecimiento —y no siempre de acumulación— de la camarilla gobernante. Al mismo tiempo, el Estado somocista institucionalizaba, en su origen histórico y en su práctica cotidiana, la subordinación del régimen, y a través de él, del capitalismo nicaragüense, a la dominación internacional del imperialismo norteamericano. En estas condiciones, cuando la falta de experiencia se complica con las restricciones económicas y las agresiones externas, el proceso de constitución de un Estado moderno y de una democracia popular, es sin duda complicado y de desenvolvimiento lento. Pretender que en apenas cuatro años, Nicaragua cuente con un sistema político democrático sólidamente implantado y plenamente institucionalizado implica, por lo menos, ingenuidad, y más probablemente la coincidencia objetiva con las argumentaciones de grupos minoritarios para quienes cualquier tipo de democratización es siempre excesivo.

6. El desenvolvimiento de la Revolución Sandinista en el campo de la economía contrasta nitidamente con la situación imperante en el resto de América Central, incluso en los mo-

mentos actuales en que la desaceleración del crecimiento se hace sentir. En estos resultados ha incidido sin dudas la afluencia de asistencia internacional, pero en definitiva ha sido la conducción impuesta al proceso económico la que ha generado el saldo positivo. A casi cinco años del triunfo revolucionario Nicaragua no ha tenido que enfrentar el desabastecimiento, las restricciones, e incluso las hambrunas, que conocieron, en etapas similares, otros pueblos en revolución. La solidaridad internacional ha incidido en este sentido, pero a su turno ella es el producto del manejo de las relaciones internacionales y de la cuestión económica, por la Revolución Sandinista, que ha impedido hasta ahora el aislamiento político y económico que el imperialismo pudo imponer a otras experiencias de transformación social. Es evidente sin embargo que la etapa de la "reactivación fácil" de la economía ha concluido y que desde hace un par de años Nicaragua se enfrenta a dificultades para hacer frente a sus compromisos internacionales, garantizar una expansión sostenida de sus fuerzas productivas, y asegurar de manera plena el ingreso real de los trabajadores. Las restricciones del proceso económico obedecen sin dudas al endurecimiento de la situación internacional —reducción del financiamiento externo, condiciones cada vez más "duras", agresiones económicas y militares del imperialismo y la contrarrevolución—, pero también al funcionamiento efectivo del esquema de economía mixta. El desenvolvimiento de la crisis externa se suma a la retracción económica de la gran burguesía, cuyo nivel de inversiones productivas ha descendido verticalmente a pesar de los estímulos financieros, cambiarios, impositivos, etc. que el Estado ha dirigido hacia ella. Hasta ahora la burguesía nicaragüense se ha limitado a tomar el excedente que por esas vías se le transfiere, reclamar más, y mantener un comportamiento a la baja en la esfera de la producción; no tanto como para ser acusada de abandono y confiscada, pero no suficiente tampoco para contribuir significativamente a la reactivación. Este es así básicamente el resultado de la disciplina, el esfuerzo y el compromiso político de los trabajadores —obros y campesinos, pero con marcados desniveles en lo que toca a los beneficios percibidos por unos y otros. Más aún, los incentivos concedidos a la burguesía mediana y grande, la tolerancia hacia los sectores de intermediación, el impulso dado a la economía campesina, contrastan con la postergación de las

demandas salariales de los obreros y con la caída de sus ingresos reales.

7. El funcionamiento objetivo del sistema económico en el marco del esquema de economía mixta, en conjunción con las políticas del Estado, han favorecido el desarrollo de un proceso de transferencia de excedentes del sector público al sector privado de la economía, de las actividades productivas hacia las no productivas, y de los sectores asalariados hacia los no asalariados; los intentos del gobierno revolucionario por frenar este proceso o por lo menos disminuir su magnitud han sido hasta ahora infructuosos; tampoco es posible afirmar que se trate de una preocupación prioritaria. Si en el campo el aspecto más notable de la etapa actual es la atención prestada al campesinado, en las ciudades destaca en cambio el vertiginoso crecimiento de los sectores de intermediación y, en primer lugar, del pequeño y mediano comercio. Las rigideces que se experimentan en la esfera de la producción, la contención de los ingresos asalariados —sobre todo, de los asalariados productivos—, la falta de un control efectivo, y la existencia de mecanismos objetivos de transferencia de excedente desde la producción a la circulación, se traducen en la existencia de altos márgenes de ganancia neta y en un atractivo para el ingreso de un número creciente de miembros de la población activa a la intermediación. Es indudable que en el corto plazo este sector actúa como una alternativa de mejores ingresos para muchos trabajadores ante el deterioro persistente del salario real o la disminución de los niveles de empleo en algunos sectores de la producción; pero al mismo tiempo drena fuerza de trabajo hacia actividades no productivas y que empujan el proceso inflacionario, y alimenta el crecimiento de una masa de capital que se mueve al margen de la política económica y financiera de la revolución.

8. El desenvolvimiento del proceso revolucionario se lleva a cabo en medio de agresiones externas de intensidad creciente. En estas condiciones las dificultades normales de la transformación social, los inevitables desajustes del proceso económico, se agregan a la necesidad de asignar recursos de todo tipo a la defensa de la integridad nacional y de la sobrevivencia del proceso popular. La Revolución Sandinista es, en este sentido, la forma más alta de afirmación de la identidad nacional del pueblo de Nicaragua, y entronca por lo tanto con sus más

auténticas tradiciones históricas. Por las modalidades que asumió la dominación imperialista en el país, la caracterización del antiimperialismo de la Revolución Sandinista no puede reducirse a una evaluación de la magnitud económica de las propiedades extranjeras nacionalizadas. La subordinación de Nicaragua a los Estados Unidos fue siempre más una cuestión de relaciones internacionales que de relaciones de producción; un problema de diplomacia y geopolítica más que de economía; y, dentro de esta, más relevante en la esfera de la circulación que en el ámbito de la producción. En consecuencia el antiimperialismo de la Revolución Sandinista dice relación con la afirmación de la independencia nacional, con el diseño de una política exterior de no alineamiento, con la diversificación de las relaciones comerciales, diplomáticas, culturales internacionales y de asistencia y cooperación técnica, y no solamente con la nacionalización de activos. Esta, por supuesto, también ha tenido lugar, contribuyendo a la creación del APP y a colocar los recursos básicos de la economía bajo el control y la dirección de Estado nacional.

9. El crecimiento del capital de intermediación y los estímulos estatales al capital productivo, llaman la atención sobre la cuestión de la reproducción del capital en el seno del proceso revolucionario y, de manera más amplia, sobre el carácter de la revolución en su etapa actual. Más que en una *transición al socialismo*, la Revolución Sandinista se encuentra en los momentos presentes enfrascada en una difícil *transición al desarrollo*. Este no es un proceso políticamente neutro; la organización de la economía expresa siempre una opción respecto del sistema social al que se apunta. Pero a menos que se quiera forzar las cosas, el estudio del proceso revolucionario nicaragüense no indica por el momento otra opción que la referida a la expansión y consolidación de la pequeña y mediana propiedad articulada a un área de propiedad social que parece haber alcanzado prácticamente los límites de su expansión. Si el *socialismo* implica un *proyecto proletario* —en el sentido de socialización amplia de los medios de producción, de orientación de lo principal del proceso de acumulación y de los estímulos y beneficios económicos hacia el polo estatal obrero— parece innegable que ese proyecto pertenece, todavía, al horizonte posible de la revolución. Nicaragua sigue siendo hoy una sociedad capitalista agroexportadora. Las cosas no son, cierta-

mente, como *antes*: la gran propiedad privada ha sido seriamente reducida; los ejes estratégicos de la acumulación son ahora el sector público de la economía y la pequeña y mediana producción —sobre todo, la producción cooperativa agropecuaria. Pero no existe un enfrentamiento de principio con el capital productivo en la medida que éste acepte los lineamientos económicos y políticos de la revolución: producir en la medida de sus posibilidades, y no hacerle el juego a la contrarrevolución. La creación del poder popular, el desarrollo de las organizaciones de masas, las experiencias de participación obrera en la gestión de la economía, funcionan más como instancias de vigilancia revolucionaria de la medida en que el capital acepta esos desafíos, que como una negación política de su derecho a reproducirse en la nueva Nicaragua. En la *etapa actual* en consecuencia la Revolución Sandinista se presenta —por sus bases sociales predominantes, por sus orientaciones de política, por el sentido general de su desenvolvimiento— como una revolución *popular, agraria y de liberación nacional*, más que proletaria o socialista. La contradicción *nacional*: la lucha antiimperialista, entendida por el FSLN como defensa de la sociedad nacional ante los ataques de la contrarrevolución y las agresiones económicas y políticas de los Estados Unidos, asumen en la etapa presente la dirección del proceso revolucionario. En torno a ella la Revolución Sandinista nuclea al más amplio espectro posible de fuerzas que se suman a la defensa de la nación y al rechazo a la dominación imperialista. La *unidad nacional*, que subordina en su vigencia la resolución de las contradicciones de clase en aras de la lucha contra el imperialismo, aparece así como el proyecto efectivo de la Revolución Sandinista en la etapa presente de su desarrollo. La lucha de clases no desaparece del campo nacional, pero la conducción política del proceso revolucionario trata de subordinarla al desarrollo de la contradicción antiimperialista, mientras las contradicciones de clase se derivan hacia el terreno ideológico —la religión, la educación; la determinación social de conceptos como nación, patriotismo, democracia; la organización de la familia...— y hacia la esfera de la circulación.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARENDROTH, W., 1975: *Historia social del movimiento obrero europeo*. Barcelona: Editorial Laia.
- AGNOLI, J., 1978: *Lo Stato del capitale*. Milano: Feltrinelli.
- ALONSO, J. A., 1973: "Elites gobernantes y 'familismo' en Nicaragua", en *Estudios Centroamericanos* 296 (junio), 331-344.
- ALIVATER, E., 1977: "Notas sobre algunos problemas del intervencionismo de Estado", en H. R. Sonntag y H. Valecillos, *El Estado en el capitalismo contemporáneo*. México: Siglo XXI, 88-133.
- ÁLVAREZ MONTALVÁN, E., 1960: "Requerimientos y deficiencias de la dieta popular en Nicaragua", en *Revista Conservadora* 2 (octubre), 19-24.
- AMNISTÍA INTERNACIONAL, 1976: "Reporte sobre la República de Nicaragua; incluyendo los resultados de una misión, 10-15 de mayo", *Revista del Pensamiento Centroamericano* 157 (octubre-diciembre 1977), 111-151.
- ARCE, B., 1980a: *El papel de las fuerzas motrices antes y después del triunfo*. Managua: Secretaría Nacional de Propaganda y Educación Política del FSLN.
- 1980b: *Romper la dependencia, tarea estratégica de la revolución*. Managua: Secretaría Nacional de Propaganda y Educación Política del FSLN.
- ARELLANO, J. E., 1969: "El estudiante y la revolución", *Revista Conservadora del Pensamiento Centroamericano* 105 (junio), 7-14.
- ARGÜELLO, S. J., A., 1979: "Posturas de los cristianos frente al proceso revolucionario nicaragüense", en *Fe cristiana y Revolución Sandinista*. Managua: Instituto Histórico Centroamericano.
- ATC, Asociación de Trabajadores del Campo, 1979: *Memorias de la Asamblea Nacional Constitutiva*. Managua: ATC.

- BAEZ, G., 1981: "Sobre la reforma agraria", en CIERA. *Testimonios sobre la Reforma Agraria*. Managua: CIERA, 1:21.
- BAEZ SANCASA, W., 1970: "Cuánto daría Ud. para hacer una Revolución?", *Revista Conservadora del Pensamiento Centroamericano* 123 (diciembre): 45-47.
- BAUMEISTER, E., 1982: *Notas para la discusión del problema agrario en Nicaragua*. Documento presentado en el III Congreso Nacional de Ciencias Sociales, Managua, octubre.
- BAUMEISTER, E. et al., 1983: *El subsistema del algodón en Nicaragua*. Managua: II Seminario "Centroamérica y el Caribe" INIES-CRIES, febrero.
- BELL, P., 1975: "Prolegómeno para una historia económica de Nicaragua, 1905-1966", *Revista del Pensamiento Centroamericano* 146 (enero-marzo): 2-30.
- BENDANA, A., 1978: "Crisis in Nicaragua", *NACLA Report on the Americas*, XII, 6 (november-december).
- BIDDERMAN, J., 1983: "The Development of Capitalism in Nicaragua: A Political Economic History", *Latin American Perspectives* 36 (Winter): 7-32.
- BISHOP, M., 1982: *Forward Ever! Three Years of Grenadian Revolution*. Sidney: Pathfinder Press.
- BURKE, G., 1981: *Triumph of the People: The Sandinista Revolution*. London: Zed Press.
- BONNET, V., 1975: *The Politics of Labor in Pre-revolutionary Russia: Moscow Worker's Organization 1905-1911*. Harvard: Harvard University Press.
- BOOTH, J., 1982a: *The End and the Beginning: The Nicaraguan Revolution*. Boulder, Colorado: Westview Press.
- 1982b: *Toward Explaining Regional Crisis in Central America: The Socioeconomic and Political Roots of Rebellion*. Prepared for delivery to the 44th International Congress of Americanists, University of Manchester, Manchester, september.
- BRIONES TORRES, L., 1980: "Los Doce en la historia", *Barricada*, 18 de octubre.
- BURRICH, R. & T. DRAHIN, 1980: "Nicaragua's Revolution", *NACLA Report on the Americas*, XIV, 3 (may-june): 1-35.
- CABESERERO, T., 1983: *Ministros de Dios, ministros del pueblo*. Bilbao: Desclée de Brouwer.
- CABEZAS, O., 1982: *La montaña es algo más que una inmensa estepa verde*. Managua: Editorial Nueva Nicaragua.
- CARDOSO, F. H. y E. FALETTO, 1969: *Dependencia y desarrollo en América latina*. México: Siglo XXI.
- CARRIÓN, L., 1981: *Austeridad: principio y norma de nuestro pueblo*. Managua: Departamento de Propaganda y Educación Política del FSLN.
- CASTILLA URBINA, M., 1982a: "La educación como poder, crisis sin solución en la transición revolucionaria", en *Estado y clases sociales en Managua*, Managua: ANICS/CIERA, 193-252.
- 1982b: *La contradicción escuela capitalista y clases populares en la fase actual de la transición revolucionaria en Nicaragua*. Documento presentado en el III Congreso Nacional de Ciencias Sociales, Managua, octubre.
- 1983: *La contradicción: objetivos de la educación-producto educativo. El caso de Nicaragua*. Documento presentado en el XV Congreso Latinoamericano de Sociología, Managua, octubre.
- CASTILLO, D., 1980a: *Acumulación de capital y empresas transnacionales en Centroamérica*. México: Siglo XXI.
- 1980b: "Nicaragua. Situación económica y alianzas políticas", *Revista Mexicana de Sociología*, 2-80, 501-521.
- 1983: "Una visión global del problema centroamericano: más allá de la crisis", en D. Castillo (comp.), *Centroamérica más allá de la crisis*. México: Ediciones SIAP, 13-29.
- CASTILLO, M., 1983: *La participación de los trabajadores en la gestión de las empresas*. Presentado en el Primer Seminario de Administración Sandinista, Managua: CONAPRO "Héroes y Mártires", setiembre.
- CASTRO, F., 1977: Entrevista de Simón Malley en *La Noticia* (Santo Domingo, R. D.), 19 de junio.
- 1981: *La historia me absolverá*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- CEPAL, 1979: *Nicaragua: Antecedentes económicos del proceso revolucionario* (doc. E/CEPAL/G.1091), agosto.
- 1981: *Nicaragua. El impacto de la mutación política*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- CEPAL/FAO/OIT/IIICA/SIECA/OCT/OEA, 1972: *Tenencia de la tierra y desarrollo rural en Centroamérica*. San José: EDUCA.
- CETRA, Centro de Estudios del Trabajo del Ministerio del Trabajo, 1982: *La productividad del trabajo en la industria manufacturera, 1977-1981*. Managua, diciembre.
- 1983a: *La productividad del trabajo en la perspectiva de la política sociolaboral*. Managua, enero.
- 1983b: *El ingreso de la población en Managua, 1981 y 1982*. Managua, marzo.
- CHAMORRO, A., 1982: *Los rasgos hegemónicos del somocismo y la Revolución Sandinista*. Managua: INIES, mimeog., octubre.
- CIERA, Centro de Investigaciones y Estudios de la Reforma Agraria, 1981: *La Mosquitia en la Revolución*. Managua: CIERA.
- 1983a: *La situación del abastecimiento*. Managua: CIERA.
- 1983b: *Distribución y consumo popular de alimentos en Managua*. Managua, CIERA.



- CNI, Comisión Nacional Intersindical, 1980: *El papel de los sindicatos en la Revolución*. Managua: CST.
- COLARIZI, S., 1976: *Classe operaia e cetiti medi*. Venezia: Marsilio Editori.
- COLBURN, F. D., 1983: *Rural Labor and the State in Post-Revolutionary Nicaragua*. Prepared for the Annual Meeting of the Southeastern Council on Latin American Studies, Puerto Rico, april.
- COOPER, TH., 1829: *Lectures on the Elements of Political Economy*. Columbia S. C.: Morris & Wilson.
- CÓRDOVA, A., 1979: *La ideología de la revolución mexicana*. México: Ediciones ERA.
- CORONEL KAUTZ, R., 1961: "La ganadería en la economía nacional. Situación actual". *Revista Conservadora* 13 (octubre), 31-33.
- CORTES, A., 1974: "Valor de la fuerza de trabajo y formas de proletarianización". *Revista Latinoamericana de Sociología*, 1, 45-64.
- COSEP, 1980: *Análisis sobre la estrategia del Programa de Gobierno de Reconstrucción Nacional*. COSEP, diciembre.
- CRUZ, E., 1974: *Estrategias de desarrollo para los años 70 (Ideas expuestas ante la Primera Convención Nacional del Sector Privado Nicaragüense)*. Managua, 1º de marzo, mimeog.
- CSUCA, 1978a: *Estructura demográfica y migraciones internas en Centroamérica*. San José: EDUCA.
- 1978b: *Estructura agraria, dinámica de población y desarrollo capitalista en Centroamérica*. San José: EDUCA.
- CTM/INSSBI, 1983: *Investigación de menores en situación de riesgo*. Managua, enero, dactilog.
- DALTON, R., 1972: *Miguel Alemán*. San José: EDUCA.
- DEERE, C. D. & P. MARCHETTI, 1981: "The Worker-Peasant Alliance in the First Year of the Nicaraguan Agrarian Reform". *Latin American Perspectives* 29 (Spring), 40-73.
- DE FRANCO, M. y M. HURTADO DE VJIL, 1978: "Algunos aspectos del funcionamiento socioeconómico de Nicaragua". *Revista del Pensamiento Centroamericano*, 159 (abril-junio), 38-104.
- DE FRANCO, M. y C. F. CHAMORRO, 1979: "Nicaragua: Crecimiento industrial y desempleo", en *El fracaso social de la integración en Centroamérica*. San José: EDUCA.
- DIEDERICH, B., 1981: *Somoza and the Legacy of U. S. Involvement in Central America*. New York: E. P. Dutton.
- DONAHUE, J. M., 1983: *Health Policy Directions in Nicaragua*. Presentado en LASA XI International Congress, México, setiembre.
- DPEP, Departamento de Propaganda y Educación Política del FSLN, 1981: *Luisa Amanda Espinosa, mujer de vanguardia*. Managua: DPEP.
- DREYFUS, E., 1980: *Un nuevo marco socioeconómico dentro de la revolución*. Managua: INDE.
- DUNCKER, H., 1980: *Historia del movimiento obrero*. México: Ediciones de Cultura Popular.
- EGP, 1982: "Los pueblos indígenas y la revolución guatemalteca". *ALAI Servicio Especial*. Montreal, 5 de noviembre.
- EGP/FAR/ORPA/PGT, 1982: *Proclama unitaria al pueblo de Guatemala*. Guatemala, febrero.
- FERNÁNDEZ, O., 1981: *Cuba: Reivindicaciones nacionales y revolución social*. Presentado en XIV Congreso Latinoamericano de Sociología. San Juan, P. R., octubre.
- FERRER, A., 1981: "El monetarismo en Argentina y Chile". *Comercio Exterior*, vol. 32, 1 (enero) 3-13, y 2 (febrero), 176-192.
- FITZGERALD, E. V. K., 1982a: *Acumulación planificada y distribución del ingreso en pequeñas economías socialistas periféricas*. Managua: INIES, octubre.
- 1982b: "The Economics of Revolution", en Th. Walker (ed.), *The Nicaraguan Revolution*. New York: Praeger, 203-221.
- FLORA, J., J. MCFADDEN y R. WARNER, 1983: "The growth of class struggle: The impact of the Nicaraguan Literacy Crusade on the political consciousness of young literacy workers". *Latin American Perspectives* 36 (Winter), 45-61.
- FOLADORI, G., 1982: "Algunos resultados de las transformaciones agrarias de 1981". *Revista Centroamericana de Economía* 9 (septiembre-diciembre), 20-32.
- FONSECA, C., 1981: *Bajo la bandera del sandinismo. Textos políticos*. Managua: Editorial Nueva Nicaragua.
- FSLN, Frente Sandinista de Liberación Nacional, 1980a: "Comunicado oficial de la Dirección Nacional del FSLN sobre el proceso electoral". *Barricada*, 24 de agosto.
- 1980b: "Comunicado oficial de la Dirección Nacional del FSLN sobre la religión". *Barricada*, 7 de octubre.
- GILBERT, D., 1983: *The Bourgeoisie and the Nicaraguan Revolution*. Presentado en LASA's XI International Congress, México, setiembre.
- GILLY, A., 1980: *La nueva Nicaragua*. México: Editorial Nueva Imagen.
- GIRARDI, G., 1983: "Marxismo y Cristianismo en Nicaragua hoy". *Nuevo Amanecer Cultural*, 44, 1º de marzo.
- GODIO, J., 1980: *Historia del movimiento obrero latinoamericano*. México: Ed. Nueva Imagen, tomo I.
- 1983: *Sindicalismo y política en América latina*. Caracas, ILDIS.
- GORMAN, S. M., 1981: "Power and consolidation in the Nicaraguan Revolution". *Journal of Latin American Studies*, 13, 1, 133-149.
- GRAMSCI, A., 1977a: *Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce*. Roma: Editori Riuniti.

- 1977b: *Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura*. Roma: Editori Riuniti.
- GUEVARA, O. y C. PÉREZ BERMÚDEZ, 1981: *El movimiento obrero nicaragüense*. Managua: Ediciones Dávila Bolaños.
- GUIDO, A. J., 1981: "Sobre el movimiento guerrillero y el campesino", en CIERA, *Testimonios sobre la reforma agraria*. Managua: CIERA, 51:58.
- GUTIÉRREZ MAYORGA, G., 1978: "El reformismo artesanal en el movimiento obrero nicaragüense". *Revista del Pensamiento Centroamericano*, 159 (abril-junio), 2:21.
- HALLIDAY, F. & M. MOLYNEUX, 1981: *The Ethiopian Revolution*. London: Verso.
- HANDAL, S. J., 1982: "El poder, el carácter y la vía de la revolución y la unidad de la izquierda". *Fundamentos y perspectivas*, 4, 27-43.
- HERDOCIA, O., 1982: "Análisis jurídico de la estructura actual del gobierno revolucionario". *Revista del Pensamiento Centroamericano*, 176 (julio-setiembre), 28:31.
- HORSBAM, E., 1962: *The Age of Revolution*. London: Weidenfeld & Nicolson.
- HO CHI MINH, 1973: *Escritos políticos*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- 1979: *El patriotismo y el internacionalismo proletario*. Hanoi: Ediciones en Lenguas Extranjeras.
- HOUTART, F. y G. LEMERCINIER, 1981: *Sociologie d'une Commune Vietnamienne*. Louvain-la-Neuve: C.R.S.R., Université Catholique de Louvain.
- HOU YUON, 1964: "Solving Problems: A Socialist Programme to Safeguard the Nation", en B. Kiernan & Ch. Boua, *Peasants and Politics in Kampuchea 1942-1981*. London: Zed Press, 134:167.
- IÉPALA, 1983: *El Papa en Nicaragua. Análisis de su visita*. Madrid: IÉPALA Editorial.
- IES, Instituto de Estudio del Sandinismo, 1981: *El principio del fin... 1956. 23 años de lucha... El triunfo... 1979*. Managua: Editorial Nueva Nicaragua.
- 1982a: *Pensamiento antiimperialista en Nicaragua*. Managua: Editorial Nueva Nicaragua.
- 1982b: *Porque viven siempre entre nosotros*. Managua: Editorial Nueva Nicaragua.
- 1982c: *La insurrección popular sandinista en Masaya*. Managua: Editorial Nueva Nicaragua.
- INCAE, Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, 1973: *Consecuencias económicas del terremoto de Managua*. Managua: doc. NI/PL/001.
- 1975: *Primera encuesta sobre el empleo en las zonas urbanas de Nicaragua*. Managua: Doc. NI/PL 029, junio.

- 1976: *Segunda encuesta sobre el empleo en las zonas urbanas de Nicaragua*. Managua, mimeogr.
- INDE, Instituto Nicaragüense de Desarrollo, 1979: *El sector privado en la insurrección*. Managua: INDE.
- 1980: *Informe anual 1980 de INDE y sus programas FUNDE y EDUCREDITO*. Managua: INDE.
- 1981: *Análisis económico 1981*. Managua: INDE.
- 1982: *Informe anual 1981 de INDE y sus programas FUNDE y EDUCREDITO*. Managua: INDE.
- INEC, Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos, 1979: *Encuesta anual de la Industria Manufacturera 1979*. Managua: INEC.
- 1981a: *Anuario Estadístico de Nicaragua*. Managua: INEC.
- 1981b: *Encuesta anual de la Industria Manufacturera 1981*. Managua: INEC.
- 1981c: *Encuesta Nacional de Hogares Urbanos 1981*. Managua: INEC.
- 1982: *Encuesta Nacional de Hogares Urbanos 1982*. Managua: INEC.
- 1983: *Indicadores socioeconómicos de Nicaragua*. 1983. Managua: INEC.
- JAGUARIBE, H., 1964: *Desarrollo económico y desarrollo político*. Buenos Aires: EUDEBA.
- JARQUIN, E., 1977: *Apreciaciones sobre la situación económica de Nicaragua*. Managua, s/e.
- 1980: "Situación económica 1979". *Encuentro* 17, 82:89.
- JGRN, Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, 1982: *Principios y políticas del Gobierno de Nicaragua*. Managua: Dirección de Divulgación y Prensa de la JGRN.
- 1983: *Informe de la JGRN presentado al Consejo de Estado el 4 de mayo*. Managua: Dirección de Divulgación y Prensa de la JGRN.
- KARMOWITZ, D. & J. R. THOME, 1982: "Nicaragua's Agrarian Reform: The First Year (1979-80)". En Th. Walker (ed.), *Nicaragua in Revolution*. New York: Praeger, 223:240.
- LACLAU, E., 1977: *Politics and Ideology in Marxist Theory*. London: New Left Books.
- LENIN, N., 1905: "Socialismo pequeño burgués y socialismo proletario", en *La alianza de la clase obrera y el campesinado*. Moscú: Progreso, 1981.
- 1916a: "El derecho de las naciones a la autodeterminación", en *La lucha de los pueblos coloniales y países dependientes contra el imperialismo*. Moscú: Progreso, 1978.
- 1916b: *El imperialismo, fase superior del capitalismo*. Moscú: Progreso, 1976.
- 1974a: *Contenido económico del populismo*. Madrid: Siglo XXI.

- 1974b: *Sobre el problema de los mercados*. Madrid: Siglo XXI.
- LEVY, P., 1976: *Notas geográficas y económicas sobre la República de Nicaragua*. Managua: Editorial San José, segunda edición.
- LÓPEZ, J. A., 1983: "Relaciones comerciales Argentina-URSS: balance y perspectivas". *América latina* 8 (agosto), 55-64.
- LÓPEZ, J. et al., 1979: *La caída del somocismo y la lucha sandinista en Nicaragua*. San José: EDUCA.
- LOMNITZ, L. A. DE, 1975: *Cómo sobreviven los marginados*. México: Siglo XXI.
- LOZANO, L., 1980: *Génesis y desarrollo de la situación revolucionaria en Nicaragua: enero 1978-mayo 1979*. Presentado en el IV Congreso Centroamericano de Sociología. Managua, julio.
- LUXEMBURGO, R., 1978: *Obras escogidas*. México: Ediciones ERA, tomo I.
- MAIER, L., 1980: *Nicaragua. La mujer en la revolución*. México: Ediciones de Cultura Popular.
- MAKIDI-KU-NTIMA, 1983: "Class Struggle and the Making of the Revolution in Angola". *Contemporary Marxism* 6, 119-141.
- MARIATEGUI, J. C., 1929: "Punto de vista antiimperialista". *Obras: La Habana, Casa de las Américas*, s/f.
- MARTÍNEZ, R. J., 1980: "Los maravillosos aportes de la alfabetización". *El Nuevo Diario*, 13 de octubre.
- MARTÍNEZ HEREDIA, F., 1980: *Introducción a la sociedad nicaragüense contemporánea*. La Habana: Centro de Estudios sobre América.
- MARX, K., 1847: *The Poverty of Philosophy*. New York: International Publishers, 1963.
- 1852: *El 18 Brumario de Luis Bonaparte*. Moscú: Editorial Progreso, s/f.
- 1859: *Prefacio a la contribución a la crítica de la economía política*. México: Editorial Quinto Sol, 1978.
- 1971: *El Capital*, vol. I. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- 1968: *Introducción general a la Crítica de la Economía Política*. Córdoba (Argentina). Cuadernos de Pasado y Presente.
- MARX, K., y F. ENGELS, 1980: *El porvenir de la comuna rural rusa*. México: Cuadernos de Pasado y Presente.
- MATUTE RUIZ, E., s/f: *Nicaragua: Impacto social de la industrialización*. San José: CSUCA. Serie Análisis económico 5, Programa Centroamericano de Ciencias Sociales.
- MAYER, A. J., 1975: "The Lower Middle Class as Historical Problem". *Journal of Modern History*, vol. 47, 3 (september) 409-436.
- MAYORGA, S., 1981: "La experiencia agraria de la Revolución Nicaragüense" en *Reforma agraria y revolución popular en América latina*. Managua: CIERA, 89-117.

- MED, Ministerio de Educación, 1981: *Consulta Nacional para obtener criterios que ayuden a definir los fines y objetivos de la educación nicaragüense. Informe preliminar*. Managua: MED.
- 1983a: *La educación en cuatro años de revolución*. Managua: MED.
- 1983b: *Fines, objetivos y principios de la nueva educación*. Managua: MED.
- MED/DEI, 1981: *Nicaragua triunfa en la alfabetización*. San José: DEI.
- MEDAL, J. L., 1982: *Política económica y revolución*. Managua: III Congreso Nacional de Ciencias Sociales, 29-31 octubre, mimeogr.
- MICOIN, Ministerio de Comercio Interior, 1983: *Estudio de sistemas de comercialización de productos básicos*. Managua, marzo.
- MIDINRA, Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria, 1982a: *Marco jurídico de la reforma agraria nicaragüense*. Managua: CIERA.
- 1982b: *3 años de reforma agraria*. Managua: MIDINRA.
- 1982c: *Estrategia de desarrollo cooperativo*. Managua, diciembre, mimeogr.
- 1983: *Informe de Nicaragua a la FAO*. Managua: CIERA.
- MILIBAND, R., 1970: *El Estado de la sociedad capitalista*. México: Siglo XXI.
- MILLER, V., 1982: "The Nicaraguan Literacy Crusade". En Th. Walker (ed.), *Nicaragua in Revolution*. New York: Praeger.
- MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL, 1981: *Colectivos estatales de producción*. Managua, marzo, mimeogr.
- MINISTERIO DE INDUSTRIA, 1980: *La pequeña industria en Nicaragua*. Managua, mimeogr.
- MINISTERIO DE JUSTICIA, 1983: *Nicaragua y los derechos humanos*. Managua: Ministerio de Justicia.
- MINSA, Ministerio de Salud, 1982: *El Servicio Nacional Único de Salud: Tres años de revolución 1979-1982*. Managua: MINSA.
- MIPLAN, Ministerio de Planificación, 1980: *Programa de reactivación y emergencia en beneficio del pueblo*. Managua: MIPLAN.
- 1981: *Programa económico de austeridad y eficiencia*. Managua: MIPLAN.
- MIRO, C. y D. RODRÍGUEZ, 1982: "Capitalismo y población en el agro latinoamericano. Tendencias y problemas recientes". *Revista de la CEPAL* (abril), 53-74.
- MOLINA, U., 1981: "El sentido de una experiencia". *Nicaragua*, 5 (abril-junio), 17-37.
- MOORE, B., 1966: *Social origins of Dictatorship and Democracy*. Boston: Beacon Press.
- 1978: *Injustice. The Social Bases of Obedience and Revolt*. White Plains, N. Y.: M. E. Sharpe.
- MORALES, M., 1981: "Sobre la reforma agraria en Nueva Segovia,

Madriz, Esteli", en CIERA: *Testimonios sobre la reforma agraria*. Managua: CIERA, 22:39.

MORAWETZ, D., 1980: "Economic Lessons from Small Socialist Developing Countries". *World Development* 8 (May-June).

MLD, Movimiento de Liberación Dominicana, 1959: *Programa mínimo de la revolución dominicana*. s/e, junio.

NAVAS MENDOZA et al., 1983: *Algunos elementos para un análisis de los períodos críticos del algodón en Nicaragua*. Presentado en el XV Congreso Latinoamericano de Sociología, Managua, octubre.

NOLFF, M., 1982: "La vía crucis de la Revolución Sandinista". *Nueva Sociedad* 63 (noviembre-diciembre), 33:46.

NUN, J., 1967: "The Middle-Class Military Coup", en C. Veliz (ed.), *The Politics of Conformity in Latin America*. London: Oxford University Press.

NÚÑEZ, C., 1980a: "La Revolución y la organización de los trabajadores", en *La Revolución a través de nuestra Dirección Nacional*. Managua: Secretaría del FSLN.

— 1980b: *Un pueblo en armas*. Managua: Secretaría Nacional de Propaganda y Educación Política del FSLN.

— 1980c: *El papel de las organizaciones de masas en el proceso revolucionario*. Managua: Secretaría Nacional de Propaganda y Educación Política del FSLN.

— 1983: "Democracia: El camino que nos señala el pueblo", en R. Sol (ed.), *El reto democrático en Centroamérica*. San José: DEI, 157:188.

NÚÑEZ, O., 1980a: *El Somocismo: Desarrollo y contradicciones del modelo capitalista agroexportador en Nicaragua (1950-1975)*. La Habana: Centro de Estudios sobre América.

— 1980b: "La tercera fuerza social en los movimientos de liberación nacional". *Estudios Sociales Centroamericanos* 27 (setiembre-diciembre) 141:157.

— 1982a: "La ideología como fuerza material y la juventud como fuerza ideológica", en *Estado y clases sociales en Nicaragua*. Managua: ANICS/CIERA, 125:147.

— 1982b: *La revolución social y la transición en América Central. El caso de Nicaragua*. Presentado en el V Congreso Centroamericano de Sociología. San José, noviembre.

O'CONNOR, J., 1973: *The Fiscal Crisis of State*. New York: St. Martin's Press.

OEDEC, Oficina Ejecutora de Estadísticas y Censos, 1975: *Encuesta de situación del empleo urbano 1975*. Managua: OEDEC.

— 1976: *Encuesta de situación del empleo urbano 1976*. Managua: OEDEC.

OLIVEIRA, F., 1972: "A economía brasileira: Crítica á razao dualista". *Estudos Cebrap* 2 (outubro), 3:82.

ORPA, 1982: "Acerca del racismo". *ALAI, Servicio especial*. Montreal, 5 de noviembre, 1:7.

ORTEGA, H., 1980: "La insurrección nacional victoriosa". *Nicarduac* 1 (mayo-junio), 26:57.

— 1981: "Un sólo ejército", en *Habla la Dirección de la Vanguardia*. Managua: Departamento de Prensa, Educación y Propaganda del FSLN.

ORTEGA, M., 1983: *La participación obrera en la gestión de las empresas agropecuarias del APP*. Presentado en el XV Congreso Latinoamericano de Sociología. Managua: octubre.

ORTEGA HEGG, M., 1982: "El conflicto etnia-nación en Nicaragua", en *Estado y clases sociales en Nicaragua*. Managua: ANICS/CIERA, 167:191.

PADOVER, S., 1973: *Karl Marx on the First International*. New York: McGraw-Hill.

PASOS, M., 1977: *Grado de desarrollo de conciencia de clase sindical de un grupo de obreros de Managua*. Managua: Universidad Centroamericana, Escuela de Sociología; mimeog.

PCS, Partido Comunista de El Salvador, 1980: *Fundamentos y tesis de la línea general del PCS*. San Salvador, junio.

PERCY, J., 1982: "Introduction", en Bishop (1982).

PÉREZ-STABLE, M., 1982: "The Working-Class in the Nicaraguan Revolution", en Th. Walker (ed.), *Nicaragua in Revolution*. New York: Praeger, 133:145.

PETRAS, J., 1981: "Nicaragua: The Transition to a New Society". *Latin American Perspectives* 29 (Spring), 74:94.

PGT, Partido Guatemalteco del Trabajo, 1982: "La cuestión indígena". *ALAI, Servicio especial*. Montreal, 5 de noviembre, 14:16.

PIÑEIRO LOSADA, M., 1982: "La crisis actual del imperialismo y los procesos revolucionarios en América latina". *Cuba Socialista* 4 (setiembre-noviembre), 15:63.

POULANTZAS, N., 1977: "El problema del Estado capitalista", en R. Balckburn (ed.), *Ideología y ciencias sociales*. Barcelona: Grijalbo.

PREALC/OIT, 1981: *Balance de la fuerza de trabajo agropecuaria, 1981-82*. Managua, dactilog.

RAMÍREZ, S., 1980: Conferencia de clausura del IV Congreso Centroamericano de Sociología "Blas Real Espinales". *Barricada*, 8 de julio.

— 1981: *El pensamiento vivo de Sandino*. Managua: Editorial Nueva Nicaragua.

— 1982: "Los sobrevivientes del naufragio", en *Estado y clases sociales en Nicaragua*. Managua: ANICS/CIERA, 63:87.

— 1983a: "Nicaragua, la primera frontera". *Barricada*, 3 de julio.

— 1983b: "Una revolución propia y un modelo soberano". *Barricada*, 18 de julio.



- RANDALL, M., 1980: *Todas estamos despiertas. Testimonios de la mujer nicaragüense de hoy*. México: Siglo XXI.
- RIVAS, C., 1983: *El movimiento obrero y las luchas populares en Nicaragua (1956-1979)*. Presentado en el XV Congreso Latinoamericano de Sociología. Managua, octubre.
- ROBERTS, B., 1980: *Ciudades de campesinos*. México: Siglo XXI.
- RODRIGUEZ, C. R., 1979: *Cuba en el tránsito al socialismo, 1959-1963*. La Habana: Editora Política.
- RODRIGUEZ GARCÍA, J. L., 1979: "Política económica de la Revolución Cubana (1959-1960)". *Economía y Desarrollo* 54 (julio-octubre).
- ROSENTHAL, G., 1982: "Principales rasgos de la evolución de las economías centroamericanas desde la postguerra", en *Centroamérica: Crisis y política internacional*. México: Siglo XXI, 19:38.
- RUBEN, R., 1983: *Desarrollo popular dentro del marco de una economía mixta. El caso de la comercialización de alimentos básicos en Nicaragua*. Presentado en el XV Congreso Latinoamericano de Sociología. Managua, octubre.
- RUIZ, H., 1980a: "La montaña era como un inmenso crisol donde se forjaban los mejores cuadros". *Nicaragua* 1 (mayo-junio), 8:24.
- 1980b: *El papel político del APP en la nueva economía sandinista*. Managua: Secretaría Nacional de Propaganda y Educación Política del FSLN.
- SAMANDU, L. y R. JANSEN, 1982: "Nicaragua: Dictadura Somocista, Movimiento Popular e Iglesia, 1968-1979". *Estudios Sociales Centroamericanos* 33 (setiembre-diciembre), 189:219.
- SANDINO, A., 1979: *Pensamientos*. Managua: Ministerio de Educación.
- SELIGSON, M. A., 1980: *El campesino y el capitalismo agrario de Costa Rica*. San José: Editorial Costa Rica.
- SELSER, G., 1966: *Sandino, general de hombres libres*, 4ª ed., Iguazú. Buenos Aires.
- SERRA, L., 1982: *Las instituciones religiosas y la ideología burguesa en la Revolución Sandinista*. Presentado en el III Congreso Nacional de Ciencias Sociales. Managua, octubre.
- SERRA, L. et al., 1981: *La lucha ideológica en el campo religioso y su significado político*. Presentado en el II Congreso Nacional de Ciencias Sociales. Managua, agosto.
- SILVA, O., 1982: "Imagen del hombre, imagen de Dios". *Barricada*, 27 de julio.
- SIZONENKO, A., 1981: "URSS-países latinoamericanos: resultados y perspectivas de las relaciones interestatales". *América latina* 1-2, 5:20.
- SMITH, A., 1776: *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Chicago: The University of Chicago Press, 1976.
- SMUTKO, G., 1980: *Los Héroes y Mártires de Bluefields*. Bluefields: CEBIC.
- SPALDING, H., 1977: *Organized Labor in Latin America*. New York: New York University Press.
- STONE, S., 1975: *La dinastía de los conquistadores*. San José: EDUCA.
- STRACHAN, H. W., 1976: *Family and other business groups in economic development. The case of Nicaragua*. New York: Praeger.
- TALAVERA, J. L., 1978: *El desarrollo económico y el nuevo carácter del Estado. Nicaragua 1950-1967*. Presentado en el III Congreso Centroamericano de Sociología. Tegucigalpa, abril.
- 1979: "Nicaragua: Crisis de la dictadura militar (1967-1978)". *Estudios Sociales Centroamericanos* 23 (mayo-agosto), 213:244.
- TEFEL, R. A., 1978: *El infierno de los pobres*. Managua: El Pez y la Serpiente.
- THERBORN, G., 1977: "The rule of Capital and the Rise of Democracy". *New Left Review* 103 (may-june) 3:41.
- 1979: "The Travail of Latin American Democracy". *New Left Review* 113-114 (January-April), 71:109.
- THOMAS, C., 1974: *Dependence and Transformation. The Economics of the Transition to Socialism*. New York: Monthly Review Press.
- THOMPSON, E. P., 1963: *The Making of the English Working Class*. New York: Vintage Books.
- 1979: *Tradición, revuelta y conciencia de clase*. Barcelona: Editorial Crítica.
- TORRES RIVAS, E., 1980: "El Estado contra la sociedad: Las raíces de la revolución nicaragüense". *Estudios Sociales Centroamericanos* 27 (setiembre-diciembre), 79:95.
- 1982: "Notas para comprender la crisis política centroamericana", en *Centroamérica: Crisis y política internacional*. México: Siglo XXI, 39:69.
- UNAG, Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, 1982: *Asamblea Nacional Constitutiva. Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios de Nicaragua. Plan de Lucha*. Managua: 25-26 de abril, mimeog.
- UNAG/ATC/CIERA, 1982: *Producción y organización en el agro nicaragüense*. Managua: CIERA.
- UPAFEC, Unión de Padres de Familia por la Educación Cristiana, 1981: "Respuesta a la Consulta Nacional de Educación". *Revista del Pensamiento Centroamericano* 172-173 (julio-diciembre), 124:134.
- VALDEZ PAZ, J., 1980: "Notas sobre la socialización de la propiedad en Cuba". *Estudios Sociales Centroamericanos* 27 (setiembre-diciembre), 251:275.
- VANDEN, H., 1982: "Marxism and the Peasants in Latin America: ¿Marginalization or Mobilization?". *Latin American Perspectives* 35 (Fall), 74:98.
- VAN EEUWEN, D., 1982: "Nicaragua: L'an II de la révolution. Hége-

- monie sandinista et montée des périls". *Problems d'Amérique Latine* 63, 9:66.
- VARGAS, O. R., 1978: "La crisis del somocismo y el movimiento obrero nicaragüense". *Coyoacán* 2 (enero-marzo), 61:78.
- 1979: "Notas sobre el nuevo eje de acumulación en Centroamérica. El caso de Nicaragua". *Estudios Sociales Centroamericanos* 22 (enero-abril), 251:277.
- 1981: *Economía y revolución*. Presentado en el II Congreso Nacional de Ciencias Sociales. Managua, agosto.
- VEGA CARBALLO, J. L., 1979: *Las bases sociales de la democracia en Costa Rica*. Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, mimeog.
- VELÁZQUEZ, J. L., 1977: "La incidencia de la formación de la economía agroexportadora en el intento de formación del Estado nacional en Nicaragua, 1860-1930". *Revista del Pensamiento Centroamericano* 157 (octubre-diciembre), 11:31.
- VILAS, C. M., 1973: "Pouvoir politique et domination sociale en République Dominicaine". *Nouvelle Optique* 9, 33:88.
- 1974: *La dominación imperialista en Argentina*. Buenos Aires: EUDEBA.
- 1979a: "Notas sobre la formación del Estado en el Caribe: La República Dominicana". *Estudios Sociales Centroamericanos* 24 (setiembre-diciembre), 117:177.
- 1979b: "El populismo como estrategia de acumulación". *Revista Centroamericana de Economía* 1 (setiembre-diciembre) 54:87.
- 1980a: "Hipótesis sobre liberación nacional y liberación social en la etapa actual del imperialismo". *Estudios Sociales Centroamericanos* 27 (setiembre-diciembre), 99:127.
- 1980b: "Clases sociales, Estado y acumulación periférica en la República Dominicana". *Caribe Contemporáneo* 1 (marzo), 66:99.
- 1981: "Campesinos y plantaciones en la agricultura del Caribe". *Estudios Sociales Centroamericanos* 29 (mayo-agosto), 79:90.
- 1982a: "Las contradicciones de la transición. Clases, nación y Estado en Nicaragua", en *Estado y clases sociales en Nicaragua*. Managua: ANICS/CIERA, 95:114.
- 1982b: *Nicaragua: Una transición diferente*. Presentado en el III Congreso Nacional de Ciencias Sociales. Managua, octubre.
- 1982c: "The Legacy of Dictatorship: Nicaragua". *Caribbean Review* XI, 3.
- 1983: *Democracia popular y participación obrera en la Revolución Sandinista*. Presentado en LASA's XI International Congress. México, setiembre.
- VILLAGRA, W., 1980: "Las posiciones políticas de las corrientes sindicales nicaragüenses". *Anuario de Estudios Centroamericanos*, 6 83:94.
- VON WERDHOFF, C. & H. P. NEUHOFF, 1982: "The Combination of Different Production Relations on the Basis of Non-proletarianization: Agrarian Production in Yaracuy, Venezuela". *Latin American Perspectives* 34 (Summer), 79:100.
- WEBER, H., 1981: *Nicaragua: The Sandinista Revolution*. London: Verso.
- WEBER, M., 1947: *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: The Free Press.
- WEEKS, J., 1981: *Análisis preliminar del desarrollo manufacturero, 1960-1979*. Managua: FINAPRI.
- WHELOCK, J., 1976: *Imperialismo y dictadura*. México: Siglo XXI.
- 1979: *Frente Sandinista. Diciembre victorioso*. Managua: Secretaría Nacional de Propaganda y Educación Política del FSLN.
- 1981: "Logros y perspectivas de la economía sandinista", en *La Dirección Nacional en el Primer Encuentro Internacional de Solidaridad con Nicaragua*. Managua: Departamento de Prensa y Educación Política del FSLN, 53:87.
- 1983: *El gran desafío*. Managua: Editorial Nueva Nicaragua.
- WILLIAMSON, CH., 1960: *American Suffrage from Property to Democracy, 1760-1860*. Princeton: Princeton University Press.
- WITMER, H. E., 1943: *The Property Qualifications of Members of Parliament*. New York: Columbia University Press.
- WOLF, E., 1969: *Peasants Wars of the Twentieth Century*. New York: Harper & Row.
- WORLD BANK, 1981: *Nicaragua: The Challenge of Reconstruction*. Washington DC: The World Bank.
- ZAVALA CUADRA, X., 1982: "El sentido cristiano de la educación". *Revista del Pensamiento Centroamericano* 175 (abril-junio), 86:91.

## INDICE DE CUADROS

Cuadro I.1.	Perfil ocupacional de fundadores, directivos y miembros destacados de la Asociación Internacional de Trabajadores, hacia 1870	22
Cuadro II.1.	Nicaragua: Composición de las exportaciones, FOB	68
Cuadro II.2.	Nicaragua: Coeficientes de importaciones directas en la industria manufacturera, 1976	69
Cuadro II.3.	Nicaragua: Balance comercial de los sectores industriales y agropecuarios	70
Cuadro II.4.	Nicaragua: Valor de las exportaciones por sector de origen	71
Cuadro II.5.	Nicaragua: PEA por rama de actividad, 1963 y 1975	73
Cuadro II.6.	Distribución del ingreso en Centroamérica y otros países	74
Cuadro II.7.	Nicaragua: Efecto de la relación de precios del intercambio	76
Cuadro II.8.	Nicaragua: Vulnerabilidad externa de la economía, 1970-78	78
Cuadro II.9.	Itinerario laboral de los asalariados en el corte de algodón, 1980	82
Cuadro II.10.	Nivel de empleo asalariado en cortadores de algodón	83
Cuadro II.11.	Nicaragua: Estimación de la estructura de clases en el campo, a fines de los '70	87
Cuadro II.12.	Nicaragua: Composición de la PEA en la industria	88
Cuadro II.13.	América Central: Distribución de la tierra por tamaño de las fincas	92
Cuadro II.14.	Nicaragua: Distribución de la producción agropecuaria por tamaño del productor, 1971	94
Cuadro II.15.	Nicaragua: Estructura del sector industrial, tamaño de empleo, 1980	95
Cuadro II.16.	Nicaragua: Pequeña industria, 1980	96
Cuadro II.17.	Nicaragua: Participación de las distintas áreas de propiedad en la economía, 1978 y 1980	119
Cuadro III.1.	Evolución del PIB, 1970-78	124
Cuadro III.2.	Evolución de las inversiones, 1970-78	125
Cuadro III.3.	Algunos indicadores de producción agrícola, 1973-79	126
		397

Cuadro III.4	Nicaragua y América Latina: Relación de precios del intercambio	127
Cuadro III.5	Índice de precios al consumidor, 1972-79	128
Cuadro III.6	Salario real	129
Cuadro III.7	PIB por habitante, 1970-79	130
Cuadro III.8	Empleo urbano a mediados de la década de 1970, por categoría ocupacional	138
Cuadro III.9	Tasas de desocupación urbana, 1973-1976	139
Cuadro III.10	Distribución de la ocupación urbana según ingreso semanal, 1974 y 1975	140
Cuadro III.11	Edad y sexo de los participantes	145
Cuadro III.12	Ocupación de los participantes	151
Cuadro III.13	Ocupación de un grupo escogido de participantes	153
Cuadro III.14	Ocupación de los padres de los participantes	155
Cuadro III.15	Ocupación de los participantes, por departamento	157
Cuadro IV.1	Nicaragua: Participación del APP en la economía nacional, 1982	215
Cuadro IV.2	Nicaragua: Productividad del trabajo en la industria manufacturera, por área de propiedad: 1980 y 1981	218
Cuadro IV.3	Nicaragua: Tenencia de la tierra por área de propiedad, 1979 y 1983	221
Cuadro IV.4	Nicaragua: Evolución de la inversión, 1977-1982	223
Cuadro IV.5	Nicaragua: Participación de la pequeña propiedad en la producción agraria nacional	239
Cuadro IV.6	Nicaragua: Evolución del área sembrada de algodón por sector de propiedad, 1980/81-1983/84	240
Cuadro V.1	Tamaño medio de los sindicatos nuevos	248
Cuadro V.2	Convenios colectivos con cláusulas sobre participación, por sector de actividad y área de propiedad	272
Cuadro V.3	Convenios colectivos con cláusulas sobre participación, por sector de actividad y central sindical	272
Cuadro V.4	Evolución de la productividad física del trabajo en la industria manufacturera, por tamaño de empresa	296
Cuadro V.5	Nicaragua: Evolución de la productividad del empleo industrial, 1979-1981	297
Cuadro VI.1	Nicaragua: Evolución de la matrícula escolar, 1978-1983	302

Cuadro VII.1	América Central: Crecimiento del PIB y del PIB por habitante, 1979-1982	325
Cuadro VII.2	Nicaragua: Evolución del sector externo, 1980-82	327
Cuadro VII.3	Nicaragua: Evolución de la producción agropecuaria, 1977-1982	329
Cuadro VII.4	Nicaragua: Evolución del consumo 1977-1982	333
Cuadro VII.5	Nicaragua: Precios y salarios en la agricultura, 1979-83	345
Cuadro VII.6	Nicaragua: Evolución del salario real urbano 1977-83	347
Cuadro VII.7	Nicaragua: Evolución del proletariado urbano, 1981-82	348
Cuadro VII.8	Nicaragua: Cambios en el origen y el destino del comercio exterior, 1978-82	367
Cuadro VII.9	Origen de los préstamos y donaciones a Nicaragua, 1979-81	368



## INDICE

### PROLOGO 7

#### Capítulo I

##### LIBERACION NACIONAL Y REVOLUCION SOCIAL 11

1. Introducción 11
2. La cuestión de clase y el sujeto popular 12
3. La cuestión nacional 27
4. La cuestión del desarrollo 37
5. La cuestión democrática 40
6. El carácter de la revolución 47
7. La Revolución Popular Sandinista 59

#### Capítulo II

##### UN CAPITALISMO DOMINADO Y DESIGUALMENTE DESARROLLADO 63

1. Panorama general 63
2. Un proletariado desigualmente desarrollado 80
3. La pequeña y mediana producción 90
4. Débil presencia económica directa extranjera 108
5. El papel del Estado somocista 111

#### Capítulo III

##### ECONOMIA Y POLITICA EN LA INSURRECCION POPULAR 121

1. Introducción 121
2. ¿Crisis de la economía o crisis de la sociedad? 122
3. Las masas trabajadoras y la pobreza urbana 135
4. El sujeto social de la insurrección popular 144
5. Vanguardia y masas 164

#### Capítulo IV

##### UNIDAD NACIONAL Y ECONOMIA MIXTA 173

1. Introducción 173
2. Del sueño americano a la pesadilla revolucionaria 176
3. Unidad nacional y hegemonía popular 195
4. La economía mixta y la gran propiedad 211
5. La economía mixta y la pequeña y mediana propiedad 229

*Capítulo V*

*LA CLASE OBRERA EN LA REVOLUCION POPULAR* 245

1. Introducción 245
2. Organización sindical... 247
3. ...de nuevo tipo 252
4. La participación obrera en la gestión económica 266
5. Participación obrera, lucha de clases y el Estado revolucionario 281
6. Democratización de la producción y disciplina obrera 293

*Capítulo VI*

*DEMOCRACIA POPULAR Y LUCHA IDEOLOGICA: EL CASO DE LA EDUCACION* 299

1. Introducción 299
2. Democracia popular y Nueva Educación 301
3. La Consulta Nacional de Educación 307
4. Dos proyectos antagónicos 311
5. Las tensiones internas 317

*Capítulo VII*

*UNA SOCIEDAD EN REVOLUCION* 323

1. Introducción 323
2. Acumulación y distribución 324
3. Pueblo, clase, nación 341
4. La concepción sandinista de la democracia 353
5. La lucha por la sobrevivencia 365

*CONSIDERACIONES FINALES* 373

*REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS* 381

*INDICE DE CUADROS* 397

**Otros títulos  
que integran  
el catálogo de  
EDITORIAL LEGASA  
(1982-1986)**

## OMNIBUS

### CLASICOS DE LA LITERATURA (serie verde)

*Fábulas*, de Robert Louis Stevenson. Prólogo de Jorge Luis Borges. Traducción de Roberto Alifano y Jorge Luis Borges.  
*Rosa y verde*, de Stendhal. Prólogo de Julio Schwartzman. Traducción de Ricardo Zelarayán. (Incluye también *Mina de Vanghel*)  
*Monkton el loco*, de Wilkie Collins. Prólogo y traducción de Elvio E. Gandolfo. (Incluye también *La mujer del sueño*, *Cazador cazado* y *El policía y la cocinera*.)

### NARRATIVA CONTEMPORANEA (serie ocre)

*Ultimos días de la víctima*, de José Pablo Feinmann  
*Carne picada*, de Jorge Asís  
*La calle de los caballos muertos*, de Jorge Asís  
*El frasquito y otros relatos*, de Luis Gusman  
*Bloyd*, de Liliana Heer  
*El desangradero*, de Federico Moreyra  
*Alrededor de la jaula*, de Haroldo Conti  
*Tres novelas policiales*, de Juan Carlos Martini. (Incluye *El agua en los pulmones*, *Los asesinos las prefieren rubias* y *El Cerco*.)  
*La boca de la ballena*, de Héctor Lastra  
*Manual de perdedores*, de Juan Sasturain  
*Siroco*, de Vicente Battista  
*Vidas ejemplares*, de Mempo Giardinelli  
*Los años pares*, de Cecilia Absatz

### CIENCIAS SOCIALES (serie gris)

*Las malas palabras*, de Ariel C. Arango  
*La cultura occidental*, de José Luis Romero. (Incluye en apéndice el ensayo "Imagen de la Edad Media".)  
*Medios de comunicación y cultura popular*, de Anibal Ford, Jorge B. Rivera y Eduardo Romano. Prólogo de Heriberto Muraro.  
*El mito del eterno fracaso*, de José Pablo Feinmann  
*La creación de lo posible*, de José Pablo Feinmann  
*Literatura y homosexualidad*, de Luis Gregorich  
*Gardel y la patria del mito*, de Pedro Orgambide  
*Los anarquistas expropiadores*, de Osvaldo Bayer  
*Abuelidad. Más allá de la paternidad*, de Paulina Redler  
*De Heródoto a Polibio. El pensamiento histórico en la cultura griega*, de José Luis Romero. prox.

## DOCUMENTOS (serie celeste)

*Mercenarios y monopolios en la Argentina. De Onganía a Lanusse, 1966-1973*, de Rogelio García Lupo  
*Mi amigo el Che*, de Ricardo Rojo  
*El poder carnívoro*, de Alvaro Abós  
*El camino de Buenos Aires*, de Albert Londres. Prólogo y traducción de Bernardo Kordon. *prox.*

## NUEVA LITERATURA\*

*El fantasma imperfecto*, de Juan Carlos Martini  
*Crónica del diluvio*, de Antonio Nella Castro  
*Solos los elefantes encuentran mandrágora*, de Armonia Somers  
*Historias imaginarias de la Argentina*, de Pedro Orgambide  
*En otra parte*, de Rodolfo Rabanal  
*Carne picada*, de Jorge Asís  
*La calle de los caballos muertos*, de Jorge Asís  
*Canguros*, de Jorge Asís  
*El vuelo del tigre*, de Daniel Moyano  
*Libro de navíos y borrascas*, de Daniel Moyano  
*Tinta roja*, de Jorge Manzur  
*Tratos inútiles*, de Jorge Manzur  
*Palomas tristes tiene la paz*, de Enrique D. Borthiry  
*Ladrón de música*, de Enrique Estrázulas  
*Sombra del fondo*, de Carlos Hugo Aparicio  
*La chufa de los huevos de oro*, de Martha Mercader  
*Préterito perfecto*, de Hugo Foguet  
*Quemar las naves*, de Javier Torre  
*La casa y el viento*, de Héctor Tizón  
*El pintaditos*, de Carlos Catania  
*Las noches de Maco*, de Javier Torre  
*La novela de Perón*, de Tomás Eloy Martínez  
*El ejército de ceniza*, de José Pablo Feinmann

\* Los títulos que originariamente aparecieron en la colección "Narradores Americanos" de esta editorial, como así también los de su "Serie Mayor", han pasado a integrar la colección "Nueva Literatura".

## ENSAYO CRÍTICO

*Los deseos imaginarios del peronismo*, de Juan José Sebreli  
*Filosofía y Nación*, de José Pablo Feinmann  
*Estudios sobre el peronismo*, de José Pablo Feinmann  
*Los cuatro peronismos*, de Alejandro Horowicz  
*La universalidad del filicidio*, de Arnaldo Rascovsky y colaboradores  
*Perón o muerte*, de Silvia Sigal y Eliseo Verón  
*Cuarenta años de inflación en la Argentina: 1945-1985*, de Guillermo Vitelli.  
*La formación del sindicalismo peronista: 1943-1955*, compilación de Juan Carlos Torre; trabajos de Joel Horowitz, Louise Doyon, Walter Little y otros. *prox.*

## COMUNICACIÓN Y CULTURA \*

Colección dirigida por Anibal Ford

*Invasión cultural, economía y comunicación*, de Heriberto Muro.  
*Comunicación: el Tercer Mundo frente a las nuevas tecnologías*, compilación de José María Pasquini Durán  
*Nuevo orden internacional de la información*, compilación de Margarita Graziano

\* Los tres primeros títulos de esta nueva colección comenzarán a circular en marzo de 1987.



## VIAJE A LOS MUNDOS IMAGINARIOS

Colección dirigida por Ernesto Sabato

*Volumen I:* Textos de Edgar Allan Poe, Alphonse Daudet, Robert Louis Stevenson, Horacio Quiroga, Anton Chéjov, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, Franz Kafka, Jack London y Joseph Conrad. Selección y notas biográficas de Ernesto Sabato y Annaliese von der Lippen.

*Volumen II:* Textos de O. Henry, Katherine Mansfield, Mark Twain, Sarah Orne Jewett, H.G. Wells, Richard Wilhelm, Ambrose Bierce, Alfred de Musset, Charles Dickens y Herman Melville. Selección y notas biográficas de Ernesto Sabato y Annaliese von der Lippen.

*Volumen III:* prox.

## CINE LIBRE

*Evita, quien quiera oír que oiga*, de Eduardo Mignogna

*Cine argentino 82*, de Jorge Abel Martín

*Cine argentino 83*, de Jorge Abel Martín

*Cine argentino 84*, de Jorge Abel Martín

*Cine Libre* (Revista, siete números)

## TITULOS FUERA DE COLECCION

*El justicialismo*, de Leopoldo Frenkel y colaboradores

*Biografía de mi entorno*, de José Ignacio Ramos

## NUEVA INFORMACION

Colección dirigida por Rogelio García Lupo

*Diplomacia secreta y rendición incondicional*, de Rogelio García Lupo

*El peronismo de la victoria*, de Jorge Luis Bernetti

*La columna vertebral*, de Alvaro Abós

*De Bolívar a la Revolución Boliviana*, de Roberto Jordán Pando

*Exilio*, de Juan Gelman y Osvaldo Bayer

*Perfiles de la revolución sandinista*, de Carlos M. Vilas

*La última batalla de la Tercera Guerra Mundial*, de Horacio Verbitsky

*Memorias del presente*, de Rodolfo H. Terragno

*Pequeñas guerras británicas en América Latina*, de Andrew Graham-Yoll

*La perversa deuda argentina*, de Alfredo Eric Calcagno

*La posguerra sucia*, de Horacio Verbitsky

*La reforma militar*, de C.J. Moneta, E. López y A. Romero

*Testigo de la crisis*, de Ted Córdova-Claure

*El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80*, de D. Azpiazu, E.M. Basualdo y M. Khavisse

*La ilusión del progreso apolítico*, de Isidoro Gilbert

*Los días de Alfonsín*, de Pablo Giussani

*Los sueños nucleares de Reagan*, de Ariel Dorfman

*Fidel Castro y la religión*, conversaciones con Frei Betto

*Confesiones de un contra*, de Elisabeth Reimann

*El posperonismo*, de Alvaro Abós

*La pista suiza*, de Juan Gasparini

*Inédito. Una batalla contra la dictadura*, de Raúl Alfonsín

*Desde La Habana*, de Alfredo Muñoz-Unsain

*Pinochet, penúltimo round*, de Roberto Mero

*Barbie, criminal hasta el fin*, de Gustavo Sánchez Salazar

Este libro se terminó de imprimir  
el 20 de febrero de 1987  
en los talleres de Gráfica Yanina,  
República Argentina 2686,  
Valentín Alsina, Pcia. de Buenos Aires,  
Argentina.